

EL PODER
de la **VERDAD**

IVÁN
Cepeda
Presidente

PROGRAMA DE
GOBIERNO
2026-2030



Campaña **PRESIDENCIAL**

El Poder de la Verdad

PROGRAMA DE GOBIERNO
DE IVÁN CEPEDA

2 0 2 6 - 2 0 3 0



© Iván Cepeda Castro (de los textos)

Coordinación editorial

Iván Cepeda Castro

Diseño y diagramación editorial

Diana Carolina Barón Jaime

Andrea Julieth Castellanos Leal

Foto portada

Javier De La Cuadra

@eljavidelacuadra

Fotografías

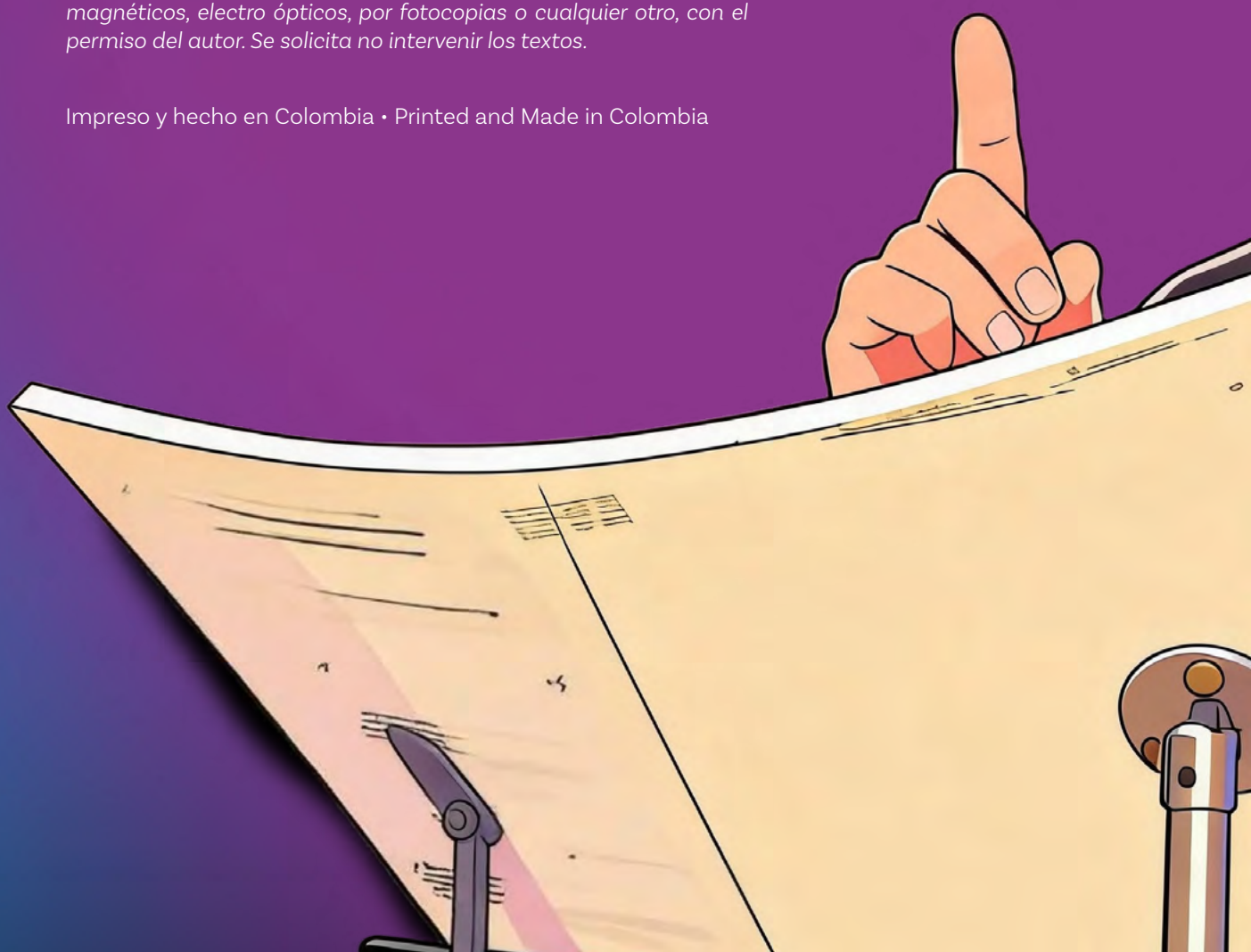
Nelsón Cárdenas Ferreira

@cantarranasur

Primera edición: marzo de 2026 Bogotá, D. C., Colombia

Esta publicación puede ser reproducida en su todo o en sus partes, registrada o transmitida por un sistema de recuperación, o de cualquier forma por medios, sea mecánicos o fotoquímicos, electrónicos, magnéticos, electro ópticos, por fotocopias o cualquier otro, con el permiso del autor. Se solicita no intervenir los textos.

Impreso y hecho en Colombia • Printed and Made in Colombia





ÍNDICE





INTRODUCCIÓN	8
VENGO A PRESENTAR MI NOMBRE:CAMBIEMOS JUNTOS LA FORMA DE HACER POLÍTICA	11
PRIMERA PROPUESTA: EL SISTEMA NACIONAL CONTRA LA MACROCORRUPCIÓN.....	17
¿QUÉ SIGNIFICAUNA REVOLUCIÓN ÉTICA DESDE LA DEFENSA DE LA HUMANIDAD?	25
ENCUENTROCON LAS MADRES BUSCADORAS.....	32
POR UNA POLÍTICAEXTERIOR DE PAZ, AUTÓNOMA Y SOLIDARIA CON LOS MIGRANTES	38
UNIDAD Y VICTORIA	48
DOS MODELOSDE HACER POLÍTICA	54
HACIA UNA POLÍTICA DE IGUALDADSUSTANTIVA Y DE SUPERACIÓN DE LA POBREZA EN LOS TERRITORIOS URBANOS.....	61
IVÁN CEPEDAEN LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	70
SEXTO MENSAJE PROGRAMÁTICO:LAS VÍCTIMAS, EL GENOCIDIO Y LA PAZ	80
VAMOS CONLA REVOLUCIÓN AGRARIA	88
ENCUENTRO CONLÍDERES Y LIDERESAS DEL MAGDALENA EN SANTA MARTA	97
IVÁN CEPEDAEN VILLAVICENCIO	103
LA REVOLUCIÓN DE LOS TERRITORIOSDE COLOMBIA, EL CORAZÓN VIVO DE NUESTRA RIQUEZA HUMANA Y NATURAL	109
IVÁN CEPEDAEN CALI.....	118
IVÁN CEPEDAEN EL ECCI EN BOGOTÁ.....	123
LA REVOLUCIÓNPOLÍTICA Y DEMOCRÁTICA.....	131
IVÁN CEPEDAEN MONTERÍA.....	138

IVÁN CEPEDAEN VALLEDUPAR.....	143
IVÁN CEPEDATRAS LA VICTORIA EN LA CONSULTA DEL PACTO HISTÓRICO	148
IVÁN CEPEDAEN PASTO.....	153
LIBERALES CON IVÁN CEPEDA.....	157
IVÁN CEPEDAEN MÉXICO	163
SERVIR AL PUEBLO CON AUSTERIDAD REPUBLICANA.....	172
EL CENTRO DE NUESTRO PROGRAMA ES LA POLÍTICA SOCIAL	179
DE LA REFORMA AGRARIA A LA REVOLUCIÓN AGRARIA CON LA ORGANIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN DEL CAMPESINADO.....	186
EL ACCESO AL AGUA COMO EJE DE LA REVOLUCIÓN AGRARIA	194
SOLO UN GRAN MOVIMIENTO GLOBAL PODRÁ DETENER A LA EXTREMA DERECHA NEOFASCISTA	202
POR LA SOBERANÍA DE NUESTRO TERRITORIO	212
FORTALECER LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA.....	220
HACIA NUEVOS LOGROS EN EL RECONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.....	227
COMPROMISO CON LAS COMUNIDADES Y LA DEFENSA DEL TERRITORIO	233
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL	239
ENCUENTRO CON LOS PUEBLOS WIWA Y KANKUAMO	246
LA REBELIÓN CIUDADANA CONTRA LA GRAN CORRUPCIÓN	250
DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS POLÍTICOS	257
VAMOS A GANAR EN DEMOCRACIA	262
SOMOS CONSTRUCTORES DE PAZ Y DEMOCRACIA, LUCHADORES PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD.....	267
SOMOS LA FUERZA DE LA VIDA Y DE LA NATURALEZA.....	272
LAS TRAMPAS DE LA EXTREMA DERECHA NO NOS DETENDRÁN	277
NO PODRÁN DETENER LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL	284
JUNTO AL PUEBLO, EN LA RESISTENCIA Y EN LA ESPERANZA.....	291

VAMOS A GANAR,PERO PRESERVANDO LOS PRINCIPIOS.....	297
NUESTRA CONSULTA ES LA VOTACIÓN POR EL PACTO AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	303
EL 8 DE MARZOVAMOS A ELEGIR LA MÁS PODEROSA BANCADA PARLAMENTARIA.....	309
PRIMER ENCUESTROCON LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE	315
LA REVOLUCIÓNURBANA ES PARA LA VIDA	318
LA REVOLUCIÓNÉTICA ES ANTIRRACISTA	323
MEDELLÍN Y ANTIOQUIANO REGRESARÁN AL PASADO	329
SOLIDARIDAD Y APOYOA LAS POBLACIONES DAMNIFICADAS Y EN DEFENSA DEL SALARIO VITAL	335
LA SEGURIDAD HUMANACOMO COMPONENTE ESENCIAL DE NUESTRO PROGRAMA	341
EL PROTAGONISMODE LAS MUJERES EN LAS TRES REVOLUCIONES.....	349
VAMOS A ENFRENTAREL SAQUEO DE LAS REGALÍAS EN LOS TERRITORIOS	357
EL PODER DE LA VERDADDE LAS MADRES DE SOACHA	365
LA REBELIÓN ANTIRRACISTAY EL DESARROLLO DE TUMACO.....	372
MANDAR OBEDECIENDO,ESCUCHAR DIALOGANDO	379
LA REBELIÓN ANTIRRACISTA Y EL DESARROLLO DE PUERTO TEJADA.....	385
LA REBELIÓN ANTIRRACISTAY EL DESARROLLO DE BUENAVENTURA	390
CONTRA LA POLÍTICADEL ODIO, DE LA MENTIRA Y DEL ESPECTÁCULO	397
VAMOS A TRIUNFAR	405
POR EL DESARROLLO TERRITORIALSOSTENIBLE DE LA PUERTA DE LA AMAZONÍA	410
REVOLUCIÓNÉTICA Y ESPIRITUALIDAD.....	415
POR LOS ANIMALESY POR LA JUSTICIA AMBIENTAL.....	421
POR LA PROSPERIDADDE LA TIERRA DEL VIENTO.....	426

IVÁN
Cepeda
Presidente



INTRODUCCIÓN

Bogotá, Cundinamarca



El presente documento constituye un anexo del Programa de Gobierno “El poder de la verdad”, Iván Cepeda Presidente 2026-2030 y forma parte del esfuerzo colectivo por profundizar el cambio histórico que Colombia ha comenzado a vivir.

Nuestro país atraviesa un momento decisivo. Durante décadas, millones de colombianas y colombianos resistieron la violencia, la desigualdad, la corrupción y la exclusión. Desde los territorios, desde las organizaciones sociales, desde las luchas de las víctimas, de las mujeres, de la juventud, de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, se fue abriendo paso una exigencia histórica: la necesidad de transformar de raíz el rumbo de la nación.

Ese clamor encontró expresión política en la llegada del primer gobierno del cambio. Pero debemos decirlo con claridad: el cambio no ha terminado; apenas ha comenzado. Las estructuras que produjeron la desigualdad, la corrupción y la violencia siguen presentes y continúan resistiendo las transformaciones que reclama la sociedad.

Por esa razón, el desafío de nuestro gobierno será avanzar hacia una segunda etapa del cambio, capaz de profundizar las reformas, atacar las causas estructurales de los problemas nacionales y consolidar un nuevo horizonte democrático para Colombia.

Las propuestas, reflexiones y planteamientos que se presentan en este anexo parten de una convicción fundamental: las transformaciones profundas que necesita el país solo pueden comprenderse y desarrollarse como verdaderas revoluciones democráticas. No como rupturas violentas, sino como procesos históricos de transformación impulsados por la ciudadanía y orientados a dignificar la vida colectiva.

Se trata de una revolución ética, que enfrente la corrupción y reconstruya la moral pública; una revolución social, que supere la pobreza y garantice derechos; una revolución territorial, que reconozca la riqueza humana y natural de los territorios; y una revolución política y democrática, que amplíe la participación ciudadana y fortalezca el poder del pueblo.

Las páginas que siguen recogen ideas y propuestas dirigidas a la sociedad colombiana. Son una invitación a pensar juntos el país que queremos construir y a asumir, colectivamente, la responsabilidad de hacerlo realidad. Porque el cambio verdadero no es obra de un gobierno aislado, ni de un liderazgo individual. El cambio es una construcción histórica del pueblo colombiano, y su destino depende de nuestra capacidad de seguir avanzando, con valentía, hacia una sociedad más justa, democrática y en paz.

IVÁN
Cepeda
Presidente



VENGO A PRESENTAR MI NOMBRE:
**CAMBIEMOS JUNTOS LA
FORMA DE HACER POLÍTICA**

Pasto, Nariño

Queridas y queridos compañeros:

Desde Nariño, tierra de luchas históricas y de construcción colectiva entre las fuerzas alternativas, rodeado de lideresas y líderes sociales, mujeres y jóvenes, vengo a presentar mi nombre ante el pueblo colombiano como precandidato del Pacto Histórico a la Presidencia de la República.

Soy defensor de derechos humanos, sobreviviente del genocidio político, hijo de un senador de la Unión Patriótica asesinado por su compromiso con los derechos de la gente.

Creo profundamente en la verdad y la justicia. Creo en el poder de las víctimas para derrotar la impunidad, dignificar a las comunidades lesionadas por la violencia y construir una verdadera reconciliación nacional.

Creo en la paz como camino y en el diálogo como herramienta para cerrar el ciclo de violencia que ha marcado nuestra historia. He sido facilitador y negociador en procesos de paz, y he actuado como mediador entre gobiernos y movimientos sociales.

Creo en la equidad. Durante años he acompañado las luchas de comunidades populares y campesinas golpeadas por la pobreza, el despojo y el desplazamiento. Sus causas son también las mías.

Creo en la ética pública y rechazo toda forma de corrupción. Desde el Congreso he ejercido con firmeza el control político, enfrentando estructuras criminales y mafiosas sin vacilaciones.

Creo en la necesidad de unirnos como sociedad. He trabajado incansablemente por articular las fuerzas progresistas y democráticas, por construir puentes que nos acerquen a un Pacto Nacional que incluya a todos los sectores de la sociedad, y que tenga como prioridad a los más pobres, a los históricamente excluidos.

Hoy pongo mi nombre a disposición del Pacto Histórico y del pueblo colombiano. Lo hago como un ciudadano más: sin arrogancia y sin prepotencia para seguir construyendo juntos el cambio histórico.

Tomo esta decisión en obediencia a la voluntad colectiva. No entiendo la política como el mero ejercicio de aspiraciones personales, sino como un compromiso con las causas justas y con el mandato del pueblo. Desde el inicio de esta campaña electoral dejé claro que no era mi intención aspirar a la Presidencia. Sin embargo, hoy doy este paso después de escuchar, con atención y con la mente abierta, solicitudes que para mí es difícil —diría imposible— ignorar.

He recibido el llamado de las Madres de los Falsos Positivos de Soacha, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, del Polo Democrático Alternativo, así como de miles de ciudadanas y ciudadanos que me han pedido asumir esta responsabilidad.

Acepto esa petición con la convicción profunda de que gobernar no es imponer, sino construir colectivamente. Me sostendré en la premisa fundamental de que las decisiones de gobierno deben tomarse consultando los propósitos de los movimientos sociales, guiados siempre por el principio que nos enseña la sabiduría ancestral de nuestros pueblos: mandar obedeciendo.

Como sociedad marcada por una historia de violencia, desigualdad, patriarcado y racismo, padecemos una profunda degradación moral. Hemos heredado el miedo a la libertad, el desprecio por los pobres, el sometimiento de las mujeres, la persecución de los pueblos ancestrales, la simulación de la democracia, el rechazo a la paz, la intolerancia frente al cambio social y la exclusión de quienes no poseen riqueza ni poder.

Ese modelo de vida ha implicado el sacrificio de nuestra nación como proyecto colectivo. Hemos terminado por aceptar los peores crímenes y normalizar la corrupción, permitir el predominio del odio, ceder con abyección ante la dominación, destruir la ética pública, anular la solidaridad, negar la dignidad humana y despreciar lo más valioso de nuestra cultura e identidad. Al mismo tiempo, hemos depredado la naturaleza y puesto en riesgo la inmensa biodiversidad que forma parte esencial de lo que somos.

Por eso, no basta con transformar las condiciones materiales de vida. Necesitamos una auténtica revolución ética, una revolución de conciencia, que comience en lo más profundo de cada uno y cada una de nosotros. Una transformación que nos libere de la indiferencia ante el dolor ajeno, que rompa

con el desprecio por la vida digna y nos devuelva la capacidad de imaginar y construir un país justo, solidario y en paz.

A pesar de ello, hoy en Colombia, vivimos un proceso significativo de cambio social, fruto de la resistencia de las comunidades en los territorios, del coraje de la juventud durante el estallido social, de las luchas emancipadoras de las mujeres, del sacrificio de líderes y lideresas que dieron su vida por ampliar la democracia, del periodismo valiente que se atrevió a decir la verdad, de jueces y juezas que enfrentaron a las mafias, y de las ciudadanías diversas que han exigido dignidad, justicia y reconocimiento.

Este proceso no surge de la nada. Es resultado de una historia de acumulación democrática: de la Constitución de 1991, de los acuerdos de paz, del surgimiento del primer gobierno progresista en nuestra historia y de las reformas sociales que se han venido impulsando. Frente al modelo que ha destruido lo mejor de nuestra nación, hemos respondido con una propuesta clara: convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida.

El gobierno que lidera nuestro compañero Gustavo Petro ha defendido el programa del Pacto Histórico, que es también la base de mi propuesta política. En estos tres años, se han puesto en marcha transformaciones fundamentales: la reforma agraria, la reforma laboral, la reforma pensional; el impulso a la economía campesina y popular, sin descuidar el conjunto del aparato productivo ni al sector empresarial.

Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Debemos avanzar con decisión en otras reformas sociales, en la construcción integral de la paz, y en la erradicación de la corrupción. Pero, sobre todo, debemos fortalecer la participación ciudadana y la deliberación pública como garantía de que el cambio no solo se sostiene, sino que se profundiza.

Por eso, como primer paso en esta campaña, convoco al Pacto Histórico, a sus aliados, y a toda la ciudadanía a un ejercicio colectivo de balance y reflexión. Es hora de preguntarnos, juntos: ¿Qué reformas sociales debemos priorizar ahora? ¿Qué hemos aprendido en estos años de gobierno? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Dónde hemos fallado y qué errores no deben repetirse?



Este momento no es solo de decisión política, sino de responsabilidad histórica. Solo con la verdad, la autocrítica y el compromiso colectivo, podremos avanzar hacia el país digno, justo y democrático que anhelamos construir.

Declaro, con total convicción, que seré respetuoso de las reglas democráticas, comenzando por la Constitución. Respetaré las instituciones, los poderes públicos y su independencia. Pero al mismo tiempo, defenderé y fomentaré todas las formas de participación democrática: el derecho de las ciudadanías y las multitudes a expresarse, a criticar, a movilizarse de manera permanente, pacífica y organizada.

Este respeto por la democracia no es formal ni oportunista. Nace de mi convicción profunda de que la reconciliación nacional, los acuerdos —uno o múltiples—, el fin de todas las violencias, la verdad y la justicia, deben ser los principios rectores de cualquier proyecto político que aspire genuinamente al bien común y a la dignidad de la Nación.

Desde el primer día anuncio, con toda claridad, que seré implacable frente a cualquier forma de corrupción. En primer lugar, a quienes me acompañen en esta campaña y, si el pueblo así lo decide, en el gobierno: exijo absoluta pulcritud y transparencia. Ninguna justificación será aceptada para desviarse del cumplimiento estricto de la ley ni de las convicciones éticas que nos inspiran. No habrá espacio para el lucro personal ni para las ambigüedades morales.

Del mismo modo que garantizaré el respeto irrestricto por las libertades públicas, también seré riguroso en la lucha contra el robo de recursos públicos, la malversación, los abusos de poder y cualquier forma de corrupción, venga de donde venga, incluso desde dentro de mi propio gobierno o del Estado.

Esta no es una promesa vacía ni una advertencia retórica. En mi vida pública he demostrado coherencia: he actuado con firmeza y dentro del marco legal contra más de 200 funcionarios a los que, mediante el ejercicio del control político, probé que incurrieron en actos de corrupción o abuso. Así he procedido, y así continuaré actuando, respaldado por la Constitución y por el mandato de la ciudadanía.

Mi campaña será, por convicción, profundamente austera. No se malgastarán recursos en publicidad excesiva, viajes ostentosos, espectáculos ni escenarios costosos. Hago un llamado a las organizaciones, comunidades y personas que decidan respaldar esta aspiración, para que sumen su acción voluntaria y construyamos juntos la fuerza electoral necesaria para vencer. Les invito a recorrer barrios, calles y veredas; a hablar con la gente, a promover un voto consciente e informado; y a vigilar con firmeza, el día de las elecciones, que se respete la voluntad popular en las urnas.

Será una campaña de diálogo, con las personas del común y con mis adversarios políticos. No responderé con insultos, ataques personales ni campañas difamatorias. No apelaré al odio, ni a la burla, ni a la deshumanización del oponente. Como ha sido mi práctica durante toda mi vida política, me guiaré por el principio del respeto, que no significa renunciar al debate, sino ejercerlo con firmeza, coherencia y altura. Defenderé con convicción el programa del Pacto Histórico, sin perder nunca la ética en el camino.

Compañeras y compañeros:

Al anunciar mi aspiración presidencial, no solo pongo mi nombre al servicio del país; me comprometo, junto a ustedes, en la tarea histórica de conquistar un segundo gobierno del cambio. Les digo con esperanza y decisión: en los próximos cuatro años, tenemos la capacidad de seguir transformando esta sociedad con valentía, imaginación y justicia. El cambio social que ya iniciamos puede y debe consolidarse.

Ese propósito no puede ser obra de unos pocos. Debe nacer del esfuerzo colectivo de toda la Nación. El verdadero cambio político y económico no se construye “contra” alguien, sino con todos y todas. No se trata de excluir, sino de incluir; no de imponer, sino de convocar.

No puedo cerrar estas palabras sin rendir homenaje a quienes nos abrieron el camino: figuras políticas, lideresas y líderes sociales, firmantes de paz, defensores de derechos humanos... a quienes sacrificaron su vida por una Colombia más justa. Su memoria nos acompaña y nos guía. Son presencia viva en esta lucha.

Con ellas y ellos, con los movimientos sociales, con las mujeres, con la juventud, con los pueblos de los territorios, emprendo este camino hacia un segundo gobierno que consolide el cambio.

IVÁN
Cepeda
Presidente



PRIMERA PROPUESTA:
**EL SISTEMA NACIONAL CONTRA
LA MACROCORRUPCIÓN**

Cali, Valle del Cauca

Queridas compañeras y queridos compañeros:

Desde la ciudad de Cali, donde la juventud nos recordó en el estallido social que **la rebeldía puede ser esperanza y cambio**, vengo a compartir el segundo mensaje de **nuestra precandidatura presidencial**. Quiero compartir con ustedes y con toda Colombia mi visión y mi propuesta para enfrentar la corrupción un problema estructural que agobia a la sociedad colombiana.

Vengo a hablar de un mal que, con hipocresía, han intentado minimizar pese al daño devastador que le ha causado a Colombia. No hablo solo de corrupción, hablo de **la gran corrupción**, de **esa criminalidad extendida que coloniza instituciones, desangra presupuestos, destruye la confianza de la ciudadanía y nos arrebató el futuro**. No es un caso aislado ni una manzana podrida, es un sistema que hay que dismantelar con decisión y con coraje.

Durante décadas, como oposición, enfrentamos sin concesiones ni temores a **poderes tenebrosos**. Lo hicimos en las calles, en los debates de control político, en la investigación rigurosa y en la denuncia documentada. Ese ha sido nuestro compromiso: poner la verdad por delante y defender lo público.

Por eso nos duele y nos avergüenza que, en nuestro propio gobierno, hayan ocurrido hechos como los que involucran al señor Olmedo López. Según las investigaciones, se habría montado una red para **saquear recursos destinados a socorrer a comunidades golpeadas por desastres naturales**. Quien toca esos recursos **le roba a los más vulnerables**, le arrebató alivio al que lo perdió todo. No hay eufemismos posibles, es un proceder abiertamente criminal.

No llegamos al Estado para repetir lo que combatimos, sino para erradicarlo. Por eso en un segundo gobierno **para consolidar el cambio social, vamos a fortalecer la justicia**, mejorar el sistema de alertas tempranas para prevenir los actos de corrupción y optimizar la devolución de lo saqueado, con el fin de recuperar recursos y destinarlos a los programas sociales, **nos emplearemos a fondo para que nada ni nadie vuelva a profanarlos**.

A la sociedad colombiana, hoy no le basta un perdón; le debemos un compromiso inequívoco, una lucha sin cuartel contra la corrupción, venga de donde venga, caiga quien caiga, sin privilegios ni impunidad, con transparencia

total y resultados verificables. Por eso, como dije, hoy vengo aquí a presentar una propuesta concreta, viable e imperativa para enfrentar juntos este mal.

¿En qué consiste mi propuesta?

Sé que este tema reaparece una y otra vez en cada campaña electoral, en forma de discursos demagógicos y oportunistas que se aprovechan de la indignación colectiva para obtener votos.

En mi caso, por el contrario, **lo que busco es, en primer lugar, definir con precisión el problema, comprender su naturaleza y su verdadera dimensión, y aplicar, en consecuencia, la investigación rigurosa, la justicia efectiva que exige.** Esto requiere acción institucional en alianza con la participación ciudadana y de los movimientos sociales, investigaciones a fondo, sanciones ejemplares y recuperación de lo robado.

En el último medio siglo, en Colombia hemos pasado de la corrupción a la gran corrupción. Lo primero es definir con claridad de qué estamos hablando. El término “corrupción” ya no basta para describir lo ocurrido en el Estado y en la sociedad durante las últimas décadas.

De actos individuales, episódicos y relativamente simples —que involucraban a unos cuantos agentes del Estado y a algunos particulares en delitos como el soborno—, **hemos pasado a la macrocorrupción: la descomposición generalizada de instituciones y poderes públicos, y operaciones complejas de estructuras que despliegan actividades concertadas en las que participan un gran número de personas.**

En esos conciertos para delinquir actúan múltiples actores de distinta naturaleza: legales (empresarios, políticos); aparentemente legales, pero aliados con la ilegalidad, ilegales (mafias, grupos armados).

En años recientes hemos visto operaciones de gran escala para capturar e, incluso, reconfigurar el Estado. Por ejemplo, la parapolítica impulsada por el uribismo fue la más significativa de esas expresiones, y llegó a incluir la toma de una porción significativa del Congreso de la República.

Para tener una idea de lo que estamos hablando, basta enunciar algunas cadenas delictivas que hacen parte de la interminable lista de la megacorrupción en el país.

Hoy, cada año, se saquean billones de pesos del erario; institutos y dependencias estatales se convierten en cuotas clientelares y burocráticas de mafias políticas; **la contratación pública se asigna mediante gigantescos sobornos y licitaciones amañadas; la adquisición de suministros en dependencias estatales se ha convertido en fuente de lucro para algunos funcionarios;** muchos trámites de la administración pública exigen el pago de “comisiones”; los congresistas se han convertido en tramitadores de prebendas y contratos; **en las elecciones se presentan fraudes periódicos que distorsionan los resultados definitivos;** los puertos y aduanas son fortines politiqueros para negociar el contrabando con grupos armados y mafias. Y un largo, muy largo, etcétera.

Ese entramado delictivo alcanza incluso los gastos esenciales para la vida de los colombianos: los recursos de la salud, los fondos para la paz, el dinero destinado a la reparación de las víctimas y los recursos para atender a comunidades afectadas por desastres naturales, que los “Olmedos” de turno no vacilan en saquear.

Se trata de verdaderos aparatos que operan en red para acumular capital, afectan todas las ramas del poder público y reconfiguran la administración en todos los niveles del Estado. Ninguna instancia está a salvo, e incluso dependencias del poder judicial y los órganos de control han sido puestos al servicio de las redes criminales.

Por esta, entre otras razones, la impunidad de la corrupción se mantiene incólume prolongándose en el tiempo. En 2024, alcanzó una tasa del 94 %. De 32 departamentos, 20 tienen un porcentaje de impunidad superior al 95 % y 12 están entre el 90 % y el 94,9 %. A su turno, Bogotá tiene un 88 % de impunidad.

Así, la macrocorrupción inflige un daño estructural al país: **deslegitima y erosiona la democracia; quiebra las reglas de la competencia económica al favorecer a unos pocos actores poderosos; corroe la ética pública; alimenta la violencia para encubrirse o mantenerse, y reduce la política a un mercado de intereses y ambiciones donde todo vale, incluso perpetrar los peores crímenes.** Esa lógica, desprovista de respeto por las leyes, se ha normalizado como modo de ser y de ascenso en la sociedad.

A esta tragedia nacional debemos decir ¡ya basta! El próximo gobierno progresista, nuestro gobierno, debe liderar el comienzo de un viraje histórico anticorrupción.

Si esa es la dura realidad que afrontamos ¿en dónde reside el problema del enfoque tradicional que se está aplicando y que posibilita la impunidad?

De acuerdo con lo que han advertido investigadores como Luis Jorge Garay, nuestras políticas anticorrupción han fallado no por falta de normas, sino por problemas de enfoque.

Hemos mirado la corrupción con lentes estrechos y microscópicos. **Necesitamos una mirada estructural y sistémica a la medida de las dimensiones de este flagelo; que convierta la lucha anticorrupción en una causa nacional, y esta causa en una verdadera política de Estado, con nueva arquitectura institucional, jurisdiccional y de reparación social.**

En Colombia la corrupción suele analizarse con una lógica penal reductiva y equivocada. **La corrupción no es la suma de delitos individuales; es una macrocriminalidad que captura instituciones, distorsiona mercados y despoja comunidades. Así como un genocidio no puede reducirse a una suma de homicidios, la gran corrupción no puede abordarse con el tratamiento penal del caso individual, o la sumatoria de casos individuales.**

Se trata al corrupto como un delincuente común al que se le impone una pena de cárcel proporcional al dinero usurpado, pero se ignoran los daños reales que el aparato criminal al que pertenece ese delincuente causa sobre las víctimas. Es usual que algunos salgan de prisión con más riqueza y más poder. Eso debe terminar.

El sistema judicial no está para hacer más poderosos a los delincuentes corruptos, sino para proteger y resarcir a los millones de compatriotas víctimas de este flagelo. **La corrupción tiene víctimas directas, comunidades rurales y urbanas, niñas y niños sin escuela, pacientes sin medicina, familias sin agua, jóvenes sin oportunidades, territorios sin vías de comunicación.**

Por lo tanto, el sistema judicial tradicional, centrado en castigos penales a personas, se queda corto. **Si no hay ataque frontal a la estructura criminal, desmantelamiento de sus subestructuras y redes, extinción efectiva de dominio, reparación a las víctimas y recuperación de lo robado, la impunidad se recicla.**

Requerimos un modelo integral que ataque la renta, el silencio y el territorio de la corrupción, fiscalización rigurosa y transparente del gasto público;

decomiso ágil de bienes ilícitos en el país y fuera de este; y una justicia que escuche a las comunidades, repare el daño y priorice inversión donde más se ha perdido. Esa es la decisión histórica que nos convoca hoy.

Colombia ya cuenta con desarrollos jurisprudenciales y técnicos para aplicar esta perspectiva sin depender de organismos internacionales. Lo que ha faltado es voluntad política. Hoy debemos ponerla en práctica.

Propongo la creación del Sistema Nacional contra la Macrocorrupción, una arquitectura institucional coherente que actúe de principio a fin. Un sistema con cinco pilares que se refuerzan mutuamente: prevención e información, investigación especializada, juzgamiento eficaz con reparación, presencia decidida en los territorios y movilización ciudadana.

1. Transparencia, prevención e información

- Pasaremos de reaccionar a anticiparnos. La transparencia y la información en tiempo real serán nuestra primera línea de defensa. Fortaleceremos la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y daremos autonomía real –técnica, administrativa y presupuestal– a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, garantizando su independencia y su capacidad de investigación con enfoque sistémico.
- Pondremos a funcionar plenamente el Portal Anticorrupción de Colombia (PACO) como plataforma abierta y preventiva. Construiremos un sistema de alertas tempranas contra la macrocorrupción, articulando bases de datos, trazabilidad del gasto y señales de riesgo.

2. Investigación y juzgamiento con enfoque de sistema

- Crearemos en la Fiscalía General de la Nación la Unidad Nacional de Investigación de la Macrocorrupción. Las cadenas de corrupción no se investigan caso por caso: se investigan como sistemas, con procesos ágiles y coordinados.
- Esta unidad identificará los aparatos y estructuras de la macrocorrupción y a sus jefes o determinadores; develará los modus operandi, los planes y patrones de criminalidad a escala nacional, sectorial y regional; y rastreará las dimensiones económicas, incluido el lavado de activos y los mecanismos de impunidad.
- Aplicaremos metodologías de macrocriminalidad, como las usadas frente a crímenes de lesa humanidad o graves violaciones de derechos humanos.

- Crearemos una instancia de juzgamiento especial, al más alto nivel posible, para los casos de corrupción sistémica.
- Las sentencias incluirán medidas de reparación integral para víctimas individuales y colectivas. La macrocorrupción también deja víctimas y territorios heridos, y deben ser reparados.

3. Fondo de Reparación de Víctimas de la Corrupción

- Canalizaremos al Fondo todos los capitales y recursos expropiados a los **corruptos** para reparar no solo el dinero público malgastado, sino también los daños materiales e inmateriales causados a víctimas individuales, colectivas y a la sociedad.
- Cuando la corrupción golpee un sector, como la salud, los recursos recuperados se destinarán a fortalecer ese sistema y a reparar a sus víctimas. Cada peso recuperado debe convertirse en un derecho restituido.
- Fortaleceremos la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para que la recuperación de bienes ilícitos se traduzca en obras y servicios para la gente. Evaluaremos, además, la aplicación de modelos de justicia restaurativa en este campo.

4. Presencia decidida en los territorios

- Llevaremos la acción coordinada del sistema de justicia a los lugares con mayores índices de corrupción e impunidad, con capacidad real de investigación y juzgamiento en el terreno. **Donde más roban lo público, más presente debe hacerse el Estado.**
- Trabajaremos para que surjan alianzas territoriales anticorrupción, que integren a los movimientos sociales, las ciudadanías, el sector privado con la acción del Estado de derecho.

5. Movilización de la sociedad

- Ningún país derrota la macrocorrupción solo desde los despachos. Necesitamos ciudadanía vigilante y organizada. Junto con movimientos sociales, organizaciones comunitarias, academia y sector privado, **promoveremos un gran movimiento nacional de participación, control y fiscalización social.**
- Impulsaremos una cultura de integridad que empiece en la escuela y llegue a cada oficina pública, a cada empresa y a cada familia. La transparencia debe ser una práctica cotidiana, no un discurso.

- La sociedad debe sostener una estrategia de rechazo moral y ético frente a los corruptos y a todo acto ilícito relacionado con la corrupción.
- La participación ciudadana será vínculo y motor: veeduría, seguimiento, denuncia responsable.
- Acompañaremos a las víctimas de la corrupción cuya memoria, exigencia de verdad y reivindicación de justicia son definitivas para triunfar en esta causa.

Compañeras y compañeros:

En Pasto, al lanzar mi precandidatura, acompañado por los movimientos sociales, dije que, como sociedad marcada por una historia de violencia, desigualdad, patriarcado y racismo, padecemos una profunda degradación moral, y que por eso **requerimos una revolución ética. De esa revolución hace parte una rebelión ciudadana contra la corrupción y por la transparencia.**

Lo mejor de la historia de Colombia ha sido hecho por mujeres y hombres que, desde la política, la justicia y los movimientos sociales, entregaron su vida **por un país decente**. Se enfrentaron a los corruptos del Estado, a las mafias, al narcotráfico. **Prefirieron el riesgo antes que el silencio; la verdad antes que el privilegio; la dignidad antes que la impunidad.** Su ejemplo sigue alumbrando nuestro camino.

A ellas y a ellos no les debemos sólo un homenaje, sino sobre todo coherencia. **Nos enseñaron que la conciencia no se vende, que el valor vence al miedo y que ningún aparato criminal -dentro o fuera del Estado- es más fuerte que un pueblo decidido.** Por eso estamos aquí: para convertir la indignación en fuerza cívica, y la esperanza en un proyecto de país sin miedo a la corrupción.

La decencia no puede ser consigna es un requisito y una condición ineludible en el ejercicio de gobierno que emprenderemos en esta segunda fase del cambio social.

Seguiremos adelante, con la frente en alto, hasta que la macrocorrupción sea cosa del pasado. Que nadie nos arrebathe la ilusión de una Colombia limpia, justa y digna.

IVÁN
Cepeda
Presidente



¿QUÉ SIGNIFICA
**UNA REVOLUCIÓN ÉTICA
DESDE LA DEFENSA DE
LA HUMANIDAD?**

Bogotá, Cundinamarca

Queridas compañeras y queridos compañeros:

Recibo con profunda gratitud este reconocimiento de las y los docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia; una institución fundamental para el país, a la que le debemos tanto en el ámbito de la educación pública, la investigación científica, el pensamiento crítico y el compromiso con el humanismo.

Es también un honor compartir con ustedes este Día Nacional de los Derechos Humanos, una fecha que no conmemora únicamente un conjunto de principios legales, sino que celebra la memoria viva de quienes han defendido la dignidad humana con valentía, incluso cuando ello les costó la libertad, la reputación o la vida.

En Colombia, los derechos humanos no han sido una dádiva otorgada de buena gana por el poder. Han sido, y siguen siendo, una conquista: el fruto de luchas sociales persistentes, de movilizaciones pacíficas, de la terquedad de miles de personas que se han negado a aceptar la injusticia como un destino inevitable.

Con frecuencia, quienes han defendido los derechos humanos han sido injustamente señalados como peligrosos, subversivos o incluso terroristas. Esta estigmatización ha servido de antesala a la violencia: muchos líderes y líderes sociales, así como abogadas y abogados comprometidos con la justicia, han sido asesinados tras campañas sistemáticas de desprestigio.

Tal fue el caso de Jesús María Valle, abogado y defensor de derechos humanos, asesinado luego de denunciar públicamente al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, por su responsabilidad en el respaldo a grupos paramilitares, las empresas Convivir, y por alentar la violencia contra comunidades campesinas como las de El Aro y La Granja.

Otro ejemplo doloroso fue el del médico Héctor Abad Gómez, asesinado en Medellín en un contexto de creciente violencia política y de consolidación del narcotráfico, cuando su voz crítica y humanista se alzaba en defensa de los derechos fundamentales y de la vida misma.



Gracias a esa resistencia colectiva, los derechos humanos fueron incorporados en nuestra Constitución, integrados al ordenamiento jurídico mediante tratados internacionales ratificados por el Estado, y convertidos en leyes que, al menos en el plano formal, hoy nos amparan, aunque con frecuencia se intenta desconocerlos o debilitarlos.

Estos instrumentos legales consagran principios democráticos fundamentales:

- La vida se defiende ante toda forma de violencia.
- La participación y las libertades son el cimiento de la democracia.
- Las mujeres no solo poseen los mismos derechos, sino que deben ocupar espacios decisorios en la vida política y económica.
- La equidad social no es un privilegio sino un derecho fundamental.
- Colombia es una nación plural, integrada por pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinas y urbanas.
- La diversidad sexual no es una amenaza, sino una expresión legítima de nuestra humanidad compartida.
- La paz es tanto un derecho como un deber.
- La naturaleza y la biodiversidad no son meros recursos explotables, sino nuestra casa común que debemos cuidar.

Sin embargo, más allá del reconocimiento legal o jurídico, la pregunta es: ¿cuánto de estos principios se ha hecho realidad? La verdad es que, en muchos casos, siguen siendo apenas formulaciones normativas, promesas no cumplidas. Por eso es necesario afirmar que, a lo largo de las últimas cuatro décadas, los derechos humanos han tenido una verdadera fuerza transformadora solo cuando han activado el poder constituyente de la sociedad, es decir, cuando han sido movilizados por miles de organizaciones sociales, lideresas y líderes comunitarios, defensoras y defensores del ambiente, del trabajo digno y de la paz.

Con su acción pacífica, su desobediencia civil y su compromiso democrático, estas personas y colectivos no solo impulsaron reformas estructurales, sino que abrieron el camino hacia una nueva cultura de derechos, una cultura que no nace desde arriba, sino desde las resistencias, los territorios y las luchas por la dignidad.

Una de las tareas más profundas y transformadoras del movimiento de derechos humanos ha sido la lucha de las víctimas de los crímenes contra la humanidad y el genocidio.

Estas víctimas cargan sobre sí el peso de lo más atroz que ha conocido la humanidad: violencias sistemáticas y generalizadas dirigidas contra poblaciones enteras o sectores específicos de ellas; crímenes que no son actos aislados, sino planificados y ejecutados como sistemas, con la participación directa del aparato estatal o de estructuras armadas con poder equivalente al del Estado.

En Colombia, estas prácticas no han sido esporádicas ni marginales. Se han prolongado durante décadas, dejando a su paso una estela de destrucción inmensa y una crueldad especialmente dirigida contra movimientos sociales, comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes, organizaciones políticas y territorios enteros sometidos al genocidio, al despojo, a la persecución y al desplazamiento forzado.

Y sin embargo, frente a tanto dolor y tanta impunidad, las víctimas y las personas defensoras de derechos humanos han alzado la voz y protegido la vida. Su persistencia, en contextos de enorme adversidad, ha sido decisiva para sembrar un cambio de conciencia en el país. Han sostenido la verdad cuando muchos querían silenciarla; han exigido justicia cuando otros apostaban por el olvido. Gracias a su lucha, se ha vuelto cada vez más claro que no hay paz posible sin verdad, sin justicia y sin memoria.

Son luchas por la Verdad, la Justicia, la Reparación integral, la Memoria y las Garantías de No Repetición. Y por ellas, Colombia ha empezado —aunque con enormes resistencias— a reconocer estas violencias extremas, y que sus impactos, profundos y duraderos, no pueden seguir siendo negados por la impunidad ni relativizados por el poder político o mediático.

En este movimiento por la verdad y la justicia, la lucha de las mujeres ha sido esencial, especialmente la de madres y hermanas que convirtieron el amor en perseverante y metódica búsqueda. Las primeras organizaciones en Colombia en esta senda fueron lideradas por mujeres buscadoras de sus familiares desaparecidos. Recordamos a la gran defensora Yanette Bautista, recientemente fallecida, y a doña Fabiola Lalinde. Gracias a ellas, y a las organizaciones

de familiares, la desaparición forzada —ese crimen que se intentó ocultar a toda costa— se nombró, se visibilizó y se reconoció como crimen de lesa humanidad.

También están las madres de los jóvenes de Soacha, asesinados en los mal llamados falsos positivos; las madres que buscan a sus seres queridos desaparecidos en la Comuna 13 y sepultados en La Escombrera; las mujeres víctimas de violencia sexual, que han roto silencios para abrir caminos.

Ese ha sido también el proceso del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Con perseverancia y rigor, ha logrado establecer la responsabilidad de gobiernos, instituciones, altos mandos e incluso jefes de Estado, en la violencia generalizada y sistemática.

Todas estas organizaciones han puesto rostro, nombre y voz a los crímenes contra la humanidad en Colombia, y han ido erosionando la hegemonía de la impunidad.

En estos tiempos, he venido insistiendo en que, debido a la profunda degradación moral causada por décadas de violencia, el desprecio sistemático hacia quienes viven en la pobreza y la exclusión, el patriarcado, y el racismo, Colombia necesita con urgencia una revolución ética.

Una revolución que no se limite a denunciar estas formas de deshumanización, sino que transforme de raíz nuestra conciencia individual y colectiva. Una revolución que nos lleve hacia una nueva cultura política y social, profundamente sensible ante la vida, el sufrimiento y la dignidad de los demás.

En este contexto, cabe preguntarse:

¿Qué papel han jugado, y pueden seguir jugando, las víctimas de crímenes contra la humanidad y genocidio en esa revolución ética?

Toda violencia causa un profundo daño ético en la sociedad, pero cuando se trata de aquella que es una violencia extrema y prolongada por períodos históricos, no hablamos de daño, sino de destrucción de la conciencia moral. El desprecio por la vida —y, en particular, por la vida humana— abre paso a

la deshumanización, que se instala y se normaliza a medida que la violencia extrema se hace sistemática, omnipresente e interminable.

Cuanto más extendida y prolongada es la violencia, más se erosiona la conciencia moral colectiva y más profunda se vuelve la deshumanización. Una sociedad violenta no solo destruye cuerpos: destruye también los vínculos, el pensamiento ético y la empatía.

Aunque en un comienzo, los primeros actos de violencia extrema suelen ser repudiados por sectores de la sociedad y existe capacidad de indignación,

a medida que los crímenes se hacen masivos y repetitivos, comienza un proceso de olvido y justificación. Se ignoran muchos hechos, se normaliza su existencia y emergen relatos que buscan excusar, relativizar o incluso legitimar lo ocurrido. Se inicia una parálisis moral: la capacidad de reflexión ética se debilita ante la magnitud y duración de la violencia.

En la larga duración de un estado de conflicto armado y criminalidad generalizada, como lo examinó, la pensadora Hannah Arendt, el mal deja de parecer extraordinario y se vuelve rutinario, normal. Ya no se percibe como una transgresión radical, y luego de debilitarse, desaparece el pensamiento crítico sobre su gravedad.

Eso es lo que, luego de tantas décadas, de las atrocidades en masa nos ha pasado en Colombia.

Frente a este panorama, el poder de la verdad que poseen las víctimas es indispensable. Son ellas quienes, a través de su testimonio, su resistencia y su dignidad, nos devuelven la capacidad de sentir, de pensar y de actuar éticamente.

Son quienes pueden reactivar la conciencia colectiva, poner en evidencia la verdad silenciada y, sobre todo, recordarnos que la vida humana jamás debe ser negociable.

Esa es la semilla de la revolución ética que necesitamos: una transformación que no solo repudie la deshumanización, sino que también reencuentre el sentido profundo de nuestra humanidad compartida.

El poder de la verdad de las víctimas no solo es capaz de derrotar la ignominia de la impunidad, hacer que la sociedad salga del letargo de la banalidad del



mal, revivir la existencia de quienes fueron asesinados y desaparecidos, instaurar la memoria de los sufrimientos pero también de las luchas y conquistas que implicó su sacrificio; desenmascarar a los poderosos determinadores de los peores crímenes, sino que además puede llevar a una nación dividida por décadas de odio y violencia, como la nuestra, a la reconciliación y a la paz.

IVÁN
Cepeda
Presidente



ENCUENTRO
CON LAS MADRES BUSCADORAS

Medellín, Antioquia

Me siento muy contento de estar aquí en las calles de Medellín. Nadie nos va a impedir que en Medellín y Antioquia hagamos campaña electoral y formemos claramente, porque este lugar del país le pertenece a todas y todos los ciudadanos. No es propiedad de nadie. No es una zona en la cual no se puede ejercer libremente el derecho a participar en política.

Y me siento especialmente honrado porque esta es una invitación que me han hecho las madres que buscan, desde hace tantos años, los restos de sus hijos y de familiares, que quedaron sepultados bajo los escombros de ese sitio que se llama así, La Escombrera. Un lugar que fue elegido para borrar la memoria de lo que se hizo en la Comuna 13 de esta ciudad.

Así que lo primero que debo decir es que todo mi respaldo, toda mi admiración, toda mi empatía por el trabajo que han hecho las heroicas madres que están caminando por la verdad en esta ciudad y que, por supuesto, tienen la razón. Afortunadamente este encuentro ha coincidido con un anuncio que ha hecho el, al parecer hoy candidato al Senado y condenado en primera instancia por los delitos de fraude procesal y también de soborno a testigos, Álvaro Uribe.

Él está en todo el derecho a hacer su campaña política, por supuesto. Las leyes y la justicia no se lo impiden. Pero a nosotros tampoco, como víctimas nos impide de tomar nuestras propias decisiones.

Y quiero decir sobre ese particular lo siguiente: me he permitido hacer una invitación a las madres que están buscando a sus hijos desaparecidos, ya me dicen que documentados 504 casos, una cifra preliminar todavía de personas que fueron desaparecidas allí en la operación Orión.

La invitación que les he hecho hoy a las madres, y también que les hago desde aquí a esas otras madres que fueron víctimas de los mal llamados ‘falsos positivos’, y que les hago a los campesinos que fueron masacrados en el Aro y en La Granja, y que fueron masacrados en el municipio de San Roque, y que fueron víctimas de las llamadas chuzadas durante el gobierno de Álvaro Uribe, a que nos reunamos nacionalmente para decirle al país, todos y todas, juntas lo que fueron los crímenes de lesa humanidad que se perpetraron bajo los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, en un solo clamor de justicia y de verdad ante la nación colombiana.

Esa es la invitación que lanzo desde aquí hoy en Medellín: a que no callemos la verdad.

Como lo he dicho en otros escenarios: si llego a ser beneficiado con el respaldo popular y soy presidente de la República, en mi gobierno las víctimas van a tener un lugar privilegiado y central.

Vamos a trabajar porque toda la verdad salga, porque haya toda la justicia y toda la reparación y porque los campesinos que fueron desplazados, las organizaciones que fueron víctimas de genocidio, las madres que todavía buscan a sus hijos puedan tener el máximo nivel de verdad, justicia y reparación.

Eso no es una promesa, eso es un compromiso que hago ante el país en el día de hoy, y que haré realidad como todo lo que estoy diciendo en esta campaña.

He llamado a la nación a que hagamos una Revolución Ética.

En Colombia no ha sufrido un daño la moral pública, sino que ha sido destruida, por décadas de violencia, por el patriarcalismo contra las mujeres, por la discriminación contra los pobres, la exclusión de quienes menos tienen en nuestra sociedad y también por el racismo contra los pueblos indígenas, afrodescendientes y las comunidades rurales y campesinas.

Esa Revolución Ética tiene entonces un componente esencial que es lo que llamo el poder de la verdad de las víctimas, primer asunto, pero en segundo lugar una convocatoria a una rebelión ciudadana contra la macrocorrupción que azota a la sociedad colombiana.

Todos los días vemos las expresiones de ese fenómeno: dependencias del Estado que son simple y llanamente negociadas para que se conviertan en botín clientelar o burocrático; intensos dineros que se pagan por contratos y por licitaciones que son a todas luces ilegales; robo de los dineros para la paz, para la reparación de las víctimas o, como ocurrió bajo nuestro Gobierno, de los dineros destinados ni más ni menos que a las personas damnificadas por los desastres naturales. Eso no puede seguir ocurriendo. Y mi invitación es a que nos rebelemos contra toda forma de corrupción en el país y en el departamento de Antioquia, desde el que estoy hablando en el día de hoy.

No más corrupción, es una apuesta.



Pero también, y eso es lo que haré en los próximos días, semanas y meses, expondré claramente un programa de gobierno para continuar las reformas sociales. Para consolidar la reforma que hemos logrado en materia laboral, para lograr que la reforma pensional que este Gobierno sacó adelante no vaya a ser derrotada por formalismos de carácter legal o jurídico, para que avancemos en consolidar una verdadera renta básica para atender a la población que vive en la peor miseria y pobreza en esta sociedad, para que avancemos decididamente en la reforma agraria que ya se está dando en muchos territorios del país.

Así que haré un diálogo, una consulta a los ciudadanos y ciudadanas para que nos digan cómo seguir avanzando en el camino de la consolidación de esas reformas, pero también qué reformas necesitamos impulsar en un nuevo Gobierno.

Una de ellas son programas que realmente garanticen a la juventud de este país un futuro libre. Y la primera de esas reformas en ese campo: la de la educación en todos sus niveles, con calidad y de amplio espectro.

La reforma a la justicia, por supuesto, para que haya para toda persona en esta sociedad la posibilidad de reivindicar sus derechos y, como parte de eso que hemos llamado la lucha contra la macrocorrupción, y otras reformas que son indispensables para consolidar el cambio social.

Así que ese es el camino que estoy recorriendo. Y es un camino que tiene un principio básico que quiero reiterar aquí, que fue el que enuncié cuando, después de que me lo pidieron las organizaciones de víctimas, accedí a esta precandidatura: para mi Gobierno, para lo que se va a desarrollar en el futuro, es con los movimientos sociales y populares, no sin ellos.

Y no es que el Gobierno del Pacto Histórico y del cambio no haya avanzado en ese sentido, por supuesto que este ha sido un Gobierno que ha escuchado a la gente, que ha comenzado a entregar numerosas posibilidades de movilización y participación, pero eso hay que consolidarlo y fortalecerlo, y es lo que vamos a hacer en la segunda fase de este proceso de cambio social.

Pero, además, como parte de esta campaña política, no vamos a gastar inmensa cantidad de recursos. No vamos a desperdiciar miles de millones de pesos en publicidad o costos que son absolutamente innecesarios.

Quiero apelar a la ciudadanía y a los movimientos sociales para que nos ayuden a conseguir la voluntad popular en las urnas y la vigilen, cuando sean depositados los votos, para que ganemos lícitamente, sin derroche de inmensos recursos y con la participación de la gente, una segunda etapa de Gobierno.

Y también he dicho que no voy a hacer una campaña irrespetuosa, una campaña de insultos, de agravios, de violencia contra otros candidatos y candidatas. Porque podemos tener todas las diferencias, como efectivamente las tenemos, pero de parte nuestra lo que habrá son argumentos, propuestas, programas, no a adjetivos, apelaciones descalificadoras hacia nadie.

No cederemos a la violencia en el debate político ni a la violencia verbal ni a la violencia de género, con relación a las compañeras o colegas o adversarias que sean candidatas en este proceso de voto.

Mi llamado respetuoso y cordial a los medios de comunicación a que den toda la posibilidad de que este debate sea lo más transparente posible y que se escuche la voz de todos los candidatos y candidatas, sin ninguna clase de diferenciación por líneas ideológicas o políticas que enturbien la discusión pública.

Queremos que los ciudadanos y ciudadanas decidan sobre las propuestas que hacemos, no sobre la cantidad de mentiras o distorsiones que se digan en el proceso de debate público.

Cuando digo que Antioquia y Medellín no son territorio vedado, no son de Uribe, cuando digo que nosotros tenemos derecho como víctimas a la verdad y la justicia, no digo que no estemos dispuestos a buscar los caminos de la reconciliación nacional.

Nosotros y nosotras somos firmes en nuestras posiciones y vamos a defender la verdad la justicia. Pero también somos generosos, como son generosas las madres que han hecho este recorrido de una manera tan ejemplar, con tantas adversidades, con tantos obstáculos y que hoy le hablan con esa autoridad moral con que lo hacen a la sociedad colombiana: estamos dispuestos



a tender la mano para buscar un acuerdo nacional que permita a Colombia superar la violencia, el odio, para que nos permita avanzar hacia la paz, que es lo que anhelamos.

Paz con justicia, no solamente judicial, sino con justicia social.

IVÁN
Cepeda
Presidente



POR UNA POLÍTICA
**EXTERIOR DE PAZ, AUTÓNOMA
Y SOLIDARIA CON LOS
MIGRANTES**

Londres, Reino Unido

He preparado lo que he llamado el cuarto discurso de mi campaña como precandidato del Pacto Histórico. Quiero consagrar este mensaje a la política exterior y en relaciones internacionales, en lo que estoy seguro será el segundo gobierno progresista en Colombia.

Saludos compañeras y queridos compañeros compatriotas residentes en el exterior:

He venido hasta Londres, una ciudad en la que habitan muchos de nuestros compatriotas migrantes y refugiados, para saludar con afecto a la gran comunidad colombiana en el exterior y compartir con ustedes siete elementos centrales de mi propuesta y visión sobre nuestra política exterior que debe ser de paz, defensa de los derechos humanos, de la autonomía e integración regional, y además, por naturaleza, protectora de los migrantes.

La guerra y la paz siguen estando hoy en el centro de la atención internacional. Es innegable que en la actualidad enfrentamos la amenaza real de una tercera guerra mundial, esta vez con el potencial uso de armas nucleares que darían lugar a un nuevo tipo de confrontación bélica, cuya escala y devastadores efectos no hemos conocido aún en nuestra historia, pero que sin duda serían catastróficos. La humanidad que lograra sobrevivir y el mundo que surgiría de los escombros serían irreconocibles, pues entrañarían el fin de las condiciones de vida, las sociedades y las estructuras que ha construido el ser humano a lo largo de la historia.

Como advirtió el papa Francisco en su encíclica *Fratelli Tutti*, las situaciones de violencia extrema se multiplican dolorosamente en distintas regiones del planeta, tomando la forma —cada vez más evidente— de lo que ya podría llamarse una “tercera guerra mundial por etapas”.

Esta escalofriante amenaza ocurre en un contexto de intensificación y diversificación de los conflictos armados y debilitamiento de los procesos de paz. Según datos de institutos especializados, en 2024 se registraron 61 conflictos armados activos en el planeta, la cifra más alta desde 1946. Tres de ellos involucran a Estados con capacidad nuclear: India y Pakistán, Rusia y Ucrania, Israel e Irán.

Asistimos hoy en el planeta al surgimiento de una nueva generación de guerras, caracterizadas por la transformación radical de los actores y de las formas de combate. Son conflictos asimétricos, híbridos y difusos, que cuestionan todas las categorías del Derecho Internacional Humanitario. La redefinición de los roles tradicionales de los Estados, la presencia creciente de grupos armados irregulares, la privatización de la guerra mediante fuerzas mercenarias, y la fragmentación de las estructuras combatientes han dado lugar a una miríada de confrontaciones marcadas por el uso de armas teledirigidas, drones y tecnologías de alta precisión.

Pero lo más preocupante no es solo la cantidad de conflictos, sino la forma en que se resuelven. En las últimas cuatro décadas, el porcentaje de guerras finalizadas mediante acuerdos de paz cayó dramáticamente: de un 23 % a apenas un 4 %. Es una señal clara del debilitamiento de los mecanismos de diálogo, diplomacia y negociación internacional.

Estamos entrando, sin duda, en una etapa marcada por dinámicas peligrosas, crecientemente incontrolables, donde la fuerza y la violencia tienden a imponerse sobre la razón y la diplomacia.

Por lo tanto, mi primera afirmación en materia de política exterior es esta: Colombia debe ser un actor principal de la paz en el mundo; el nuevo gobierno progresista que elegiremos en 2026 debe contribuir a parar el curso hacia una tercera guerra mundial y hacia la destrucción de la Humanidad.

El siglo XX nos dejó crímenes en masa contra poblaciones enteras: genocidios como el cometido contra el pueblo armenio, el Holocausto judío, las prácticas sistemáticas de exterminio en las dictaduras latinoamericanas y la masacre del pueblo tutsi en Ruanda. En todos estos casos, los genocidios fueron ocultados, negados, minimizados. El negacionismo fue la herramienta del horror para silenciar a las víctimas y borrar la memoria colectiva. En muchos casos, solo después de décadas de lucha, dolor e impunidad, el mundo comenzó a comprender la magnitud de esas atrocidades.

Hoy, sin embargo, el genocidio ocurre a la vista de todos. El caso de Gaza es especialmente doloroso: la muerte de decenas de miles de civiles, entre ellos miles de niños, el desplazamiento forzado de poblaciones enteras, la destrucción sistemática de infraestructura vital. Todo sucede a plena luz del día,

ante los ojos del mundo, en tiempo real. Y desde los centros del poder global, se observa con pasividad, cuando no con complicidad.

Gaza se ha convertido en el símbolo más desgarrador de la degradación moral de nuestro tiempo y en la expresión más nítida de una dinámica criminal que nos arrastra, paso a paso, hacia una conflagración global.

En Colombia, la defensa de los derechos humanos no es solo un principio moral, sino un deber constitucional. Nuestra Carta Política establece con claridad que los ciudadanos tienen la obligación de actuar frente a las graves violaciones a la dignidad humana. Ese deber se vuelve aún más apremiante cuando lo que está en juego es el intento sistemático de exterminar a un pueblo.

Mi segunda afirmación es que en un nuevo gobierno progresista, seguiremos oponiéndonos decididamente al genocidio y a los crímenes contra la humanidad.

Desde aquí, nos sumamos a la exigencia universal de poner fin inmediato a la agresión genocida contra el pueblo palestino, a la Nakba que busca su destrucción. Expresamos nuestro pleno respaldo a la posición valiente y coherente del presidente Gustavo Petro, quien ha decidido romper relaciones diplomáticas con un gobierno que actúa de forma abiertamente genocida.

Asimismo, exigimos que el principal responsable de este crimen contra la humanidad, Benjamín Netanyahu, sea juzgado por la Corte Penal Internacional y sancionado con todo el rigor del derecho internacional.

Desde América Latina, y en general desde el Sur Global, tenemos el deber de preguntarnos: ¿qué nos corresponde hacer hoy frente a este peligro colosal que amenaza la supervivencia misma de la humanidad?

La historia de nuestras luchas sociales latinoamericanas ha sido, en gran medida, la historia de una búsqueda incesante por la unidad e integración de nuestros pueblos. Frente a los reiterados intentos de colonización, dominación y fragmentación, hemos levantado una vocación integracionista que no solo es resistencia, sino también propuesta. Esa vocación ha hecho posible convertir nuestro subcontinente en una zona de paz en el mundo.

América Latina se ha consolidado como una referencia global en materia de paz. En los últimos 150 años, nuestra región ha sido una de las más estables del planeta: hemos protagonizado el menor número de guerras, mantenido un compromiso constante con la no proliferación nuclear y evitado convertirla en un foco de inestabilidad para la comunidad internacional.

Sin embargo, esa conquista histórica —fruto de décadas de luchas sociales, voluntad política y vocación de paz— hoy se ve amenazada por una feroz disputa geopolítica en torno a la revalorización estratégica de nuestros bienes comunes: el agua, los hidrocarburos, los minerales críticos, la Amazonía, la Orinoquía y nuestros vastos espacios oceánicos.

En este contexto, resulta legítimo preguntarnos si la actual operación militar de Estados Unidos en la costa venezolana responde realmente a un interés por reforzar la lucha contra el narcotráfico, o si, en el fondo, forma parte de una pugna entre grandes corporaciones —como Chevron y ExxonMobil— por el control de valiosas reservas petroleras en ese territorio marítimo en disputa.

También cabe preguntarse si las recientes amenazas contra el gobierno de Brasil, presidido por Luiz Inácio Lula da Silva, y las sanciones arancelarias impuestas desde el exterior, no constituyen en realidad una grosera injerencia en los asuntos internos de ese país. Una intromisión dirigida, en este caso, contra la independencia del poder judicial brasileño, que —con valentía y apego al Estado de derecho— ha sancionado con 27 años de prisión al golpista Jair Bolsonaro.

¿O estamos acaso frente a algo aún más preocupante? ¿Una estrategia de desestabilización progresiva del gobierno legítimo de Brasil que busca, en el fondo, allanar el camino hacia el control geopolítico de la región amazónica, uno de los territorios más estratégicos y codiciados del planeta?

De este modo, un tercer principio fundamental de nuestra política exterior en una segunda fase del cambio social consistirá en la insistencia en que Latinoamérica es una Zona de Paz que no prolifera ni fomenta la guerra entre naciones.

Por eso cobra pleno sentido el debate sobre la instalación de nuevas bases militares extranjeras en nuestros territorios, el apego al derecho internacional, la valoración del multilateralismo, la independencia y no pertenencia a alianzas bélicas como la OTAN, la importación de conflictos internacionales a la región.

Un aspecto insoslayable hoy es cuestionar la ausencia de compromiso de las potencias con los problemas globales. Su descarga de responsabilidad en los países del sur y la comodidad de su rol, como escrutadores o certificadores de la buena conducta de quienes ponen los muertos y el sacrificio. Esa injusticia global debe terminar.

Colombia ha comenzado su sexta década de lucha o guerra contra el narcotráfico y las drogas ilícitas. Miles de servidores públicos probos y valientes han pagado con su vida su enfrentamiento sin cuartel a los carteles de la droga o a los grupos armados ilegales. Muchas lideresas y líderes sociales se han sacrificado por oponerse a la imposición de la economía del narcotráfico. En 20 años hemos gastado cerca de 80 billones de pesos en ese propósito. Nuestro país lo ha dado todo por liberarse de ese mal.

No obstante, esa abnegación ha sido infructuosa. Llevamos mal contadas seis generaciones de narcotraficantes, y seis generaciones de estructuras mutantes del narcotráfico. La ética pública ha sido severamente lesionada en medio de esta lucha, y así como muchos funcionarios se han enfrentado sin miramientos a la mafia, otros han preferido claudicar y entregarse a ese poder corruptor.

Pero nada, absolutamente nada, basta en este campo. Año tras año, y en forma humillante, nuestro país y nuestros gobiernos deben entregar cuentas a la administración estadounidense, seguir extraditando nacionales, a cambio de una total inmunidad para los ciudadanos estadounidenses en nuestro territorio, quienes pueden cometer toda clase de abusos y delitos sin que sean interpelados por las autoridades o la justicia. Tanto la certificación, como la extradición, son prácticas unilaterales de chantaje y sometimiento a la dominación imperial.

Requerimos una sustitución de paradigma. El prohibicionismo está agotado como modelo para encarar este mal. La discusión sobre la desregulación, la transformación productiva de nuestros territorios rurales, y la cooperación internacional para reemplazar las economías ilícitas son el camino.

De esta forma, como lo está haciendo este gobierno, Colombia debe seguir promoviendo el debate internacional sobre el necesario cambio de paradigma en la política mundial sobre las drogas, y convocar la pactada en el Acuerdo Final de Paz de 2016, conferencia internacional sobre un nuevo tratamiento al problema del narcotráfico.

De este modo, y como cuarto elemento de la política exterior afirmo que en la segunda etapa del gobierno del cambio social, pondremos en el centro del debate nacional la superación definitiva del modelo prohibicionista de la mal llamada “guerra contra las drogas”. Este modelo ha demostrado ser un camino directo hacia el infierno de la consolidación y expansión de las economías del narcotráfico, multiplicando la violencia, la corrupción y el sufrimiento de nuestros pueblos.

Trabajaré con determinación para construir un consenso nacional que nos permita romper con la relación de subordinación que Colombia ha mantenido frente al país que concentra el mercado más poderoso de drogas ilícitas: Estados Unidos.

Ha llegado la hora de exigir una transformación profunda en la manera en que ese país aborda el problema. Estados Unidos debe abandonar la cómoda postura de quien, siendo el principal consumidor y una de las raíces estructurales del fenómeno, tolera el narcotráfico dentro de sus fronteras, mientras impone a otros pueblos —como el nuestro— la carga de los muertos, los sacrificios y la destrucción social. Es momento de construir una verdadera cooperación internacional, basada en la corresponsabilidad, el respeto mutuo y un enfoque de salud pública, desarrollo rural y justicia social.

Pero para ello se requiere que, en esta etapa del ocaso del predominio del modelo estadounidense, tengamos una política autónoma e integracionista que ponga como centro gravitacional, no los intereses de los círculos de poder en Washington o Miami, sino los intereses nacionales.

Como ha señalado con acierto el internacionalista Juan Tokatlián, **existe una clara diferencia entre “hacer” y “tener” una política exterior**. Lo primero se expresa en el hecho de que un gobierno sigue los mandatos de otro más poderoso, carece de una perspectiva de largo plazo, y no tiene un mapa de ruta para lidiar con los asuntos mundiales. Lo segundo implica **tener definidos cuáles son los intereses nacionales propios, disponer de un diagnóstico serio de lo interno y lo externo, y tener un propósito deliberado para acrecentar la influencia internacional de nuestra política**.

Por eso en quinto lugar afirmo que buscaremos tener una política exterior autónoma e integracionista.



Ante estos retos que plantea el escenario internacional, y como lo he venido afirmando a lo largo de estos discursos de campaña, **el factor decisivo para consolidar los cambios que requerimos es la participación social y ciudadanas. Y esto es válido también para la política exterior.**

El escenario global y el regional exigen una urgente sensibilización y un mayor activismo contra la guerra y la violencia, en favor de los derechos humanos, del cambio de paradigma para tratar el problema del narcotráfico, y buscar la sustentabilidad ambiental. Frente a la recurrente convocatoria para configurar una “coalición de voluntarios” para prolongar guerras, combatir el terrorismo e imponer cambios de regímenes, **es hora de conformar una coalición también de la sociedad civil internacional**, entre todos aquellos que han sido, son y potencialmente serán víctimas directas del uso abusivo de la fuerza, de la manipulación del derecho internacional humanitario y de las turbias prácticas de la realpolitik.

Ello implica, ir más allá de la diplomacia estatal: muchas veces, nuestros Estados no pueden –y otras tantas no quieren– elevar el tono de crítica o la introducción de alternativas diferentes a la lógica de los poderosos y belicosos. **Por ello, es el momento de estimular la diplomacia ciudadana.** Entiendo esta diplomacia como el hecho de que grupos no gubernamentales, usen complementaria y benigne un rol tradicional del Estado, asuman una labor de interlocución legítima con distintas contrapartes en el exterior y desplieguen alianzas novedosas con la sociedad civil internacional.

Como sexto elemento de esta política afirmo entonces que la diplomacia ciudadana será bienvenida en mi gestión.

Es tiempo de que la humanidad despierte como sujeto político y cambie el rumbo de la historia hacia la paz.

Compañeras y compañeros:

No puedo cerrar estas palabras sin recordar que, al igual que muchas y muchos de quienes hemos luchado por el cambio social en Colombia, yo también viví el exilio político durante varios años. Esa experiencia me marcó de forma profunda y definitiva.

El exilio representa, a la vez, una oportunidad y una herida. Por un lado, permite preservar la vida y la integridad; ofrece la posibilidad de conocer otros pueblos, otras lenguas, otras formas de ver el mundo. Pero, por otro lado, impone una condición existencial profundamente desafiante.

Quienes han vivido el exilio o la migración conocen bien lo que significa habitar entre dos mundos: el del país que acoge y el de la tierra natal que no se olvida. Saben del esfuerzo inmenso que implica adaptarse, reconstruir la vida desde cero, reformular la identidad o aferrarse a ella para no perderse del todo. Saben lo que es vivir con esa nostalgia constante que nos une a nuestras raíces, a nuestras calles, a nuestros sabores, a nuestros seres queridos, a nuestros muertos, a nuestra historia.

Por esa misma razón —porque el exilio es una condición tan exigente, tan desgarradora—, el Estado colombiano tiene una responsabilidad irrenunciable: la de proteger los derechos de quienes, por distintas circunstancias, se han visto forzados a dejar el país. Esa protección debe expresarse en una política exterior centrada en la dignidad humana, en la atención efectiva a cualquier vulneración de derechos, en la exigencia firme a los Estados receptores para que no reproduzcan tratos discriminatorios, denigrantes o xenófobos hacia nuestra gente.

Hoy, en un mundo donde las migraciones se han masificado a causa de las guerras, del hambre, de la crisis climática o de la desigualdad, también se han intensificado las olas de odio, discriminación y criminalización hacia quienes habitan en el exilio. Es por eso que un gobierno democrático y responsable debe adoptar una política migratoria sólida, que garantice protección integral a las personas migrantes y fortalezca una diplomacia al servicio de la gente.

La migración no es un delito, ni un problema: es una realidad profundamente humana. El derecho a la libre circulación debe ser protegido por estándares mínimos internacionales, con salvaguardias contra la discriminación y con procedimientos de asilo ágiles, justos y respetuosos de la dignidad de cada persona.

En este contexto, Colombia debe asumir que una parte significativa del exilio ha sido causada por persecuciones políticas, desplazamientos forzados y crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro propio territorio. La migración forzada, como lo ha señalado la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, constituye en sí misma una grave violación de derechos humanos.



Por tanto, quienes la han padecido tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación, incluida la posibilidad real de retornar en condiciones seguras, dignas y voluntarias.

Las colombianas y los colombianos en el exterior no pueden seguir siendo tratados como figuras marginales ni reducidos exclusivamente a su capacidad de enviar remesas. Son parte esencial del patrimonio humano de nuestra nación, y como tales, deben ser reconocidos como sujetos del poder constituyente del pueblo colombiano.

Desde esta perspectiva, asumo en séptimo lugar el compromiso de que ese reconocimiento se traduzca en acciones concretas para nuestros migrantes. El primer paso es la realización de un censo confiable y exhaustivo que identifique sus necesidades, problemáticas y capacidades en los países donde hoy residen. A partir de ello, el Estado debe garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, abrir canales efectivos de participación política y asegurar que su voz tenga incidencia real en las decisiones públicas del país.

Porque el talento, el conocimiento y la creatividad que han adquirido en el contacto con otras culturas, lejos de alejarlos de Colombia, pueden ser parte de una nueva forma de pertenencia: una en la que la vida nueva y las raíces natales coexistan en armonía, al servicio de un país más justo, más plural y más democrático.

Colombia, a pesar de haber padecido tanto por la violencia y la desigualdad, es también una tierra de esperanza, de belleza y de inmensa riqueza biocultural. Esa es la nación que aspiramos a convertir en una potencia mundial de la vida. Y ustedes, queridas y queridos compatriotas en el exterior, son el rostro de esa nación ante el mundo.

IVÁN
Cepeda
Presidente



UNIDAD Y VICTORIA

Bogotá, Cundinamarca

Queridas compañeras, queridos compañeros:

Quiero comenzar expresando mi profunda gratitud a quienes, con generosidad y visión de país, decidieron unirse a esta precandidatura presidencial hacia la consulta del próximo 26 de octubre.

A los movimientos sociales, cuya voz para mí es un mandato; a los partidos políticos que se han integrado al Pacto Histórico, o que después de tantos obstáculos, como nos lo ha dicho aquí María José Pizarro, que han querido evitar nuestra unidad, terminarán por hacerlo.

A exministros, exministras de este Gobierno, a las candidatas y a los precandidatos al Congreso de la República, a dirigentes y a integrantes de nuestra gran fuerza política. Gracias, muchas gracias.

Pero, sobre todo, quiero agradecer a mis colegas de precandidatura presidencial, a mi amigo y compañero Gustavo Bolívar, cuya voz crítica y talento para narrar la esperanza han inspirado a muchos colombianos.

A mi amiga y compañera María José Pizarro, heredera de una tradición de lucha por la paz y por los derechos de las víctimas, símbolo de resistencia y de memoria viva.

A mi amiga y compañera Susana Muhamad, con su convicción ambientalista y su liderazgo en la defensa de la vida, que nos convoca a asumir la justicia climática como causa común.

A mi amiga y compañera en la defensa de los derechos humanos, Gloria Flores, con quien he librado tantas luchas por la vida y la dignidad.

A mi amiga y compañera Gloria Inés Ramírez, cuya trayectoria sindical y compromiso con la justicia social ha tenido resultados innegables en nuestro Gobierno.

A mi amigo y compañero Ali Bantú, quien ha sido incansable en la defensa de la dignidad de las comunidades afrodescendientes, aportando la fuerza de la diversidad al pacto histórico.

A todas y todos ustedes, no solamente mi agradecimiento, sino mi compromiso, no los defraudaré en este momento decisivo de la historia de nuestro país.

El Pacto Histórico nació de la lucha de los movimientos sociales, de la juventud, de la creciente participación decisoria de las mujeres, de la persistencia y la lucha de las víctimas de la violencia, de la fuerza y la resistencia de nuestros pueblos y comunidades ancestrales, de la lucha del campesinado y de la acción comunitaria de los sectores populares urbanos, sin su movilización en las calles, en las veredas y en los territorios, sin las nuevas ciudadanías que representan, nada de esto sería posible.

Porque el Pacto Histórico no es una simple coalición electoral, es la más importante configuración política y social construida en la historia reciente de Colombia. Que lo sepan nuestros adversarios y contradictores políticos.

Somos parte del poder constituyente y transformador que necesita Colombia. Y lo más importante, somos una fuerza política que está unida y preparada para vencer en las próximas elecciones, para emprender el camino de nuestro segundo gobierno progresista y de profundos cambios sociales, políticos, económicos y culturales.

En esta ruta quiero mencionar cinco desafíos que tendré presentes para asegurar el alcance de este objetivo estratégico:

1. Buscaré una mayor participación de los movimientos sociales, de las mujeres y de los jóvenes, en la vida política y en los procesos de decisión.

A pesar de conquistas valiosas en estos campos, debemos reconocer con honestidad que aún debemos producir mayores avances políticos para romper con siglos de exclusión y patriarcado en Colombia.

En especial, nuestro programa y acción debe dar lugar a la participación política plena de las mujeres y el impulso de políticas públicas verdaderamente de género, para lograr la total paridad e igualdad de derechos.

Tenemos la obligación de exigirnos más. Debemos reconocer nuestra deuda y redoblar nuestro compromiso con la igualdad y con la democracia, que están presentes en nuestro programa, pero que aún requieren traducirse en

realidad y prácticas cotidianas que significa que, sin los movimientos sociales, sin su mandato, sin su voluntad no avanzamos en Colombia hacia un verdadero gobierno democrático.

2. No perder de vista la naturaleza de la confrontación política central en este momento histórico

No debemos equivocarnos con relación a la naturaleza de esa confrontación y encerrarnos en disputas internas menores. Nuestros verdaderos adversarios son la extrema derecha uribista y su proyecto político que constituyen una verdadera amenaza interna como lo es la extrema derecha global en este momento para la civilización y la vida en el planeta.

Esa corriente global derechista es la misma que hoy muestra lo que significa la palabra genocidio en Gaza. Y desde aquí elevo mi voz por la libertad de nuestras compañeras, Manuela y Luna, pertenecientes a la flotilla humanitaria que ha sido secuestrada por el ejército de Israel.

Esa extrema derecha xenofóbica con los migrantes, plutocrática y rapaz bajo el liderazgo del magnate convicto que hoy gobierna los Estados Unidos, misógina, homofóbica y enemiga de la democracia y del cambio social.

En Colombia, ese proyecto político cada vez más regresivo pretende devolvernos a la guerra total y a políticas de seguridad que implican, necesariamente, la ejecución de toda clase de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, saquear y destruir la naturaleza, profundizar la concentración de la riqueza y del poder en cabeza de clanes mafiosos y criminales.

3. Desde el punto de vista programático y de nuestra acción política, mi posición es y será firme, consciente y comprometida con la justicia, la paz y con la equidad social

Resulta evidente que a estas alturas ya no estamos por reformas cosméticas o superficiales. Queremos transformaciones estructurales del modelo económico.

Que no equivale, como lo han equivocadamente dicho y vaticinado nuestros contradictores, a construir una economía estatizada e improductiva.

Por el contrario, nuestro gobierno ha demostrado con cifras y logros verificables que la economía basada en una auténtica reforma agraria y en la

sustitución real de la matriz energética produce empleo, crecimiento y bienestar. Así que nuestro segundo gobierno no solo estará cada a proteger o estará dedicado a proteger los cambios que hemos logrado, sino también que haremos lo necesario para avanzar al máximo en un modelo económico productivo, de equidad social y de protección de nuestra riqueza natural.

Y que no quepa duda, contra la gran corrupción habrá una acción sin cuartel para eliminarla de la vida de los colombianos.

Por lo tanto, el cambio social no solo va a continuar, sino que alcanzará nuevos niveles, profundidad y arraigo.

4. Les hago un llamado muy cordial a mis compañeras y compañeros en este proceso electoral, a no dejarnos conducir a lo que llamo la política espectáculo, a quedar prisioneros de la narrativa que busca imponernos el espacio mediático y acceder a los enfrentamientos a los que intentan llevarnos nuestros contradictores

No caigamos en la política facilista, del insulto y del enfrentamiento que oculta los debates, de fondo y solo permite el ejercicio superficial del exhibicionismo, la conversación frívola y el ocultamiento de los problemas de fondo de la sociedad colombiana y del mundo.

No olvidemos que el cambio social más significativo que ha dejado nuestro gobierno es el de la conciencia de los sectores populares y ciudadanos sobre su capacidad de lograr los cambios, defenderlos y materializarlos.

Y por eso necesitamos desarrollar con más educación, más cultura, más debate de calidad y espíritu crítico, con más profundidad de argumentos, ese importante logro de conciencia que hemos ido bajando.

5. Hemos adoptado una estrategia política arraigada en los principios de la democracia directa y participativa. Serán las bases y la ciudadanía quienes definan a través del voto popular nuestra candidatura presidencial y la conformación de las listas paritarias al Congreso de la República

A quienes compiten conmigo en este proceso no los considero adversarios, sino competidores fraternos. Por eso invito a todas y todos a asumir como

principio fundamental de nuestro relacionamiento político, la fraternidad, el reconocimiento mutuo y el respeto.

Debemos cuidar por encima de todo, la unidad de propósitos que nos une como proyecto histórico. Esa unidad no puede ser solo una consigna de campaña electoral, debe convertirse en una práctica cotidiana en el eje ético y estratégico de nuestra acción política.

Porque la unidad nos dará la victoria, no como simple consigna, sino como convicción profunda que guíe cada paso que damos hacia la transformación del país.

Unidad de propósito primero, unidad para avanzar, unidad para vencer.

Compañeras y compañeros, ante el golpe militar en septiembre de 1973, que buscaba acabar con la Unidad Popular en Chile, Salvador Allende decía sitiado en el Palacio de la Moneda: “Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con la fuerza ni con el crimen. La historia es nuestra y la hacen los pueblos”.

En Colombia hemos sobrevivido al genocidio y a la persecución política que se ha ejercido en contra nuestra por décadas. Tenemos la potencia, el talento y la valentía suficientes para triunfar en las elecciones de 2026.

Mi compromiso es trabajar por un liderazgo colectivo, por una campaña tejida con la esperanza y el esfuerzo de cada integrante del pacto histórico, de cada líder y liderazgo social, de cada ciudadano y ciudadana que defiende nuestras ideas.

El objetivo estratégico es consolidar el proceso político del cambio, del proyecto del Pacto Histórico y preservar el poder gubernamental para consolidarlo.

Así que vamos a triunfar en la consulta, a conformar listas ganadoras para el nuevo Congreso de la República y a construir un segundo gobierno que va a consolidar los cambios sociales y a convertir a Colombia en un país en paz, con equidad social y democracia.

Vamos a hacer realidad nuestro planteamiento de que Colombia llegará a ser una potencia mundial de la vida.

IVÁN
Cepeda
Presidente



DOS MODELOS DE HACER POLÍTICA

Barranquilla, Atlántico

Queridas compañeras y queridos compañeros:

Me emociona mucho estar aquí en Barranquilla, por segunda vez, en esta gran institución que es la Corporación Universitaria Reformada, que tiene un lema que me parece supremamente inspirador: educamos la vida para la paz. Un lema con el que me identifico profundamente.

La primera vez que estuve aquí lo hice en condición de un colombiano más y, unos cuantos días después, por llamado que me hicieron las madres de los muchachos que han sido víctimas de los falsos positivos, las madres de los muchachos y jóvenes que quedaron sepultados bajo los desechos industriales con los que se quiso sepultar también su memoria, no solo sus cuerpos en la Comuna 13, luego de la operación Orión en Medellín, y por solicitud del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, decidí aceptar esta honrosa designación para ser precandidato presidencial del Pacto Histórico, la principal fuerza política que hay hoy en Colombia.

Hace unos días ese honor, esa distinción se ha visto reforzada con un gesto que tiene una gran estatura política, y que valoro inmensamente, y es el apoyo de mis colegas, compañeras y compañeros de precandidatura presidencial, de quienes aquí están presentes: Susana Muhamad, Ali Ban tú, pero también Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Gloria Inés Ramírez y Gloria Flores. Quienes tomaron la decisión de unirse a este propósito, en este caso, con relación a mi postulación.

He hecho desde que comencé este camino cuatro planteamientos que quiero rápidamente sintetizar ante ustedes. Y mañana haré un nuevo planteamiento, un quinto planteamiento en un lugar que me parece especialmente indicado para eso, el Rincón Latino, donde el espíritu de la solidaridad y el trabajo comunitario han comenzado a derrotar la pobreza, cuando son las comunidades las que se unen para enfrentarse a las condiciones de vida precaria.

El primero de esos planteamientos que hice es qué tipo de política, qué tipo de campaña electoral quiero hacer en este proceso en el que estamos. Y lo primero que dije es: mi aspiración no es una aspiración individual. No es la

vanidad de una aspiración a un puesto público. Es el mandato de la gente, del pueblo a través de los movimientos sociales. Recuperé y dije claramente que como nos lo han enseñado nuestros pueblos ancestrales, hay que mandar obedeciendo, obedeciendo al pueblo en primer lugar.

La política no es y no debe ser una carrera para enriquecerse, para lucrarse, para adquirir poder, para adquirir riqueza. La política es para servir a los seres humanos y al pueblo colombiano y desde esa perspectiva es que ha asumido esta tarea.

Por eso es que hago una campaña como la que aquí se ha planteado que estamos haciendo. A diferencia de otros candidatos y candidatas, he pedido, he exigido a mis colaboradores y a mis compañeras y compañeros que no derrochemos grandes cifras de dinero en este propósito electoral.

Porque ese es el camino al infierno, porque cuando se aspira a algo y el precio sube constantemente, la tentación a caer en la corrupción también crece proporcionalmente.

Austeridad y, en segundo lugar, respeto.

Nosotros que venimos de tantas persecuciones políticas, de genocidios como el que se ha cometido durante décadas contra la Unión Patriótica y otras fuerzas sociales, no podemos conducirnos en la política de la misma manera que lo hacen algunos de nuestros adversarios. A todos ellos les responderemos no con insultos, no con calumnias, no con campañas sucias, sino con nuestros argumentos, con nuestras ideas y con nuestra transparencia.

Queremos la paz en Colombia y damos ejemplo con nuestra conducta política sobre esa aspiración que tenemos. Somos implacables también en la lucha política, que no se malinterprete esto que estoy diciendo, nosotros no somos manipulables, simplemente comprables o cooptables por del establecimiento. Nada de eso. Hemos hecho oposición férrea en las calles, en el debate público y hemos triunfado en batallas políticas que son fundamentales para este país. Así que no se confunda ingenuamente. Somos respetuosos, pero con nosotros se defienden los intereses y los derechos del pueblo colombiano a ultranza.

Como lo ha hecho nuestro presidente Gustavo Petro en muchos de los escenarios, cuando tenía solitariamente que enfrentarse en el Congreso de la República a decenas de congresistas de la parapolítica y no le tembló la voz

para señalarlos públicamente y enviarlos a la cárcel junto al poder judicial que en ese momento asumió una posición digna y erguida.

Así que queremos una política respetuosa, transparente, una política nueva en Colombia. No vamos a ceder al espectáculo, no vamos a ceder al show mediático, no nos vamos a poner a recitar la narrativa que quieren ponernos a recitar los grandes medios de comunicación.

No vamos a poner a enfrentarnos entre nosotros mismos, que es lo que quiere el establecimiento. Vamos a construir y a defender en toda circunstancia nuestra unidad como Pacto Histórico, porque nuestro verdadero proceso de discusión y debate es con la extrema derecha de este país que quiere arrasar las conquistas sociales de estos años de Gobierno.

En la ciudad de Cali hice referencia a uno de los más graves problemas que tiene nuestra sociedad. Considero equívoco pensar que seguimos en Colombia enfrentando la “corrupción”. Simplemente la corrupción como si se tratara de un problema menor, un delito simple de un episodio en el cual un funcionario o algunos funcionarios son sobornados por particulares.

En Colombia tenemos ya un fenómeno de macrocorrupción. Hay estructuras criminales que se han tomado todos los niveles de la administración pública y no hay una institución, lamentablemente debo decirlo, que no esté afectada por la gran corrupción en Colombia.

Y en Cali lo dije también, “nosotros hemos sido implacables en nuestra lucha contra la criminalidad y la mafia”, pero lamentablemente, esto debemos reconocerlo, en este Gobierno se han presentado hechos de corrupción que nos avergüenzan profundamente.

No podemos dejar que los Olmedos López vuelvan a un segundo gobierno progresista. Seremos implacables con la macro corrupción. Y para eso es que hemos propuesto la creación de un gran Sistema Nacional de lucha contra la Macrocorrupción, que tiene en su base algo que es fundamental, y no es simplemente una oficina, una dependencia estatal, el primer elemento de la lucha contra la gran corrupción es la rebelión de la ciudadanía para evitar que se sigan robando los recursos del erario y, además, para crear instrumentos de investigación y de justicia acordes a esa gran corrupción.

Así que nuestro llamado es a que, en un segundo gobierno de consolidación de nuestro proyecto político, hagamos realidad una lucha implacable, perseverante, sin cuartel contra toda forma de corrupción en el Estado hasta que la derrotemos porque la corrupción acaba el futuro de nuestro país.

En la Universidad Nacional hice un tercer planteamiento que quiero aquí señalar y es que, después de décadas de violencia, del imperio durante toda nuestra vida republicana del patriarcado y del machismo, del racismo y del clasismo, hay una profunda degradación moral de la sociedad colombiana.

Se ha entronizado en nuestra sociedad la indiferencia con relación a la vida de los otros seres humanos, del sufrimiento del otro, de la condición en la que viven nuestros compatriotas en las regiones y en los territorios más lejanos y excluidos, y por lo tanto requerimos una Revolución Ética de la sociedad colombiana, profunda, una revolución de conciencia.

Y para esa revolución hay algunos actores sociales que son fundamentales. En primer lugar, las víctimas de la violencia que detentan el poder de la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad y el genocidio que se ha perpetrado en Colombia. El poder de la verdad de las víctimas sacude la conciencia y sensibiliza a la sociedad colombiana sobre la necesidad de ese cambio profundo de conciencia.

Así que nosotros queremos hoy que haya examen profundo sobre lo que está ocurriendo en la sociedad. Viniendo me comunican que en una importante ciénaga que hay aquí en Barranquilla, la Ciénaga Mallorquín, un proyecto urbanístico decidió acabar con una riqueza y un sistema ecológico, como si se tratara de simplemente generar un proyecto urbanístico para ganar dinero y simplemente construir edificaciones. No podemos seguir admitiendo que la codicia y el dinero prime sobre la vida y la dignidad y sobre los ecosistemas en nuestra sociedad.

En la ciudad de Londres, hace unos cuantos días, pronuncié una propuesta sobre lo que debe ser la continuidad de nuestra política exterior en las condiciones que estamos viendo en el mundo contemporáneo.

Lo primero es mencionar el nombre que tenemos todos en nuestra conciencia, no más genocidio en Gaza, no más genocidio contra el pueblo palestino.

El presidente Petro ha tenido la posición tal vez más digna en el concierto internacional con relación a un crimen contra la humanidad que nos llena de vergüenza, y cuyo autor está siendo procesado actualmente y tiene orden de captura por parte de la Corte Penal Internacional, el señor Benjamín Netanyahu.

Así que saludamos la actitud, el discurso digno que ha asumido el presidente Petro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Porque estamos ante el peligro de una tercera guerra mundial. Lo que estamos viendo en el mundo es el crecimiento del peligro enorme de que en cualquier momento sean utilizadas armas de destrucción masiva, que no conocemos en la historia de la humanidad desde el mes de agosto de 1945, cuando fueron destruidas dos poblaciones del Japón, Hiroshima y Nagasaki. Hoy estamos ante ese peligro.

Y ese peligro tiene, además, una cercanía enorme a nuestras fronteras. El gobierno del presidente Donald Trump ha decidido emplazar, en la frontera entre Colombia y Venezuela, una operación militar que no se tenía hasta ahora historia o antecedente.

Así que prendemos las alarmas y señalamos que América Latina debe seguir siendo una zona de paz y que vamos a defender la paz en nuestra región, que necesitamos hoy salir al paso de la agresión, no solo política y económica, del gobierno estadounidense, sino también a la posibilidad de una guerra transnacional contra Venezuela como se está gestando actualmente.

Nosotros exigimos un tratamiento soberano y justo en el concierto internacional y con relación a Estados Unidos.

Necesitamos hacer realidad una política distinta del tratamiento del problema del narcotráfico y por supuesto no podemos seguir siendo quienes ponemos los muertos, quienes ponemos los recursos, quienes sacrificamos nuestra vida como nación a cambio de ser desertificados de manera soberbia y prepotente por Estados Unidos.

En ese discurso también dije que nuestra política exterior tiene que ocuparse de nuestros compatriotas migrantes, quienes viven condiciones hoy muy difíciles en ciudades y en países de Europa o Estados Unidos.

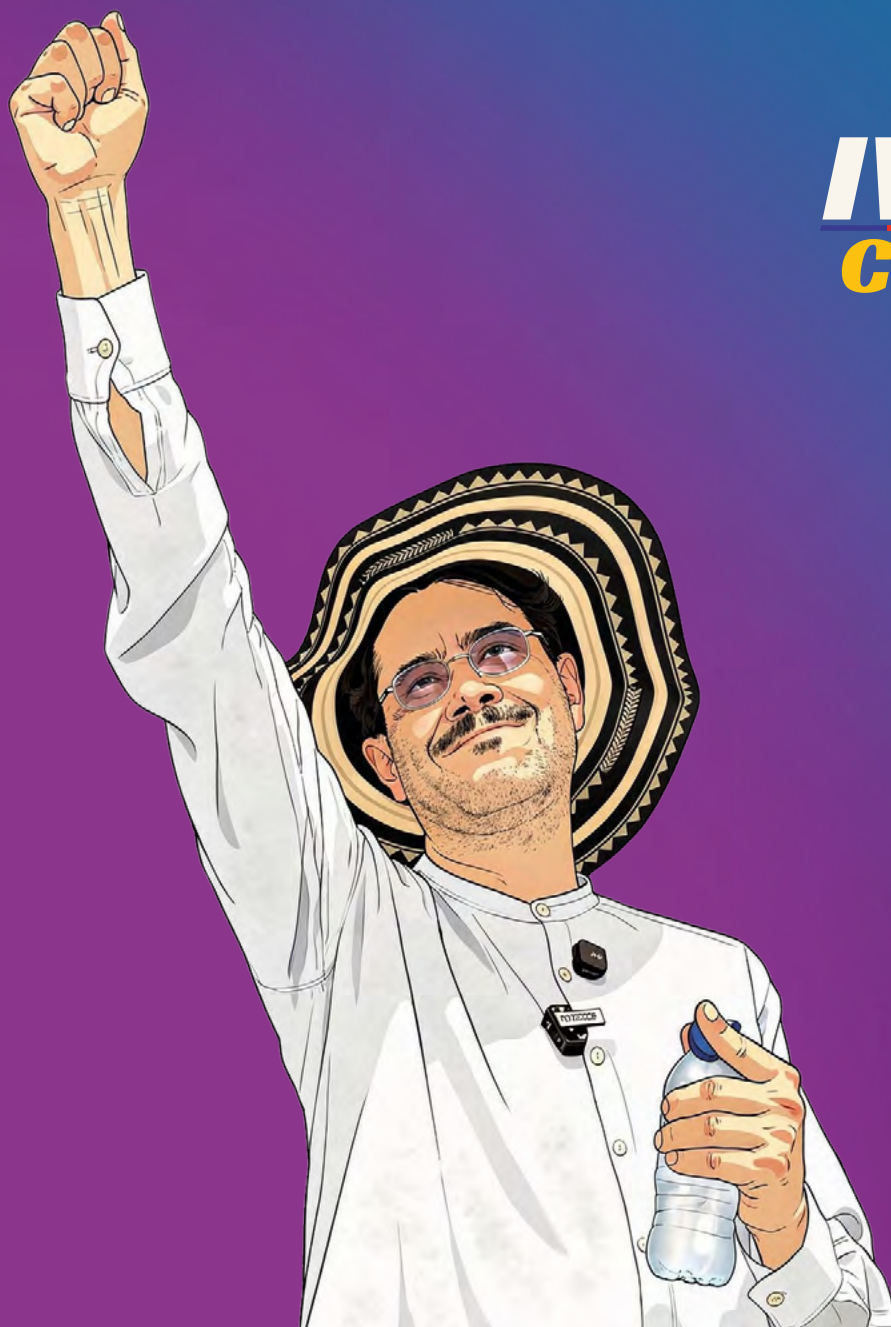
Toda nuestra solidaridad con la inmensa diáspora de colombianos y colombianas en el interior, que son una parte fundamental de nuestra nacionalidad y que tienen, por supuesto, deben tener un lugar en nuestra política exterior.

Y, por último, mañana pronunciaré en el Rincón Latino un discurso dedicado a la pobreza y a la desigualdad de nuestro país.

Barranquilla que es una ciudad tan pujante, tan llena de imaginación con una gente que es fuente de nuestro mayor orgullo, no merece tener cinturones de miseria, no merece tener 360.000 personas que viven en la indigencia y en la miseria. Y por eso el día de mañana haremos una propuesta clara contra la pobreza, contra la desigualdad y contra el sentimiento de aversión, menosprecio y discriminación contra los pobres.

Porque vamos no solamente en un segundo gobierno progresista a mantener los cambios sociales, sino que los vamos a profundizar. Vamos a hacer un país que corresponda al concepto de Colombia potencia mundial de la vida.

IVÁN
Cepeda
Presidente



HACIA UNA POLÍTICA DE IGUALDAD
**SUSTANTIVA Y DE SUPERACIÓN
DE LA POBREZA EN LOS
TERRITORIOS URBANOS**

Barranquilla, Atlántico

Queridas compañeras y queridos compañeros,

He venido al Rincón Latino de Barranquilla, símbolo del trabajo solidario y de la organización comunitaria con la que la gente ha ido venciendo la pobreza bajo el liderazgo del sacerdote salesiano Bernardo Hoyos, para presentar mi quinto mensaje al país que consiste, precisamente, en un llamado y una propuesta a erradicar la pobreza, la miseria y el hambre de nuestra sociedad como resultado de crear una política de igualdad sustancial, tanto en el campo como en la ciudad.

Continuar la gran obra de nuestro gobierno progresista que vamos a reelegir en 2026.

Me complace estar aquí en Barranquilla. Este pueblo fue decisivo en abrir el camino al primer gobierno del cambio en Colombia. Y será decisivo también ahora en la consolidación del proyecto del cambio, porque no se trata solamente de expedir leyes o decretos, se trata de transformar la vida de la gente en barrios como La Chinita, La Luz, El Bosque, Simón Bolívar, Las Nieves, en cada esquina donde la pobreza acaba con la vida digna de la gente. Rebolo es un buen ejemplo de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el cambio.

Como si en una misma casa unos durmieran en cama de oro y otros en el suelo sin techo, Colombia es hoy uno de los tres países más desiguales del planeta.

Aquí la riqueza y la miseria conviven como mundos distintos, separados por muros invisibles, estratos, clases y yo diría incluso castas sociales. Mientras unos viven en la opulencia y el lujo, otros sobreviven a duras penas y pasan hambre.

Hemos sido una sociedad que no solamente margina al pobre, sino que lo culpa de su pobreza. Una nación que teme, rechaza y desprecia a los que no tienen, como si la dignidad humana se midiera por el monto de los bienes y de las cuentas bancarias.

No solo se les ha despojado de sus tierras, viviendas y derechos, se les ha despojado de su humanidad a los pobres en Colombia.



Están los pobres del mundo rural, el campesinado y los pueblos étnicos que han sido condenados al ostracismo y a la exclusión social, perseguidos y desplazados luego de arrebatar sus tierras, resguardos y consejos comunitarios.

Los pobres también urbanos, los nadie, muchos venidos del desplazamiento rural, pero también los jóvenes sin futuro, las madres cabeza de hogar que han tenido que sacar solas adelante a sus hijos y han soportado la violencia al interior de sus familias.

Los pobladores de los inmensos cinturones de miseria, comunas, ciudadelas marginadas, aisladas, carentes de servicio, construidas en las laderas de las montañas o en las orillas de los ríos que se desploman o inundan.

Todos ellos han sido olvidados por el Estado, en sus necesidades, despojados de sus servicios públicos, de vivienda digna, de porte y empleo han sido ignorados en su dignidad y en sus saberes. Muchos viven en zona de conflicto armado bajo el fuego y la zozobra.

Y al otro extremo de la sociedad habitan aquellos que se autodenominan “la gente de bien”. No porque sean más justos, generosos o más sabios que los demás, sino porque concentran más dinero y capital. Creen que su valor está en lo que poseen y no en lo que aportan.

En ellos la riqueza se ha vuelto un escudo para no mirar ni sentir la necesidad y el sufrimiento de los demás.

Vivimos en un país marcado por la aporofobia, que significa el miedo y el desprecio a quienes viven en la pobreza, el culto a la riqueza material y el clasismo a ultranza. Eso ha sido uno de los rasgos distintivos de nuestra nación y también una de las causas de sus desgracias sociales y de su violencia endémica.

Y eso, señoras y señores, es lo que debemos acabar en un segundo gobierno progresista.

Buena parte de ese rechazo a los pobres tiene orígenes históricos en que la sociedad colonial produjo un mestizaje generalizado, que hizo que criollos y blancos mestizos, nacidos en estas tierras, buscaran diferenciarse de los

indios y de los negros para ser reconocidos como parte de una supuesta aristocracia colonial.

Dado que la gente de bien de ese entonces no podía ser valorada por su pureza racial, que no existía por su condición de mestizos, buscó entonces ser enaltecida por su situación pecuniaria, por la propiedad de tierras, de grandes haciendas donde eran explotados esclavos y esclavas o en la propiedad de minas y del extractivismo minero ya desde ese entonces.

Como afirma un filósofo de aquí de la Costa Caribe, Sergio de Zubiría, esta situación buscó ser naturalizada por la preservación de profundas barreras sociales, la aceptación de jerarquías consagradas por la autoridad y la tradición, las estructuras cimentadas en género y raza se perpetuaron.

El peso de estos siglos de exclusión, despotismo elitista, fue terreno fértil para el odio y el castigo de los pobres. Así surgió nuestro propio sistema de castas sociales, nuestra rígida pirámide de estratos en la que abajo, en la base, están ubicados quienes viven en la miseria.

Este sistema logró preservarse en el tiempo a través de la violencia. El despojo de tierras se ha hecho desde entonces ejerciendo la incursión violenta de los territorios, las masacres en zonas rurales, el desplazamiento forzado de millones de campesinos, indígenas y afros.

Esa violencia masiva entonces no ha sido sólo la expresión del odio racial, del patriarcalismo, sino también del clasismo, del odio para buscar la desposesión.

El despojo masivo no ocurre por casualidad requiere del odio particular profundo dirigido a justificar la usurpación de lo que pertenece a otros, como igualmente de desprecio a las víctimas del despojo, los desplazados rurales y particularmente las mujeres desplazadas rurales.

Y mientras tanto en las ciudades el malestar social ha sido atendido con represión, militarización y judicializaciones arbitrarias; cualquier forma de organización, protesta o movilización social ha sido tratada como una amenaza y quienes lideran o participan en estos movimientos son perseguidos o criminalizados.

Así lo pudimos ver con relación a los jóvenes de la primera línea en el estallido social para quienes pedimos y exigimos hoy libertad inmediata.

Millones de personas en Colombia están siendo condenadas a sobrevivir sin lo mínimo para vivir con dignidad. Más de 17 millones de personas viven bajo la línea de la pobreza monetaria, con ingresos que no alcanzan para cubrir siquiera la canasta básica.

Y aún más grave, casi 7 millones de personas se encuentran en situación de pobreza extrema, lo que quiere decir que no tienen medios mínimos para alimentarse, acceder a agua potable, atención médica o un techo digno. La pobreza no puede seguir siendo el clima natural de nuestras ciudades.

Aunque entre el 2020 y el 2023, es decir, parte de este gobierno, el país logró reducir la pobreza monetaria del 42 al 29%, lo que demuestra que con voluntad política se puede cambiar esas realidades, no podemos ignorar que en ciudades como Barranquilla más de 360.000 personas siguen atrapadas en esa sequía permanente.

Y no, no podemos resignarnos a que en Barranquilla siga existiendo la pobreza.

La pobreza no es solo una falta de ingresos, es una sequía estructural que marchita las oportunidades, seca la esperanza y erosiona los derechos, combatirla requiere mucho más que medidas puntuales, exige una irrigación profunda y sostenida del territorio social.

Por eso, el cambio que necesitamos no puede limitarse a aliviar la pobreza con subsidios o paliativos temporales. Debemos asumir la lucha contra este mal como una política de igualdad sustantiva, tanto en el campo como en la ciudad.

No se trata solo de repartir gotas de ayuda en el desierto de la desigualdad. Se trata de cambiar el sistema de irrigación de los derechos, la posibilidad de desarrollo y, además de eso, los cambios de las condiciones económicas de vida.

Eso implica avanzar hacia una redistribución estructural de la riqueza, una fiscalidad progresiva, reformas sociales profundas, garantías de derechos universales y, sobre todo, una organización -como la que hay aquí- poderosa de las comunidades.

Lo repito, no basta con entregar subsidios: hay que redistribuir los recursos para que la tierra fértil de nuestra sociedad no sea privilegio de unos pocos.

En este sentido, una renta básica universal no debe verse como una solución aislada, sino como parte de una estrategia más amplia de igualdad social, como una lluvia justa que alcance a todos los rincones, no como un rocío que apenas moja la superficie.

Permítanme entonces plantear la propuesta que, a mi juicio, puede marcar el inicio y la continuidad de lo que hemos hecho hasta ahora en materia de esta transformación histórica de la igualdad.

La superación estructural de la pobreza y el impulso de una verdadera igualdad sustantiva para nuestra sociedad puede darse si impulsamos lo que he llamado una Revolución Agraria.

Desde el inicio de nuestro primer gobierno progresista se ha postulado que Colombia puede convertirse en una potencia mundial de la vida. Esta no es una consigna vacía, es el reconocimiento de que, gracias a nuestra extraordinaria biodiversidad y riqueza natural, el país tiene las condiciones para convertirse en una despensa agroalimentaria, no solo para su propia población, sino para el mundo.

Pero esta revolución tiene que ir más allá. Es una estrategia de desarrollo económico y social, que busca multiplicar la capacidad productiva de la economía campesina y popular, fortalecer los vínculos con los mercados populares de las grandes ciudades y de las ciudades intermedias.

No es únicamente una reforma agraria centrada en redistribuir y formalizar tierras para el campesinado y las comunidades rurales empobrecidas. Así como ya ha comenzado a suceder bajo nuestro gobierno, lograremos abaratar los alimentos, garantizar la seguridad alimentaria y avanzar por fin hacia la erradicación del hambre si emprendemos una verdadera revolución del campo, una Revolución Agraria.

Una transformación de esta magnitud exige sembrar también sobre otros terrenos, el de la infraestructura, por ejemplo. Por eso es prioritario impulsar el Plan Nacional de Construcción de vías terciarias, como herramienta para conectar los territorios, dinamizar las economías locales y cerrar las brechas históricas entre la ciudad y el campo.

Este plan debe contar con la participación activa de ustedes, las comunidades, de sus organizaciones sociales y de las juntas de acción comunal, tanto en la ejecución de las obras viales como en la construcción de la infraestructura complementaria en zonas rurales y urbanas.

Del mismo modo, esta revolución agraria debe apoyarse en pactos de desarrollo social y económico como los que ya hemos puesto en marcha en regiones como Nariño, Cauca y Catatumbo, pactos que reconozcan las voces de los territorios, promuevan la economía popular y siembren condiciones para la paz con justicia social.

Para que estos procesos puedan ser, también se requiere modificar el marco normativo de la contratación estatal, de modo que las comunidades no sean simples espectadoras, sino protagonistas del cambio. Que sus organizaciones puedan liderar y ejecutar con transparencia y eficacia las transformaciones que demandan los territorios.

Esta no es solo una política sectorial, es una apuesta por cultivar un nuevo país desde la raíz, donde la tierra, el trabajo y la dignidad estén en el centro del proyecto nacional.

El estatuto actual de contratación, que es la Ley 80 de 1993, está hecha para grandes contratistas, no para las organizaciones comunitarias.

Es un sistema que excluye a la gente de a pie, que les cierra las puertas a las juntas de acción comunal, a las asociaciones barriales, a los colectivos comunitarios que son los que verdaderamente conocen las necesidades en los territorios.

Esa ley tiene que transformarse junto a los tres registros que implica el registro sanitario, el registro mercantil y el registro tributario que aparecen como verdaderos obstáculos para la contratación con sectores de economía popular.

La contratación pública debe tener rostro humano, rostro comunitario.

No se trata de abrir atajos, se trata de que la contratación tenga el rostro de las comunidades, que los contratos de obras públicas de infraestructura, de programas sociales, no queden siempre en manos de los mismos, sino que lleguen a quienes de verdad viven en los barrios populares y saben cómo resolver los problemas.

Son requisitos pensados, estos de la Ley 80, para grandes empresas que bloquean a las comunidades. Les pregunto lo siguiente, ¿cómo exigir a una olla comunitaria o a un mercado campesino cargas tributarias equivalentes a la de una gran empresa transnacional o a una cadena multinacional de supermercados? ¿Cómo pedirle a una junta de acción comunal que cumpla con las mismas cargas tributarias de una corporación de nivel nacional?

Es absurdo ese proceso de contratación porque además abre la puerta ampliamente a la corrupción.

Por eso planteamos un régimen simplificado, pedagógico y comunitario que permita a las organizaciones populares ser sujetos de contratación con transparencia, pero sin ahogarlos en requisitos imposibles.

Este es un cambio institucional profundo. Esto no es un detalle técnico, porque en la contratación pública es donde se ha producido el clientelismo y la gran corrupción.

Y si logramos que las comunidades sean contratistas, si logramos que las juntas de acción comunal pavimenten sus calles, que los colectivos juveniles gestionen proyectos culturales, que las asociaciones de mujeres administren programas del cuidado, estaremos golpeando de frente el corazón de la pobreza y la desigualdad estructural, pero además al clientelismo y a la gran corrupción. Que lo oigan las casas politiqueras del Atlántico claramente.

Compañeras y compañeros, el pueblo de Barranquilla y del Atlántico ha demostrado siempre que cree en la innovación y en la esperanza. Aquí nacen ideas nuevas, aquí florece la cultura, aquí se siente la fuerza de la economía popular.

Aquí está el talento que puede inspirar a toda Colombia. El Caribe puede ser pionero en la revolución agraria y todo lo que ella implica: los pactos regionales y territoriales de desarrollo, nuevos modelos de contratación comunitaria, nuevas formas de combatir la pobreza en un país que se ha acostumbrado a despreciar a los pobres.

Desde aquí podemos demostrar que con organización, unidad y colectividad se pueden lograr transformaciones profundas. Por eso hoy los convoco, compañeras y compañeros, a que consolidemos juntos el proyecto político del



cambio. Avancemos en la revolución agraria, derrotemos la corrupción con la fuerza del pueblo, no dejemos que la extrema derecha vuelva a gobernar a Colombia.

Transformemos la contratación pública para que no sea botín de unos pocos, sino herramienta de las comunidades. Hagamos de la economía popular la base de un país más justo y sigamos construyendo la paz, porque este pueblo caribeño, libre y progresista ya demostró que sabe respaldar la esperanza.

Ustedes son la razón de esta lucha, la esperanza vencerá al miedo y la unidad de todas y todos nos permitirá consolidar el cambio en un segundo gobierno que elegiremos en 2026.

IVÁN
Cepeda
Presidente



IVÁN CEPEDA

EN LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Bucaramanga, Santander

Queridas compañeras, queridos compañeros,

Siempre que visito una universidad, especialmente una universidad pública, me siento en casa junto a estudiantes, docentes, investigadores, académicos, académicas, que en el caso de la Universidad Industrial de Santander han hecho un gran aporte a la sociedad colombiana, así que con comienzo por agradecer esta invitación.

Para que no haya dudas sobre esto, porque se ha intentado sembrar la confusión en la opinión pública. El próximo 26 de octubre, el Pacto Histórico, que es la realidad política más importante que ha surgido en este país como congregación de las fuerzas de la transformación y del cambio, hará su consulta para elegir democráticamente sus candidatas y candidatos de manera paritaria al Senado y la Cámara y también su candidatura a las elecciones presidenciales.

Somos la fuerza del cambio y triunfaremos en las elecciones de 2026. Y vamos a triunfar por varias razones que son a mi modo de ver necesario explicitar.

La primera de ellas, porque tenemos la fuerza de un gran programa político de transformaciones que, entre otros elementos, tienen su centro la necesidad de que Colombia tenga una educación pública lo más fuerte, lo más incluyente, de la mayor calidad posible, que brinde a nuestra sociedad la posibilidad del conocimiento de la investigación científica del pensamiento crítico.

Un gran dirigente político de la izquierda colombiana, el maestro Carlos Gaviria, nos enseñó que una de las primeras fuentes de la opresión y el sometimiento es la ignorancia. Y por eso, mientras más educación, más educación de calidad, más pensamiento crítico, Colombia será una sociedad más libre, más plena y democrática.

Y a eso le ha invertido el Gobierno. Ha habido un crecimiento del presupuesto para la educación, acabamos de aprobar una ley que fortalece el presupuesto de la educación pública, no todo lo que quisiéramos, hay que decirlo.

Pero también hay un énfasis que me parece fundamental a que la universidad llegue al territorio. Que cada vez territorios rurales de este país, olvidados

del Estado, tradicionalmente excluidos de sus más importantes servicios públicos, tengan hoy universidades de calidad, que bien sea se desprenden de universidades como casa matriz o bien sea surgen espontáneamente en los territorios, para que la investigación científica, la posibilidad de que surjan profesionales esté al servicio de lo más importante hoy: las comunidades y el pueblo que nunca han tenido acceso a una educación de calidad. Ese ha sido el propósito y ese será el propósito de mi gobierno, continuando esta transformación fundamental en la sociedad colombiana.

Nuestra confrontación política hoy no es como lo han querido mostrar entre adversarios políticos dentro del Pacto Histórico. Es cierto, como toda colectividad tenemos diferencias, y tenemos diferencias a veces de fondo. Pero nuestro verdadero adversario es está en otro lado. Nuestro adversario real, a quien le vamos a propinar la derrota en las próximas elecciones, es la extrema derecha colombiana.

¿Qué representa hoy políticamente esa extrema derecha? Pues el viejo programa regresivo al cual estuvo sometido, a comienzos del siglo XXI, el país.

Cuando se entronizó en Colombia la llamada seguridad democrática, la parapolítica, la privatización de todos los servicios, el modelo de explotación y miseria de nuestros recursos y las mafias y las casas mafiosas en los territorios del país.

Ese proyecto es un proyecto que quiere llevarnos de regreso en la historia en tres campos al menos y quiero señalarlos. El proyecto de la extrema derecha hoy es conducirnos a la guerra total.

Y no es que en Colombia hoy no haya conflicto armado. No es que hoy no tengamos enfrentamientos entre grupos, no solamente en los territorios, sino también en las ciudades. Pero el proyecto que quieren imponernos es el de la guerra intensificada, tanto en los territorios rurales como también por fuera de nuestro territorio nacional, haciendo eco a un proceso de intervención militar como el que se está fraguando contra la hermana República de Venezuela.

Desde aquí decimos que nos opondremos a cualquier intento porque Colombia quede inmiscuida o mezclada en un proyecto bélico transnacional, contra una república con la cual nos unen lazos que son solamente de hermandad

y de solidaridad entre los pueblos. No a una guerra transnacional, lo decimos claramente.

Pero la extrema derecha también quiere acabar con lo social. Ese ha sido durante toda su historia lo que ha impulsado a través de leyes y de contrarreformas en el Congreso de la República. Ha dicho claramente que no le gusta la reforma laboral, que quiere acabar con la reforma pensional que hemos avanzado, que para nada le agrada la reforma agraria que hemos comenzado a impulsar en los territorios.

Y, sobre todo, lo que más disgusta a la extrema derecha es el nivel de organización y conciencia que poco a poco han ido ganando las organizaciones populares y sociales, que afortunadamente bajo este gobierno y en los últimos años han venido ganando el estatus de un verdadero poder constituyente, que es lo que hemos impulsado como pacto histórico en la sociedad colombiana.

Todo el poder para los movimientos sociales, todo el poder para las comunidades territoriales, vamos hacia un momento en el cual tengamos un movimiento social y popular cada vez más poderoso y cada vez más decisorio en el país.

Por lo tanto, nos vamos a tener que ver enfrentados, en una eventualidad de un gobierno de seguridad democrática segunda generación o tercera generación, al peligro del ataque contra los movimientos sociales, la criminalización de la protesta, el hecho de convertir a los jóvenes en blanco y carne de cañón de la acción policial indiscriminada, como ocurrió en el estallido social cuando decenas de jóvenes fueron asesinados en las calles de las ciudades colombianas y otros están hoy incluso en las cárceles, para quienes pedimos libertad inmediata, porque el único delito que han cometido es rebelarse contra la injusticia.

Y la extrema derecha, por supuesto, no quiere el páramo de Santurbán ni quiere mantener los santuarios ecológicos de este país. Quiere un extractivismo minero-energético absolutamente voraz y rapaz. Quiere extraer hasta la última gota de petróleo con el fracking. Quiere acabar con la biodiversidad de la Amazonía.

Quiere extraer los minerales considerados hoy estratégicos, por encima de lo que es nuestra riqueza más importante, que es nuestra biodiversidad.

Por lo tanto, compañeras y compañeros, tenemos que derrotar democrática y pacíficamente, pero con toda la radicalidad, este proyecto político que es ni más ni menos que la reedición de lo más oscurantista, retrógrado, que tiene hoy la humanidad y que nos lleva a la extinción en la vida en el planeta, como está demostrando con las políticas que lleva a cabo en primer lugar el gobierno de Estados Unidos hacia el resto de la humanidad.

Y por supuesto, aquí cómo no decirlo, el ejemplo hoy de esas políticas es Gaza. Es la eliminación sistemática del pueblo palestino utilizando toda clase de métodos para generar uno de los genocidios más tenebrosos que ha conocido la humanidad.

Y por eso desde aquí no solamente saludamos, sino que respaldamos de manera enérgica la posición digna que ha tomado el presidente Gustavo Petro como líder internacional de la dignidad de los pueblos.

Nosotros necesitamos en este momento entonces avanzar hacia un segundo gobierno, que no solamente mantenga los cambios que hemos hecho, que todavía son cambios limitados, cambios apenas iniciales de la sociedad colombiana.

Y quiero expresar algunas ideas que he venido señalando sobre eso, si ustedes me lo permiten.

La primera de esas ideas que expuse en la ciudad de Pasto, porque elegí el departamento de Nariño como lugar para lanzar esta campaña, por el ejemplo que ha dado de unidad de los movimientos sociales por el cambio, en Nariño llevamos varios años siendo gobernación y poder popular y por eso elegí ese departamento para dar a conocer mi aspiración presidencial; allí dije que nosotros tenemos que avanzar en una política distinta, mucho más fuerte, en la que un gobierno progresista manda obedeciendo. Es decir, que está ante todo pendiente, ante todo en consulta permanente y ante todo a la escucha de lo que dicen los movimientos sociales y las organizaciones populares.

Así será mi gobierno, un gobierno de permanente relación con los movimientos sociales y con las luchas populares. Pero además es un gobierno que será hecho con principios éticos. Y aquí fue el segundo discurso que hice en la ciudad de Cali. No podemos seguir contemplando con los brazos cruzados, no digo la corrupción, porque en Colombia ya no hay corrupción, hay que acabar

con la macrocorrupción, con la gran corrupción que se ha tomado todas y cada una de las instancias del Estado colombiano y que opera contra los recursos, contra la vida y el bienestar de los colombianos. Seré implacable con la macrocorrupción e invito a los movimientos sociales a rebelarse, a hacer una rebelión ciudadana contra la macrocorrupción. Ese es uno de los aspectos centrales del Gobierno.

Eso lo logramos si evidentemente más allá de perseguir los hechos puntuales y menores de la corrupción, vamos a destruir los aparatos, las maquinarias, las redes de corrupción que están anidadas en el en todo el estado.

Y tan es así que debemos decir con vergüenza que en nuestro propio Gobierno se han presentado hechos de corrupción, que no podemos tolerar y que, de una vez señalo, en mi Gobierno perseguiremos sin cuartel e implacablemente.

Por lo menos que los acabemos en donde más les duele que son sus recursos y la manera en cómo roban.

En la Universidad Nacional expuse lo que considero son las bases de una Revolución Ética de la sociedad colombiana.

La Revolución Ética no es una entelequia, no es una invención, no es un concepto abstracto, tiene que ver con el profundo estado de degradación moral en el que ha caído nuestra sociedad.

Precisamente la universidad debe tomar en serio la necesidad de cambiar la ética, la moral, la conciencia de la ciudadanía, del pueblo, de la sociedad colombiana.

¿Qué caracteriza ese estado de degradación?

En primer lugar, por supuesto, esa actitud indolente, esa actitud complaciente con la que observamos todos los días que en nuestro país la vida del ser humano se ha degradado y que no le importa al resto de los ciudadanos.

La ausencia de la sensibilidad al dolor de los demás es una de las más claras expresiones de eso que he llamado la crisis y degradación ética o moral de la sociedad colombiana, algo que la pensadora Hannah Arendt llamó la banalidad del mal, la imposibilidad de reaccionar de una manera clara y sensible

frente a lo que ocurre en la sociedad con los que más sufren, en primer lugar, con las víctimas de la violencia que en Colombia ya son millones.

Eso junto a expresiones como la violencia contra las mujeres, como el patriarcado que asume las formas más grotescas y tenebrosas en la sociedad colombiana a través del abuso no solamente sexual, sino del menosprecio, la invisibilización, la falta de derechos y de garantías para que las mujeres cumplan el rol preponderante y protagónico de la sociedad colombiana. Es un asunto que no podemos seguir tolerando y que tenemos que convertir en parte de una revolución de conciencia.

Como también el menosprecio de los pobres, por ejemplo. El odio y la discriminación de la pobreza. En Colombia se puede ser todo menos pobre, eso es lo más indecoroso que hay. Lo que ha llamado la pensadora y filósofa española Adela Cortina: la aporofobia, el miedo y la discriminación a la pobreza y a los pobres. Todo eso tenemos que cambiarlo.

Y lo podemos cambiar con el poder de la verdad de las víctimas. Cuando las víctimas dicen y hablan de lo que ha sido el sufrimiento del genocidio en Colombia. Cuando las madres de los muchachos de los falsos positivos llevan a los estrados internacionales y nacionales de la justicia, la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad.

Cuando aparece ante nuestros ojos el horror de la violencia o cuando las mujeres tienen la posibilidad de seguir avanzando en la revolución pacífica, pero decisoria, de democratizar las relaciones entre los hombres y las mujeres en la sociedad. Todo eso es una Revolución Ética que necesitamos llevar a cabo en la sociedad colombiana.

Luego de eso, me pronuncié sobre lo que debe ser la nueva política exterior de Colombia. Ya mencioné a Gaza en este discurso, pero debo mencionar ahora lo que está ocurriendo en nuestro entorno geográfico.

Estamos ante la emergencia de un fenómeno que es ni más ni menos sin exageración, como lo ha dicho, por ejemplo, el papa Francisco entre otros, la irrupción de la Tercera Guerra Mundial en el planeta. Eso ante nuestros ojos.

Hay 61 conflictos armados en curso actualmente en todo el mundo y de 24% de los conflictos que se resolvían mediante la vía del diálogo, hemos pasado a 4% en cuestión de unas décadas. Es decir, hay una crisis mundial del diálogo como forma de resolver los conflictos armados.

Por eso, la política exterior tiene que ser una política de paz, que garantice la paz en la región, que garantice la paz en el mundo, como lo ha pregonado el presidente Petro.

E igualmente, debe ser una política en la cual se llama Estados Unidos a que asuma su responsabilidad, ni más ni menos, que en el consumo y en el tráfico mundial de las drogas ilícitas.

No podemos seguir en Colombia poniendo los muertos, poniendo los recursos, sacrificando nuestra ecología en acciones y operaciones de carácter militar o de fumigación aérea y Estados Unidos simplemente diciéndonos si estamos haciéndolo de la manera más eficaz o no.

Esa sumisión a una política exterior que está llamada al fracaso y que es profundamente indigna, no podemos seguirla tolerando. Tiene que surgir un nuevo paradigma, que establezca la cooperación internacional frente a la lucha o frente a la superación internacional del problema del narcotráfico, y así lo haremos con toda la fuerza en mi Gobierno.

Y, por último, hace unos días presenté mi propuesta sobre la pobreza y sobre la desigualdad, que a mi modo de ver son males supremamente graves que agobian la sociedad colombiana.

Estamos, ustedes lo saben, entre las tres sociedades más desiguales del planeta. Seguimos siendo, a pesar de los cambios que ha producido nuestro gobierno que son significativos, una sociedad eminentemente desigual, en el cual 17 millones de personas viven por debajo de la línea de la pobreza monetaria.

Esto significa que necesitamos ir más allá de una política de subsidios. No basta con entregar renta básica, no basta con crear ayudas para los jóvenes o para los adultos mayores. Necesitamos una redistribución real de la riqueza en la sociedad colombiana. Necesitamos que cambie la relación entre quienes viven en la opulencia, en el lujo y quienes están todos los días buscando cómo alimentarse.

En un país en el que la riqueza natural es enorme, en uno de los países que tiene la mayor biodiversidad del mundo, que haya personas que mueren de hambre no es solamente un hecho execrable, es grotesco, nos avergüenza, nos debe provocar una actitud de insurgencia frente a la pobreza y la desigualdad.

¿Y cómo podemos superar la pobreza?

Pues creando no solo subsidios, no solamente entregando ayudas puntuales a quienes más lo necesitan, sino generando una poderosa economía popular y generando una poderosa economía campesina, una poderosa fuente de alimentos, que es lo que este gobierno ha llamado la creación de unas condiciones para que Colombia sea potencia mundial de la vida, que significa ser una potencia mundial agroalimentaria.

Y para ello en proponemos que el concepto de reforma agraria lo convirtamos en el concepto de Revolución Agraria. Necesitamos avanzar a un nivel superior de la transformación del mundo rural. No renunciar, por supuesto, a la redistribución de la tierra, no acabar con los avances que hemos hecho, sino por el contrario, profundizarlos.

Necesitamos un plan de vías terciarias que permita conectar el campo con la ciudad y hacer que los alimentos circulen rápida y eficazmente de donde son cultivados y producidos a los mercados populares en las grandes ciudades.

Es posible construir ese plan nacional si nosotros logramos que también sean las organizaciones de la sociedad, las juntas de acción comunal, los movimientos en los territorios, puedan ser los primeros contratistas del Estado. Es lo que ha planteado este Gobierno. Necesitamos que surja la alianza económica entre el Estado, la Alianza Público Popular.

Ello es posible, si nosotros logramos reformar la Ley 80 de 1993, que impide que las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias, las organizaciones juveniles contraten con el Estado, porque esa ley crea la imposibilidad de que sean las organizaciones populares las que tengan la posibilidad de ejecutar obras públicas.

Y ello es posible, por supuesto. En muchos municipios del país son las comunidades las que han creado los acueductos, las vías rurales, así que necesitamos una transformación legal y normativa que nos permita el surgimiento de una economía popular poderosa.

Así que compañeras y compañeros con estos elementos y muchos otros que seguiremos planteando en los próximos, yo diría meses antes de ganar en la



primera vuelta, vamos a tener la posibilidad de avanzar en lo que no han podido avanzar nuestros contradictores.

Nosotros no apelamos al insulto, no apelamos a la política espectáculo, no apelamos a los grandes recursos financieros que tienen otras campañas.

Mi campaña se hace con fotocopias, con lo que elaboran manualmente y por iniciativa las organizaciones populares y sociales porque nuestra riqueza No es monetaria, no está en la corrupción política, está en la fuerza de la unidad y la solidaridad y de las ideas del pueblo colombiano. Y así vamos a derrotar a la extrema derecha en las próximas elecciones.

IVÁN
Cepeda
Presidente



SEXTO MENSAJE PROGRAMÁTICO:

LAS VÍCTIMAS, EL GENOCIDIO Y LA PAZ

DÍA NACIONAL POR LA DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS
DE LA UNIÓN PATRIÓTICA

Bogotá, Cundinamarca

Queridas compañeras y queridos compañeros, víctimas y sobrevivientes del genocidio contra la Unión Patriótica

En esta conmemoración del *Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas del Genocidio contra la Unión Patriótica*, me dirijo a ustedes, en primer lugar, para rendir homenaje a quienes fueron víctimas de este genocidio político; un crimen que marcó el inicio de uno de los capítulos más oscuros y dolorosos de nuestra historia reciente. Un capítulo de sufrimiento indescriptible y de profunda injusticia, que buscó silenciar, a sangre y fuego, una esperanza de transformación democrática nacida del acuerdo de paz firmado en La Uribe, Meta, en 1984.

El genocidio es un crimen total. No se limita a una forma de violencia: articula múltiples métodos de exterminio y crímenes de lesa humanidad con el objetivo de destruir o dañar gravemente a un grupo humano en su totalidad. Se trata de una acción criminal de carácter especialmente destructivo, orientada a infligir el máximo daño posible a una colectividad entera. Cuando se prolonga en el tiempo, sus efectos se profundizan y se heredan, dejando una estela de dolor que atraviesa generaciones. Sus episodios de destrucción se repiten una y otra vez, produciendo un resultado acumulativo: el genocidio por acumulación.

Este crimen no solo aniquila vidas. Desgarra familias, desintegra comunidades, destruye organizaciones y amenaza incluso la existencia de pueblos enteros. El genocidio mutila la humanidad misma y atenta contra la diversidad que nos define como especie.

En esta ocasión, también me dirijo a ustedes para expresar mi más sincero agradecimiento por el apoyo que me han brindado en mi precandidatura presidencial dentro de la consulta del Pacto Histórico. Ese respaldo, proveniente de quienes han resistido con dignidad y coraje, me honra profundamente y me compromete aún más.

Como víctima sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica, asumo con plena conciencia el deber histórico de hacer todo lo que esté en mis

manos -desde la más alta responsabilidad del Estado, si así lo decide el pueblo colombiano- para que nunca más se repitan en nuestro país las prácticas genocidas que tanto dolor nos han dejado.

Y más allá de nuestras fronteras, me comprometo también a alzar la voz en la comunidad internacional, con firmeza y sin ambigüedades como lo ha hecho el presidente Gustavo Petro, contra todo genocidio, como el que se ha perpetrado contra el pueblo palestino en Gaza.

El gran dirigente uruguayo José “Pepe” Mujica decía que la humanidad aún vive en la prehistoria, pues su verdadera historia solo comenzará el día en que supere definitivamente la guerra. Permítanme parafrasearlo: la humanidad solo comenzará a escribir su historia cuando el genocidio, en todas sus formas, sea parte de la prehistoria.

Honro la memoria de los miles de víctimas que dejó el genocidio contra la Unión Patriótica, entre ellas mi padre, Manuel Cepeda Vargas. Honro su vida y honro su ejemplo.

A pesar de que muy pocos de ellos albergaban la esperanza de salvarse, permanecieron hasta el momento del desenlace trágico en sus puestos y responsabilidades. Otras y otros, solo emprendieron el exilio cuando los atentados eran inexorables o, incluso, después de haber sobrevivido a ellos. Decidieron conscientemente recorrer el camino que los llevaba a un destino fatal. Lo hicieron porque creían realmente en la democracia. En la política.

Por eso en este día, debo decir que tal vez la mejor manera de honrar esa memoria es incorporar en nuestra práctica política su ejemplo de máxima valentía y de compromiso con el pueblo colombiano en sus luchas. No perder nunca de vista que ese ejemplo es el referente ético más valioso del cual somos depositarios, y cada vez que recibimos un golpe, nos dejamos llevar por disputas triviales, o ambiciones personales, tener presente en lo alto esa luz que nos guía.

Esa memoria ha sido dignamente honrada por las víctimas, quienes han demostrado la autoridad moral y el poder de la verdad. A través de decisiones judiciales y acciones políticas, han logrado que se reconozca y se establezca de manera firme la historia del genocidio que hemos sufrido.

Gracias a su capacidad de resistir el impacto devastador de este exterminio, y pese a enfrentar los más poderosos aparatos criminales —los del propio

Estado—, demostraron, contra todo pronóstico, que era posible reconstruir la vida. Así, transformaron a la Unión Patriótica, de ser una colectividad víctima de un genocidio político, en una fuerza de gobierno y en uno de los pilares del Pacto Histórico. Una historia verdaderamente épica, que nos llena de orgullo y esperanza al mostrar que el ser humano puede sobreponerse a las peores adversidades.

Y en el corazón de esa gesta han estado las mujeres, como ha ocurrido tantas veces en Colombia en las más importantes luchas por la verdad y la justicia. En este caso, Aída Avella y Jahel Quiroga, quienes merecen —además de muchos otros reconocimientos— volver a ser elegidas senadoras de la República.

Coherente con mi trayectoria política que ha estado signada por haber recorrido también el arduo camino de la búsqueda de verdad y justicia, desarrollaré un gobierno con centralidad de las víctimas y sus derechos. Como lo he afirmado, considero que el reconocimiento de las víctimas, su poder de verdad, su memoria y su dignidad son componentes indispensables de lo que llamo una revolución ética para la sociedad colombiana.

1. La reconciliación como aspecto esencial del Acuerdo Nacional

Ya he anunciado que mi primera medida de gobierno será convocar a un diálogo nacional para determinar la agenda, la metodología, el cronograma y los mecanismos de implementación de un acuerdo nacional.

Un aspecto primordial de ese acuerdo será la construcción de un verdadero consenso de reconciliación de nuestra sociedad en todos sus niveles. Reconciliación sostenida y auspiciada por el reconocimiento de las víctimas, la prevalencia de la verdad y la realización de la justicia restaurativa. Lo que incluye el diseño y operación de una instancia que examine las responsabilidades sobre genocidio y crímenes contra la humanidad al máximo nivel incluidas las más poderosas figuras políticas, económicas y sociales, que deban responder por estos hechos desde una perspectiva restaurativa.

2. Política pública de verdad, justicia y reparación de víctimas

Mi gobierno avanzará al máximo en el cumplimiento del deber de reparación y satisfacción de los derechos a la verdad y la justicia, del gran universo de víctimas que hay en Colombia, y que al día de hoy según el Registro Único de Víctimas asciende a 10'110.121 personas.

En este sentido, debemos fortalecer un concepto de reparación que va más allá de la reparación administrativa e indemnizatoria de carácter individual. Las reparaciones, especialmente, aquellas que ordene la Jurisdicción Especial para la Paz, las de otros tribunales, o las de programas administrativos, deben involucrar a comunidades, comparecientes o autores de los crímenes y a víctimas, y deben derivar en planes de desarrollo territorial como planteó el Acuerdo Final de Paz. Asimismo, han de garantizar acceso a programas especializados en salud y física, y programas de educación que desarrollen conocimientos técnicos o universitarios para vincular a las víctimas a proyectos de desarrollo y empleos formales.

Por último, hago un anuncio perentorio en este campo: si he dicho que perseguiré toda forma de macrocorrupción, debo ser categórico al anunciar que quienes roben, desvíen o manipulen recursos públicos destinados a la atención o reparación de víctimas serán objeto de persecución penal implacable, y que como Jefe de Estado usaré todas las atribuciones constitucionales para proteger los recursos de la reparación de quienes han sufrido la violencia en Colombia.

3. Garantías de no repetición la protección de firmantes de paz y líderes sociales

Valorando los esfuerzos hechos en este campo por el actual gobierno, vamos a examinar en dónde han estado las fallas esenciales en el proceso de protección de la vida de **lideresas y líderes sociales, personas que defienden derechos humanos o ambientales, firmantes de paz.**

Aunque no he sido proclive a fijar condiciones en los diálogos de paz entre grupos armados y el Estado, debo decir que, en los procesos de diálogo y negociación, el compromiso de no asesinar líderes sociales y firmantes de paz, es una línea roja que trazará mi gobierno, y que la exigencia de cesar esta clase de agresiones al comenzar un diálogo de paz es una condición necesaria para garantizar su éxito pleno.

El Acuerdo de Paz previó la creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para desarticular a esos grupos armados sucesores del paramilitarismo; sin embargo, esa política nunca se implementó con rigor en el pasado. Es hora de retomarla sin titubeos. No podemos permitir que la historia de la UP vuelva a repetirse con otros nombres. Cada líder comunitario amenazado, cada firmante de paz asesinado, es un campanazo que nos recuerda que la paz no se firma solo en un papel, sino que hay que construirla día a día en los territorios, garantizando la vida y la libertad política. Por ello, insistiré en medidas contundentes de protección colectiva, en presencia efectiva de la Fuerza Pública en alianza con las comunidades (bajo un enfoque de seguridad humana, no militarista, porque la mayor seguridad se logra cuando hay paz), y en diálogos sociales que desactiven los conflictos locales antes de que escalen. La no repetición no puede ser un eslogan: debe reflejarse en que ningún colombiano sea perseguido o asesinado por sus ideas nunca más.

4. La implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016

Uno de los ejes centrales de la política de paz de mi gobierno será, sin duda, la fase final de implementación del Acuerdo Final de Paz.

No debemos olvidar que Colombia está obligada a esa implementación, entre otras causas, por la Declaración Unilateral de Estado respecto a ese acuerdo, también que tiene el compromiso de hacer lo que se requiera para mantener los mecanismos de apoyo de la comunidad internacional al Acuerdo, tales como la condición de los países garantes, y la misión de la ONU. En mi condición de Jefe de Estado ratificaré esa declaración unilateral.

Según lo previsto en el Acuerdo Final, el próximo gobierno le corresponde el último período gubernamental para asumir el mandato de la implementación integral. Como lo ha propuesto el presidente Petro, me comprometo a buscar la prórroga de la implementación, por cuatro años más, dado que hemos perdido, especialmente bajo el tristemente recordado gobierno del expresidente Iván Duque, valiosos años de implementación.

No podemos conformarnos, mucho trabajo nos queda por delante en este campo. Así como reconozco avances, con la misma franqueza debo decir que existen visibles retrasos, dificultades y desafíos que enfrenta la implementación plena del Acuerdo.

La realidad nos dice que el progreso ha sido más lento y desigual de lo que quisiéramos, y esto tiene consecuencias serias, en especial para las víctimas

y las comunidades que siguen esperando las promesas de la paz. Pero de igual forma que envía un mal mensaje a los grupos armados que en el futuro decidan emprender el camino de la paz. Buscaré la máxima eficacia para cumplir la palabra de paz empeñada por el Estado. La paz se construye sobre la confianza, y la confianza se construye sobre los hechos, no sobre las ilusiones o promesas.

5. Memoria y educación para la paz

Finalmente, quiero señalar un tema crucial: la memoria y la educación para la paz. La historia del genocidio, el conflicto armado, los crímenes contra la humanidad perpetrados en Colombia deben ser incorporados a la enseñanza de la historia de nuestro país a partir de fuentes veraces y objetivas, como son entre otras las labores académicas de investigación de las ciencias sociales, los informes de las comisiones de la verdad, las sentencias judiciales nacionales e internacionales.

Esto no es un formalismo: es reconocer que solo conociendo la verdad de nuestro pasado podremos evitar repetirlo. Tenemos el deber de socializar masivamente el Informe de la Comisión de la Verdad, de apoyar los museos de memoria, de llevar a nuestras escuelas los relatos de las víctimas. Que las nuevas generaciones aprendan lo que aquí pasó. Cómo la intolerancia puede llevar a la barbarie, y cómo la democracia debe proteger a quienes piensan distinto. La memoria es un pilar de la reconciliación. Por eso, no descansaremos hasta ver que en cada texto escolar de historia de Colombia se hable de la Unión Patriótica, sus líderes y militantes perseguidos y perseguidas, su legado de lucha por la paz democrática.

Compañeras y compañeros:

El camino de la paz es empinado, tiene obstáculos, a veces parece ensombrecido por dificultades, pero no estamos dispuestos a retroceder. Hoy renovamos ante ustedes un pacto ético y político: no habrá paz completa sin verdad y sin justicia; no habrá paz verdadera sin reparación y garantías de no repetición. Cada meta del Acuerdo de Paz que alcancemos, cada reforma que implementemos, será un ladrillo más en la construcción de esa paz con justicia social por la que ustedes tanto han luchado.

En memoria de todos los hombres y mujeres de la UP que perdieron la vida, refrendamos nuestro juramento de que nunca más habrá otro genocidio político en Colombia. Rechazamos las amenazas a políticos de todas las orillas.



¡Conocemos el dolor y no permitiremos jamás que las balas vuelvan a usurpar el papel de los votos! No permitiremos que el miedo vuelva a imponerse sobre la esperanza.

Cada vez que recordemos sus nombres, hagámoslo con la frente en alto, sabiendo que estamos construyendo el país que ellos soñaron: un país donde quepamos todos, un país en el que disentir no cueste la vida, un país en el que la dignidad sea costumbre.

En este día de conmemoración y esperanza, las invito, los invito, a reafirmar juntos nuestro compromiso indeclinable por construir un segundo gobierno marcado por la transformación social, cuyo éxito no será posible sin el concurso de ustedes, los hijos e hijas de la inmortal Unión Patriótica.

IVÁN
Cepeda
Presidente



VAMOS CON
LA REVOLUCIÓN AGRARIA

Sincelejo, Sucre

Mi saludo emocionado, compañeras y compañeros.

Me llena de profunda emoción ver esta plaza repleta del gran movimiento campesino colombiano, de los habitantes de Sincelejo, esta ciudad que quiero tanto.

He venido aquí a Sincelejo, queridas compañeras y queridos compañeros, a saludar en primer lugar **al gran movimiento campesino colombiano** y a presentar mi séptima propuesta programática que he llamado la **Revolución Agraria**.

Saludo con afecto a la ciudad de Sincelejo, a sus habitantes. Un lugar que es entrañable para mí, pues aquí nació mi madre, la periodista y dirigente política **Yira Castro**, y de aquí proviene parte de mi estirpe familiar.

Buena parte de la historia de nuestro país, compañeras y compañeros ha estado enmarcada en la lucha por la tierra. Desde la colonia, esta ha sido una disputa constante. A lo largo del siglo XIX y del siglo XX, se sucedieron **múltiples intentos de reforma y contrarreforma agraria**.

Por un lado, ustedes, las y los campesinos, quienes han trabajado la tierra y buscado **desarrollar una economía para el bien del país**. Por otro lado, **los poderes terratenientes y latifundistas** que han buscado acaparar extensas zonas del país con fines improductivos.

El campesinado del Caribe y en particular los procesos en **Sucre, Córdoba y Bolívar** han sido núcleos prioritarios de estas transformaciones. Aquí el movimiento ha resurgido con fuerza una y otra vez, reactivando, por ejemplo, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC y organizando a miles de personas.

Recordamos hoy figuras como Apolinar Díaz Callejas, ministro de Agricultura y primer gobernador de Sucre, un liberal de izquierda que en 1948 fue parte de la junta popular que tomó el poder en la ciudad de Barrancabermeja durante 10 días.

Cuando el gobierno de Misael Pastrana intentó frenar la reforma agraria impulsada por la ley 1a de 1968, la ANUC protagonizó la más grande movilización campesina por la tierra en la historia de Colombia.

La ANUC tuvo en Sincelejo uno de sus epicentros, celebró congresos, organizó paros cívicos y tomas de tierra, marcando profundamente la historia agraria del Caribe colombiano.

Y cada vez que se ha intentado revertir los logros del campesinado, **las contrarreformas han venido acompañadas de violencia y sangre. El Pacto de Chicoral en 1972**, promovido por el partido Conservador y respaldado por sectores liberales, **reemplazó la reforma agraria por una política de colonización violenta**. Esta decisión no solo destruyó el sueño de justicia rural, sino que agudizó el conflicto, provocó desplazamientos y arrasó con bosques y ecosistemas.

La ley 160 de 1994 reactivó tímidamente la adquisición de tierras, pero el gobierno de **Andrés Pastrana** volvió a frenar el proceso. Luego, bajo **los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez** se intentó legalizar el **despojo de más de 6 millones de hectáreas arrebatadas al campesinado por los paramilitares y la parapolítica a través de masacres, desapariciones y desplazamientos forzados**.

Esa tierra fue luego vendida mediante testaferros a grandes empresas y a una nueva clase de terratenientes, muchos ligados al narcotráfico.

Hoy podemos decir que el presidente Gustavo Petro Urrego y el gobierno del Pacto Histórico no solo han retomado el camino de la reforma agraria, sino que la han puesto en el centro del programa político nacional. Somos el primer gobierno de la historia reciente del país, que **ha dado inicio a un proceso real de redistribución y formalización de tierras a gran escala sin derramar sangre, sin violencia**, cumpliendo con lo pactado en el Acuerdo de Paz de 2016. Avance que se resisten a aceptar y reconocer no solo la oposición, sino incluso algunos de nuestros aliados. Quiero afirmarlo con todas sus letras: **avanzamos hacia la meta de convertir a Colombia en una gran potencia mundial agroalimentaria**.

Gracias a este trabajo hoy ya están disponibles **700.000 hectáreas** para la reforma agraria y alcanzaremos el millón de hectáreas antes de terminar el



gobierno. Esto sienta las bases para que el próximo periodo avancemos hacia la **Revolución Agraria**.

Hoy, compañeras y compañeros, debemos impedir que **regrese la extrema derecha uribista, cuyo proyecto es revertir los avances logrados**. No podemos volver al pasado. En las elecciones que vienen en el 2026 y desde ya en la consulta del Pacto Histórico del próximo 26 de octubre, **debemos defender la reforma agraria**.

Yo represento esa opción, ese compromiso: defender y profundizar lo que hemos logrado y construido. No les quepa duda: defenderé las conquistas del movimiento campesino y del gobierno del Pacto Histórico en mi gobierno.

Estos procesos de concentración de tierra han sido a **costa de crímenes de lesa humanidad contra el campesinado**. Hoy de los 10 millones de víctimas que están en el Registro Único Nacional, de cada 10 víctimas en Colombia, 6 son de origen campesino. **Las mujeres han sufrido la peor parte de esa violencia, pero también las niñas, los niños y la juventud campesina**.

Masacres, desplazamientos, asesinato del liderazgo campesino y de los presidentes de las juntas de acción comunal en veredas y corregimientos, han hecho parte de esos crímenes que se han cometido por parte del Estado, los paramilitares y también los grupos guerrilleros.

Por eso el campesinado colombiano ha tenido que migrar al borde de la frontera agropecuaria, a las laderas de cordilleras y terrenos bajos de nuestros valles. Incluso allí en las sabanas y playones inundables fueron bajando las obras de desecamiento y las cercas que han impedido que los campesinos pescadores siembren y pesquen para subsistir.

Como sabemos, eso ha llevado a una estructura del mundo rural monstruosamente desigual: **mientras el 10% de los más ricos sigue poseyendo el 81% de las tierras cultivables, el 90% de los propietarios solo tienen para su aprovechamiento el 19% de la superficie rural**.

Debemos acabar con esa desigualdad vergonzosa.

Esta es una de las mayores **causas de la pobreza y de la desigualdad en el campo y en las zonas urbanas periféricas**, donde van a dar las familias

campesinas desplazadas. Así mismo, es la causa de un sistema de abastecimiento altamente concentrado y que **encarece los alimentos en las ciudades**.

Por estas razones, **la revolución agraria es una cuestión de justicia social y económica**.

La justicia económica empieza por reconocer el valor del trabajo de ustedes, los campesinos y campesinas de Colombia. Implica proteger la tierra, su riqueza, como un activo estratégico de la nación, base esencial para la producción de los alimentos y materias primas. **Este camino ofrece alternativas reales frente a las economías ilícitas, frente al narcotráfico, frente a la minería ilegal del oro.**

La reforma agraria no es solo una política rural, es una estrategia integral para transformar las economías ilegales en economías productivas, legales y sostenibles.

Donde antes hubo cultivos ilícitos, en mi gobierno habrá alimentos, donde hubo exclusión, habrá justicia económica. Ese es un compromiso, la segunda fase del cambio que estamos proponiendo.

Compañeras y compañeros campesinos y habitantes de Sincelejo

Hoy estamos ante una oportunidad histórica, la posibilidad real de ampliar y profundizar la reforma agraria y convertirla en una verdadera Revolución Agraria.

¿Qué entiendo por eso?

No es una revolución contra nadie. No es una guerra ni se levanta contra un enemigo. Es una revolución pacífica, pero enérgica y afirmativa a favor del campesinado colombiano. Una revolución pacífica que se construye con la organización y la movilización, con la firme decisión del gobierno nuestro, del nuevo gobierno nuestro, que yo quiero presidir.

Una revolución que no empuñará armas, sino **siembra semillas**, que no reparte balas sino **tierra y esperanza**, que no cultiva odio sino **pan y justicia**.

Estos son los siete elementos que propongo como parte de esa revolución:

1. Protección y reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos

Uno de los avances más importantes de este gobierno ha sido el **impulso al reconocimiento del campesinado como sujeto constitucional de derecho**. Esto significa, de manera concreta:

- **Derecho a la vida y a la protección integral de las lideresas y líderes campesinos** que han sido históricamente perseguidos por defender su tierra y su comunidad.
- **Derecho a la verdad, la justicia y la reparación** como víctimas del conflicto armado y del despojo.
- **Derecho a la restitución de la tierra.**
- **Derecho a un trabajo rural digno** con condiciones laborales justas, pensión y condiciones estables en el trabajo.
- **Derecho a participar en la política**, a ser escuchados y tomar decisiones. No es aceptable que para ejercer el derecho al voto el campesino y la campesina deban correr largas distancias hasta una mesa de votación. Eso no lo podemos seguir tolerando. Hay que darle a la población campesina el mismo derecho de participación electoral que tienen todos los demás colombianos.
- **Derecho a ser protagonistas en la transformación del país** porque sin el campesinado Colombia no tendría alimentos ni vida.
- **Derecho de las mujeres y de la juventud campesinas a una vida digna y en igualdad plena de condiciones de vida.** El Estado y la sociedad deben saldar la deuda histórica que tienen con las mujeres y con la juventud campesina y actuar de la mano con ellas, con las mujeres y con los jóvenes.

Por eso, la primera medida de la Revolución Agraria debe ser la **protección integral del campesinado**, de su vida, de su dignidad, de su trabajo y de su aporte esencial a la nación. Sin justicia para el campo, no habrá justicia para Colombia en el futuro.

2. Vamos a continuar con la redistribución, la restitución y la recuperación de tierras y activos productivos

La democratización de la estructura agraria es para construir una sociedad más justa, igualitaria y productiva. Por eso continuaremos y profundizaremos

la reforma agraria que ha venido avanzando el gobierno con tres ejes fundamentales:

- **Redistribuir tierras fértiles**, que hoy están altamente concentradas y subutilizadas. Todavía hay mucha tierra que debemos repartir a los campesinos de Colombia.
- **Restituir las tierras despojadas a comunidades campesinas**, víctimas de la **violencia y del abandono estatal**.
- Recuperar y poner al servicio del pueblo **activos productivos estratégicos** para fortalecer la economía rural.

Esa transformación no se limita a la tierra, también implica facilitar el acceso a **recursos productivos, tecnologías, infraestructura, crédito; indispensables para el desarrollo del campo y la producción agropecuaria**. Esto para obtener además verdadera soberanía alimentaria en el país.

3. Seguro agrícola. Recuperar y fortalecer la institucionalidad agraria

Debemos recuperar lo que nos han arrebatado la **institucionalidad agraria**. Ustedes saben lo que significa no tener instituciones en el territorio que acompañen al campesino, el abandono, **la soledad, la desprotección frente a las plagas, los precios injustos o los intermediarios abusivos**. Queremos reconstruir esas instituciones para que cada campesino y campesina tenga un Estado que lo proteja, que garantice crédito, asistencia técnica y precios justos para **el maíz, el arroz, la leche, la papa o el café**.

Vamos a consolidar en todos sus niveles la institucionalidad agraria existente y a **expandirla a todo el territorio nacional**. Para ello daré un nuevo impulso:

- Llevaremos las instituciones agrarias a las regiones y al campo.
- Fortaleceremos el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, la Convención Nacional Campesina, las instancias de concertación del movimiento agrario, las zonas de reserva campesina y otras territorialidades, es decir, **aumentaremos significativamente la participación del campesinado en el gobierno**.
- **Desarrollaremos la justicia agraria y rural**. Llamaremos a que el Congreso de la República termine el proceso de creación y puesta en funcionamiento de esta jurisdicción **como mecanismo para resolver los conflictos de tierras**.

4. Crearemos un programa nacional de bienes y servicios

No se trata solo de tierra. Se trata también de la vida cotidiana de la gente. Sabemos que en muchas veredas todavía falta **agua potable, electricidad, caminos dignos**. No puede haber paz mientras un niño camine kilómetros para llegar a una escuela o mientras una familia campesina pase la noche a oscuras. Por eso proponemos **un programa nacional de bienes, servicios rurales, agua limpia, energía eléctrica, Plan Nacional de Construcción de Vías Terciarias**, para que vivir en el campo no sea sinónimo de carencia, sino de dignidad y bienestar, como debe ser.

5. Crearemos comercio justo para la producción campesina

Queremos también que la producción campesina tenga futuro. Sembrar no basta: hay que cosechar y vender sin que el precio lo decidan otros. Por eso construiremos redes de acopio, cuartos fríos, secaderos y plantas de transformación en las regiones, administrados por las juntas de acción comunal y asociaciones campesinas. Porque no queremos que el campesino venda barato en la plaza mientras en la ciudad del consumidor paga caro. Queremos justicia de la semilla a la mesa de todos los colombianos y colombianas.

6. Recuperaremos las cadenas productivas estratégicas

Vamos a rescatar lo nuestro. ¿Se acuerdan cuando el algodón florecía en Córdoba y César? ¿Cuándo la yuca era el motor de vida en la costa Caribe? Esas riquezas se perdieron con la **apertura económica**, pero ahora decimos: vamos a recuperar esas cadenas productivas estratégicas. **El algodón, la yuca, el cacao, el café volverán a ser la base de la prosperidad regional**, para que la tierra de cada región vuelva a dar riqueza a su gente. Y no se trata, óigase bien, de basarnos en la nostalgia para que no digan que somos unos nostálgicos simplemente, ni en el recuerdo de lo que fue, sino de volver a generar prosperidad campesina con condiciones modernas, con justicia productiva para todos y todas.

7. Programa Nacional de Pesca y Piscicultura

Miles de familias viven de la **pesca artesanal** en Colombia. Esas familias también son parte de esta revolución. **Con un programa nacional de pesca y piscicultura** queremos que esas comunidades tengan tecnología y acceso a mercados.

Estos siete elementos, compañeras y compañeros, de la Revolución Agraria, deben contribuir a la creación de la red de abastecimiento y comercialización alimentaria del país.

Sabemos que el hambre es la mayor injusticia en un país con tanta tierra fértil como Colombia. Por eso construiremos una red de abastecimiento y comercialización alimentaria que conecte al campo con las ciudades para que el campesino venda a buen precio y el pobre en la ciudad compre barato, porque la Revolución Agraria también es una revolución contra el hambre.

Campesinas y campesinos, compañeras y compañeros:

Ustedes son la raíz que sostiene este país. Sin campesinado con tierra no habrá futuro para Colombia, y con tierra productiva.

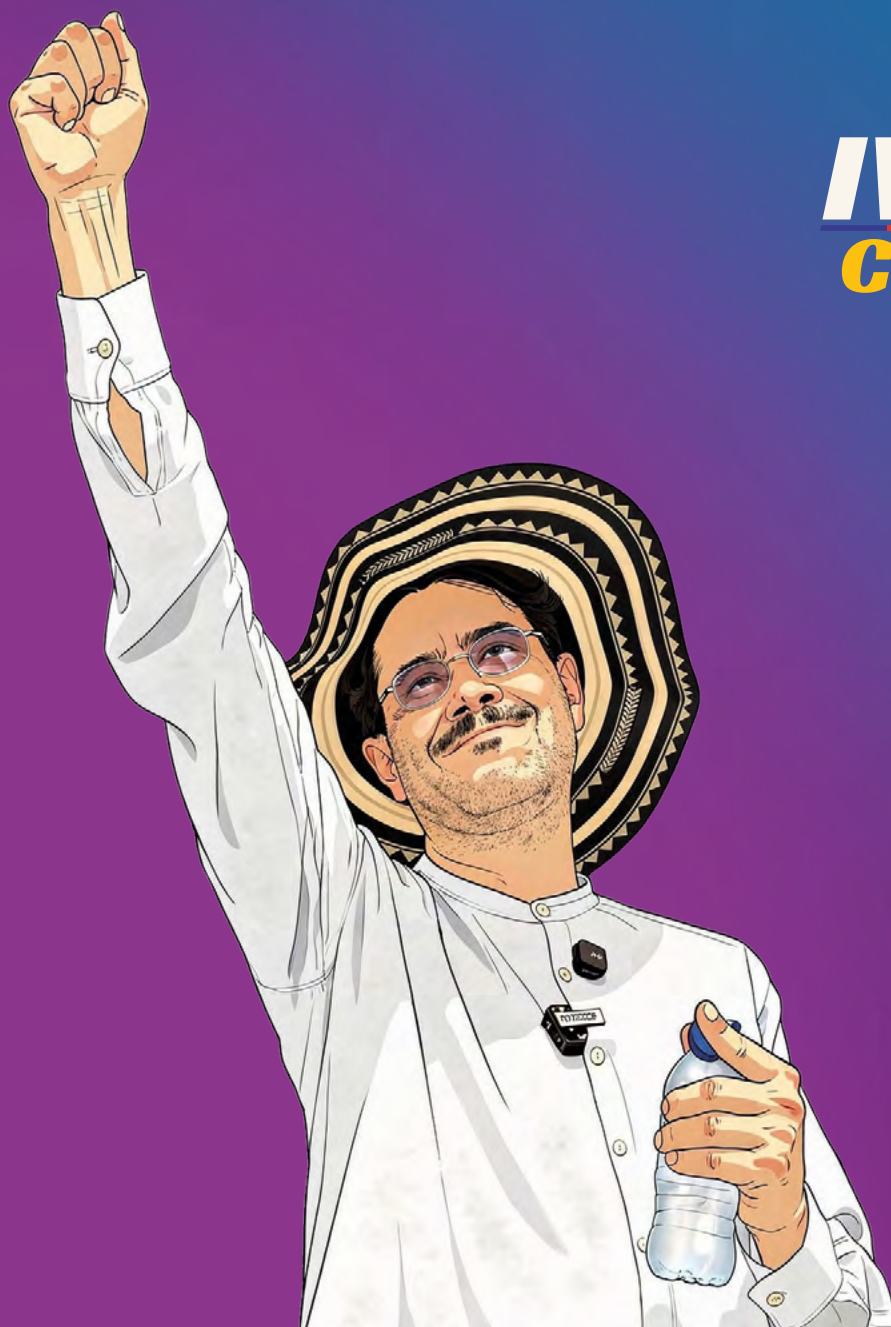
Hoy las y los invito a que triunfemos en las elecciones de 2026 con nuestro programa de reforma agraria fortalecido y ampliado a una **Revolución Agraria**.

Como lo he dicho, esta es una revolución pacífica del pueblo, una revolución de semillas y **no de armas que provocan heridas o muerte**. Una revolución que se hace en democracia como una siembra colectiva, una minga de esperanza.

Y desde aquí le enviamos un mensaje a los gremios de la producción agropecuaria, a los ganaderos, a los grandes terratenientes a que hagamos un verdadero diálogo nacional porque la revolución agraria a todos nos puede beneficiar y con todos podemos.

La paz verdadera de Colombia solo germinará cuando el campo sea justo, cuando ustedes puedan vivir con dignidad y cuando se reconozca que sin campesinos no hay patria, **porque sin tierra justa no hay libertad y sin paz en el campo no habrá nunca paz en Colombia**.

IVÁN
Cepeda
Presidente



ENCUENTRO CON
**LÍDERES Y LIDERESAS DEL
MAGDALENA EN SANTA MARTA**

Santa Marta, Magdalena

Compañeras y compañeros:

Tenemos ante nosotros una muy importante decisión histórica en las próximas elecciones que se llevarán a cabo en mayo de 2026 para la presidencia y en el mes de marzo de ese mismo año para el Congreso de la República.

Se trata, para decirlo claramente, o de volver al pasado o de dar un decidido impulso hacia el futuro de Colombia como una potencia mundial de la vida, como una potencia mundial agroalimentaria, por el bienestar, la salud, la felicidad, la justicia, la democracia y la paz del pueblo colombiano.

Esa disyuntiva es: entre la extrema derecha colombiana que simboliza, porque es así, su jefe Álvaro Uribe Vélez; o seguir el camino del Pacto Histórico, de los movimientos sociales, de los pueblos indígenas, de los campesinos de esta nación y construir, un país distinto con un cambio social profundo de democrático que nos lleve hacia un estadio diferente en Colombia.

No podemos perder de vista esa disyuntiva histórica. No es entre nosotros la discusión. Algunos medios de comunicación, especialmente, nos tienden la trampa de todos los días buscar que nos enfrentemos, buscar que nos dividamos, buscar que entremos en la cosa menor de la política, en la discusión sobre si tal o cual es mejor entre nosotros. El problema no es ese, el problema es qué proyecto político estamos defendiendo, a favor de quién estamos dando nosotros las luchas que estamos dando en la política colombiana.

Y sin lugar a duda, la lucha de este gobierno y del presidente Petro es por el pueblo colombiano, no por la vanidad personal no por los enfrentamientos menores, no por la vanidad, no por el narcisismo político, es por la vida, por la paz y la democracia. Por eso estamos aquí y por eso seré el continuador cuando llegue a ser presidente en agosto del 2026 de ese legado fundamental.

Por eso es que he venido haciendo planteamientos en todo el país. Yo debo decirlo y debo insistir sobre ello. Nunca había pensado en estar parado aquí ante ustedes diciendo esto. Porque considero que en la vida política no valen las ambiciones personales que sin lugar a duda todos tenemos, todas

tenemos, sino que vale lo que diga el pueblo colombiano y hasta ahora no había sido llamado a cumplir esta responsabilidad como ocurrió este año.

Así que, llamado a esa responsabilidad, he hecho una profunda reflexión sobre el planteamiento que debemos hacer hoy ante el pueblo colombiano.

¿Cuáles son mis conclusiones?

La primera de ellas es retomar la sabiduría de los pueblos ancestrales y originarios, que nos han enseñado que hay que mandar obedeciendo. Yo seré el presidente al servicio de la gente y no el presidente para mandar sobre la gente. Yo hablaré permanentemente con las organizaciones sociales, populares y con quienes me elijan, pero también con toda la nación.

Segunda conclusión, no vamos a hacer una política traicionando nuestros ideales y lo que somos. ¿Quiénes somos nosotras y nosotros? Nosotros no venimos de una carrera política al servicio de nuestro bienestar personal, sino que somos curtidas y curtidos luchadores sociales y populares.

En mi caso personal, yo soy un sobreviviente del genocidio que se ha practicado por décadas contra la Unión Patriótica, hijo de un líder político que fue asesinado en su condición de senador de la República e hijo de una luchadora social, periodista destacada que llegó a ser concejal de Bogotá.

Los últimos mal contados 40 años de mi vida los he dedicado a luchar con las víctimas de este país, con los pueblos en los territorios, con las comunidades, lanzando propuestas, pero también haciendo las denuncias por encima de cualquier poder político, cueste lo que cueste, caiga quien caiga, sea cual sea la situación, hasta llegar a enfrentar al expresidente de la República, causante de los peores males que hemos tenido en Colombia, a quien hemos derrotado no solamente en la política, sino también en los estrados judiciales.

Y sin revanchismo, sin odios, debo decir, ayer lo aceleré y lo vuelvo a decir hoy. Si la extrema derecha de este país quiere construir un diálogo, aquí estamos. Aquí estamos para sentarnos y construir juntos una nación que sea el resultado de un diálogo democrático.

Pero si quieren seguir el camino, como lo están haciendo, echar abajo las reformas sociales, también nos van a encontrar en la movilización y en la acción política firme y decidida para defender al pueblo colombiano en sus derechos.

No olvidemos que quieren echar abajo nada más ni nada menos que la reforma pensional, algo que nos ha costado tanto trabajo, tantas discusiones, tantos esfuerzos en el Congreso. Ahora resulta que por legalismos de carácter constitucional al parecer se quiere impedir que las personas que tienen la mayor situación de pobreza, de carencia que han trabajado toda su vida en lo que se llama despectivamente la economía informal, no tengan acceso a una mínima pensión.

Eso es inhumano, eso es degradante, eso es indigno y nos van a encontrar en la calle a partir del 14 de este mes cuando hemos convocado a la ciudadanía a que defienda la reforma pensional en las calles y con la movilización.

Así que no vamos a cambiar de hacer la política porque ahora estemos aspirando a un cargo más importante con responsabilidad, pero uno más porque el presidente de la República en Colombia debía ser uno más de los ciudadanos.

No un rey, no un emperador, no un Patricio, sino otro más de los ciudadanos que tiene tal vez un poco más de responsabilidad, pero que tiene los mismos deberes, ningún privilegio más que cualquier ciudadano como debe ser en la democracia. Y así lo hemos probado.

Hemos pedido que los expresidentes tengan también que afrontar su responsabilidad penal, como cualquier ciudadano que tiene que responder hacer el llamado a la justicia cuando así es.

Segundo asunto que hemos considerado importante en este camino., la Revolución Ética.

Hemos llamado al país a que hagamos una reflexión profunda sobre nuestra conciencia y nuestra alma nacional. No es posible que en Colombia sigamos padeciendo la violencia que tenemos. Que todos los días veamos cómo se degrada y destruye la vida de nuestros compatriotas y no hagamos nada.

Y elijamos el camino de la indiferencia de voltear la espalda, de acomodarnos al poder que llega, para no ser también víctimas de cualquier clase de agresión o de violencia. Eso no puede seguir ocurriendo. Tenemos que mirar de frente y a la cara a las víctimas del conflicto armado.

Todos hemos sido víctimas, todos llevamos en nuestro corazón alguna herida y cicatriz que nos ha dejado la violencia y por lo tanto tenemos que hacer un

acto de sensibilidad, de conciencia, de profunda percepción del dolor de los demás.

Y eso significa un cambio en la cultura, en la educación, en la forma de ser del colombiano y de la colombiana. No podemos seguir permitiendo que el machismo y el patriarcado se enseñoreen en la sociedad colombiana.

Así que tenemos que derrotar el machismo, el racismo, el desprecio a los pobres, la indiferencia frente a la vida mediante una transformación cultural profunda.

Y esa transformación debe venir de la conciencia de lo que ha ocurrido, de los crímenes que se han cometido, de escuchar el testimonio de las víctimas para poder cambiar nuestra forma de ser como nación.

Y eso tiene que haber con una segunda revolución, una revolución contra la gran corrupción en nuestra sociedad.

No basta seguir diciendo que hay corrupción. No basta seguir constatando que se están robando todos los días los impuestos y el erario. No basta con pasar de lado con ese famoso aforismo de ser obedece la ley, pero no se cumple.

Aquí tenemos que enfrentar con una revolución y rebelión ciudadana a los grandes corruptos, desenmascararlo y hacer que devuelvan los dineros que se han robado para su beneficio personal, los dineros de la salud, los dineros de la paz, los dineros de las víctimas, los dineros de los desastres naturales para atender a las personas que están en condición de necesidad en situaciones supremamente difíciles.

Así que llamamos a construir un sistema nacional contra la corrupción, cuya base primera sea la actitud y la conciencia, la movilización y la vigilancia de la ciudadanía.

Tercera revolución importante, la Revolución Agraria.

Hemos dicho con toda claridad que si hay algo de lo cual estamos orgullosos en este gobierno es del comienzo, por primera vez en la historia reciente, de una reforma rural real y auténtica, que ha entregado 700.000 hectáreas para las víctimas y que puede llegar a entregar 1 millón de hectáreas para el campesinado que ha sufrido el despojo.

Eso no lo había hecho ningún gobierno anterior. Eso no lo hizo el gobierno de Duque ni el gobierno de Santos, ni el gobierno de Pastrana ni el gobierno, mucho menos el de Álvaro Uribe, que hizo fue legalizar el despojo.

Nuestro gobierno ha comenzado ese camino. Pero no basta con eso. Nos lo han dicho los campesinos, los pueblos ancestrales, los pueblos y las comunidades afrodescendientes: necesitamos que la economía rural, que la economía campesina, que la economía que se va a hacer todos los días en el campo colombiano se convierta en la que nos lleve a ser una potencia como economía general en Colombia, lo que hemos llamado Colombia como potencia mundial de la vida, potencia mundial agroalimentaria.

Y por eso, es cierto, necesitamos un plan nacional de vías terciarias, dotar a los municipios de agua potable, hacer que el mercado campesino llegue a la gran ciudad y resolver los problemas que tienen los campesinos, los pobladores rurales en sus territorios.

Así que, compañeras y compañeros, mi compromiso con ustedes no es solamente el mantener y continuar lo que ha hecho el gran presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico, sino profundizar, avanzar de las reformas sociales a las revoluciones sociales pacíficas que requiere la sociedad colombiana para una transformación definitiva de lo que somos como nación.

No voy a simplemente conformarme con retocar y defender lo que hemos alcanzado. Vamos a avanzar definitivamente a un cambio, a una transformación de fondo en este país.

IVÁN
Cepeda
Presidente



IVÁN CEPEDA
EN VILLAVICENCIO

Villavicencio, Meta

Queridas compañeras y queridos compañeros:

He recorrido el país en medio de inmensas expresiones de solidaridad, apoyo y, una cosa que es muy importante en una campaña electoral, compromisos de votos para el día 26 de octubre.

Es lo que necesitamos. Necesitamos ganar las elecciones el próximo 2026 e inaugurar el segundo gobierno de la transformación histórica y social en Colombia.

Yo atribuyo ese afecto, esa esperanza que veo los ojos de muchas y muchos de ustedes, a tal vez un inmerecido cariño por lo que hemos hecho durante estos años de luchas sociales al lado de la gente.

Pero también, debo decirlo, lo que encuentro es un afecto genuino de la gente reconociendo el inmenso trabajo que ha hecho Gustavo Petro y el Gobierno del Pacto Histórico por la gente y sus derechos en Colombia.

Ese reconocimiento, esa gratitud, ese afecto proviene de que el Gobierno del Pacto Histórico y sus aliados han cumplido con la promesa esencial que hicieron en las elecciones de 2022: ser fieles a la gente, a sus luchas históricas y avanzar en las grandes reformas sociales para derrotar la pobreza, para derrotar la violencia, para derrotar la injusticia en Colombia; y por eso la gente quiere, por eso la gente ama a este Gobierno y reconoce, especialmente la gente de origen popular.

No son solo aciertos, no son solo éxitos, lo sabemos bien, hay muchas cosas que debemos hacer mejor y profundizar. Y voy a referirme a algunas que yo propongo como candidato para que ustedes sepan por quién van a votar.

En primer lugar, yo quiero decir que son un candidato o precandidato que emerge de la entraña de las luchas sociales y populares de este país. No vengo de afuera.



No me encontré con esto como resultado de algún golpe de suerte, no fue una lotería, no me lo saqué en una rifa y he luchado al lado de ustedes aquí en el Meta también, recorriendo los cementerios para desenterrar a los desaparecidos, a los muertos y víctimas de los falsos positivos, que fueron allí inhumados de manera clandestina para que sus familiares no pudieran saber dónde terminaron después del Plan Colombia.

Acompañando a las víctimas de ese jefe paramilitar tristemente célebre, Víctor Carranza, que se robó las tierras a sangre y fuego del campesinado del Meta y creó un imperio en Puerto López y Puerto Gaitán.

Denunciando a los corruptos de este departamento. Luchando para que la gente del campo tenga una oportunidad.

Así que yo provengo de la entraña del movimiento social y popular y por eso lo digo con toda claridad: que de mí no se dude, no habrá traiciones, no habrá dudas, no habrá ambigüedades a la hora de cumplir con nuestro programa de profundas transformaciones en Colombia.

Soy y seré y una persona que obedece al pueblo, a sus organizaciones y a los movimientos social de este país.

Me enorgullece ser hijo de un senador de la Unión Patriótica asesinado por defender sus ideas. Me enorgullece prevenir de la tradición de los miles de víctimas de la Unión Patriótica y el Partido Comunista, que dejaron su vida por los derechos de la gente, y prefirieron la muerte antes de huir y dejar traicionados sus ideales.

Y por eso es que vamos a hacer un gobierno a imagen y semejanza de la gente. Lo dije en Pasto cuando lancé mi precandidatura: yo voy a tomarme en serio el precepto de los pueblos ancestrales de que quien gobierna debe mandar obedeciéndole a la gente. No al contrario, no imponiéndole a la gente los caprichos, los apetitos, los intereses, las veleidades, las ambiciones, la codicia, sino fundamentalmente obedeciendo lo que son las necesidades, los sufrimientos, los padecimientos de nuestra gente que son los míos también.

Yo sufro lo mismo que sufre la gente que más necesita hoy en Colombia la justicia social.

Por eso mi propuesta no es simplemente que mantengamos las reformas sociales. Tenemos que seguirlas defendiendo, ahora nos quieren robar la reforma pensional, una reforma en la cual hemos creado apenas un umbral que es todavía muy modesto para que los adultos mayores que han terminado su vida, luego de entregar muchos esfuerzos y sacrificios, puedan tener un mínimo ingreso. Pues bien, ahora se nos quiere enredar esto con una serie de formalismos de carácter legal y constitucional.

Y yo les propongo que como se ha convocado el día 14 de octubre, es decir, el próximo martes salir a la calle, lo hagamos. Que no nos dejemos robar, que no nos dejemos quitar esa reforma que es sustancial en este país.

Pero yo considero que no basta con defender las reformas. No basta con haber logrado ya un avance muy importante, que todas y todos reconocemos, sino creo que es necesario dar un paso más.

Por eso he propuesto que nosotros no solamente sigamos ahondando las reformas sociales, sino que avancemos a hacia una auténtica revolución pacífica de los derechos sociales de la gente.

La Revolución Agraria, por ejemplo. Se han entregado cientos de miles de hectáreas y se van a entregar más a los campesinos a los que les fueron arrebatados las tierras por medio de masacres, de desapariciones forzadas. Pero eso no es suficiente.

Si no hay agua, si no hay caminos, vías terciarias, si el Meta tiene que vivir desconectado del resto de la geografía nacional porque se entregó una concesión a una gran empresa que no atiende la seguridad vial, tenemos que cambiar el sistema de movilización, circulación de los bienes, hacia los grandes mercados y hacia las ciudades.

Hay que crear un verdadero Plan Nacional de Vías Terciarias que resuelva al campesino poner en el mercado los alimentos.

Tenemos que recuperar las cadenas productivas de aquello que nos han quitado con la apertura económica y los tratados de libre comercio: la yuca, el maíz, la posibilidad de cultivar y entregar lo que se produce en nuestra tierra y no tener que importarlo como parte de una doctrina de sometimiento al capital extranjero. A esas cadenas productivas nos comprometemos, por supuesto.



Así que les hacemos la invitación de que sigamos el camino de la reforma agraria, de que sigamos organizando al campesinado, de que sigamos fortaleciendo el Sistema Nacional de Reforma Agraria, pero que demos un paso más y conquistemos una verdadera revolución, en la que pongamos a la economía campesina, popular y familiar, en el centro del desarrollo económico para convertirnos en una potencia mundial agroalimentaria, como lo ha proclamado nuestro programa.

Viva la reforma agraria en Colombia.

Viva la clase trabajadora.

Hemos propuesto una segunda revolución.

Tenemos un gran enemigo enfrente que se llama: la gran corrupción. Ya no hay corrupción en Colombia, ya no se trata de que un funcionario es sobornado o se le entrega una coima por parte de unos particulares.

Hoy tenemos verdaderos aparatos criminales de la corrupción empotrados en todos los rincones del Estado. Se roban los dineros de la salud. Se roban los dineros de las obras públicas. Se roban los dineros de las víctimas. Se roban los dineros destinados para la implementación del acuerdo de paz. Se roban y se robaron en este gobierno, en nuestras narices, gente que llegó oportunista al Gobierno nacional los dineros de los damnificados por los desastres naturales. No más olmedos en un gobierno popular y democrático. Perseguiremos la corrupción a rajatabla.

Y para eso es necesario la movilización, esencialmente, de la ciudadanía. No podemos derrotar la gran corrupción si no es con una rebelión ciudadana, que parte de controlar los recursos, que trata de, en primer lugar, velar por dónde están, quiénes son los contratistas.

Necesitamos reformar la Ley de Contratación Pública en Colombia para que los contratistas del Estado no sean solamente los grandes empresarios, sino también las juntas de acción comunal, las pequeñas organizaciones territoriales, las asociaciones campesinas, las mujeres cuidadoras de la vida, las madres comunitarias.

Por eso también les proponemos atacar al corazón de la macrocorrupción. Y así vamos a delinear un programa con el cual vamos a profundizar los cambios y seguir adelante convirtiendo a Colombia en una nación justa, próspera, en la cual se respeta en primer lugar la vida y la dignidad de los seres humanos.

En momentos en que a veces la vida política me ha ubicado en situaciones difíciles, en momentos en que he tenido que enfrentar a poderes criminales enormes, siempre recuerdo la lección de dignidad de las comunidades en lugares como El Castillo La Uribe, La Macarena. Ustedes están en mi corazón y en mi mente y así vamos a triunfar y convertir, no solo al Meta, sino a Colombia en un lugar como nos lo merecemos, una gran nación, una nación justa, pacífica y democrática.

IVÁN
Cepeda
Presidente



LA REVOLUCIÓN DE LOS TERRITORIOS
**DE COLOMBIA, EL CORAZÓN
VIVO DE NUESTRA RIQUEZA
HUMANA Y NATURAL**

Popayán, Cauca

Querido Compañeras y queridos compañeros,

He venido al Cauca, a la ciudad de Popayán -epicentro de grandes luchas de resistencia popular y cuna de la Minga indígena- para compartir con ustedes mi octavo mensaje programático: en esta ocasión voy a hablar de un tema central, lo que llamo: la revolución de los territorios de Colombia, el corazón vivo de nuestra riqueza humana y natural.

Que vivan los territorios que son la fuente de la riqueza de este país.

En el Pacto Histórico, y entre quienes lo lideramos, crece cada día la conciencia de que la transformación de Colombia no nacerá de las oficinas ni de un modelo burocrático ni centralista en las grandes ciudades. Esta transformación solo será posible desde los territorios rurales y urbanos, cercanos y remotos, donde históricamente han vivido la exclusión, la pobreza, la violencia y el abandono. Es allí, al lado de las comunidades, donde debemos estar de manera permanente y no en las oficinas rodeados de lujos y comodidades. Con la gente, compañeras y compañeros.

Hoy entendemos con más claridad que transformar el país exige coherencia: la capacidad de escuchar, dialogar y asumir como propio los dolores y anhelos de la gente del común, de quienes enfrentan todos los días las consecuencias más crudas de la desigualdad social.

Y con mayor razón si somos gobierno: no podemos ni debemos darles la espalda a los movimientos sociales, a los pueblos indígenas, a las comunidades afrodescendientes, a los campesinos, a las mujeres, a los jóvenes de las barriadas populares, a las víctimas del conflicto armado, a los trabajadores, a los vendedores ambulantes, a quienes no tienen techo, a todos y cada uno de quienes hoy luchan por la transformación de Colombia. Es allí donde debemos estar, con ellas y ellos, los integrantes del Pacto Histórico y sus dirigentes.

Debemos valorar el territorio y a quienes lo habitan.

El territorio no es solo un espacio geográfico. Es como bien lo ha dicho el Papa Francisco, nuestra casa común.

Es el hogar colectivo de nuestras comunidades rurales, ancestrales y populares. Pero en Colombia, lamentablemente, el territorio ha sido convertido en el escenario de guerra y violencia, en objeto de disputa, saqueo y control, en materia prima de la explotación minera extractivista, en territorio de mafias, autoritarismos y despojos.

No es cierto que los territorios hayan sido simplemente “olvidados” por el Estado. No se trata de una “ausencia” institucional solamente. En muchos casos ha habido una presencia activa del Estado al servicio de intereses ajenos a las comunidades y contra las comunidades. Las élites que nos han gobernado han utilizado la supuesta debilidad estatal como excusa para no invertir en el mundo rural y en las periferias urbanas, y también para justificar su tolerancia o complicidad con estructuras criminales que hoy asesinan todos los días lamentablemente lideresas y líderes sociales.

Así como se ha concebido el territorio solo como una fuente de recursos naturales, también se ha negado la democracia territorial. No podemos seguir afirmando que Colombia es una democracia plena, mientras existan regiones donde los poderes mafiosos, los grupos armados, las casas políticas tradicionales, las multinacionales y la corrupción, imponen su voluntad sobre las comunidades.

Nuestro país se ha construido alrededor de unos pocos polos de desarrollo, mientras la mayoría de nuestras regiones han sido abandonadas. Falta de oportunidades, pobreza estructural, marginalización, desconexión con los mercados nacionales e internacionales: esa sigue siendo la realidad constante de muchos de nuestros municipios, corregimientos y veredas.

Un centralismo asfixiante estrangula la capacidad de las regiones, impide la autonomía local y margina a las comunidades en los territorios.

Este abandono estructural, combinado con el modelo extractivista, el narcotráfico y una visión colonial del desarrollo, ha llevado a las élites a concebir los territorios como economías simplemente de enclave.

Ese modelo, que extrae las riquezas y no construye bienestar; ese modelo que perpetúa la pobreza, lo vamos a acabar con la revolución de los territorios en el segundo gran gobierno progresista.

Ese gobierno se hará de la mano con quienes han resistido en el territorio, con las comunidades, con ustedes, nuestros pueblos que han sabido enfrentar

la violencia -muchas veces que se ha desarrollado en complicidad con los agentes del Estado-, tienen mucho que enseñarnos en materia de resistencia, de dignidad y de organización, de lucha y de esperanza. Para ellas y para ellos será nuestro segundo gobierno. No quepa duda sobre eso.

Compañeras y compañeros,

Permítanme explicar el sentido principal de lo que llamo la Revolución de los Territorios, que hoy les propongo como continuidad, y de los esfuerzos que está haciendo actualmente nuestro gobierno presidido dignamente por Gustavo Petro Urrego.

Se trata de una revolución pacífica, de transformación social que responda al clamor del pueblo desde las regiones. Una revolución que construye con la participación viva de ustedes y con una institucionalidad democrática para actuar desde todos los rincones de Colombia.

La transformación territorial tiene que traducirse, entre otras condiciones económicas, en el acceso universal al agua potable y el saneamiento básico, en vivienda digna, en una amplia red de vías terciarias, en el mejoramiento real de hospitales, centros de salud y escuelas, en el fortalecimiento de una educación integral y liberadora, y en la implementación de fuentes limpias de energía para avanzar en la transición energética, en el desarrollo rural, en la reforma agraria y en una transformación productiva que genere empleos dignos y oportunidades reales de vida.

De igual manera, **este proceso de transformación territorial implica condiciones políticas y de justicia para la democratización** de los territorios como, por ejemplo, el reconocimiento del campesinado, de los pueblos indígenas, de las comunidades afrodescendientes, de los jóvenes de las barriadas populares como sujetos políticos y de derechos; la protección efectiva de la vida, del liderazgo social; la presencia territorial de los tribunales de justicia, también de la justicia agraria o Jurisdicción Especial Agraria; la organización local de los diálogos de paz con participación de la gente; la participación de todas las comunidades en los procesos de decisión política y la posibilidad de que en las elecciones la población rural pueda votar en la proximidad y no tenga que ir días enteros trasegando para encontrar una mesa de votación.

Por lo tanto, estas condiciones que planteo deben ser objeto de un programa integral de justicia social, que articula múltiples esfuerzos, uno de ellos: terminar el cumplimiento integral y la implementación del Acuerdo de Paz que se firmó en 2016; la reparación profunda de las regiones más golpeadas por la violencia, lo cual implica procesos de reparación integral y colectiva a las víctimas de la violencia; y la integración verdadera del campo y la ciudad.

Veamos algunas de estas tareas.

1. Cumplimiento del acuerdo de paz.

Una parte fundamental de la transformación territorial es el **cumplimiento integral del Acuerdo Final de Paz** firmado en 2016. Aquel pacto no fue solamente el cierre de un conflicto armado: fue, sobre todo, la promesa de un **nuevo contrato social con los territorios históricamente golpeados por la guerra y el abandono**.

Cumplir ese compromiso comienza por **acelerar y ejecutar con seriedad los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)**. Esa es la base para construir una paz completa y duradera. Ustedes, comunidades del Cauca, participaron activamente en la formulación de estos planes, identificando con sabiduría y claridad las deudas históricas que arrastran sus municipios.

Los PDET no son simples documentos técnicos. Son **hojas de ruta construidas desde las veredas y corregimientos**, que recogen las voces del pueblo y expresan su poder constituyente en acción. En áreas como salud, educación, vivienda, vías rurales, economía campesina y condiciones de vida digna, los PDET representan la apuesta más concreta por reparar décadas de exclusión y violencia.

Nuestro compromiso es claro: **transformar esos planes en realidades tangibles**, con presupuesto garantizado, cronogramas definidos y responsables visibles. En mi gobierno, los PDET no quedarán archivados ni relegados al papel. Cumpliremos lo pactado, honraremos la palabra del Estado y llevaremos **el Estado social de derecho a donde nunca llegó el centralismo**.

2. Pactos Territoriales

En segundo lugar, impulsaremos con toda la fuerza y la voluntad popular los **Pactos Territoriales**. Entre ellos, el Pacto Territorial del Cauca, que es un ejemplo de lo que significa construir el país desde la base. Es un destacado

acuerdo entre el Gobierno nacional, gobierno departamental, municipios y comunidades.

Por primera vez, 42 municipios del Cauca están unidos en una agenda común de desarrollo, agrupados en 7 subregiones estratégicas. Este pacto prioriza la inversión social, el acceso al agua, vivienda, salud, educación, transición energética justa, reforma agraria para el campesinado. En suma, el Pacto Territorial del Cauca es un plan concreto para la dignidad, la justicia y la igualdad.

Me comprometo a cumplir hasta la última letra del Pacto Territorial del Cauca. Ese no es un documento burocrático, es un mandato del pueblo caucano. Hablamos de 205 proyectos estratégicos, con una inversión, óigase bien, de 27.6 billones de pesos. Cada peso de esa suma debe traducirse en agua limpia, caminos rurales, hospitales, escuelas, energías limpias y proyectos productivos para las comunidades. Esos recursos no pueden quedarse en promesas ni en oficinas, deben convertirse en vida digna para cada familia del Cauca.

Así como en el Cauca, también en Nariño, en Catatumbo, en los llanos orientales, este gobierno ha iniciado proyectos y planes similares. Todos ellos hacen parte de un movimiento nacional para cambiar los territorios. Y mi tarea como presidente de la República será seguir avanzando por esa ruta que ha diseñado el Gobierno del cambio en estos primeros 4 años de gobierno.

3. Plan Nacional de Vías Terciarias

Junto a los Pactos Territoriales, a cumplir con los PDET, está el **Plan Nacional de Vía las Terciarias, que yo llamo “vías para la paz”**. Este plan debe llevar maquinaria, ingeniería y trabajo colectivo a los rincones olvidados del país.

Sabemos que cuando llega una carretera, llega la esperanza, llega el Estado y puede llegar la paz. Con más de 30.000 km que necesitamos construir de caminos rurales, el campesinado y los pueblos que habitan los territorios del campo podrán sacar los frutos de su cosecha sin perder dinero y recursos valiosos en intermediarios injustos ni pagar el precio del abandono.

Vamos a fortalecer el Instituto Nacional de Vías Terciarias, creado por el Gobierno del cambio, y trabajaremos para que las Juntas de Acción Comunal, las alcaldías y las comunidades sean las que construyan los caminos de la integración entre la ciudad y el campo. Cada kilómetro será un acto de justicia territorial con las comunidades históricamente sojuzgadas y olvidadas del país.

Hasta aquí he descrito algunos pilares de esta revolución: cumplir la paz, ejecutar los pactos territoriales y llevar infraestructura social a los territorios. Pero la pregunta, con razón, es ¿cómo lo haremos?

Primero, proponiendo una nueva **Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial**, nacida desde las comunidades y sus organizaciones. Porque no puede seguir siendo Bogotá quien planifique el destino del país. El ordenamiento debe partir del respeto al agua, la naturaleza y la diversidad.

Con una **Misión de Desarrollo Territorial y Bioeconomía Regional**, recogemos el saber popular, los aportes de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, y de la academia, para construir una ley justa, moderna y participativa. **Una ley que reorganice el país desde el territorio, no desde el escritorio.** Que rompa el viejo modelo extractivista y construya una economía para la vida.

Segundo, reglamentaremos el **nuevo Sistema General de Participaciones** con una Ley de Competencias que garantice autonomía real y recursos justos. No más regiones subordinadas al centralismo. Gracias a la lucha de las regiones, el Congreso aprobó el Acto Legislativo de Autonomía Territorial, pero falta hacerlo efectivo. Esta ley será el instrumento que le devuelva el poder al Cauca, a los municipios, a las comunidades. Más recursos, más decisión, más democracia desde el territorio.

Esa es la verdadera descentralización: la que distribuye poder y riqueza, y que debe contar con un fuerte control social y **ciudadano del manejo de los nuevos recursos públicos** que irán a las regiones para ponerlos a salvo de la gran corrupción.

Tercero, **reconocimiento de las territorialidades étnicas y campesinas**. Las Zonas de Reserva Campesina, los Consejos Comunitarios afrodescendientes y las Entidades Territoriales Indígenas contribuirán a consolidar el carácter pluriétnico y multicultural de nuestra nación. Vamos a implementar plenamente las **formas de organización social** campesina, afro e indígena, con diálogo y armonización territorial.

Y para evitar conflictos entre comunidades vecinas o con las autoridades locales, **crearemos una comisión de armonización territorial**.

También impulsaremos **estatutos especiales para regiones como la Amazonía y el Pacífico**, para romper con el modelo extractivista y construir

economías de vida. En el caso del Pacífico caucano —en Guapi, López de Micay, Timbiquí— esto significa apostar por el turismo sostenible, la agroecología y las economías culturales, en vez del despojo. Un Pacífico verde, digno y soberano será una bandera de esta revolución.

Y, por supuesto, llevaremos adelante el **Plan Nacional de Infraestructura**, priorizando proyectos como la modernización de la Panamericana, la conexión de Popayán con el mar, nuevos campus universitarios, hospitales y centros culturales. Obras con control social, ejecutadas por y para la gente. Porque el poder del pueblo no se delega: se ejerce colectivamente.

Los recursos de esta revolución vendrán de la justicia fiscal y de la vigilancia popular. Cada peso deberá ser transparente y útil. Crearemos redes de veedurías ciudadanas y comunitarias para que el pueblo vigile la inversión pública. **No más macrocorrupción** ni intermediarios. El dinero del pueblo volverá al pueblo.

Fortaleceremos **las capacidades locales para que los gobiernos y autoridades étnicas gestionen sus proyectos**. Un Estado popular es aquel que acompaña, no el que impone. Que respeta la autonomía y trabaja con la gente. También **vincularemos al sector privado** en función del bien común, mediante **mecanismos de obras por impuestos y alianzas justas**. Pero siempre bajo control social.

Compañeras y compañeros.

Todo lo que les he dicho -desde los pactos, pasando por las leyes, desde los caminos, hasta las economías para la vida- forma parte, como lo dije, de una revolución democrática, pacífica, de los territorios. **Revolución porque rompe estructuras de desigualdad. Democrática porque nace del pueblo. Pacífica porque se hace sin armas. Territorial porque construye desde las raíces.**

Esta no es una revolución de un caudillo, es la revolución del pueblo consciente y organizado, del poder constituyente, como lo ha dicho nuestro presidente Gustavo Petro Urrego.

Sabemos que el camino no será fácil. Los privilegios no se ceden sin resistencia. Pero tenemos una fuerza mayor: la dignidad del pueblo. El Cauca, tierra de dolor y de esperanza, será ejemplo nacional de cómo un pueblo que se levanta puede transformar su historia. ¡El pueblo caucano no se rinde, se organiza y vence!



Por eso los invito a mantener viva la participación, a cuidar los recursos, a exigir transparencia, a ser protagonistas del cambio. La democracia no se limita al voto, se ejerce todos los días en la calle, en las mingas, en las asambleas, en la movilización social. Ese es el poder constituyente que hoy vuelve a despertar en Colombia.

Llegará el día en que miremos atrás y digamos: valió la pena. Porque valió la pena luchar, resistir y soñar juntos. Veremos al Cauca con caminos donde había trochas, con campesinos dueños de su tierra, con pueblos libres del miedo, con jóvenes construyendo futuro, con montañas vivas y ríos limpios. Veremos una Colombia digna, justa, plurinacional y en paz.

IVÁN
Cepeda
Presidente



IVÁN CEPEDA
EN CALI

Cali, Valle del Cauca

Compañeras y compañeros:

Hoy debemos recordar al país quién es Gustavo Petro Urrego, nuestro digno presidente de Colombia.

Gustavo Petro no es un líder político que se arrodilla ni ante los poderes mafiosos en Colombia ni ante el imperio estadounidense. Es un hombre digno que sin arrogancia, sin altanería, proclama que Colombia es una patria soberana y digna y tiene una política frente al narcotráfico que, en este Gobierno ha tenido resultados concretos y que ha pagado con la vida de cientos de sus servidores públicos el enfrentamiento con las mafias y los carteles de las drogas ilícitas.

En cambio, en Estados Unidos hay un mercado de 5 millones de consumidores de cocaína, fentanilo y otras drogas ilícitas. Le preguntamos desde aquí al presidente Donald Trump, ¿qué está haciendo él en la lucha contra el narcotráfico? ¿Con qué autoridad moral tilda al presidente Petro de narcotraficante?

No permitiremos que se mancille la honra de nuestro presidente, ni tampoco que se desate el intervencionismo militar en contra de Colombia y la región.

Gustavo Petro, cuando todo era silencio, impunidad y complacencia con el paramilitarismo, con la parapolítica, tuvo el valor de pararse en el Congreso de la República y solitariamente denunciar a los poderes más tenebrosos que había en la sociedad colombiana.

Fue a través del control político, de decir la verdad en público, que Petro puso el ejemplo para derrotar la parapolítica, en un momento en el cual emergía la extrema derecha uribista, como el poder que quería controlar nuestras vidas y que quería controlar el Estado colombiano.

Yo soy un modesto y humilde seguidor del ejemplo de Petro, puesto que mis debates de control político los puse también al servicio de esa causa. Y luego de hacer esos debates, luego de denunciar los nexos de Álvaro Uribe con el paramilitarismo y el narcotráfico, he librado durante 13 años una batalla

jurídica que lo ha llevado a una condena en primera instancia, y que yo espero que, el próximo martes, se ratifique en una condena judicial de segunda instancia.

Esos somos nosotros. y nosotras, los dirigentes y militantes del Pacto Histórico, curtidos luchadores sociales que no transigimos de ninguna manera con los poderes criminales y mafiosos por muy tenebrosos que sean y así lo seguiré haciendo como presidente de la República.

¿Por qué estamos triunfando y vamos a triunfar?

Entre otras razones porque, además de tener los liderazgos políticos jóvenes, estudiantes, jóvenes de barriadas populares, mujeres, madres comunitarias, cooperativistas, luchadores campesinos, pueblos ancestrales, luchadores sindicales, mujeres, porque que somos una fuerza diversa que representa las luchas sociales del pueblo colombiano.

Pero además porque tenemos el mejor programa político de transformaciones que se le pueda ofrecer al pueblo colombiano: el gran programa del Pacto Histórico para convertir a Colombia en una gran potencia mundial de la vida. Ese sigue y seguirá siendo nuestro programa.

En mi condición de precandidato he hecho simplemente algunas sugerencias. para poder profundizar el programa. He propuesto una Revolución Ética en Colombia. Esa revolución parte de la constatación de la terrible degradación moral que hay en nuestro país.

Necesitamos elevar el respeto a la vida y la dignidad humana como el valor supremo de nuestra nación. No podemos seguir permitiendo los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, el desplazamiento, las masacres, los asesinatos de líderes sociales.

Debemos elevar las víctimas, los 10 millones de víctimas como referente moral de la vida, la verdad y la justicia y gobernaré para las víctimas también como una población central de mi gobierno y de su programa. Habrá reparación para las víctimas. No podemos seguir tolerando el patriarcado y el machismo infame que llega al feminicidio. Tenemos que respetar por encima de todo los derechos de la mujer, enaltecer su papel y su capacidad decisoria y política en la sociedad.

Necesitamos enfrentar la corrupción, la gran corrupción y los invito, las invito a una rebelión ciudadana contra la gran corrupción. Se debe respetar los recursos públicos y destinarlos para el bien del pueblo colombiano.

Por eso necesitamos una Revolución Ética.

Pero además he propuesto que profundicemos he propuesto que profundicemos la reforma agraria. Necesitamos avanzar hacia una Revolución Agraria que, en primer lugar, siga distribuyendo la tierra y formalizando la tierra para el campesinado. El Gobierno ya lleva 700.000 hectáreas.

Necesitamos que el campesinado sea respetado en sus derechos plenamente y en su condición de sujeto de la economía y del desarrollo del país.

La economía campesina es el gran motor de la economía nacional para convertirnos en una potencia agroalimentaria, para bajar la inflación, para hacer que los alimentos se abaraten, para acabar con la pobreza, para hacer que desaparezca el abismo que hay entre la ciudad y el campo.

¡Más apoyo, más dinero del presupuesto, más infraestructura para el campo! Ese es el compromiso del segundo gobierno de la transformación histórica progresista.

Una Revolución Agraria que respete los páramos, el agua, la biodiversidad amazónica. El respeto y la protección de la naturaleza es el mismo programa de la Revolución Agraria, que es una revolución de biodiversidad y de riqueza natural de nuestra nación.

Tercera revolución, la Revolución Social. Para los integrantes del Pacto Histórico, a diferencia de la extrema derecha, los pobres no son despreciables. Nosotros no vemos a la población que vive en la exclusión, en la miseria, en la situación de aislamiento territorial como gente que sobra en nuestra nación, como los descartables, como diría el papa Francisco.

Para nosotros la gente que vive en la pobreza merece la mayor atención del Estado colombiano, no los miserables subsidios, sino una política real contra la pobreza, para lograr superarla y para lograr eliminarla, como un problema esencial de nuestro modelo económico.

Nuestra Revolución Social valora a la gente que vive en las peores condiciones.

Nosotros no despreciamos a los pobres, ni tampoco consideramos que la clase media de este país deba ser sometida a la incertidumbre de la codicia y de la avaricia de quienes tienen en sus manos la mayor riqueza.

Necesitamos una política social en la que ganemos todos, no solamente los ricos de siempre, sino que sea todo el país el que se beneficie de nuestra enorme riqueza como nación, riqueza natural, riqueza humana, riqueza social.

Podemos ser una nación justa, equitativa y viable en la cual todos tengamos oportunidades y progreseemos. No tenemos por qué seguir siendo una nación de castas y estratos sociales.

¡Que viva la igualdad social, compañeras y compañeros!

Necesitamos que la reforma laboral y la reforma pensional sean protegidas, consolidadas y las podamos seguir adelantando sin que haya ningún obstáculo, para que todos los trabajadores y las trabajadoras de este país tengan unas condiciones dignas de empleo.

Y para que quienes han dedicado su vida, así sea en la llamada economía informal, a una labor, puedan obtener un beneficio, así sea mínimo por ahora en materia pensional. Pero además necesitamos la reforma a la salud, la reforma a la educación pública, la reforma que pueda llevar a los territorios el bienestar y no solamente a las grandes ciudades. Necesitamos cambiar los territorios de este país para que la paz sea posible, uniendo el campo con la ciudad, dejando atrás la historia de municipios, corregimientos y sitios que son menospreciados por el centralismo asfixiante que impera hoy en Colombia.

Y por último una Revolución Política. Necesitamos que en Colombia los ciudadanos y ciudadanas, las organizaciones sociales, no sean primeros espectadores de las decisiones del Congreso de la República. Debemos transformarnos en un poder constituyente, que es el que ordena y manda.

No es el Congreso, no son los políticos desde las oficinas, no es el centralismo bogotano, es la gente y la democracia la que debe imperar en Colombia.

Y para eso estamos dispuestos a un diálogo nacional, a encontrar un acuerdo con los sectores más poderosos, pero que sean serios, que no intenten engañar de nuevo al pueblo, porque tendemos nuestra mano generosa para un acuerdo nacional, pero también estamos listos para salir, como lo hicimos en el estallido social, a luchar por nuestros derechos.

IVÁN
Cepeda
Presidente



IVÁN CEPEDA

EN EL ECCI EN BOGOTÁ

LA LUCHA DE LAS VÍCTIMAS PERSISTIRÁ HASTA
QUE HAYA JUSTICIA

Bogotá, Cundinamarca

Queridas compañeras, queridos compañeros:

Antes de hacer lo que vinimos a hacer aquí, que es invitar a votar por dos grandes candidatos que tenemos aquí sentados, cuya credencial es la vida de luchas que han dado por este país que son Gilma Gómez y Alirio Uribe. Me permito hacer un par de comentarios.

El primero tiene que ver con la decisión que hemos visto y escuchado hoy, del Tribunal Superior de Bogotá, absolviendo en segunda instancia a Álvaro Uribe, con un voto disidente de una magistrada, magistrada Oviedo, que ha dado una clara muestra de lo que es realmente el rigor jurisprudencial de un magistrado de la República.

Mi comentario es el siguiente: **Es más persistente la lucha de las víctimas que la injusticia.**

Lo hemos visto en otros países. En Argentina, a las madres que salieron a reclamar por sus hijos desaparecidos, las tildaron de locas, las reprimieron, las persiguieron y a la postre llevaron a los tribunales, a los dictadores militares que desaparecieron a sus hijos.

Las abuelas recuperaron a sus nietos y sembraron la memoria de lo que fue el fascismo en el cono sur de este continente. Eso también ocurrió en Guatemala. Eso ha ocurrido en muchas partes del mundo, pero aquí también ha ocurrido.

Quienes me invitaron a asumir esta responsabilidad son las gloriosas madres de los hijos que han sido asesinados, masacrados en los falsos positivos, y también las madres que buscan a sus muchachos que están sepultados bajo toneladas de escombros en un lugar que lleva ese nombre, La Escombrera en Medellín. Y en ambos casos el responsable de esos crímenes de lesa humanidad es el mismo: ambos crímenes fueron cometidos bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.

Entonces, quiero decir que, lo que hoy se percibe tal vez para algunos como un triunfo, no es más que un momento en una larga lucha que hemos dado y seguiremos dando y que yo estoy persuadido que vamos a seguir ganando.



No por una venganza, no por un sentimiento de odio, sino porque en la sociedad colombiana tiene que brillar muy alto el sol de la verdad y de la justicia para las víctimas, que regularmente han sido las madres de los muchachos y muchachas de las periferias, de las grandes ciudades, las mujeres campesinas, aquellas que han además de padecido la violencia oficial, la violencia intrafamiliar, y que son las protagonistas de las luchas más importantes que se han dado de derechos humanos en Colombia, las madres, las mujeres, mujeres como las juezas que llevaron a Álvaro Uribe a una condena o las fiscales que también lo han llevado ante la justicia.

Esta lucha es larga y repito, las víctimas somos más persistentes que la impunidad y por eso vamos a triunfar al apóstol. La justicia va a prevalecer.

Segundo mensaje que quiero dejarles. El presidente Trump ha tenido el descaro, la desvergüenza de llamar a nuestro presidente líder del narcotráfico. Quiero expresar en este auditorio mi más sentido rechazo e indignación ante semejante abuso.

El presidente Petro merece todo el respeto porque es un líder nacional e internacional de la dignidad de los pueblos.

Narcotraficantes son aquellos que hay en Estados Unidos y que tienen infestado a ese país de un mercado de 5 millones de consumidores de cocaína, que no decrece y que nadie descertifica, además, porque aquí las certificaciones son unilaterales.

Entonces, si vamos a sacar cuentas, quien es un luchador contra el narcotráfico es el presidente Petro, y quien es un hombre que ha tolerado el narcotráfico es el presidente Donald Trump, si vamos a poner las cosas en su justa medida y proporción.

Y eso lo digo porque es necesario que hoy tengamos muy claro que la batalla nuestra es también por la soberanía, por la dignidad de nuestro país. Porque siempre estamos dispuestos a construir un diálogo y una relación de cooperación con otros países, incluido Estados Unidos.

Pero a lo que no estamos dispuestos, y lo que ha dicho claramente el presidente Petro, es a arrodillarnos y a suplicar que no se nos pisotee.

Sobre todo, cuando está de por medio la paz de nuestra región. Sobre todo, cuando lo que se está gestando es una intervención militar. Sobre todo, cuando lo que quieren hacer es entrar a este país, bombardear como lo han hecho en otros países y han generado genocidios que están hoy en la impunidad.

Estamos ante un momento crucial de la vida nacional en el que hemos demostrado ser la principal fuerza política del país. A mí me enorgullece también ver a las y los jóvenes en esta tarima y escuchar sus mensajes.

Nos dan profunda esperanza sobre lo que viene en este país. Como fueron jóvenes los que sacaron adelante el estallido social, como han sido los jóvenes quienes han dado lecciones también en este país de renovación política.

El Pacto Histórico es la fuerza política más importante que tiene hoy el país y lo he percibido caminando las calles, las casas, llenando auditorios, viendo que el alma de nuestro gran Pacto Histórico son los movimientos sociales, los pueblos ancestrales, las comunidades afrodescendientes, la gente del campesinado, las asociaciones juveniles y campesinas y de las juntas de acción comunal, los que no tienen techo, los que luchan por el agua, los que defienden el ambiente, aquellos que están en los lugares estratégicos de las luchas sociales y políticas de nuestro país. Ese es el Pacto Histórico y que va a ser la fuerza que va a gobernar a Colombia a partir del año 2026

Y aquí tenemos en esta tribuna a dos de esos representantes que nos enorgullecen. A una educadora, defensora de derechos humanos, luchadora y lideresa social, y ha defendido, no con palabras, no con discursos, sino construyendo un proyecto educativo durante toda su vida. Esa es Gilma Gómez.

Gilma ha hecho de la educación no solamente un motivo para movilizarse y para hacer lucha social y política, sino ha hecho sobre todo de la educación un sentido de vida. Es una educadora en todo el sentido de la palabra.

En la educación formal y en la vida social, que es tan importante en el colegio que ella ha sacado adelante como un proyecto vital y como un proyecto para la comunidad.

Estoy seguro de que cuando Gilma llegue a la Cámara de Representantes será una gran congresista dedicada a defender los derechos, a defender a la gente,

a defender a las nuevas generaciones, a los niños y niñas y a las familias de este país.

Y, por otra parte, mi compañero, amigo, colega en múltiples planos Alirio Uribe. Con Alirio tenemos una historia de vida tejida juntos. Hemos recorrido muchos caminos, hemos trabajado muchas iniciativas, hemos construido muchas realidades políticas, entre ellas esta, que es nuestro orgullo, Vamos por los derechos.

Alirio no es solamente un gran abogado y jurista, sino también es un defensor de derechos humanos en todo el sentido de la palabra. Ser defensor de derechos humanos significa tener un profundo sentido de humanidad, sentir el dolor realmente de los demás y sobre todo estar al lado de ellas y ellos cuando lo necesitan.

A pesar de las persecuciones, a pesar de las amenazas y a pesar de los intentos por eliminarlo, Alirio Uribe ha sido consecuente y coherente con la defensa de las víctimas y de los pueblos ancestrales, de las comunidades campesinas, de lo mejor de nuestro pueblo. Alirio ha llevado procesos judiciales que nadie se atrevía a llevar en su momento, y que él con su valentía, y con su sapiencia jurídica, ha sacado adelante. Mucho le debemos a Alirio Uribe en este país.

Así que no necesito decir que será un gran senador de la República, ustedes ya lo han escuchado a él en su discurso.

Voy a hablar de lo que represento en este momento y esa responsabilidad es, ni más ni menos, que tomar la bandera de nuestro Pacto Histórico y de quien lo ha liderado en el gobierno, el presidente Petro, y sacar adelante el segundo gobierno progresista y transformador.

Algo puedo decir de lo que ha aprendido el presidente Petro: cuando todo era silencio y miedo en el Congreso de la República, cuando este proyecto que ahora se intenta volver a resucitar, pero que ya está muerto políticamente, el de Álvaro Uribe estaba entronizándose, cuando todo era parapolítica y paramilitarismo en altas esferas del Gobierno, el presidente y entonces representante a la Cámara Gustavo Petro tuvo la valentía, tuvo la entereza, tuvo el temple de pararse ante el país y señalar de una manera clara quiénes eran los integrantes de la parapolítica.

Y por eso llegó a ser un congresista reconocido y escuchado. Y modestamente, cuando llegué al Congreso, decidí tomar ese ejemplo y desarrollarlo y por eso llevé a cabo debates de control político que me han traído a 13 años de litigio, que continúa con el expresidente de Álvaro Uribe. Quien se podrá decir lo que se quiera, pero es el primer jefe de Estado que ha sido condenado por la justicia. Eso no lo borra nadie.

Entonces, estoy preparado para asumir este reto. Voy a hacerlo con toda la responsabilidad, la dedicación, con todo el cuidado para no ir a equivocarnos sobre lo que considero es lo esencial de esto y es que, el que gobierne, tiene que obedecer al pueblo, no imponerle al pueblo. Es como dicen los pueblos ancestrales: mandar obedeciendo. Eso es lo que yo les propongo a ustedes como proyecto de ser un presidente de la República.

Y para eso he escuchado atentamente, durante años, a la gente y he pronunciado ocho discursos hasta ahora. Algunos me reprochan, me dicen: “bueno, pero ¿por qué escritos?”, porque quiero que quede claro lo que estoy diciendo. No quiero equivocarme en una palabra de lo que estoy diciendo.

He propuesto en esos ocho discursos varias cosas:

La primera es una forma distinta de hacer política. Es que, en nuestra vida, como dirigentes políticos, mujeres y hombres, sea realmente una práctica de lo que decimos que queremos. No vamos a cambiar la política si nosotros mismos no cambiamos.

Y eso significa que tenemos que ser austeros, que tenemos que ser respetuosos y coherentes en lo que hacemos. Y yo he intentado que esta campaña sea eso, una demostración de la coherencia. No me he maquillado. No he pedido una gran empresa publicitaria que cambie mi imagen. Sigo siendo el mismo del primer día y espero serlo hasta el 7 de agosto del año 2030.

No me he puesto a insultar a ningún candidato ni candidata ni hacer campañas sucias y mi campaña hasta ahora tiene uno de los más modestos recursos y presupuestos que hay, estoy seguro de lo que se está haciendo en Colombia en materia de campaña electoral.

Estamos en una campaña de pies descalzos, con la gran solidaridad y el trabajo de muchas comunidades y organizaciones populares, que han llenado plazas, auditorios, que han traído ollas comunitarias, con su propio esfuerzo,

sin las casas politiqueras, sin emplear miles de millones de pesos, porque somos eso: la fuerza ciudadana y la fuerza social puesta al servicio del cambio.

He propuesto que pasemos de las reformas, que son un gran logro de nuestro Gobierno, a una fase de profundizar esos cambios, de revoluciones. Revolución no es sinónimo de armas o violencia. Revolución es un cambio esencialmente de conciencia política, que es lo que estamos viendo en el país. Hoy tenemos una ciudadanía, unos movimientos sociales, unas fuerzas políticas cada vez más fuertes en su conciencia.

Por eso no es un tema de armas, no es de violencia. Desde aquí llamo a los grupos armados a que, si son consecuentes los que dicen tener ideología política, vengán, dejen las armas, hagamos diálogos de paz y contribuyamos al cambio social desde la legalidad política.

Porque la fuerza no está en las armas, está en la conciencia de la gente. En su unidad, en su solidaridad, en su organización y por eso les propongo que hagamos una Revolución Ética, que es la primera revolución para cambiar la conciencia.

Que acabemos con el machismo y el patriarcado, que acabemos con el racismo, que acabemos con el clasismo, con el odio hacia los pobres, que acabemos con la violación de los derechos humanos y el menosprecio de la vida y de la dignidad. Ese la Revolución Ética que propongo y a la cual contribuyen, en primer lugar, las víctimas de la violencia que han vivido en carne propia la muerte y el dolor.

Revolución Social y Económica, Revolución Agraria para que Colombia pueda hacer esa potencia agroalimentaria que queremos, que nos convirtamos realmente en un país cuyo motor es la economía campesina, la economía de la biodiversidad, la economía del agua, que nos permita ser una potencia mundial de la vida, como dice nuestro programa.

Eso es lo que queremos con esa Revolución Económica y Social para acabar con la pobreza, para acabar con la desigualdad, para acabar con los territorios que han sido excluidos del desarrollo, territorios urbanos y territorios rurales.

Aquí en Bogotá necesitamos hacer una reforma urbana que permita a la gente tener vivienda, educación, transporte, calidad de vida a los jóvenes que les permita vivir tranquilamente sin tener que decidir si estudian o trabajan, o

trabajan y estudian, o ninguna de las dos cosas y terminan metidos en el reclutamiento forzado con los grupos y las estructuras criminales.

Eso es lo que necesitamos, una Revolución Social y Económica, Ética y Política.

IVÁN
Cepeda
Presidente



LA REVOLUCIÓN
POLÍTICA Y DEMOCRÁTICA

Bogotá, Cundinamarca

Queridas compañeras y queridos compañeros,

He decidido pronunciar el noveno de mis discursos programáticos -el último de esta primera etapa de campaña- aquí, en la ciudad de Bogotá: capital no solo de nuestro país, sino también de muchas de las luchas y conquistas más emblemáticas del pensamiento y la acción progresista.

Bogotá ha sido el escenario de grandes transformaciones. Fue aquí donde gobernó quien hoy es nuestro presidente Gustavo Petro Urrego, y donde comenzaron a tomar forma las primeras políticas que pusieron en el centro la vida y la dignidad humanas, la defensa de lo público y la urgencia de un cambio social real.

Por eso la experiencia de la Bogotá Humana no solo marcó una nueva forma de gobernar: se convirtió en un hito fundamental en nuestro camino hacia una nación más justa y más humana. Gracias, Bogotá rebelde y democrática; a sus movimientos sociales, populares y ciudadanos.

He elegido esta ciudad para presentar este noveno mensaje dedicado a esbozar mi propuesta de Revolución Política Democrática, la que completa mi propuesta general programática cuyo título es el siguiente: ***Las tres revoluciones para una Colombia potencia mundial de la vida.***

Para el Pacto Histórico en eso consisten nuestra labor electoral: no en la política del espectáculo ni en la compra de conciencias o el derroche de miles de millones de pesos de campañas de insulto y agravio. Lo nuestro consiste en una propuesta pensada y dialogada con la gente, que le ofrecemos al país para elegir en 2026: el segundo gobierno de la gran transformación histórica y social en Colombia para continuar la obra de nuestro digno presidente Gustavo Petro.

A lo largo de estos discursos he empleado conscientemente la palabra revolución para definir la necesidad de intensificar, crecer y hacer irreversibles las transformaciones sociales ya logradas en nuestro primer Gobierno progresista.

¿A qué clase de revolución me refiero?

La revolución que necesita Colombia debe ser pacífica, participativa y una transformación profunda, no meramente superficial.

Cuando digo que debe ser pacífica, me refiero a que el cambio no puede surgir de la violencia: no es con las armas, es con las conciencias. No es con la fuerza, es con la inteligencia y la imaginación del pueblo colombiano.

En este sentido, aprovecho para hacer un llamado claro y directo a todos los grupos armados: cesen sus acciones violentas contra la población civil. Respeten las normas humanitarias. No más asesinatos de líderes y lideresas sociales, no más persecuciones a quienes firmaron la paz. Les invito a dejar atrás la vía armada y sumarse al camino del diálogo, de la transformación pacífica.

Esta revolución también debe ser participativa, es decir, democrática. No puede ser impuesta desde arriba por un caudillo o por un partido autoritario. El verdadero cambio social nace de la conciencia colectiva, del deseo reflexionado y voluntario de una ciudadanía organizada, que construye su destino desde la base.

Y, finalmente, debe ser una revolución profunda, que transforme de verdad. No basta con maquillajes institucionales o reformas simbólicas. El cambio debe tocar las estructuras, cuestionar las costumbres y renovar las mentalidades. Por eso, es un proceso que toma tiempo, que requiere paciencia, compromiso y visión de largo plazo.

Nuestro segundo Gobierno progresista representa también un segundo paso en ese camino de transformación. Un paso hacia un cambio que debe ser irreversible.

He hablado de revoluciones en tres grandes campos: una revolución ética, que significa, por su esencia, un hondo cambio en el campo de la conciencia, de la cultura y de la educación. He hablado también de una Revolución Económica y Social, la Revolución Agraria, la lucha por la igualdad social y contra la pobreza, la revolución de las transformaciones territoriales.

Hoy les hablaré brevemente de mi propuesta en el campo de la Revolución Política, de la democracia, de la paz, y del poder constituyente.

Necesitamos superar los males que han afectado y que afectan el ejercicio democrático en nuestro país: el miedo a la democracia de los más poderosos, el odio hacia los pobres y el desprecio hacia las capas medias, el conservatismo que se resiste a las reformas sociales, a cualquier cambio por mínimo que sea, la violencia y el uso de las armas para zanjar los conflictos que han llevado desde la persecución política hasta el genocidio. La descomposición de la política por efectos de la macrocorrupción.

Ese es el círculo vicioso del miedo, del odio, del egoísmo, de la violencia y la degradación de la política que impide a la gente, los jóvenes, las mujeres, los sectores sociales, quienes no tienen aparatos armados y mafiosos a su servicio, participar libremente en la vida pública. Eso es lo que tenemos que derrotar y llevar a que sea una historia del pasado, una pesadilla que habremos superado en el futuro de la transformación progresista.

De modo que hoy la consecuencia de esos males es un imaginario negativo sobre la política. La creencia en muchos de que sea cual sea el proceso o la ideología de turno, todo termina siempre en corrupción, mafias y violencia.

Para contrarrestar esa imagen negativa, hay que recordar, antes de que genere una peligrosa despolitización, que en nuestra sociedad también han existido mujeres y hombres que han sacrificado su vida y que han entregado con coherencia su esfuerzo por el pueblo colombiano y que son nuestro referente de memoria, que son las personas que nos iluminan en este camino. Su ejemplo es el que nos anima a organizar y movilizar a la gente.

Si queremos entonces abrir un nuevo camino político para el país, se hace necesario articular dos dinámicas que representa bien el Pacto Histórico.

Por una parte, vamos a seguir fortaleciendo la movilización y el poder de los sectores populares, y por otra, vamos a construir un verdadero acuerdo nacional que sea el resultado de un diálogo entre todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, y no simplemente la reproducción de un nuevo pacto elitista en Colombia.

1. Poder constituyente y movilización social

Como ha dicho el presidente Petro necesitamos un poder constituyente activo, permanente, con capacidad transformadora.

¿Qué significa en términos sencillos el poder constituyente?

Es una actitud y una práctica constante de la ciudadanía, es el poder de la gente, no únicamente cada cuatro años, sino todos los días. Es entender la democracia como un proceso siempre vivo, inacabado y siempre en construcción.

Significa que el pueblo organizado en su diversidad puede y debe transformar las instituciones constantemente, para que respondan al bien común. No esperar a que los de arriba cambien las cosas, sino ejercer presión, iniciativa y control desde abajo.

Sin duda, en nuestro Gobierno ha crecido la conciencia política y el pueblo colombiano es cada vez más perceptivo y claro sobre cómo transformar la realidad. Esa es tal vez la mayor conquista que tenemos hoy en este gobierno, porque un pueblo que despierta a la conciencia de la revolución social es imparable y hoy lo somos en Colombia.

Tenemos ya una ciudadanía que sabe movilizarse y reclamar, como lo vimos en las calles durante el estallido social de 2021, en las mingas indígenas, en las marchas de mujeres y en tantos otros escenarios. El pueblo colombiano no es apático, quiere participar, pero siente que las estructuras políticas están fallando. Entonces, nuestro deber es velar porque se haga realidad la participación desde abajo.

No son solo las élites, también los dirigentes del Pacto Histórico debemos curarnos de un mal que padecemos: la sordera política, la indiferencia hacia los movimientos sociales. Y la única forma de hacerlo es yendo al encuentro de la gente en los territorios, en los barrios populares, allí donde se dan las verdaderas luchas de nuestro pueblo.

Como lo ha pedido hasta la saciedad el presidente Petro: requerimos un poder constituyente, un poder ciudadano y popular, un sujeto de cambio que no pueda ser sometido ni doblegado.

En nuestro segundo Gobierno progresista, nos proponemos desatar un amplio proceso de participación, deliberación y acción política, del movimiento social, de las organizaciones, de las comunidades y las ciudadanías. Este es un factor determinante para el cambio social.

2. El Acuerdo Nacional soportado sobre el poder constituyente

Mi propuesta, en consecuencia, es que, sobre el plano de la movilización y el poder constituyente fortalecidos, se desarrolle un diálogo nacional que conduzca un verdadero acuerdo de toda la nación.

La movilización social y el poder constituyente, en este caso, son la garantía de que no iremos simplemente a un pacto de élites o hacia un acuerdo de reformas cosméticas. Serán el escrutinio y la vigilancia social las que impida que lleguemos a una concertación tibia y superficial que no resuelva los problemas de fondo del país.

Óigase bien: una vez elegido como nuevo presidente de la República, convocaré a todas las fuerzas políticas, sociales y económicas, comenzando por las organizaciones sociales y populares, a que conformemos la Mesa de Diálogo Nacional, en la que sin perder el tiempo en conversaciones retóricas y, para decirlo en lenguaje popular, “sin carreta”, definamos entre nosotros los siguientes puntos fundamentales:

- Una agenda temática que deberá incluir necesariamente las reformas sociales que resta por hacer, la búsqueda de la paz en los territorios y en el país, un modelo diferente para tratar el problema del narcotráfico y la gran minería ilegal y también legal, la cuestión de las transformaciones territoriales.
- Un cronograma en que lleguemos en un tiempo razonable al acuerdo buscado sin afanes, pero sin dilaciones.
- E igualmente uno o varios mecanismos de implementación de los acuerdos, que pueden ser una asamblea nacional constituyente, o leyes y reformas constitucionales que adoptemos por una vía expedita.

El problema de los acuerdos nacionales ha sido el que sean de élite o insuficientes en la participación real y decisoria de las organizaciones sociales y populares.

El Acuerdo Nacional, en este caso, no será un club privado, donde solo entran socios privilegiados, mientras el pueblo se queda en la puerta sin ser admitido.

En nuestro caso, el pueblo estará sentado en la mesa del gran diálogo nacional, pero también estará en las calles atentos a si se requiere su movilización para garantizar que no sea burlada la voluntad del constituyente primario.

Quiero concluir esta reflexión con una idea que nace de lo más hondo de mis convicciones. Después de dos décadas de intervenir en mesas de paz como facilitador, mediador y negociador, he llegado a la conclusión de que siempre es posible llegar a un acuerdo, no importa qué tan distantes estén las partes y sus representantes.

No habrá paz completa en Colombia si la ciudadanía siente que no cuenta, que sus problemas no importan, que sus derechos no son respetados.

Porque la paz se construye hablando y escuchando, reconociéndonos todos como partes de un mismo país, en el que cabemos con nuestras diferencias y diversidades. ¡Porque el Acuerdo Nacional no se circunscribe al Congreso y a las reformas, significa llegar a un acuerdo fundamental y nacional que nos permita abordar los problemas de fondo!

No le tengamos miedo a la democracia participativa. Tengámosle miedo, más bien, a perpetuar una democracia vacía y formalista que alimenta la frustración en el país. Avancemos y abracemos el desafío de deliberar, de escuchar al contradictor, de buscar consensos desde la base, de lograr el Acuerdo Nacional. Así se teje la paz: reconociendo la dignidad de cada colombiano y colombiana, garantizando que nadie quede por fuera de ese diálogo de todas y todos.

Compañeras y compañeros:

Llegó la hora de la participación. Somos la primera fuerza política en el país que organiza una consulta democrática para elegir a sus candidatas y candidatos. Esa es la mejor demostración de que somos una fuerza organizada, amplia e incluyente que puede guiar los destinos de nuestra nación.

Yo soy un hijo más de nuestro gran pueblo, que hoy tiene la responsabilidad de seguir adelante con la tarea que ha desempeñado con tanto merecimiento y sacrificio nuestro presidente Gustavo Petro.

Mandaré obedeciendo, y escucharé dialogando.

Hoy estoy listo, con todas y todos ustedes, para comenzar el segundo periodo que será el de las revoluciones políticas, sociales y éticas que nos llevarán a ser una potencia mundial de la vida.

IVÁN
Cepeda
Presidente



IVÁN CEPEDA
EN MONTERÍA

Montería, Córdoba

Queridas compañeras y queridos compañeros:

Me siento realmente emocionado al ver esta multitud de luchadoras y luchadores sociales. Saludo al movimiento de los sin tierra y sin techo. Saludo especialmente a las víctimas del paramilitarismo en el departamento de Córdoba.

Saludo al movimiento campesino. Saludo a las víctimas de la Unión Patriótica, que sé que están aquí también presentes. Saludo a mis compañeras y compañeros del Pacto Histórico, precandidatas y precandidatos al Senado y a la Cámara. A los jóvenes, a las mujeres que con su lucha valiente han desafiado la violencia. A la gente de la Universidad de Córdoba. A todo el movimiento social popular de este gran departamento.

Como lo es hecho en otros escenarios decir mis primeras palabras en solidaridad y respaldo a nuestro presidente Gustavo Petro Urrego, quien viene siendo objeto de toda clase de ataques, calumnias, mentiras por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trum, por ser un mandatario Petro digno, respetuoso de otras naciones y otros pueblos, pero además un mandatario que no se arrodilla ante ningún poder imperial.

Cuando el país estaba bajo el imperio del poderoso paramilitarismo, cuando los dueños de grandes extensiones de tierra arrebatában a los campesinos millones de hectáreas, cuando la Universidad de Córdoba era tomada por los jefes paramilitares, Petro, como representante a la Cámara, fue el primer congresista en elevar su voz valientemente para denunciarlo.

Ha defendido a los campesinos de estas tierras, a la gente que ha sido victimizada por la violencia. Ha defendido siempre que la gente pueda vivir con dignidad, salir de la pobreza, cultivar la tierra y hacer de Colombia una potencia mundial de la vida como la merecemos todos los colombianos.

Y como el presidente Petro, muchos otros dirigentes políticos y sociales, mujeres y hombres, se han levantado en estos años para construir la justicia, reclamar la reforma agraria, reclamar que Colombia sea un país libre y soberano. Y muchos de esos líderes provienen de este departamento, que es un ejemplo de luchas sociales.

Y que personalmente ha acompañado en algunas de ellas.

Debo decir que soy un modesto seguidor del presidente Petro. En mis debates de control político en el Congreso, en mis luchas contra el paramilitarismo y también en las causas judiciales que llevaron a una condena en primera instancia judicial al presidente Álvaro Uribe Vélez.

Ayer fue absuelto en segunda instancia. Una decisión que, por supuesto respetamos, pero que no nos obliga, podemos y acudiremos a la justicia hasta que haya verdad y justicia plenas con relación a la responsabilidad penal del dueño de la hacienda El Ubérrimo.

Debemos, compañeras y compañeros, ahora elegir nuestro segundo gobierno de transformaciones históricas.

Necesitamos llenar el Congreso, el Senado y la Cámara de dignos representantes del pueblo para que las leyes y las actuaciones del Congreso sean para el pueblo y no para una minoría elitista que sigue legislando para su propio beneficio.

Estoy comprometido con la reforma agraria. Seguiremos entregando tierras y volviéndolas productivas para el campesinado. Pero daremos un paso más: vamos a radicalizar la reforma agraria. Yo la he llamado la Revolución Agraria, puesto que convertiremos la economía campesina familiar y comunitaria en el centro de un proceso de desarrollo, que nos lleve a ser una potencia agroalimentaria en el mundo.

Necesitamos un Plan Nacional de Vías Terciarias para que los campesinos puedan llevar sus productos a los grandes mercados de las ciudades. Necesitamos acabar con el abismo que hay entre ciudad y campo.

Necesitamos que todos los municipios, corregimientos y veredas tengan agua potable y energía eléctrica. Necesitamos que los campesinos puedan producir sus alimentos y llevarlos, con precios que sean justos, a los mercados y que no pierdan con intermediarios que los dejan en la ruina.

Necesitamos que el campo se transforme en el motor de la gran economía nacional del progreso y las oportunidades, para que se acabe el hambre y la pobreza en Colombia.

Este Gobierno aspira a distribuir 1 millón de hectáreas al finalizar. Pues bien, compañeras y compañeros, seguiremos por ese camino. El campesinado tendrá tierras productivas y las hará producir para los grandes mercados de Colombia y del mundo.

Pero, en segundo lugar, no basta con la revolución agraria, necesitamos luchar contra la pobreza, contra la exclusión y la desigualdad. Necesitamos que el próximo gobierno emprenda un programa masivo de vivienda para todos los colombianos que viven sin techo.

No basta con la reforma agraria, necesitamos la reforma urbana también que dé la posibilidad a quienes habitan en los cordones de miseria en las grandes ciudades de tener una vida digna y próspera como todos los colombianos.

Necesitamos que la contratación pública en Colombia no esté mediada por aquellos que utilizan los recursos del erario para enriquecerse con la corrupción.

Necesitamos que el Estado pueda contratar con las juntas de acción comunal, las asociaciones de jóvenes, las madres comunitarias, las asociaciones populares de los barrios, para que sean esas sociales las que también puedan emprender obras públicas, generar desarrollo y estimular la economía popular. Vamos hacia economías populares y no solamente hacia la economía formal de las grandes empresas.

Necesitamos, compañeras y compañeros, que el pueblo tenga capacidad decisoria. Necesitamos el poder constituyente del que ha hablado el presidente Gustavo Petro.

Que, si el Congreso no quiere aprobar las leyes como la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la salud, sea la movilización organizada y pacífica del pueblo colombiano el que impulse las grandes reformas y la Revolución Social que requiere nuestro país para la democracia, la paz y la equidad.

Así que necesitamos fortalecer nuestras organizaciones. Necesitamos que las mujeres y los jóvenes tengan cada vez una mayor participación en la vida social y pública, capacidad decisoria y posibilidad de participación real en todas las esferas de la vida política.

Necesitamos la paz. Llamo desde aquí a los grupos armados a que respeten a la población civil, a que no amenacen y persigan a los líderes y lideresas

sociales, a que respeten las normas humanitarias, a que renuncien al uso de la violencia y vengán al diálogo para construir juntos una nueva Colombia sin armas, sin guerra, sin violencia.

En estos años hemos logrado ir derrotando poco a poco la violencia el autoritarismo, la pobreza, la exclusión social. Pero debemos en los próximos 4 años consolidar nuestros triunfos, consolidar la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la educación, la reforma a la salud, lograr la Revolución Agraria, lograr la lucha contra la pobreza que la erradique definitivamente, desarrollar la economía popular, generar vivienda, trabajo y progreso para todos y todas en este país, que puede ser y debe ser, como lo hemos dicho, una potencia mundial de la vida en el que estén en el centro ustedes, el pueblo colombiano.

IVÁN
Cepeda
Presidente



IVÁN CEPEDA
EN VALLEDUPAR

Valledupar, Cesar

Queridas y queridos compañeros:

Me siento supremamente honrado que este acto sea aquí frente al campesinado de la costa Caribe de Colombia. Y en un sitio que tradicionalmente ha sido de las élites, un sitio que ha sido utilizado por quienes más tienen poder y riqueza, pero que comienza a llenarse con nuestro gobierno progresista del pueblo.

Eso es lo que tenemos que hacer. No más recintos prohibidos para el pueblo. El pueblo es el que gobierna, el pueblo es el que manda, el pueblo y el campesinado deben tener derechos a una vida mejor, como lo hemos tratado de hacer y lograr en estos años.

Debo decir aquí que el presidente Gustavo Petro es un hombre bueno, recto y probo y estamos con él.

Lo conozco desde hace décadas. Hemos compartido luchas con el presidente Petro. Siempre lo he visto defender a la gente. Si hay algo que lo caracteriza como ser humano es que no le teme a defender los derechos de la gente y del pueblo colombiano. Y por eso lo odian los poderosos, los mafiosos y los criminales consideran que Petro es su enemigo.

Pero desde aquí decimos, Petro es un mandatario digno y detrás de él está su pueblo para defenderlo y para defender nuestra soberanía.

Cuando el paramilitarismo y la parapolítica gobernaban este país, cuando era absolutamente impensable que alguien levantara la voz para señalar a los tenebrosos parapolíticos; cuando se estaban perpetrando las masacres en los territorios y le estaban quitando a usted de las tierras se las estaban quedando y negociándolos con las grandes empresas; cuando la motosierra y las masacres en espectáculos dantescos era lo que veíamos en la costa Caribe; Gustavo Petro fue quien se paró a decir en el Congreso, con nombre propio, a cada uno de quienes estaban detrás de esa industria de la criminalidad y del despojo.

Por eso lo queremos y por eso lo respaldamos. Por eso es nuestro presidente de la República.

No le perdonan su valentía, no le perdonan que sepa decir la verdad y, sobre todo, no le perdonan el cariño que le tiene, el amor que le tiene la gente, especialmente la gente de abajo, los campesinos y las campesinas.

No vamos a permitir que una potencia extranjera mancille nuestra dignidad. Pasaron las épocas en que los presidentes de Colombia eran simplemente los mandaderos de los presidentes estadounidenses.

Hoy tenemos en este país una conciencia política distinta, y si quieren venir a darnos órdenes aquí en Colombia, si quieren venir a mancillar nuestra dignidad, se van a estrellar con un pueblo digno.

Que quienes les gusta recibir ese tipo de órdenes y ser abyectos y sumisos a ese poder extranjero, que se vayan para Miami, a ver si allá pueden tener una vida mejor, pero aquí se queda el pueblo colombiano.

Estamos dispuestos a construir una relación respetuosa con cualquier país del mundo. Estamos dispuestos a tener una relación constructiva con el gobierno de Estados Unidos, pero que no nos traten como sus lacayos, como sus esclavos, como una colonia.

Pasó ese tiempo histórico y deben entenderlo, aquí en Colombia somos un pueblo con dignidad y soberanía ante todo y de eso es fiel representante el presidente Petro.

Las organizaciones sociales a las que me debo, porque soy un hijo de nuestro pueblo, me han pedido que asuma la responsabilidad de sacar adelante un segundo periodo del gobierno progresista en este país.

Yo concibo la política como un servicio, ante todo. Soy una persona que ha intentado en su vida alejarse de la ambición y de la codicia. Y no digo que no tenga intereses como todos, pero mi función esencial en la política es servirle a la gente, a las víctimas de la violencia de este país.

A quienes sufren en los territorios de nuestra patria la violencia, la pobreza y la exclusión. A los campesinos de Colombia, a quienes respeto, admiro y por quienes tengo una profunda confianza en que son el futuro de esta nación. Ustedes son quienes mandan en un gobierno de Iván Cepeda a partir del 7 de agosto 2026.

Así que lo que haré, como una de mis principales políticas de gobierno, es continuar avanzando sin ninguna vacilación en la gran Revolución Agraria que requiere Colombia, que es la profundización de la reforma agraria.

Y que se trata no solamente de seguir entregándole la tierra al campesino, la tierra que le fue robada y usurpada, sino también en convertir la economía campesina en el principal motor de la economía nacional para que seamos, como lo ha dicho el presidente Petro, una potencia mundial agroalimentaria.

El campesinado es el sujeto de las transformaciones más importantes del país, por lo menos de una parte de ellas, para derrotar el hambre, para derrotar la pobreza, para cultivar los alimentos que podemos llevar a los mercados en las grandes ciudades y exportar a mercados internacionales.

Por eso en mi gobierno garantizo que la economía campesina popular, que la economía familiar de las zonas rurales de este país va a estar en el centro de mis preocupaciones y de mi política económica.

No es posible que quien tiene que producir los alimentos, que quien tiene la responsabilidad de hacer de este país un país productivo, viva en la pobreza. Por lo tanto, vamos a erradicar la pobreza rural en primer lugar.

Hay que acabar con la exclusión de los territorios, con municipios, veredas y corregimientos que no tienen agua potable, que no tienen electricidad, en los cuales la gente que está rodeada de la riqueza natural se muere de hambre. Eso no puede seguir ocurriendo en Colombia ni tampoco que la economía del narcotráfico sea la principal economía cuando está la economía campesina, que es la que debemos nosotros impulsar como país.

Necesitamos una gran Revolución Agraria que sea la clave para acabar con la violencia y la guerra.

Desde aquí les digo a los grupos armados que cesen la violencia contra la población civil, que no sigan asesinando a líderes y lideresas sociales, que respeten las normas humanitarias y que vengán a un diálogo para que logremos la paz de Colombia acompañada de las transformaciones económicas que requieren los territorios del país.

Como también les digo desde aquí, a quienes detentan el poder, a quienes utilizan estos recintos habitualmente a quienes son los que tienen el mayor poder económico, a que cedan parte de ese poder, a que dialoguemos para

hacer los cambios y a que nos sentemos a hacer una paz duradera porque la paz es de todas y todos, a los ricos, a los poderosos, a quienes han ejercido el poder, los invito a un diálogo nacional para hacer una concertación sobre los grandes problemas y poder salir de la pobreza, poder salir del atraso y ofrecer progreso y oportunidad unidades para toda la nación. Esa es mi propuesta.

Pero también debo decirlo, si quienes tienen más poder en Colombia creen que no podemos hacer los cambios, se van a enfrentar a la movilización y a la organización social.

También desde aquí estamos dispuestos a decirles que podemos dialogar, que podemos llegar a acuerdos nacionales, pero también nos podemos movilizar como se hizo en el estallido social y como se ha hecho en otros momentos de la historia de este país para que se produzcan los verdaderos cambios que requiere Colombia, que no puede seguir siendo uno de los países más desiguales del planeta.

Es necesario que llegue al fin la justicia social y la equidad para Colombia y acabemos definitivamente con la pobreza en todas sus formas. Y también con la corrupción porque no puede ser que mientras el pueblo trabajador se levanta todos los días a ganarse la vida, algunos pocos, que tienen control sobre el aparato estatal, se quedan con los dineros públicos, con la contratación, con el sudor y con el trabajo del pueblo trabajador colombiano.

Es necesario un cambio, un cambio político en Colombia. Necesitamos cambiar el Congreso de la República, necesitamos hacer que el Congreso legisle a favor del pueblo.

IVÁN
Cepeda
Presidente



IVÁN CEPEDA

TRAS LA VICTORIA EN LA CONSULTA DEL PACTO HISTÓRICO

Bogotá, Cundinamarca

Queridas compañeras y queridos compañeros:

El Pacto Histórico, sin duda, es la fuerza política más grande, más poderosa, más influyente que hay hoy en el país.

No solo por esta demostración cuantitativa electoral, sino fundamentalmente porque ha hecho la apuesta por la democracia. Hemos demostrado que somos una fuerza esencialmente democrática, que no le teme a la democracia y que se ha medido en las urnas con los ciudadanos y ciudadanas.

Lo primero, por supuesto, es agradecerle a las más de 2 millones, ciudadanas y ciudadanos, que han depositado su confianza y me han entregado este mandato como ya candidato del Pacto Histórico al próximo momento de este proceso.

Deseo agradecer, por supuesto, a los ciudadanos y ciudadanas, pero en especial quiero hacer llegar mi voz, nuestra voz de gratitud, a las y los campesinos de este país, a los pueblos indígenas, a las comunidades afrodescendientes, a la gente que, en las barriadas populares, sorteando inmensos esfuerzos, ha logrado votar hoy a pesar de todas las dificultades que hemos visto se han presentado.

Y en particular, porque debo mi gratitud durante años de lucha a ese grupo humano que son las víctimas de este país, mencionarlas también en especial.

Por supuesto, quiero agradecer a mis compañeras y compañeros del Pacto Histórico, precandidatas y precandidatos, pero aquellos que dejaron en un momento determinado su aspiración presidencial y se convirtieron en piezas fundamentales de este triunfo.

A quienes han recorrido el país en su condición de precandidatos y precandidatas al Senado de la República y la Cámara de Representantes, y por supuesto a mi equipo de trabajo que has hecho una labor impecable. Mis estrategias, todo mi equipo, por favor, desde aquí elevo una inmensa gratitud.

Nuestros adversarios políticos tejieron una serie de obstáculos para impedirnos llegar a esta instancia. Debemos señalar que es realmente indignante, inadmisible que a estas alturas no tengamos personería jurídica como movimiento político después de semejante votación, así que hago un llamado respetuoso, pero al mismo tiempo vehemente al Consejo Nacional Electoral: ya es hora de que nos reconozca nuestra personería, porque no estamos hablando de un simple y pequeño grupo de ciudadanos. Somos, repito, la fuerza más influyente. Necesitamos que nuestra condición legal y jurídica sea sin más dilaciones reconocida por el Consejo Nacional Electoral. Somos una franja decisoria en el país.

Igualmente llegará el momento de hacer análisis, no con ánimo retaliatorio ni generar una discusión inútil, pero a la población rural no se le puede volver a excluir en este proceso electoral. Ni a los colombianos y colombianas que residen en el exterior, ni a la gente que no puede tener acceso a una urna, como cualquier ciudadano, y tiene que recorrer distancias enormes para llegar a votar.

Así que hacemos un llamado porque analizaremos los obstáculos que se presentaron, cómo fueron trasladados a última hora puestos de votación y también mesas que hubieran podido facilitar que nuestra votación fuera seguramente mucho más significativa de lo que ya es.

Hemos hecho esta campaña con pulcritud, con austeridad y lo vamos a demostrar cuando presentemos nuestras cuentas que son, hay que decirlo, irrisorias, comparativamente hablando a lo que se gasta en los certámenes electorales.

Hemos hecho una campaña sin insultos, no hay un solo candidato o candidata que haya sido calumniado, acusado falsamente denigrado, hemos respetado a cada uno de nuestros contendientes y así lo seguiremos haciendo en este camino electoral que nos está por delante.

Vamos a seguir en el camino de la austeridad, del respeto, de la transparencia y de la ética, porque dijimos que esto es un programa que también incluye la Revolución Ética y esa no es una frase, es el comienzo de la demostración que se puede hacer política en Colombia de manera recta, transparente y sin corrupción.



Lo dije al comienzo, pero lo reitero, nuestro conocimiento a nuestra compañera Carolina Corcho quien también ha tenido una victoria importante en este certamen electoral, porque ha obtenido una cantidad muy significativa de respaldos que valoramos y a quien invitamos a seguir tejiendo desde ya este camino hacia la victoria.

Nosotros hemos dicho desde el comienzo: vamos a avanzar porque tenemos todos los ingredientes, todas las condiciones para construir un segundo gobierno progresista y de cambio en Colombia.

No solo tenemos las candidatas y candidatos que hoy ya tienen un respaldo enorme de la ciudadanía, y que han pasado ya por el filtro de la primera elección en este proceso.

En segundo lugar, porque tenemos un programa, una propuesta programática que he presentado al país en el día de ayer y cuyo título es: Las tres revoluciones para una Colombia potencia mundial de la vida. Está a disposición de todas y todos ustedes para que discutamos porque no voy a ir a debates, lo digo de una vez claramente, a insultar con otros precandidatos ni a amenazarnos ni a denigrarnos.

Les hago el reto de que hablemos sobre ideas, propuestas, conceptos de país y no sobre amenazas, insultos, calumnias contra personas y menos contra el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que merece todo el respeto en Colombia y en el mundo por la labor que ha hecho como jefe de Estado.

A las otras fuerzas políticas afines que tienen un espíritu democrático, que quieren un cambio social en Colombia, que están dispuestas a caminar para construir una paz auténtica, para avanzar en las reformas sociales, en la Revolución Agraria que hemos propuesto, las invitamos desde ya a sentarnos a discutir el camino para construir un gran frente amplio que ganará las elecciones en primera vuelta.

Ese frente amplio que queremos no es una alianza electoral. Es una fuerza política que queremos se construya sobre compromisos programáticos, no burocráticos, y que sobre todo cumpla un programa como mandato popular a partir del 2026. Así que está hecha esa invitación desde ya.

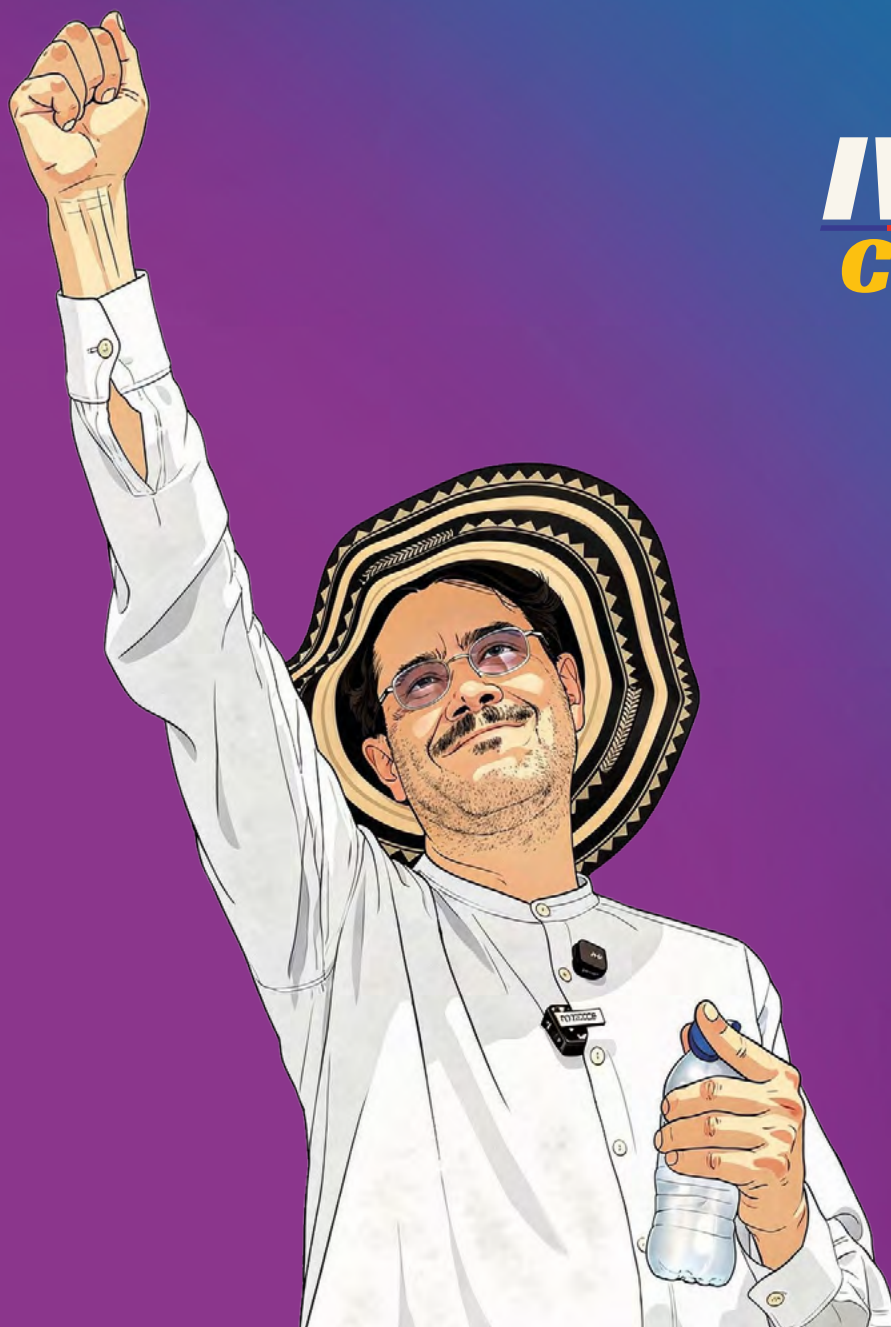
Por último, quiero reiterar esta noche nuestro respaldo y reconocimiento al presidente Gustavo Petro, quien ha sido nuestro guía y quien nos ha conducido a este punto y exigir en esta noche, especialmente para él, el respeto

mayor, no solamente en la vida política del país, sino, repito, ante otros gobiernos y ante otras instancias que quieren hoy intervenir de manera grosera en nuestra realidad política, social y económica.

El presidente Petro merece todo el respeto y así su fuerza política lo hará también valer por la vía democrática y pacífica que nos caracteriza.

Entonces, compañeras y compañeros, vamos hacia la construcción del segundo gran período de las transformaciones históricas que nos va a convertir en una nación, potencia mundial de la vida, potencia agroalimentaria, sociedad auténticamente democrática, justa y libre.

IVÁN
Cepeda
Presidente



IVÁN CEPEDA
EN PASTO

Pasto, Nariño

Queridas compañeras y queridos compañeros:

Durante más de 200 años, un pequeño grupo de élites políticas y económicas ha gobernado a Colombia como si se tratara de un país que les es propio solo a ellos.

Se reparten y repartían las tierras despojadas, los contratos del Estado, la justicia y hasta los sueños de nuestro pueblo. Hicieron creer que así debía ser por los siglos de los siglos, que la pobreza era nuestro destino y la riqueza era su derecho y privilegio.

Enseñaron a soportar dócilmente el hambre, a conformarse con la injusticia, a soportar el crimen e incluso agradecer la servidumbre, a la negación de la educación, a la negación del don del desarrollo, a la negación de la salud, a la negación de la dignidad.

Convirtieron los territorios en canteras y pozos, la naturaleza en botín, el estado en corrupción, las regiones en teatros de operaciones de guerra y del narcotráfico, silenciaron a las víctimas hasta que el pueblo en el año 2022 despertó y dijo, “basta, y uno de sus mejores hijos, Gustavo Petro Urrego.

Petro, el valiente congresista que se paró ante el parlamento y denunció con nombre propio uno a uno a los jefes de la parapolítica que dirigía el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que se atreve a acusarnos de corruptos y de narcotraficantes.

Petro, quien fue a los territorios a hablar con la gente. A quien yo vi cuando en San Onofre, Sucre, por primera vez el campesinado, después de años de terror paramilitar, se reunió en la plaza para ir juntos a la Hacienda El Palmar, donde enterraban a los campesinos después de torturarlos.

Petro el que hizo jurar a los campesinos que nunca más serían sometidos al terror paramilitar.

Petro el que se paró ante los gobiernos extranjeros arrogantes y ha dicho que somos un país soberano.



Y en Colombia, compañeras y compañeros, nació la esperanza. Nació la esperanza de que nuestro futuro nunca será como el pasado de la historia de injusticia, violencia, corrupción, indignidad.

Nuestro país tiene el derecho a ganar dado el derecho a ser un país feliz, próspero, democrático, pacífico y una potencia mundial de la vida como ha proclamado nuestro Gobierno.

Porque nuestro sueño y nuestra esperanza no nos la van a arrebatar. No volverá a haber crímenes de lesa humanidad. No le tenemos miedo a las maquinarias políticas. No le tenemos miedo a las marrullas electorales. Deben dejar que la población rural vote en los puestos nada por la organización electoral.

Así que ahora 2'700.000 votos. Ahora que tenemos candidatas y candidatos que han sido legitimados por el pueblo en las urnas. Ahora que tengo 1'540.000 compatriotas que me respaldan Vamos a la construcción del Frente Amplio para ganar las elecciones presidenciales en la primera vuelta electoral.

A todas las fuerzas democráticas, a todas las fuerzas que quieren el cambio en Colombia, les proponemos una fuerte alianza para crear un frente que sea invencible y que lleve a la presidencia al segundo gobierno progresista que presidiré.

Un programa que nosotros hemos dicho debe profundizar las transformaciones democráticas e históricas. Debemos seguir por el camino de las reformas sociales, que el trabajo, la pensión, la salud dejen de ser una miseria y se conviertan en un derecho ejercido a plenitud por la gente.

Que la vivienda el agua potable, las carreteras terciarias, la producción agropecuaria sea un bien para todos los colombianos.

Que erradiquemos el hambre, la desigualdad la discriminación, el machismo, el racismo. ¡Nunca más!

Mi primer o uno de mis primeros actos de gobierno será venir de nuevo aquí para presidir, en mi condición de jefe de Estado, el Consejo Directivo del Pacto

por la Vida y por la Paz del territorio de Nariño y para cumplir con las obras, los compromisos que ha hecho nuestro primer gobierno del cambio histórico.

Así que aquí volveré, compañeras y compañeros, pero para gobernar por la paz, la justicia social y por un Nariño próspero, un Nariño como se merece su gente con oportunidades y desarrollo.

IVÁN
Cepeda
Presidente



LIBERALES
CON IVÁN CEPEDA

Bogotá, Cundinamarca

Queridas compañeras y queridos compañeros:

Esta es una reunión que le doy un especial significado. Luego de nuestra apoteósica consulta, hay que decirlo, que obtuvo 2'700.000, de los cuales 1'540.000 ciudadanos, ciudadanas que tuvieron para mí el orgullo de depositar su confianza y entregarme la responsabilidad de suceder a una de las figuras políticas más importantes que ha dado nuestro país, el actual presidente de la República Gustavo Petro Urrego.

Luego de esa importante victoria electoral hemos entrado en una nueva fase de esta campaña en la que queremos ampliar sustancialmente el público, las fuerzas políticas, sociales, culturales que impulsan nuestro proyecto de triunfar para hacer posible el segundo gran gobierno de la transformación histórica y social en Colombia.

Nuestra tarea hoy se trata de construir el Frente Amplio: un gran bloque de fuerzas sociales, políticas, culturales, repito, que lidere ese proceso de transformación. En el cual esté el Pacto Histórico, que es la fuerza política más influyente y poderosa que tiene hoy Colombia, pero también de la mano, hombro a hombro, con muchas fuerzas políticas entre las cuales yo valoro especialmente a sectores del gran Partido Liberal Colombiano.

Para que no vaya a suscitar esto envidias o digamos malestar, que sabemos que estos actos pueden suscitar a veces un poco de malestar en ciertos sectores, aquí están presentes sectores liberales, sectores de base, de personas que han sido elegidas, también académicos y académicas, personas que tienen influencia y trabajo en barrios populares, y por eso me parece fundamental la presencia de todas ustedes y todos ustedes en la noche de hoy.

El Partido Liberal no es un partido de izquierda. Es un partido ubicado en un espectro político distinto, pero siempre a lo largo de su historia ha tenido sectores, ha tenido grupos, líderes que yo podría calificar definitivamente de izquierda.

Hay una izquierda liberal sin lugar a duda, que ha trascendido el tiempo y con la cual nos identidades políticas profundas.



En el siglo XIX el liberalismo fue una fuerza revolucionaria. En el siglo XX, especialmente hasta la mitad del siglo XX, fue una fuerza reformista muy importante y aquí ya han sido recordados algunos nombres. Tal vez yo agregaría algunos otros: José María Melo, el gran Rafael Uribe Uribe, como no hablar de Jorge Eliécer Gaitán, de Alfonso López Pumarejo. También yo diría importante mencionar aquí Luis Carlos Galán, Gerardo Molina, Piedad Córdoba, y muchos otros y muchas otras, que configuran una corriente con la cual nos hemos identificado.

Que tiene en su ADN una vocación de reforma social con la cual estamos profundamente identificados, y dentro de ese ADN reformista, por supuesto, en primer lugar, la reforma agraria.

La necesidad de transformar el campo colombiano, donde ha surgido la violencia, el narcotráfico, por la falta de oportunidades y por la colonización de la concentración de la tierra, y del sometimiento del campesinado de los pueblos ancestrales y afrodescendientes a un modelo económico, esencialmente, injusto y desigual.

El Partido Liberal ha sido pionero en plantear la reforma agraria, lo reconocemos. Durante algunos de sus gobiernos ha habido intentos que han sido importantes en materia de reforma agraria como, por ejemplo, durante el gobierno del expresidente Carlos Lleras Restrepo, con el cual tenemos diferencias profundas, pero en el cual se adelantó un intento de reforma agraria que tuvo entre otros ingredientes el surgimiento de una organización campesina histórica: la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC.

Y también nos une con el liberalismo la vocación por la paz, la lucha por la democracia, la lucha por los derechos humanos, la lucha por acabar con la violencia y porque haya justicia social en Colombia.

Así que hay muchas razones para una alianza política de fondo con los sectores liberales que están por el cambio social en Colombia.

Pero, así como hay una ala izquierdista y reformista del Partido Liberal, también hay otra de derecha. Y que está buscando en este momento como coger ruta con lo más claramente caracterizado en Colombia como la extrema derecha colombiana, que debo decirlo, con esto no voy a sorprender a nadie, representa al expresidente Álvaro Uribe, condenado, por supuesto, en primera instancia y después absuelto, por soborno a testigos y fraude procesal, y pendiente de una casación.

Bueno, allá quiere terminar unido con quien promovió la parapolítica en Colombia, un sector elitista del Partido Liberal, al cual le decimos: “Gracias, pero por ese camino no iremos nosotros”.

Lo nuestro es la democracia, la transformación social y el pueblo colombiano. No las alianzas con quienes quieren acabar con la reforma pensional, la reforma laboral y la reforma agraria. Ese no es el camino que queremos para Colombia hoy.

Ni tampoco el que nos plantea la extrema derecha de Estados Unidos que ahora nos amenaza con venir a bombardear a Colombia. Cerraremos filas en los sectores democráticos para hacer respetar nuestra soberanía y dignidad como pueblo. Así nos cueste lo que nos cueste.

Comenzando por nuestro digno presidente de la República Gustavo Petro. No vamos a permitir que nuestra soberanía se mancille por ninguna potencia extranjera, por muy poderosa que alardee ser. Vamos a cerrar filas para preservar a nuestra nación y para mantenerla como una patria digna y autónoma. De eso, por favor, de eso no quepa ninguna duda.

Queremos tejer una alianza de fondo para un frente amplio con sectores liberales, con sectores de la Alianza Verde, con sectores incluso que están en el centro derecha, que quieran la transformación y que se identifiquen programáticamente con nosotros y sobre todo también con los movimientos sociales y populares.

Porque si algo caracteriza el ideario de Rafael Uribe de Uribe, de Jorge Eliecer Gaitán, fue su alianza profunda, su conciencia profunda, su compromiso vital con los sectores populares en Colombia y su enfrentamiento -que les costó la vida, hay que decirlo- a los sectores oligárquicos y más conservadores de la vida colombiana.

Seremos dignos de esa herencia política de Gaitán y Uribe Uribe, que eso tampoco pueda ser objeto de duda esta noche.

Nosotros y nosotras queremos seguir por el camino del cambio social. Yo he planteado profundizar y defender nuestro programa político y social a través de tres revoluciones:

La Revolución Ética que busca un despertar y un cambio de conciencia, un enfrentamiento y una rebelión ciudadana contra la gran corrupción que se ha apoderado del Estado colombiano. Vamos a darle una batalla formidable a los corruptos y vamos a devolver al erario los recursos que han sido robados por parte de la gran corrupción y de los ladrones de cuello blanco. Eso es una tarea a la que me comprometo como candidato presidencial.

Y también respetar a las víctimas y también trabajar por la Revolución Agraria por mejorar la situación del pueblo colombiano de esas personas que tienen que despertarse a las tres de la mañana para ir a ganarse su sustento, a recorrer grandes distancias, en empleos que son considerados como economía informal, como si no valieran para la sociedad colombiana, que tienen que sudar todo su trabajo durante 16 horas para llegar a la casa con lo mínimo para poder alimentar a sus hijos. Por esa gente es que vamos a hacer nuestro gran esfuerzo.

Y por los jóvenes también. Los jóvenes que requieren hoy, muchos de ellos, la posibilidad de una vivienda, por ejemplo. La posibilidad de tener una vivienda digna mínima, para que no se convierta la lucha por donde tener a vivir, dónde ir a vivir después de salir del hogar como un problema que es casi imposible de resolver.

Pensemos en un programa para los jóvenes de vivienda, como también para mucha gente que hoy la necesita en esta ciudad, por ejemplo.

Pensemos y trabajemos por profundizar las conquistas de este Gobierno en materia de salario mínimo, en materia de un proceso en el cual la economía popular y solidaria tenga la misma posibilidad que la gran economía empresarial, y que tengan los trabajadores y los pequeños empresarios los mismos derechos a progresar y a tener oportunidades en la sociedad colombiana.

¿Por qué solamente los privilegios, por qué solamente los derechos para un pequeño grupo de colombianos? ¿Es que los demás, la gran mayoría no los tiene? Claro que sí, los vamos a hacer valer, porque somos una patria que puede ofrecerle a cada uno de sus habitantes una vida digna, próspera y feliz. Y por eso vamos a trabajar.

Y para, por supuesto, las personas que han trabajado toda su vida y tienen hoy derecho a una pensión mínima, que se le quiere ahora arrebatar mediante decisiones arbitrarias. Vamos a salir a la calle, si es que intentan quitarnos la reforma pensional, que tantos esfuerzos nos ha costado sacar adelante en este Gobierno.

Por supuesto, nos haremos sentir en la movilización social si es que no quieren que la reforma.

Que nuestra reforma laboral, que también nos costó bastante, se convierta en realidad, no solamente en leyes. Leyes tenemos muchas en Colombia. Ahora lo que necesitamos son ver hechos y realizaciones.

Necesitamos que la vida de la gente cambie, mejore, que se acabe la pobreza, que se acabe la desigualdad, que no tengamos que ver el espectáculo de gente que padece el hambre en muchos lugares y rincones de la sociedad colombiana.

Territorios absolutamente dejados a su suerte medio del conflicto armado, teniendo la posibilidad de desarrollarse como lo que son: territorios de riqueza, de biodiversidad, de una nación que puede llegar a ser, como lo ha dicho el gobierno y el presidente Petro, una potencia mundial de la vida, una potencia mundial agroalimentaria.

Eso es lo que queremos, compañeras y compañeros liberales, de los verdes, de los partidos conservador, de todo el espectro de fuerzas, nuestra invitación a que vengan aquí a construir el gran frente amplio para el segundo gobierno de la transformación histórica y social progresista.

IVÁN
Cepeda
Presidente



IVÁN CEPEDA
EN MÉXICO

Ciudad de México, México

Señoras y señores integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputadas y diputados del Honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, buenos días:

Es para mí, como senador de la República de Colombia, un honor estar hoy en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en este foro dedicado a la cultura de paz y a los procesos de reconciliación. Vengo de un país hermano que, como México, ha vivido durante décadas el peso devastador del conflicto armado, de la violencia ligada al narcotráfico, a las economías ilegales y a la degradación de nuestras instituciones.

Permítanme comenzar hablando de nuestras historias compartidas.

México y Colombia han visto cómo el negocio de las drogas convirtió territorios enteros en campos de batalla, disputados por organizaciones criminales que han desafiado al Estado, no solo en lejanas zonas rurales, sino en el corazón de las capitales y las grandes ciudades, han infiltrado las instituciones, en algunos casos han hecho alianzas macabras y han impuesto, sobre millones de personas, un régimen de miedo. Nuestros países conocen demasiado bien palabras como masacre, desaparición forzada, desplazamiento interno, extorsión, feminicidio, reclutamiento de jóvenes y de niños.

A pesar de esfuerzos que arrojan alguna mejoría, las estadísticas de violencia en ambos países siguen siendo estremecedoras. Esos no son solo números: son familias que esperan a alguien que no volvió, madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos, comunidades que han tenido que normalizar el miedo. También, ustedes como nosotros, cargan con un pasado lleno de historias de privatización de lo público, de ineficiencia estatal, de clasismo, de racismo, de machismo, de aporofobia.

Pero también hemos compartido **la guerra contra las drogas**, que es tan grave o peor que el propio negocio del narcotráfico, o mejor que es su causa y efecto a la vez.

Una pregunta que puede sonar absurda, pero de ninguna manera lo es: **¿cuál es la causa y cuál es la consecuencia, entre el narcotráfico y la guerra contra el narcotráfico?** En la lógica tradicional ha aparecido como el factor causal la

existencia del narcotráfico como economía ilícita. El mal se atribuye a la existencia de esa clase de negocio ilegal. Pero, la experiencia que hemos compartido durante décadas demuestra que **el remedio puede ser peor que la enfermedad. Es más, que el remedio puede ser la enfermedad misma**. En Colombia hemos visto la **erosión de la democracia**, la degradación de las instituciones al ser confiadas a una guerra perdida. Los funcionarios encargados de librarla se han vuelto altamente vulnerables al lucro ilícito; una guerra que adicionalmente gira en torno a preceptos legales que, en sí mismos, violan el derecho internacional y hasta las propias constituciones.

Esa intencionalmente fracasada guerra se ha convertido en una de las modalidades privilegiadas para el **neocolonialismo estadounidense**, la pretensión de un sometimiento neoimperial y en una modalidad de descargar la responsabilidad bilateral entre mercado del consumo y de la producción sobre nuestros hombros exclusivamente. Así, lo demuestran **tres mecanismos usados como parte de esta guerra**: la **extradición unilateral** de nuestros nacionales al sistema judicial estadounidense y a sus cárceles, la **certificación unilateral** en la lucha contra la droga, y la **intervención encubierta y secreta** en nuestros territorios de agencias como la **DEA y el FBI**.

Está fracasada guerra ha sembrado de muerte destrucción y odio a nuestras naciones. Ha significado invertir cuantiosos recursos, sacrificar la vida de miles de funcionarios honestos sin que a cambio obtengamos nada distinto que el crecimiento exponencial del poder del narcotráfico.

La **justicia transaccional** que ofrece beneficios a cambio de información, las alianzas con carteles y estructuras del narcotráfico para acabar con las más poderosas, la idea de que **la guerra sin cuartel** nos llevará algún día a la aniquilación del narcotráfico, la **hipócrita prohibición para ensayar el diálogo y la desmovilización pactada** de las estructuras criminales, todo ello hace parte de un paradigma que ha entrado en profunda crisis.

El régimen internacional de tratamiento del problema de las drogas está en crisis irreversible. **El mundo se merece un diálogo sincero y responsable sobre el reglamento global de las drogas.**

Con relación a estas formas de violencia, que en Colombia se combina con un conflicto armado de siete décadas, México y Colombia comparten entonces una experiencia común: **la de sociedades que han tenido que convivir por**

demasiado tiempo con la barbarie hasta el punto de correr el riesgo de acostumbrarse a ella.

La larga duración de la violencia es una condición que nos determina como **naciones y sociedades**. Cuando las masacres se vuelven cotidianas, cuando los desaparecidos se cuentan por decenas de miles, cuando la crueldad física y psicológica destroza a los seres humanos colectiva e individualmente, cuando la violencia sexual se ejerce sistemáticamente, cuando los territorios se vacían por el miedo, e incluso cuando aparece el genocidio, la destrucción de la vida se traduce en una **degradación de la conciencia moral colectiva**. Es lo que la pensadora filosófica Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal.

Esa es, a mi juicio, **la herida más profunda** que dejan las guerras que se prolongan en el tiempo: el desprecio de la vida y la dignidad de los seres humanos, especialmente de los más pobres y discriminados, de las mujeres y sus derechos, la naturalización del terror, la insensibilidad al dolor y el sufrimiento de los demás, en una palabra, **la inhumanidad**.

Una cultura de paz debe plantearse la cuestión de cómo superamos ese estado de banalidad del mal.

En ese sentido, México y Colombia también compartimos la experiencia y lecciones que nos ha dejado la resistencia de nuestras sociedades.

En México, asociaciones de víctimas, universidades, organizaciones de la sociedad civil han puesto en marcha el **Diálogo Nacional por la Paz**, que convoca a comunidades enteras para hablar del miedo, de la violencia y de las alternativas, buscando regenerar el tejido social desde abajo.

En Colombia, por décadas pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes, jóvenes de las barriadas populares urbanas, líderes comunitarios, personas y organizaciones que defienden los derechos humanos, sobrevivientes de genocidios políticos y, sobre todo, mujeres de origen popular que han cuidado y protegido la memoria, que han buscado a sus hijos entre los escombros y en las fosas comunes, **han mantenida encendida la llama de la dignidad humana**.

En ambos países, **las víctimas** —las madres buscadoras, los familiares de desaparecidos, las comunidades desplazadas— han decidido enfrentar el silencio con la palabra, y el miedo con la organización comunitaria.

Como decía, en Colombia, después de décadas de conflicto armado interno, de paramilitarismo, de guerra contra las drogas y de violencias superpuestas, hemos llegado a una constatación dolorosa: **no basta con cambiar gobiernos, ni con aprobar reformas importantes, ni siquiera con firmar acuerdos de paz, si no transformamos la base ética de nuestra sociedad.**

Hemos acumulado violencias, que han banalizado el mal, lo cual ha producido lo que yo he descrito como una **profunda degradación moral.**

Por eso he planteado que Colombia necesita una **revolución ética.**

La revolución ética comprende tres elementos: el poder de la verdad de las víctimas, la rebelión ciudadana contra la gran corrupción y la guerra contra las drogas que la estimula, y la cultura del diálogo nacional.

En primer lugar, el poder de la verdad de las víctimas.

Cuando hablo de revolución ética **no me refiero a un código abstracto** de buenas costumbres, ni a una moral vacía desvinculada de las prácticas sociales. Hablo de un **cambio hondo de consciencia**, que empiece en cada persona pero que se exprese en las instituciones, en la economía y en la manera de hacer política.

Una revolución ética significa **recuperar la capacidad de indignarnos ante el dolor ajeno**, de sentir empatía por las víctimas, de vivir la política como servicio y no como negocio, de entender lo público como lo que es, patrimonio de todos y todas.

En esta revolución ética, **las víctimas son centrales**, no son **objeto de contemplación ni caridad pública.** Por el contrario, son el sujeto social por excelencia de esta transformación.

Así ha ocurrido en las últimas tres décadas en mi país. Las madres de los muchachos ejecutados y desaparecidos durante los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe, que han sido llamados ‘falsos positivos’ –civiles asesinados por militares a cambio de incentivos para acabar con las guerrillas y demostrar éxitos operacionales–, las familias desplazadas, las comunidades campesinas, afros e indígenas masacradas, **han tenido el valor de decir en público la verdad en Colombia.**

Ellas han mantenido vivo el relato de lo que ocurrió cuando muchos querían imponer el olvido o la negación. Gracias a su persistencia hemos aprendido que no hay paz posible si los crímenes más graves quedan impunes, si no se reconoce la dignidad de quienes han sufrido, si la arrogancia de los criminales no cede a la petición del perdón, al arrepentimiento y al reconocimiento de la responsabilidad, si no se asegura que los crímenes contra la humanidad no se repitan.

Su persistencia ha servido para visibilizar horrores como los mencionados y también para generar avances legales. Es el caso de la **Ley de Víctimas, de 2011**, que busca **reconocer, reparar integralmente y garantizar los derechos de quienes han sufrido daños por el conflicto armado**, mediante medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición.

A esa capacidad de las víctimas de transformar la cultura de impunidad e indolencia, la llamo el poder de la verdad de las víctimas. Ese poder es, a mi juicio, el primer motor de la revolución ética. Es ese poder que desenmascara la injusticia y la arbitrariedad de la autoridad criminal a pesar del peligro que engendra el que se exprese en público, el que sostiene, contra viento y marea, la idea de que ninguna causa política, económica o religiosa puede legitimar la desaparición, la tortura o la masacre. **Es la esencia de toda pedagogía social de paz y democracia**

En segundo lugar, la revolución ética implica la rebelión ciudadana contra la gran corrupción.

Pero el poder de la verdad también se ejerce contra la gran corrupción y a sus mafias. Además de las víctimas, tiene otros sujetos: los periodistas investigativos, los juristas probos, los académicos rigurosos, los políticos honestos, que deciden desafiar el **entramado criminal de la macrocorrupción**, de la hipocresía de mantener la fracasada guerra contra el narcotráfico.

En Colombia hemos pasado de hablar de corrupción —pequeños sobornos, fraudes individuales— a entender que existe un fenómeno de macrocorrupción: redes que combinan actores legales, ilegales y semilegales para capturar el Estado, desviar recursos públicos, controlar territorios y garantizar impunidad.

Esa macrocorrupción vinculada al narcotráfico produce una doble devastación: roba los recursos que deberían garantizar derechos —educación, salud, vivienda, infraestructura— y alimenta la violencia que desgarr a las comunidades. No estamos frente a algunas «manzanas podridas», sino frente a una

enfermedad del alma de las instituciones: una forma de degradación moral que convierte lo público en botín y que premia a los tramposos, a los mafiosos, a los violentos.

Todo eso requiere como condición la revolución ética, o en otras palabras, la decisión colectiva de no seguir admitiendo los crímenes contra la humanidad, tolerar la trampa, admirar al corrupto exitoso, convertir en héroe al que se enriquece robando lo público, o banalizarlo como quien comete simplemente un fraude menor.

Por eso insisto en que la revolución ética tiene que ir acompañada de una transformación profunda de nuestra vida socioeconómica, de nuestra política, en general, y de nuestra política de drogas, en particular. Debe cuestionar el paradigma del prohibicionismo y del punitivismo irreflexivo.

Lo reitero, en Colombia hemos pagado un costo inmenso por una guerra contra las drogas que, en muchos aspectos, ha fracasado: militarizó territorios rurales, castigó de manera selectiva a los eslabones más débiles —campesinos cocaleros, jóvenes consumidores, pequeños eslabones de las redes— y dejó relativamente intactos a los grandes lavadores, a las redes financieras y a los sectores de élite que se beneficiaron del negocio.

Hoy sabemos que la prohibición absoluta, sin alternativas de desarrollo rural, sin regulación inteligente, sin cooperación internacional que ataque la demanda y las finanzas del narcotráfico, solo produce más violencia y más corrupción.

La política de drogas debe reorientarse hacia la vida: sustitución voluntaria de cultivos acompañada de inversión social, fortalecimiento de economías campesinas y populares, protección de la naturaleza, atención en salud pública para las personas consumidoras, cooperación internacional que persiga el lavado de activos y las redes financieras globales. La guerra sin fin contra las drogas debe transformarse en una paz con justicia social y con justicia ambiental.

Esto por supuesto requiere de un diálogo transnacional en el seno de la comunidad internacional y sus instituciones. Llamo a profundizar la alianza entre México y Colombia, entre nuestros pueblos y gobiernos para romper con esta costumbre a la muerte violenta que se nos ha querido imponer como destino inexorable.

Por último, el tercer elemento de la revolución ética es la cultura del diálogo nacional.

Permítanme ahora subrayar un elemento central de nuestra experiencia colombiana, que considero clave para este intercambio con México: el papel del diálogo nacional y del diálogo cívico como herramientas de cultura de paz.

He planteado que la revolución ética debe estar acompañada de un gran diálogo nacional; un proceso en el que la sociedad colombiana, en toda su diversidad, se siente a responder algunas preguntas fundamentales: ¿Qué tipo de actividades económicas podrían reemplazar las economías criminales? ¿Cómo construir procesos de desarrollo económico local para contener el control de las organizaciones criminales? ¿Cómo hacer de la lucha por la superación de la desigualdad y el hambre, una oportunidad de bienestar y progreso para nuestros pueblos? ¿Cuáles avenidas debemos transitar para que las víctimas se constituyan en sujetos sociales y políticos con capacidad de hacer valer sus derechos? ¿Cómo vamos a garantizar que la política deje de ser un campo de codicia para los corruptos y los mafiosos?

No hablo de un diálogo de salón, ni de mesas burocráticas, sino de una pedagogía social de la paz: asambleas en barrios y poblaciones rurales, conversaciones en escuelas y universidades, encuentros entre sectores que nunca se hablan entre sí —empresarios y sindicalistas, iglesias y organizaciones de derechos humanos, fuerzas de seguridad y comunidades— para **construir acuerdos sobre lo que es la esencia de nuestra convivencia, la dignidad humana, la verdad, la democracia, el respeto a la vida.**

Ese diálogo nacional, en Colombia, se articula con procesos muy concretos: la implementación del Acuerdo de Paz, la búsqueda de salidas negociadas con otros grupos armados, la protección de líderes sociales y firmantes de paz, la lucha contra la macrocorrupción, la transición energética, la reforma rural integral. **No es un ejercicio retórico: es una forma de gobernar escuchando.**

Quisiera terminar regresando a México, pero desde la perspectiva de la fraternidad y del respeto, compartiéndoles una convicción.

Frente a la violencia del narcotráfico y de la guerra contra la droga, frente a la insensibilidad que produce la repetición de las tragedias, frente a la inhumanidad

de las desapariciones y de las masacres, frente a la corrupción que se alimenta de las economías criminales, la respuesta no puede ser solo punitiva, ni exclusivamente militar, ni meramente administrativa. Necesitamos, en Colombia, en México y en toda América Latina, una revolución ética impulsada por las víctimas y por la ciudadanía.

Una revolución ética que diga, con claridad, que ninguna vida es descartable; que ningún territorio es sacrificable; que ninguna institución puede seguir siendo cómplice, por acción u omisión, de estructuras criminales; que la política existe para cuidar la vida.

Una revolución ética que ponga en el centro la verdad de las víctimas, que fortalezca la justicia, que recupere los recursos robados y los convierta en escuelas, hospitales, centros culturales, proyectos productivos; que renueve la educación para que las nuevas generaciones conozcan lo que ocurrió y no repitan los errores del pasado.

Una revolución ética que haga del diálogo cívico —del diálogo nacional, como ustedes lo están construyendo con sus propios caminos— una forma de esperanza, de convivencia, de gobierno y de cultura de paz.

Vengo a México no solo a hablar, sino a escuchar. La experiencia mexicana de diálogos por la paz, los esfuerzos de las víctimas aquí, las iniciativas desde los pueblos originarios, desde las mujeres, desde las juventudes, son también para nosotros una fuente de aprendizaje, respeto y profunda admiración.

IVÁN
Cepeda
Presidente



SERVIR AL PUEBLO
**CON AUSTERIDAD
REPUBLICANA**

Cali, Valle del Cauca

Queridas compañeras, queridos compañeros,

Regreso a esta ciudad, territorio de dignidad, resistencia y esperanza para agradecer antes que nada a la ciudadanía por la masiva votación que obtuvimos como Pacto Histórico; agradecer los votos por nuestros candidatos y candidatas al Congreso de la República y el respaldo por nuestro proyecto colectivo en la consulta del pasado 26 de octubre.

Ganamos la consulta, ganamos ampliamente y somos la principal fuerza política que hoy hay en Colombia.

Colombia quiere cambio con ética, quiere transformaciones profundas y justicia social. Quiere un liderazgo que, como lo ejerce nuestro presidente Gustavo Petro, no se arrodille ante los poderes corruptos nacionales o extranjeros.

Nos estamos preparando para el segundo gobierno del progresismo en Colombia. Me estoy preparando, recorriendo el país, escuchando a los movimientos sociales, para ser un digno sucesor de un digno presidente Gustavo Petro Urrego.

Gracias por cada voto, por cada persona que esperó bajo el sol, por cada voz que creyó que es posible seguir avanzando. Gracias, Valle del Cauca. Gracias, Cali, ciudad de rebeldía democrática.

Precisamente porque somos la principal fuerza política del país, exigimos al Consejo Nacional Electoral que entregue cuanto antes nuestra personería jurídica, que nos permitan la inscripción de nuestras candidatas y de nuestros candidatos al Senado y a la Cámara de representantes sin más dilaciones.

Lo afirmamos con claridad y firmeza: no aceptaremos que se siga negando nuestro derecho a la participación política. No puede la extrema derecha, atemorizada hoy por nuestros éxitos, seguir apelando a la trampa y bloqueando ilegal e ilegítimamente nuestros derechos políticos. No lo permitiremos y si es necesario apelaremos a la movilización ciudadana para reclamar nuestros derechos constitucionales.

En mi primera visita a Cali planteé una tarea histórica: la necesidad de una rebelión ciudadana contra la gran corrupción que carcome las instituciones, que impide el desarrollo, la superación de la pobreza y la reducción de la desigualdad en Colombia.

En esa ocasión anuncié que en mi gobierno habrá cero tolerancia con los aparatos criminales de la corrupción y que sus jefes serán perseguidos y sancionados de manera ejemplar.

Dije que Colombia necesita un Sistema Nacional contra la Macrocorrupción, que abarque la prevención, el control, la trazabilidad del gasto y el juzgamiento, y que garantice reparación de las víctimas del saqueo, del cual ha sido víctima el Estado colombiano por décadas.

Lo reitero hoy: en mi gobierno no toleraré que mientras unos pocos se enriquecen, el Estado no tenga recursos para los programas sociales, para el agua, para los alimentos, para la educación, para la salud, para las víctimas, para la paz.

El cambio social que queremos exige acabar con la gran corrupción que daña nuestra sociedad, afecta gravemente el Estado y destruye la ética pública.

Hoy regreso a Cali para hacer un planteamiento fundamental y complementario: para derrotar la corrupción debemos asumir la austeridad republicana. Gobernar no es un privilegio, una exaltación simple y llana, un encargo sí y no un cargo. Porque nos debemos al pueblo y a su servicio, acabaremos con la ostentación y el derroche en todas las esferas del Estado colombiano.

Si queremos vencer la gran corrupción, debemos comenzar por ganar la batalla contra los privilegios, contra el despilfarro y contra la política del enriquecimiento personal.

Las transformaciones sociales nacen de principios firmes y prácticas éticas. Se predica con el ejemplo. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo y lo demostró: no debe haber gobierno rico con pueblo pobre. Y México y el partido Morena han honrado este principio. Han dicho que “por el bien de todos primero los pobres”.

El presidente José “Pepe” Mujica enseñó con coherencia que los gobernantes debemos vivir como vive el pueblo, porque administrar lo público requiere ante todo responsabilidad y humildad.

El papa Francisco, otro gran latinoamericano, lo expresó sin rodeos: quien tenga afición por el dinero, por banquetes exuberantes, mansiones suntuosas, trajes refinados, autos de lujo, que no se dedique a la política.

En Colombia vivimos en una sociedad obnubilada por la ostentación como símbolo del éxito. Esa visión superficial ha penetrado la vida pública. Hay dirigentes, -también en la izquierda, hay que reconocerlo- que confunden la política con una carrera de ascenso personal, de privilegios y opulencia.

Y así se normaliza el abuso de autoridad, el amiguismo y el desprecio por la ley.

No tiene por qué seguir siendo así, compañeras y compañeros.

Junto al pueblo, estamos llamados a recuperar el sentido más noble de la política: servir y honrar al pueblo, cumplir con la palabra y construir un país donde la decencia sea norma y no excepción.

Ahora bien, ¿de qué austeridad estamos hablando?

La experiencia de nuestros gobiernos progresistas ha dejado clara una distinción fundamental: una cosa es la austeridad republicana y otra muy distinta la austeridad neoliberal.

La austeridad neoliberal impulsada en Colombia por la extrema derecha, especialmente bajo los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, consistió en recortar el gasto en los aspectos y sectores sociales, debilitar al Estado, reducir la inversión en educación, salud, cultura o lucha contra la pobreza.

Eso es austeridad para los pobres y abundancia para los poderosos y corruptos. No es esa la austeridad que queremos nosotros.

Nosotros defendemos la austeridad republicana, aquella que reduce los gastos suntuarios del gobierno, los altos salarios, los privilegios indebidos para destinarlos al bienestar del pueblo.

Como bien dicen en México con sabiduría: el que debe apretarse el cinturón es el gobierno, no el pueblo.

Por eso desde Cali anuncio un conjunto de medidas, que adoptaremos desde el primer día de nuestro segundo gobierno y que serán parte del Sistema Nacional contra la Megacorrupción; dirigidas específicamente a las y los funcionarios de alto nivel del Estado.

1. Ley de Austeridad Republicana

Presentaremos al Congreso, con mensaje de urgencia, una Ley de Austeridad Republicana. Mientras se aprueba, dictaré medidas ejecutivas para controlar los gastos de funcionamiento y orientar que cada peso sea para el bienestar del pueblo colombiano, el bienestar social.

2. Fin de privilegios y lujos en el alto gobierno

Los miembros de mi gobierno vivirán como vive la mayoría del pueblo colombiano. Reduiremos en el primer día, en el primer segundo de gobierno, el salario del presidente de la República y de los ministros y ministras que decidan acompañarnos.

Las condiciones de vida, vivienda, transporte, seguridad y descanso se ajustarán estrictamente a lo necesario para ejercer las funciones, sin lujos y sin excesos.

Realizaremos una revisión rigurosa del gasto en publicidad, funcionamiento y representación. Todo gasto suntuario será eliminado y cada peso ahorrado se destinará al gasto social.

3. Revisión de privilegios en todas las ramas del poder público

Invitaré al Congreso de la República -queridas compañeras y queridos compañeros, candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes- y a los gobiernos locales, a revisar sus propios privilegios y gastos superfluos, respetando la independencia de poderes públicos, pero también rindiendo un informe ante la nación en el que quede claro cuál es el resultado de la revisión de esos privilegios y gastos ostentosos.

El servicio público debe recuperar la esencia de humildad, entrega y compromiso con la gente.

4. Adquisición de bienes y contratación estatal

Toda compra, arriendo, contratación de obra o adquisición de vehículos estará bajo estricta vigilancia, para evitar derroche o malversación. Los entes de control deberán ejercer supervisión especial dentro y fuera del país.

5. Actividades oficiales y viajes

Reuniones, actos y comisiones oficiales, congresos, convenciones y celebraciones estarán sujetas a criterios estrictos de economía.

Los viajes al exterior o dentro del país deberán ser indispensables y austeros.

Y cualquier costo adicional en viáticos, alojamientos, beneficios especiales deberán ser asumidos por el propio funcionario.

Queridas compañeras y queridos compañeros,

Si cumplimos en mi gobierno con estas medidas de austeridad, el pueblo exigirá en el futuro que no volvamos atrás y comenzará el camino para derrotar definitivamente la corrupción y el derroche innecesario en cualquier gasto que no sea el pueblo y sus necesidades.

Si hacemos esta tarea con rigor, reduciremos el déficit fiscal, fortaleceremos de manera decisiva el gasto social y avanzaremos hacia la derrota definitiva de la pobreza.

Nacerá una nueva ética pública, la del gobierno como servicio, no como privilegio. Ha llegado la hora de la Revolución Ética en Colombia, compañeras y compañeros.

Una Colombia gobernada desde la sencillez -así nos llamen populistas-, desde el respeto por cada peso del erario. Una Colombia en la que la ciudadanía pueda decir, “este gobierno vive como nosotros y trabaja para nosotros”.

Cuando lleguemos al segundo gobierno de la transformación histórica, gobernaremos con la austeridad del servidor, con la convicción de que el poder solo tiene sentido si dignifica a la gente y si se pone al servicio de la justicia

social. Esa Revolución Ética la construiremos juntos: ustedes, ciudadanas y ciudadanos de Cali, epicentro de la resistencia y la transformación, y nosotras y nosotros, el movimiento que ha demostrado que otro país sí es posible.

IVÁN
Cepeda
Presidente



EL CENTRO DE NUESTRO
**PROGRAMA ES LA POLÍTICA
SOCIAL**

Popayán, Cauca

Queridas compañeras y queridos compañeros:

Regreso a Popayán, ciudad de históricas luchas sociales y en la que tengo raíces familiares, a agradecerles el gran respaldo que ustedes han dado para que el Pacto Histórico se consolide.

Pero, al lado de esa acción en el terreno, también libramos el debate de las ideas y del programa.

La derecha utiliza campañas de extrema violencia para acabar moral e incluso físicamente con el presidente Gustavo Petro y conmigo mismo. A esa infame propaganda respondemos con serenidad, no con insultos, sino con argumentos e ideas poderosas.

Está claro: aunque en la derecha colombiana pululan candidatas y candidatos, varios de los cuales ni siquiera alcanzan a superar el margen de error en las encuestas, como ocurre con las aspirantes del Centro Democrático, mi debate no es con ellos. **Mi discusión es con su verdadero jefe político: Álvaro Uribe Vélez.**

No vamos a distraernos con las figuras secundarias; que responda el titirite-ro, no sus marionetas.

Y, por lo tanto, quiero ahora plantear un aspecto de la controversia de fondo que tengo con él: su concepción del modelo neoliberal que es totalmente contraria al centro de nuestro programa que es la política social.

Uribe ha empobrecido a Colombia y ha llevado a la miseria a millones de nuestros compatriotas. Fue el gestor y creador de las más importantes reformas neoliberales que arruinaron a campesinos, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, a los trabajadores, a las millones de víctimas de la violencia, a mujeres que viven de la llamada informalidad, a los habitantes de los barrios populares de las grandes ciudades.

Como en otros campos de la vida política y social, en este también Uribe procedió sin ninguna clase de escrúpulos, se puso al servicio de los intereses más mezquinos del enriquecimiento y la codicia, así como de la corrupción.

Él privatizó el sistema de atención en salud con la Ley 100 de 1993, que convirtió este derecho fundamental en negocio, consolidó un sistema en el que el Estado paga, pero los privados mandan pues administran recursos públicos y por eso tenemos que sacar adelante una reforma a la salud de carácter democrático.

Él, Uribe, contribuyó a la reforma laboral de carácter neoliberal con la Ley 789 de 2002, redujo los recargos nocturnos, impuso menores indemnizaciones por despido, precarizó el empleo y flexibilizó la contratación temporal.

Él impulsó la reforma pensional con la Ley 797 de 2003, que aumentó las semanas de cotización, endureció los requisitos pensionales, y promovió los fondos privados.

Y para encubrir esta política de empobrecimiento generalizado Uribe desarrolló la ficción de que estaba combatiendo el “Estado derrochón” con la austeridad neoliberal que, en palabras simples, significa que al que le toca apretarse el cinturón es al pueblo, mientras los políticos, los magnates, los gobernantes de turno se enriquecen más y más a costa de nuestros impuestos.

Pero, contrario a la austeridad pregonada, Uribe destinó enormes cantidades de recursos públicos a la guerra y a fortalecer el gasto militar, que dejó miles de víctimas como los muchachos de los ‘falsos positivos’, incrementó el IVA y entregó subsidios del programa Agro Ingreso Seguro, destinados originalmente a campesinos pobres, a varios de sus socios, grandes terratenientes, quienes habían financiado su elección.

Esa implacable política neoliberal llevó a Colombia al desastre social en el gobierno del sucesor de Uribe, Iván Duque, quien junto a su ministro de Hacienda, en medio de la miseria provocada por la pandemia, decidió aplicar el IVA a los alimentos básicos de la canasta familiar para evitar que grandes corporaciones financieras dejaran de recibir sus habituales jugosas ganancias.

No se nos olvida que cuando en muchos hogares del país había hambre y solo se podía, en el mejor de los casos, tener un plato de comida al día, el expresidente Duque y su nefasto ministro de Hacienda, Carrasquilla, tomaron esa medida que, sin exageración, **debemos calificar de criminal**.

Y, como ustedes recuerdan, tan despiadado fue ese aumento del costo de los alimentos que produjo una de las más intensas olas de movilizaciones de

nuestra historia contemporánea, el “estallido social”, que aquí en Popayán y en Cauca tuvo uno de sus epicentros de lucha popular.

El neoliberalismo nos dejó un país herido, pero también nos dejó una lección: cuando lo público se entrega, el pueblo pierde; cuando lo público se defiende, el pueblo gana.

Hoy debemos hablar sin eufemismos. Durante décadas, bajo el nombre seductor de “neoliberalismo”, se nos impuso un modelo que presentó la acumulación privada de capital como progreso, la reducción del Estado y la destrucción de lo público como modernidad. Pero lo que realmente vivimos fue otra cosa: **una acumulación corrupta de capital**, sostenida por la entrega de la riqueza colectiva de la sociedad a intereses privados.

Nos dijeron que privatizar era hacer eficiente la prestación de servicios; que mercantilizar necesidades fundamentales era inevitable; que la competencia resolvería todo. Pero la verdad la sufrimos en carne propia: la privatización neoliberal del Estado se convirtió en **depredación de lo público**, en el **robo sistemático de los derechos** y en la conversión de nuestras necesidades (salud, educación, agua, energía) en mercancías para el lucro de unos cuantos.

Y cuando los derechos se transforman en productos, cuando lo común se vuelve botín, cuando los funcionarios dejan de servir al pueblo para servir a los intereses que compran voluntades, entonces surge lo que hoy denunciarnos con fuerza: **la megacorrupción, la corrupción generalizada el robo cínico y descarado de los recursos de los colombianos**.

No fue un accidente; fue el resultado lógico de un modelo que confundió la libertad con el negocio, y la democracia con el mercado.

Por eso debemos **examinar a fondo esta relación perversa**:

La **privatización de lo público**, que reduce al Estado a un administrador subordinado.

La **mercantilización de los derechos**, que transforma a la ciudadanía en clientela.

Y la **corrupción estructural**, que se alimenta de esa simbiosis entre concentración privada económica y política.

No se trata solo de malas prácticas individuales de personas desviadas moralmente; se trata de un sistema que convirtió al país en un negocio y al gobierno en una franquicia. Es tiempo de decirlo: **la corrupción no es un cáncer aislado; es el resultado político del neoliberalismo.**

Es hora de elegir de qué lado queremos estar.

Quiero hablarles ahora de las propuestas que complementan el planteamiento programático que hice hace algunos días en Cali, sobre la **austeridad republicana o democrática**, como principio de la Revolución Ética que requerimos en Colombia, como principio para la lucha contra la gran corrupción que hoy impera, y como fuente de valiosos recursos para la inversión social.

Ese principio de austeridad republicana se expresa de manera simple y directa en la siguiente frase: **quien debe apretarse el cinturón es el gobierno, no el pueblo.**

Para fortalecer de verdad el gasto social y garantizar que cada peso invertido se traduzca en bienestar para la gente, nuestro gobierno impulsará gradualmente tres grandes medidas que complementan y profundizan la política de austeridad republicana.

En primer lugar, concentraremos nuestros esfuerzos en grandes programas sociales capaces de transformar la vida de la población. Programas sólidos, coherentes, que respondan a las necesidades reales de las familias. Esto significa dejar atrás la dispersión y avanzar hacia la fuerza de lo colectivo: concentrar para fortalecer, unir para multiplicar.

De igual forma, no crearemos nuevas instituciones que aumenten innecesariamente las demandas del gasto público. Por el contrario, utilizaremos las instituciones ya existentes y la coordinación interinstitucional, para que estos programas puedan funcionar de la manera más eficaz posible y depuraremos de clientelas la administración y las instituciones públicas. No habrá corbatas.

En segundo lugar, no basta con diseñar mejores programas; debemos asegurar que los recursos lleguen directamente a quienes los necesitan, sin burocracia,

desviaciones, sin pérdidas, sin intermediarios que pretendan quedarse con lo que pertenece al pueblo.

A menudo, en un Estado que se ha hecho fortín de la gran corrupción, las cadenas de intermediarios funcionan como canales de malversación de los recursos, de tal forma que cada intermediario va tomando una parte, y a sus destinatarios los ciudadanos de a pie y las comunidades, solo les llega, si es que les llega, las sobras de la olla raspada.

Por eso, **eliminaremos toda forma de intermediación burocrática** que ponga en riesgo la transparencia. Y construiremos mecanismos modernos, seguros y eficientes para que cada transferencia sea directa, rápida y justa.

Por eso, debemos crear o adaptar un sistema financiero que le permita a los pobres y a las comunidades más empobrecidas en los territorios excluidos, acceder directa y rápidamente a los recursos: crear o adaptar un **Banco del Pueblo**.

Por último, haremos del recaudo tributario una herramienta efectiva para la equidad. Perseguiremos la evasión fiscal con determinación, sin privilegios ni excepciones, porque los impuestos no son un castigo: son el aporte solidario que permite que un país avance. Discutiremos, acordaremos y adoptaremos las políticas necesarias para que la evasión quede en el pasado y para que cada contribución llegue a las arcas públicas como corresponde.

Nuestro compromiso es un Estado más eficiente, más justo y más cercano, donde los recursos se inviertan con responsabilidad y donde la ciudadanía vea reflejado su esfuerzo en oportunidades, en progreso y en dignidad.

Porque cuando los recursos se administran con honradez y valentía, el país entero camina hacia adelante.

Compañeras y compañeros:

Estamos listos para defender nuestro programa y su línea roja: cualquier alianza o acuerdo nacional lo haremos partiendo del principio esencial de que en el centro de la política de gobierno y de la economía debe estar la inversión en lo social.



Esta no es una premisa contra nadie, ni contra quienes tienen la mayor riqueza en el país. Partimos de la convicción de que, si eliminamos la pobreza y la desigualdad, todos ganaremos y seremos prósperos como sociedad y nación.

Aquí creemos en un planteamiento que se usa en el actual gobierno mexicano: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

Por eso, no permitiremos el regreso al pasado de desigualdad e iniquidad que nos impusieron los gobiernos uribistas. Vamos a avanzar en la profundización de las reformas sociales de carácter estructural y en los programas universales para el beneficio del pueblo.

IVÁN
Cepeda
Presidente



DE LA REFORMA AGRARIA
A LA REVOLUCIÓN AGRARIA
CON LA ORGANIZACIÓN
Y MOVILIZACIÓN DEL
CAMPESINADO

San Onofre, Sucre

Queridas compañeras y queridos compañeros,

Vuelvo a saludar al valiente movimiento campesino de Colombia, esta vez desde San Onofre, Sucre. Este territorio, que hoy nos recibe con dignidad y esperanza, fue hace no muchos años un oscuro epicentro del horror; un lugar que, sin exagerar, llegó a convertirse en uno de los más terribles campos de concentración y exterminio creados por la alianza entre sectores de la clase política, terratenientes y paramilitares.

Quiero agradecer la calidez con la que me reciben hoy. Para mí, estar aquí es como regresar al hogar, al corazón del pueblo colombiano, al que pertenezco y para el cual seré presidente de la República.

En 2008, participé aquí, en este mismo parque donde estamos reunidos, en un acontecimiento que marcó la vida nacional y que marcó mi propia vida. Estuve junto al hoy presidente de la República, Gustavo Petro, en un acto público que mostró el coraje civil de la población de San Onofre y del campesinado sucreño.

En aquel entonces, simplemente venir a escuchar nuestros discursos podía costar la vida. Reinaba todavía el terror paramilitar en los Montes de María. Y, sin embargo, miles de personas llegaron aquella tarde, desafiando el miedo, las amenazas y hasta los atentados contra líderes sociales.

Recuerdo bien sus rostros: en ellos, el miedo comenzaba a convertirse en esperanza.

Luego de nuestras intervenciones, marchamos hasta la hacienda El Palmar, un lugar que el país conoció como campo de exterminio bajo el dominio del carnicero de oficio Rodrigo Mercado Peluffo, alias 'Cadena', y verdugo de San Onofre. Vivía en una mansión en Sincelejo, justo frente a la casa del senador Álvaro García. Dos casas lujosas, una frente a la otra, desde donde se repartían el control de San Onofre, junto con otros políticos como Jairo Enrique Merlano y Muriel Benito Rebollo, todos ellos socios políticos de Álvaro Uribe Vélez.

Durante años, la comunidad de San Onofre vivió torturas, desapariciones, ejecuciones y violencias de todo tipo. Y como lo ha dicho el presidente Petro, fue víctima porque en Sucre la clase política convirtió la tierra improductiva en botín del poder y el mar en ruta del narcotráfico.

Ese día, en la hacienda El Palmar, bajo el gran árbol de caucho que aún se levanta en el centro de la propiedad, nos reunimos junto al hoy presidente Petro y al campesinado para hacer un juramento con las manos en alto: que nunca más los Montes de María serían sometidos a tanta injusticia y tanto crimen.

Hemos honrado ese juramento. Avanzamos en el cambio social y en la reforma agraria siguiendo el ejemplo de las lideresas y los líderes campesinos que abrieron camino, como la pionera de las luchas agrarias en este territorio, Felicita Campos, y el dirigente de los campesinos de La Alemania, Rogelio Martínez.

Hoy podemos afirmar, con orgullo y con sentido de responsabilidad histórica, que fue el pueblo quien transformó a San Onofre y transformó al país. Lo hizo el pueblo, lo hizo su resistencia, lo hizo su dignidad.

Logramos que los congresistas involucrados en la parapolítica fueran a prisión; que su jefe, Álvaro Uribe Vélez, fuera condenado en primera instancia; y que su hermano Santiago Uribe recibiera una condena de 28 años de cárcel por ser jefe paramilitar.

En marzo de 2024, el presidente Gustavo Petro entregó, en esta misma plaza, 1.414 hectáreas de tierra adquiridas al empresario Carlos Cavalier. Desde entonces, 200 familias víctimas de la violencia, algunas de ellas descendientes de Felicita Campos, trabajan estas tierras, las cultivan y producen alimentos.

Las fincas Simba y Potosí, que suman 2.000 hectáreas y que habían sido despojadas por el carnicero paramilitar alias 'Cadena', fueron decomisadas y entregadas nuevamente a los campesinos.

Avanzamos también en la gestión para que la hacienda El Palmar sea adquirida por el Estado y entregada a la comunidad de San Onofre. Ese espacio será tierra productiva, pero también un lugar de memoria, para que las futuras generaciones de Sucre y de Colombia nunca olviden el horror que significaron la parapolítica y el paramilitarismo.



Hoy San Onofre cuenta con una alcaldesa progresista, Martha Cantillo, a quien envió un saludo especial. Hoy Colombia tiene un presidente como Gustavo Petro. Y este proceso continuará cuando, en 2026, ustedes me elijan como sucesor del presidente Petro para liderar el segundo gobierno de la transformación progresista e histórica de nuestro país.

Por estas razones, llevo a San Onofre en mi mente y en mi corazón en esta campaña. Ustedes encarnan los motivos de nuestra lucha: para que nunca más la pobreza y el olvido condenen a nuestros campesinos, y para que la paz con equidad social sea una realidad en cada vereda y cada corregimiento.

Ustedes me conocen. No vengo de una élite tradicional, vengo de las luchas sociales, vengo de acompañar a las víctimas, vengo de escuchar a los campesinos, indígenas y afrodescendientes; de batallar contra el clasismo, el racismo, el machismo y el desprecio a los pobres en este país.

Por eso, haré un gobierno del pueblo y para el pueblo.

Es justo reconocer lo que hemos avanzado en estos años con el gobierno presidido por Gustavo Petro.

Permítanme recordar algunas de esas conquistas emblemáticas que hemos construido juntos, con el Pacto Histórico, porque es necesario mostrar que sí se puede gobernar pensando en el pueblo:

En estos tres años y medio, Colombia ha experimentado una transformación social sin precedentes.

- Más de 2,8 millones de personas salieron de la pobreza monetaria y 420 mil superaron la pobreza extrema. La desigualdad también se redujo de manera histórica.
- Ha aumentado 37% el salario mínimo y se crearon más de 2,5 millones de empleos.
- Se duplicó el subsidio a adultos mayores, beneficiando a 1'100.000 personas a través del programa Colombia Mayor.
- Este gobierno ha tenido una conquista histórica. Sin exageración, es el primer gobierno que ha comenzado a desarrollar una verdadera reforma agraria. Se han comprado y se están distribuyendo más de 700 mil hectáreas

para el Fondo de Tierras, y se han entregado más de 270 mil a más de 72 mil familias.

- Lo más importante de este proceso de reforma agraria es que además de beneficiar a cientos de miles de hogares campesinos, se ha hecho sin derramamientos de sangre, sin violencia. Nuestra reforma agraria progresista ha demostrado que la entrega de tierras, la democratización de la propiedad agraria se puede hacer sin expropiaciones y sin utilizar la fuerza. Es, sin lugar a dudas un avance histórico, que contrasta con lo que pasó durante los gobiernos de Uribe, cuando hubo despojo de tierras a los campesinos, desplazamiento forzado y persecuciones; Agro Ingreso Seguro, que era para los campesinos más pobres, se le entregó a las familias ricas y terratenientes que habían sido sus socios electorales. Eso nunca más vamos a permitir que pase. Los recursos de los campesinos son para los campesinos.
- Se han formalizado 1,8 millones de hectáreas. Se han creado 17 Zonas de Reserva Campesina y se han reconocido los primeros Territorios Campesinos Agroalimentarios, TECAM.
- Nuestro gobierno ha activado los 610 Comités Municipales de Reforma Agraria en 29 departamentos.
- Todo esto, se ha acompañado del reconocimiento constitucional del campesinado como sujeto de especial protección, y estamos luchando para que se aprueben en ese mezquino Congreso de la República, la jurisdicción agraria para que podamos ir ante los jueces a resolver los litigios de tierras que hay en el país.

Esta transformación social no solo la voy a defender. Haré lo necesario para que se profundice y se haga irreversible. Vamos a trabajar sin descanso para acabar, de una vez por todas, la pobreza rural y urbana.

Los subsidios que hemos entregado los vamos a transformar en derechos. Las poblaciones más marginadas y empobrecidas, que también han hecho un gran aporte al desarrollo de la Nación: los campesinos que producen los alimentos, los pueblos indígenas y afrodescendientes que han resistido y acumulado sabiduría ancestral sobre el cuidado de la naturaleza, las mujeres rurales y urbanas cuidadoras de la vida, los jóvenes que deben tener garantizado su futuro con educación.

Nuestro gobierno no entregará beneficios que sean dádivas caritativas. Va a darle a la gente los derechos a los que tiene acceso por la vida de trabajo, de esfuerzo, que ha contribuido al desarrollo de la nación. Lo primero en nuestro gobierno será la población pobre, a ellos estará destinado mi mayor esfuerzo para que se acabe la pobreza.

Desde esta concepción del cambio social, de la erradicación de la pobreza y la desigualdad, el pasado 11 de octubre dije en Sincelejo que en mi gobierno transformaré la reforma agraria en Revolución Agraria, estructural y con justicia para todas y todos.

Recuperaremos las instituciones agrarias para que el Estado acompañe al campesinado con crédito, asistencia técnica, y garantías para la producción. Redistribuiremos tierras fértiles para que no haya más latifundios ociosos mientras miles de familias trabajan en arriendo o sin tierra.

Invertiremos en lo esencial: agua potable, energía eléctrica, vías terciarias, acceso a internet, escuelas rurales, salud en las veredas. El campo colombiano no puede seguir siendo sinónimo de abandono.

Vamos a construir centros de acopio, plantas de transformación y redes de comercialización administradas por asociaciones campesinas, para que no sigan vendiendo barato y comprando caro. Recuperaremos cadenas productivas como el algodón, el fique, la yuca y el café, dándoles tecnología, infraestructura y acceso a mercados.

Esta es una revolución contra el hambre. Conectaremos la producción campesina con las ciudades para que ustedes vendan a buen precio y para que la población más pobre acceda a alimentos sanos.

Hoy quiero añadir una propuesta concreta y viable, que será un programa central para avanzar en la Revolución Agraria: la compra estatal de la producción campesina.

Con el fin de estimular la economía campesina, familiar y comunitaria, así como la producción agroalimentaria, por un lapso de tiempo que será objeto de estudio, el Estado comprará un porcentaje de alimentos de la producción campesina, en los municipios del país que se encuentran en situación de mayor pobreza y exclusión, bajo el imperio de las economías ilícitas, o en situación de conflicto armado y agresión violenta contra la población campesina, indígena y afrodescendiente.

Dicha compra de alimentos servirá, de una parte, para combatir el hambre en zonas urbanas y rurales diferentes y próximas a las zonas de producción. Para su repartición se utilizará la cadena de distribución tradicional (productores, distribuidores, tiendas, redes agroalimentarias) para que los alimentos lleguen

rápido y a menor costo. Este proceso implica un apoyo de logística y compras masivas.

Otra parte de esa producción agropecuaria estará destinada a la venta con precios competitivos en mercados populares urbanos, que permitan a las poblaciones periféricas de las grandes ciudades tener acceso a los alimentos de la canasta familiar en condiciones acordes a su capacidad adquisitiva.

Como lo dije, uno de los más significativos resultados de este Gobierno ha sido la reforma agraria que ha logrado comprar miles de hectáreas a empresarios. Hemos demostrado que los empresarios y los campesinos podemos llegar a acuerdos.

Haberlo hecho sin violencia y mediante compra de tierras a sectores poderosos del campo es la demostración que podemos construir la paz y la reconciliación en toda Colombia.

Hay empresarios que quieren vender sus tierras, otros de ellos ya lo han hecho para hacer posible la reforma agraria. Con ellos estamos dispuestos a dialogar.

Hay empresarios que quieren vender sus tierras; otros ya las han vendido para hacer posible la reforma agraria. Con ellos estamos dispuestos a dialogar, a comprar esas tierras para entregarlas a campesinos, a cambiar impuestos por obras que benefician a los sectores más pobres rurales y urbanos, y a trabajar de manera conjunta para que nuestro país avance y se convierta, por fin, en un territorio de oportunidades para todas y todos. Porque el progreso solo tiene sentido si es para todos. No podemos seguir alimentando la confrontación entre ricos y pobres.

Colombia es una nación generosa, pródiga en tierras, ríos, selvas y mares. Nuestra riqueza debe servir para superar la pobreza y garantizar una vida digna a todas y todos los hijos de nuestra gran patria.

Por eso estoy proponiendo el diálogo nacional con todos los sectores para poder lograr la paz y la reconciliación. A esos empresarios que quieren construir una nación justa y digna, toda nuestra disposición.



A quienes nos oponemos, y a quienes derrotaremos democráticamente, es a los que desean perpetuar la inequidad, la pobreza, la corrupción o los negocios criminales que tanto daño le han hecho a nuestro pueblo.

He iniciado encuentros y conversaciones con diversos sectores del empresariado, en desarrollo de lo que llamo el Gran Diálogo Nacional. Mi propósito es transparente: que haya un diálogo directo, franco y respetuoso entre ustedes, los campesinos, y quienes han dirigido históricamente la economía formal de Colombia.

Esta decisión es tan correcta que el expresidente Álvaro Uribe ni a los sectores de la extrema derecha les ha gustado. Uribe considera, como parte de su talante autoritario y mezquino, que es dueño del empresariado y que se necesita su permiso para dialogar con los gremios. Se equivoca. Colombia no necesita más odio ni más miedo. Lo que necesitamos es una conversación abierta entre todos los sectores del país.

Ese diálogo no puede excluir a los campesinos, a los pueblos indígenas ni a las comunidades afrodescendientes. Todas y todos debemos sentarnos en la mesa del Gran Diálogo Nacional para impulsar las transformaciones sociales que Colombia reclama.

IVÁN
Cepeda
Presidente



EL ACCESO AL AGUA
**COMO EJE DE LA REVOLUCIÓN
AGRARIA**

Tierralta, Córdoba

Queridas compañeras y queridos compañeros:

Vengo aquí a Tierralta, a encontrarme con ustedes, miles de campesinos de Córdoba, y también debo comenzar recordando los horrores del paramilitarismo y la parapolítica en este departamento, que tuvieron como objetivo despojarlos a ustedes de sus casas y cultivos para entregárselas a poderosos terratenientes que usaban a los paramilitares como tropas de control criminal territorial y de despojo de tierras.

Luego de visitar este departamento, al que quiero muchísimo, desde el año 2006 cuando vine por primera vez a la Universidad de Córdoba. Muchos de los episodios que pude constatar y oír, directamente de las víctimas, de violencia y de crímenes de lesa humanidad que se han cometido en esta tierra los relaté en el libro que escribí con mi amigo y colega, Jorge Rojas. Ese libro se llama A las puertas de El Ubérrimo. Allí contamos la historia del paramilitarismo en Córdoba y los crímenes de la clase política en este departamento, que ocurrieron por tres décadas, a las puertas de la gran hacienda del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En ese libro nos preguntamos, como lo hace todo el país, y especialmente las víctimas de los grupos paramilitares, si el expresidente Uribe era solo un testigo mudo de esos crímenes, o si en su condición de poderoso hacendado y jefe político, estaba directamente vinculado a esa toma paramilitar de esta región y de las tierras de los campesinos, los indígenas y las comunidades afrodescendientes.

Nos preguntábamos:

¿Qué hacía Uribe mientras se estaban perpetrando las decenas de masacres? ¿Qué hizo cuando los paramilitares se tomaron la Universidad de Córdoba? ¿Cuál fue su reacción al enterarse que la familia Mancuso era dueña de numerosos negocios en Montería, y que Salvatore Mancuso, siendo ya jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, vivía en el barrio residencial de la ciudad? ¿Cuál fue su reacción cuando Salvatore Mancuso celebró su boda con un fastuoso evento social? ¿Qué hizo el entonces presidente Uribe cuando le dedicaron un gigantesco monumento a los paramilitares en pleno centro de Montería? ¿Por qué permitió que quienes firmaron en 2001

el llamado Pacto de Ralito, con el que los políticos y los paramilitares querían “refundar la patria”, hicieran parte de su bancada parlamentaria, elegida en 2002? ¿Por qué permitió que se asesinaran decenas de líderes sociales sin tomar acciones concretas? ¿Cómo hizo crecer sus propiedades, comprando tierras, cuando era de conocimiento público que se estaba produciendo el desplazamiento forzado y el despojo de miles de campesinos? ¿Por qué sus hijos, Tomás y Jerónimo, visitaban a narcotraficantes como Wilmer Pérez, alcalde de San Antero, sin que él se opusiera? ¿O peor aún, cómo era posible que políticos que estaban orgánicamente ligados a las AUC y al narcotráfico fueran sus socios y amigos?

Las respuestas a estas preguntas, y a muchas otras similares, se han ido conociendo y corroborando por hechos incontrovertibles.

Uribe no solo no hizo nada para evitar el imperio paramilitar en Córdoba, sino que contribuyó enormemente a afianzar esa máquina de terror, violencia y crimen en este departamento. Bajo sus gobiernos promovió a decenas de funcionarios, civiles y militares, que eran paramilitares y, al mismo tiempo, actores legales; apostó en una carrera hípica con Salvatore Mancuso, y lo llevó de visita a El Ubérrimo; apoyó a los políticos que firmaron el Pacto de Ralito y permitió que llegaran al Congreso como parte de su bancada parlamentaria; su familia, y él mismo, alternaban en el lujoso Club Social de Montería con la familia Mancuso—esas veladas y circunstancias quedaron debidamente fotografiadas y documentadas en El Meridiano de Córdoba—; y mientras a los campesinos los masacraban, desplazaban y despojaban, él compraba las mejores tierras de la región.

Esa es la verdad, simple y clara.

A pesar de que ahora, en época electoral, se quiere presentar, junto a sus candidatos y candidatas, como político que favorece a los campesinos, en realidad aprovechó la destrucción del campesinado no solo en Córdoba, sino en el país para enriquecerse y acumular tierras.

En 2019, la última vez que estuve en esta población, fue cuando asesinaron a la lideresa social María del Pilar Hurtado Montaña, quien dirigió la recuperación de tierras campesinas, aquí en Tierralta. Su asesinato se dio a conocer al país, porque se difundió en las redes sociales un video desgarrador en el que uno de sus pequeños hijos lloraba desconsolado sobre su cadáver.

En ese entonces, cuando vine y le pedí explicaciones por ese crimen al alcalde Fabio Otero Avilez, sus enfurecidos partidarios nos amenazaron. Hoy, seis años después, ese crimen que nos conmovió sigue en la impunidad.

Pero, el coraje de los campesinos y de las campesinas de Córdoba ha sido más fuerte que la violencia que quiso sembrarse en esta tierra.

Gracias a la organización y a la movilización valiente del campesinado y los movimientos sociales, el país y los territorios han comenzado a cambiar. Tenemos un gobierno que, por primera vez, ha otorgado masivamente tierras a los sectores más golpeados por la violencia y la pobreza.

Aquí en Tierralta, entre baldíos y predios que se han recibido de jefes paramilitares desmovilizados, se entregaron ya a familias campesinas más de 3.000 hectáreas de tierra, y en todo el país se están entregando cerca de 700.000 hectáreas.

Muchas de esas tierras fueron parte del despojo paramilitar y han venido siendo devueltas. Hoy necesitamos seguir avanzando en ese camino, y que todas las tierras que tiene la Unidad de Víctimas, y la Sociedad de Activos Especiales, SAE, sean dadas a las familias de los pobladores rurales a quienes se les arrebataron sus parcelas.

Ante ustedes, campesinas y campesinos de Córdoba, me comprometo a hacer todos los esfuerzos para que toda la tierra despojada retorne a sus verdaderos dueños lo más rápidamente posible.

Como lo dije en Sucre, también lo digo aquí: en mi gobierno no permitiré que le vuelvan a quitar las tierras, sus cultivos y sus animales a las familias campesinas, y avanzaré en seguir entregando tierras, como lo ha hecho el gobierno presidido por nuestro compañero Petro.

En mi caso lo haré convirtiendo la reforma agraria en Revolución Agraria.

¿En qué consiste la revolución agraria?

La revolución agraria consiste no solo en entregar las tierras al campesinado. Se trata de hacer de los territorios rurales zonas del país prósperas, sin narcotráfico o minería ilegal, integradas a los mercados urbanos e internacionales,

garantizando que los productos agropecuarios se comercialicen en condiciones justas para la población del campo.

Y eso, a la postre significará convertir a Colombia en una potencia mundial agroalimentaria.

La Revolución Agraria solo se hará realidad con la organización y la movilización del campesinado colombiano. Organización y acción política constituyen tareas centrales del movimiento campesino, ustedes, son el fundamento de las transformaciones del mundo rural colombiano, son la fuerza motriz, el sujeto esencial para las transformaciones que se han dado y las que van a venir en el futuro.

No obstante, además, de la organización y movilización del campesinado, quiero señalar cuatro elementos básicos indispensables para realizar la revolución agraria:

1. En cada municipio rural del país debe haber acceso al agua apta para el consumo y las necesidades humanas.
2. En cada municipio rural del país debe haber fuentes de energía que permitan satisfacer las necesidades básicas de las comunidades.
3. Cada municipio rural del país debe tener vías terciarias que permitan el transporte de los pobladores y de los alimentos desde los lugares en que se producen hasta los mercados de otros municipios rurales, urbanos, las ciudades e incluso los mercados extranjeros.
4. En cada municipio rural del país debe haber condiciones para la producción agropecuaria.

Hoy quiero referirme aquí en Tierralta al primero de esos elementos: el acceso al agua potable como condición de la Revolución Agraria.

Colombia es un país rico en agua, tiene mares, caudalosos ríos, lagos, lagunas, pero millones de personas viven sin acceso a agua potable. Eso es inadmisibile.

Óigase bien este dato: el 80% de los municipios del país tienen algún tipo de dificultad con la calidad del agua para consumo humano. En muchas regiones rurales, el agua que se bebe es la misma que se usa para lavar o para abreviar animales. Esto no es solo un problema de salud, es un martirio cotidiano que

pone en riesgo la vida. No podemos seguir aceptando esta situación como si fuera normal.

¡Sin agua no hay desarrollo posible, sin agua no podremos acabar con la pobreza rural, sin agua no hay seguridad alimentaria, no hay vida digna en el campo; sin agua nuestro proyecto de Nación está condenado al fracaso!

En las zonas rurales, más de la mitad de la población no cuenta con acceso digno a agua potable, y de cada cuatro compatriotas, solo uno cuenta con agua apta para consumo. No hay redes de acueducto suficientes a pesar de los esfuerzos que ha venido haciendo nuestro gobierno, las plantas de tratamiento están obsoletas o simplemente no existen, y lo poco que funciona no garantiza agua segura para el consumo humano.

Esta es una de las mayores injusticias en nuestro país. Mientras en las grandes ciudades se produce diariamente un derroche inhumano de agua, se utilizan grandes cantidades para actividades innecesarias o simplemente reina la inconsciencia del despilfarro, en muchas zonas del país campesinos, niños y niñas indígenas, madres gestantes, jóvenes rurales, padecen de sed crónica, deben hacer inmensos esfuerzos, y recorrer grandes distancias para conseguir un poco de agua.

Por eso, nuestra propuesta de Revolución Agraria tiene como uno de sus cuatro ejes centrales el acceso universal y en condiciones óptimas al agua. Queremos que la gente en Tierralta y Córdoba, que la gente en la Costa Caribe, una región bañada por el mar y caudalosos ríos, donde se presentan inundaciones periódicas, tenga agua apta para el consumo y las necesidades humanas. Queremos que en la Costa el agua deje de ser un bien reservado para la élite y se convierta en la fuente de vida desde la infancia para todas y todos.

Sé que en esta zona del país, se toma el agua de la madre baja del río Sinú. Y me han dicho: “Esa agua que tanto necesitamos, también se lleva a nuestros hijos”. Esa frase resume nuestra tragedia.

Por estas razones, desde el comienzo de mi gobierno asumiremos líneas estratégicas para convertir el acceso al agua en eje estratégico de la Revolución Agraria:

1. El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental

No puede haber vida digna si se vive con sed y con agua contaminada.

Vamos a impulsar una política para que en municipios como Tierralta se construyan acueductos rurales, se mejoren los sistemas de potabilización, y se garantice la participación de las comunidades en la vigilancia de estos procesos.

Vamos a fortalecer la gestión pública y comunitaria del agua con control social y transparente.

2. La infraestructura hídrica debe ser adaptada al territorio

No más proyectos impuestos desde la lejanía de oficinas en Bogotá. Aquí necesitamos soluciones pensadas para la geografía, la cultura y las capacidades locales: captación de agua lluvia, plantas modulares de tratamiento, redes de distribución equitativas, priorización de los centros educativos, de salud y de las zonas más alejadas.

3. Debe haber inversión real, no promesas

Recursos concretos del Presupuesto General, de los fondos de regalías, y de cooperación internacional. Debemos crear un Fondo Nacional por el Derecho al Agua, que priorice a los municipios donde más se vulnera ese derecho. Y Tierralta estará ahí, en la primera línea.

4. Debemos proteger los recursos del agua

No solo debemos acabar con la inconsciencia del despilfarro y el derroche del agua. Cada persona y comunidad deberá ayudar a mi gobierno a proteger los recursos del agua de los criminales de la corrupción, de los “olmedos”, que desvían los preciosos recursos para su enriquecimiento personal. El robo de los recursos para el agua es una acción criminal y la trataré como tal con toda celeridad.

Amigas y amigos campesinos:

“Solo el pueblo salva al pueblo, y solo el pueblo organizado salva la Nación”, decía el reconocido dirigente político de México, Andrés Manuel López Obrador.

Ustedes me conocen. Toda mi vida ha estado consagrada a luchar por la transformación social y política de nuestra querida Colombia.

Saben que una vez elegido presidente necesito contar con el apoyo, la organización y la movilización del campesinado colombiano para transitar de la reforma agraria a la Revolución Agraria

Conocen los principios con los que gobernaré:

- Gobernaré escuchando al pueblo y, por eso, mandaré obedeciendo.
- Gobernaré con programas y planes en los que lo primero será atender la situación de los pobres y excluidos.
- Gobernaré con la convicción de que superar la pobreza y la desigualdad, no es un problema de los pobres, concierne a toda la Nación, pues de ello depende la verdadera prosperidad.
- Gobernaré con el principio de que nuestro gobierno será del pueblo y para el pueblo.
- Gobernaré para que nuestros programas sociales sean universales, y concentren esfuerzos y recursos de todo el Estado, nacional y local.
- Gobernaré dando ejemplo con mis compañeras y compañeros de austeridad republicana.
- Gobernaré para que la ética pública y el rechazo a todas las formas de corrupción permitan construir la paz y la democracia en Colombia.

IVÁN
Cepeda
Presidente



SOLO UN GRAN MOVIMIENTO GLOBAL
**PODRÁ DETENER A LA
EXTREMA DERECHA
NEOFASCISTA**

Madrid, España

Queridas compañeras y queridos compañeros:

Me complace estar en Madrid, corazón de Europa, y tierra de acogida para miles de colombianas y colombianos a quienes vengo a saludar con afecto como parte del diálogo político que he venido haciendo en esta campaña electoral.

Un diálogo para escuchar con atención a la gran comunidad colombiana en el exterior, a las organizaciones que defienden los derechos de migrantes, refugiadas y refugiados, y en general a las y los compatriotas que tanto aportan a nuestra nación desde otros países del mundo. Agradezco a quienes organizaron este maravilloso acto, al comité de mi campaña, al Pacto Histórico.

Me siento en casa, queridas compañeras y queridos compañeros. He venido también a saludar, con afecto y reconocimiento, a nuestras hermanas y hermanos de las fuerzas progresistas españolas, que tanta solidaridad nos han brindado en momentos decisivos de nuestra historia reciente.

Esta es la ocasión para agradecer a España, a su gobierno y a su pueblo, por la contribución hecha a la búsqueda de la paz en diversos procesos de diálogo que hemos adelantado.

Gracias por aportar a la consecución de un hito que cambió la historia de nuestra Nación: el Acuerdo Final de Paz de 2016.

Gracias por apoyarnos cuando hemos afrontado la violencia estatal y la persecución por oponernos a los gobiernos de la extrema derecha. Gracias por apoyarnos ahora que somos el primer gobierno de verdadero cambio social.

Gracias, Enrique Santiago, Irene Montero, Pablo Iglesias, Gerardo Pisarello, ex-presidente José Luis Rodríguez Zapatero, para solo mencionar unos cuantos nombres muy distinguidos de esta larga lista de la solidaridad en esta patria que consideramos hermana.

Vengo hoy, al comenzar el año 2026, con la convicción profunda de que millones de personas que ya integran el Pacto Histórico, junto a millones de compatriotas más, elegiremos el segundo gobierno progresista de Colombia.

Un gobierno que tendré el honor y la alta responsabilidad de presidir como sucesor de nuestro compañero Gustavo Petro Urrego, acompañado de una sólida bancada parlamentaria, de los movimientos sociales y de una firme alianza con las fuerzas democráticas de Colombia.

Triunfaremos porque estamos profundamente arraigados en el corazón del pueblo colombiano; porque somos expresión viva de sus luchas históricas, de su programa colectivo y de sus sueños de dignidad y justicia.

Por eso la gente nos quiere en cada territorio del país; por eso defiende con convicción los logros sociales alcanzados y que continuaremos profundizando en los cuatro años siguientes.

Triunfaremos a pesar de la campaña sistemática que hoy despliegan la extrema derecha nacional e internacional, empeñadas en desestabilizar nuestro gobierno y someterlo, incluso apelando a la agresión y a la intervención militar.

Mi intención inicial era consagrar esta intervención a uno de los planteamientos centrales de mi concepción política, y de lo que considero debe ser un eje del programa de nuestro segundo gobierno, la **Revolución Ética, proyectando este concepto, al pensamiento y la acción política global.**

Tendrá que ser objeto de otro discurso en el futuro, porque, como ustedes comprenderán, no puedo omitir esta noche consagrar esta reflexión a la agresión militar de Estados Unidos en Venezuela.

Y lo primero que debo decir con franqueza y claridad desde este escenario internacional, decirlo aquí y ahora: que nadie se haga ilusiones, que no se equivoquen. A nuestro gobierno y a nuestro pueblo, no lograrán arrodillarlo ni doblegarlo mediante insultos, presiones, amenazas o acciones militares.

No somos uno de los gobiernos incondicionales de Estados Unidos en la región, no provenimos de los sectores de la élite colombiana acostumbrados a la sumisión y a besar la mano de quien los desprecia.

Exigimos respeto a nuestro presidente Gustavo Petro Urrego, quien representa hoy la dignidad y la soberanía de nuestro pueblo.

En segundo lugar, debo decir a quienes, desde un cómodo simplismo, reducen lo ocurrido en Venezuela al “derrocamiento de un dictador”, que ignoran, con ingenuidad o perversidad, los verdaderos peligros que enfrentan nuestros pueblos con esta nueva afrenta del gobierno del presidente Trump.

Debemos ser conscientes: sin paz, sin legalidad internacional y sin estabilidad, justamente tres condiciones básicas que resultan severamente lesionadas por la intervención estadounidense, no hay comercio, no hay prosperidad posible, no hay seguridad para nadie. Es necesario preservar a América Latina como zona de Paz.

En Colombia, conocemos bien, demasiado bien, los métodos que han empleado los gobiernos de Estados Unidos durante dos siglos para intervenir en nuestro territorio.

También conocemos, hasta la saciedad, las consecuencias de esos métodos: el saqueo cruento de nuestras riquezas naturales que han hecho empresarios y las grandes empresas multinacionales de Estados Unidos en nuestro territorio impunemente, la intensificación de las violencias y las masivas violaciones de derechos humanos que han dejado diez millones de víctimas, el empobrecimiento de la población especialmente rural.

Colombia ha sido durante décadas el **laboratorio y la plataforma** de la injerencia política, militar y económica estadounidense en América Latina.

Digo laboratorio y plataforma porque en nuestro país, para solo hablar de la injerencia militar, se ensayaron, aplicaron y luego exportaron toda clase de métodos de guerra como el bombardeo con napalm contra las poblaciones campesinas como nació en Villarrica, Tolima en la década de 1960; el genocidio, como el perpetrado contra la gloriosa Unión Patriótica; la práctica de la tortura, la desaparición forzada, la guerra psicológica, la creación de la Doctrina de Seguridad Nacional, la tesis del enemigo interno, el nefasto Plan Colombia, el “conteo de cuerpos” o “falsos positivos”, la llamada “guerra contra el terrorismo”, la financiación del paramilitarismo y sus masacres por parte de las compañías multinacionales, la promoción de la industria del mercenarismo, etcétera.

Todos esos métodos fueron consignados, aprendidos y aplicados a través de manuales de guerra, formación en la Escuela de las Américas, y misiones militares estadounidenses.

Pero entre todas esas doctrinas y prácticas, tal vez la que peores efectos ha traído es la llamada **guerra contra las drogas** que ha demostrado que el remedio puede ser peor que la enfermedad, o incluso que el remedio es la enfermedad misma.

Colombia lleva más de medio siglo de ser un gigantesco laboratorio de una política criminal, cuyo más grande efecto es que la práctica de la guerra que se sabe está condenada al fracaso, conduce al fortalecimiento de las estructuras del narcotráfico.

Llevamos, mal contadas, seis generaciones de organizaciones, redes, ejércitos y clanes narcotraficantes. Esa guerra, como lo hemos visto por estos días en el caso de la intervención en Venezuela, ha sido utilizada como el gran pretexto para otros fines estratégicos, como el saqueo de nuestros recursos naturales.

Esa fracasada guerra ha costado, en nuestro caso, la erosión de la democracia, la degradación de instituciones, la destrucción del campesinado, la concentración de la tierra como parte del lavado de activos, la perversión del sistema financiero, el crecimiento exponencial de la corrupción en el Estado, y la descomposición de la ética pública.

Pero, además, esa fallida guerra es el instrumento privilegiado para ejercer la dominación sobre nuestros gobiernos a través de tres instituciones impuestas: las extradiciones unilaterales, la certificación también unilateral en la lucha antinarcóticos, y la intrusión encubierta o frontal de los organismos de inteligencia y sus agentes estadounidenses o nacionales, la DEA, el FBI y la CIA y sus agentes estadounidenses o nacionales en nuestra vida política y social.

Y el colmo de la desvergüenza de esta guerra y sus peores métodos, es que su más fanático defensor en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, junto a su hermano Santiago -condenado hoy por la justicia a 28 años de cárcel-, construyeron su poderío económico, en estrecha relación con los clanes narcotraficantes: el clan Escobar, el clan Ochoa, el clan Gallón Henao, el clan Cifuentes Villa, solamente para mencionar algunos de los socios.

De esas relaciones con el narcoparamilitarismo colombiano del expresidente colombiano Álvaro Uribe, no hemos escuchado una sola palabra del presidente Donald Trump, ni de su secretario de Estado, Marco Rubio. Mutismo cómplice absoluto con el narcotráfico colombiano.

Lo reitero: bajo mi gobierno haré todos los esfuerzos necesarios para replantear ese viejo paradigma, para poner en la agenda del debate internacional este flagelo que ya es global, y para buscar un modelo diferente de tratamiento del problema de las drogas de uso ilícito, que releve a nuestra nación de la carga exclusiva de resolverlo a costa del daño ambiental, el deterioro del territorio y el sufrimiento de nuestra población.

Pero, hablemos ahora del presente.

En los últimos años, hemos asistido al surgimiento de una suerte de internacional de la extrema derecha.

En esta etapa de decadencia del neoliberalismo y de crisis del poder imperial estadounidense, la extrema derecha ha asumido una nueva forma histórica. **Se ha convertido en una internacional neofascista.**

¿Y esto qué significa?

Significa que esa corriente se nutre de las expresiones más retrógradas, instrumentales, violentas, corruptas y discriminatorias que ha conocido la humanidad: el desprecio por los pobres y los excluidos, la aporofobia -para decirlo en lenguaje de una filósofa española Adela Cortina-; la xenofobia y el odio a migrantes y extranjeros; la misoginia, la homofobia y el racismo; la depredación sistemática de la naturaleza; el autoritarismo, la obsesión por la violencia, el genocidio, el militarismo y el fetichismo de las armas.

Todo esto en línea con la revitalización del decadente imperio estadounidense que vuelve a proclamar, como lo hiciera en la primera mitad del siglo XX el **Tercer Reich**, que requiere de un “espacio vital” para el mantenimiento de su poderío que, en este caso, es el hemisferio occidental.

Y también encarnando un proyecto que sueña con salvar a una élite superrica y que ha perdido toda barrera moral, mientras empuja al resto de la humanidad al abismo.

En otras palabras, por su concepción, por su forma de actuar y por su estrategia global, la extrema derecha neofascista se ha convertido en uno de los factores más peligrosos para la seguridad, el bienestar y, en última instancia, para la supervivencia misma de la humanidad.

Esta amenaza no es abstracta. Se expresa en redes internacionales que coordinan su acción política, mediática y económica.

Miami y el estado de La Florida se han consolidado como los principales centros de articulación de este proyecto en nuestro continente; espacios donde confluyen el supremacismo estadounidense y las extremas derechas latinoamericanas.

Ahora bien, como lo decía, lo nuevo es que esa extrema derecha tiene un programa político claro que comienza a aplicar en el hemisferio occidental. El pasado mes de noviembre, ocurrió un hecho trascendental que ha pasado prácticamente desapercibido y que explica la lógica de lo que estamos viendo hoy.

Se dio a conocer el documento que define la Estrategia *de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América* (SSN 2025, por su sigla en inglés), que proclama la imposición de un supuesto “nuevo orden mundial”. Entre sus ejes centrales se encuentran la defensa abierta de la agenda de las derechas globales y el llamado “**Corolario Trump a la Doctrina Monroe**” para América Latina y el hemisferio occidental, la restauración de la idea supremacista de “América para los americanos”, pero esta vez reforzada.

El “Corolario Trump a la Doctrina Monroe” es precisamente la concreción del concepto de que el hemisferio occidental es el “espacio vital” de Estados Unidos de América.

Este Corolario contenido en el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional dice así: “Tras años de descuido estratégico, Estados Unidos reafirmará y **hará cumplir** la Doctrina Monroe con el fin de restaurar su preeminencia en el hemisferio occidental, proteger el territorio nacional y asegurar el acceso a zonas geográficas clave. Ninguna potencia extrahemisférica deberá posicionar fuerzas militares, capacidades estratégicas o adquirir control de activos críticos dentro del hemisferio”.

Es decir, Estados Unidos comprende **nuestras naciones latinoamericanas como parte de su cuerpo como potencia, su espacio natural y su propiedad**. De ahí que dicta, unilateralmente, las reglas del juego a seguir, la manera en cómo explotará nuestros recursos en beneficio propio.

Para este fin, óigase bien, dice el Corolario, habrá **reajuste del despliegue militar** para controlar puntos estratégicos, vías marítimas y el espacio aéreo; **“diplomacia comercial”** que implica toda clase de presiones y chantajes comerciales y arancelarios.

Esa vieja doctrina intervencionista, reforzada por Trump, divide las naciones, en general, y las latinoamericanas, en especial, en dos categorías. Los gobiernos sumisos y funcionales a sus intereses, y aquellos que “se portan mal”, es decir, que son soberanos y tienen una visión distinta a la suya.

Esa Doctrina se arroga, entonces, **la potestad de elegir qué tipo de gobiernos se crean en la región**, promover que **los gobiernos del hemisferio cooperen con Estados Unidos contra el narcoterrorismo**, **garantizar el acceso continuado a ubicaciones estratégicas**, cambiar gobiernos soberanos, ya sea mediante el uso directo de la fuerza o a través de las formas más burdas de intervención, presión y chantaje.

Todo ello al precio de liquidar el derecho internacional, vaciar de contenido sus instituciones y convertir los procedimientos democráticos en meros rituales sin fuerza vinculante.

Según esta lógica, los gobiernos que “se porten mal”, es decir, aquellos que ejerzan un mínimo de soberanía y no obedezcan dócilmente, serán castigados. Se les exige someterse a la exacción ilimitada de sus recursos naturales, de sus fuentes de energía y de sus sistemas alimentarios. Quienes no acepten ese destino, serán desestabilizados, derrocados o destruidos.

Este proyecto también busca imponer relaciones de exclusividad con Estados Unidos, liquidar los procesos de integración regional y bloquear la construcción del Sur Global.

Solo se admite la subordinación total a dos políticas centrales: la llamada guerra contra las drogas y la contención violenta de las migraciones. Para ello no basta la obediencia, se exige colaboración activa. Convertir territorios en campos de concentración, en vertederos de desechos, o en zonas de saqueo minero y ambiental.

Amigas y amigos:

Ese proyecto de muerte masiva no es el futuro que queremos para nuestras sociedades. Y nos oponemos a él con toda nuestra fuerza, nuestra energía y nuestra imaginación, hasta derrotarlo en todos los rincones del planeta.

Derrotar al neofascismo no es una consigna, es una condición para preservar la vida, para defender la dignidad humana y para construir un mundo verdaderamente justo y democrático.

Necesitamos forjar un gran movimiento global para enfrentar y derrotar a la internacional del neofascismo. Unir a las fuerzas progresistas, a los movimientos sociales, a los pueblos ancestrales y a todas las expresiones democráticas del mundo dispuestas a frenar este proyecto devastador, incluyendo al propio pueblo estadounidense.

Como lo dijo el gran historiador de las luchas del pueblo estadounidense, Howard Zinn, nunca debemos olvidar que “la historia de Estados Unidos no es solo la historia de sus presidentes, sino de su gente que resistió”.

Desde Colombia, estamos listos a asumir nuestra responsabilidad en esta tarea. No será la primera vez que enfrentemos las estrategias de dominación estadounidense ni a la extrema derecha, en eso tenemos larga experiencia. No solo las hemos confrontado, sino que las hemos derrotado política, social, cultural y judicialmente.

Nos oponemos firmemente como Estado, tanto al ataque ilegal e ilegítimo a cualquier Estado soberano como a la Doctrina Monroe y a su corolario.

Y seguiremos trabajando para que nuestro continente, donde hasta hoy no ha habido grandes conflictos armados transnacionales, se mantenga como zona de paz.

Sabemos bien que uno de los objetivos de esta estrategia del gobierno Trump es intentar asfixiar la segunda ola del progresismo en Colombia, así como perseguir de manera implacable a nuestro presidente Gustavo Petro, a quien nunca, óigase bien, podrán humillar.



Nuestro gobierno quiere la mejor relación con el pueblo estadounidense, pero sobre las bases del respeto mutuo y la dignidad.

Y como futuro presidente de Colombia lo afirmo con claridad: por encima de todo está nuestro honor, nuestra libertad, nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestra dignidad. Y así lo digo, compañeras y compañeros, como futuro presidente de Colombia, porque al lado del pueblo colombiano vamos a triunfar este año.

Somos un pueblo forjado en la resistencia, un pueblo al que no se le humilla ni se le silencia, que ha sacrificado a miles de sus mejores hijas e hijos en esta histórica lucha y que tiene inscrita en la memoria su ejemplo de entereza y valor frente a los opresores domésticos y foráneos.

IVÁN
Cepeda
Presidente



POR LA SOBERANÍA
DE NUESTRO TERRITORIO

Valle de Sibundoy, Putumayo

Saludos a los valientes pueblos Inga y Kamsá, me siento honrado de estar en este territorio, al que quiero como a toda Colombia.

Me complace hoy estar con ustedes en el Valle de Sibundoy, ubicado en el Alto Putumayo, un territorio de convergencia entre el mundo andino y en la gran Amazonía colombiana.

Un territorio que está marcado por la resistencia milenaria de los pueblos Kamsá e Inga que han defendido su cultura, espiritualidad, sus resguardos y sus tierras frente a agresivos procesos de colonización y despojo.

Mi saludo a estos valientes pueblos. Mi saludo al movimiento Unidad en Minga por Colombia. Mi saludo al gran Pacto Histórico desde Putumayo.

Como en otras partes del país, los pueblos indígenas han logrado como resultado de su resistencia heroica, preservar sus prácticas ancestrales, mantener unida a sus familias y comunidades, enfrentar el despojo de tierras que querían los colonos e incluso ampliar sus resguardos y ejercer el poder territorial.

Me siento orgulloso de estar hoy entre los pueblos indígenas.

Por eso, compañeras y compañeros, tomé la decisión de comenzar esta segunda etapa de mi largo camino que se está haciendo cada vez más corto hacia el Palacio de Nariño, al cual entraré por la puerta grande el 7 de agosto de este año.

Comenzar esta segunda etapa de campaña electoral de nuevo desde el sur acompañado de los pueblos indígenas, de los movimientos sociales, del Pacto Histórico, de nuestras candidatas y candidatos aquí desde Putumayo mayo y desde Nariño.

Lo hago también porque considero que, ante los últimos hechos de intervención militar, política y económica del gobierno de Estados Unidos en América Latina, este es un lugar muy apropiado para decirlo con fuerza: Colombia y estos territorios son soberanos.

Nuestro mensaje desde el sur es la palabra soberanía, ante todo. Nuestra agua, nuestra tierra, nuestro cielo, nuestra biodiversidad, nuestros recursos minerales, nuestro hidrocarburo, nuestra selva amazónica nos pertenecen.

No son recursos para ser saqueados por intervenciones militares, bombardeos ni portaviones. Desde aquí decimos que no estamos dispuestos a aceptar la vieja doctrina colonialista que dice: “América para los americanos”.

Nuestra doctrina es: Colombia para los colombianos.

Los territorios para los pueblos indígenas, milenarios, para los campesinos, para las comunidades afrodescendientes, para las mujeres de nuestros territorios, para el pueblo colombiano que sí sabe cuidar la naturaleza, que sí sabe cuidar el ambiente.

La doctrina Monroe es una doctrina colonialista formulada en el siglo XIX bajo la consigna “América para los americanos”, y ha sido históricamente una justificación para la intervención, el saqueo y la dominación.

El gobierno del presidente Donald Trump amenaza con convertir estos territorios en escenarios de guerra y muerte, que pone en riesgo, esa intervención, a nuestras comunidades.

Nosotros tenemos una posición con el presidente Petro que no admite ambigüedad: nos diferenciamos profundamente de la actitud servil de la extrema derecha colombiana, de Álvaro Uribe Vélez y su candidata Paloma Valencia y su nuevo candidato Abelardo de la Espriella, que todos los días sin falta imploran de rodillas la intervención militar de Estados Unidos en nuestro país y en Latinoamérica.

Esa postura no es patriótica ni responsable, es una expresión abierta de traición al pueblo colombiano.

Como no tienen el respaldo y la simpatía de millones de electores -como sí los hemos tenido nosotros-, como ya no les creen, imploran la intervención estadounidense para ayudarlos a ganar las elecciones.

Álvaro Uribe promete entregar nuestra riqueza, nuestra nación, nuestra historia, a una potencia extranjera a cambio de una victoria electoral tramposa. Y eso, quiero que quede claro aquí, no lo vamos a permitir de ninguna manera.

Reivindicamos el principio que está claramente inscrito en nuestra Constitución, que nos define como nación independiente, comprometida con la integración latinoamericana.

Creemos en una política exterior basada en la dignidad, el respeto mutuo, la integración regional, el multilateralismo, la cooperación respetuosa entre los estados.

¿Cómo debemos defender y proteger nuestra soberanía?

Esa defensa de la soberanía exige hoy, en primer lugar, elegir un gobierno que la haga respetar. No basta con proclamar el amor por la patria; se requiere un gobierno capaz de dialogar con el mundo desde la dignidad, de cooperar sin someterse, y de proteger los intereses estratégicos del país, especialmente sus territorios, sus recursos naturales y su población.

A pesar del chantaje, de las agresiones y amenazas, nuestro digno presidente Gustavo Petro ha sabido defender nuestra independencia y nuestra dignidad como nación. Y yo, como su sucesor, se los digo y me comprometo ante ustedes: haré que se respete la independencia de Colombia como patria soberana y digna, así como haré que se respete cada uno de sus territorios.

De igual forma, debemos contribuir a que se fortalezca un gran movimiento internacional que proteja la soberanía latinoamericana, nuestra condición de zona de paz en el mundo donde no hay conflictos armados entre naciones, e igualmente nuestro derecho a la integración regional y del sur global.

¿Por qué creemos y estamos seguros que tenemos las condiciones para elegir un segundo gobierno del cambio social en Colombia?

La posibilidad de ser de nuevo un gran gobierno tiene que ver con lo que representamos como fuerza política y social.

El Pacto Histórico es hoy la fuerza política más dinámica, más sólida y con mayor proyección en Colombia. Esta es una realidad que se expresa en las calles, en los territorios, en la organización popular y en la esperanza renovada de millones de colombianas y colombianos.

La consulta del pasado 26 de octubre, tenemos que volver a decirlo, se ha convertido en una demostración contundente de ese poder ciudadano. Por medio de un mecanismo democrático, elegimos a candidatas y candidatos al Senado y la Cámara. Y yo obtuve en esa consulta, debo recordarlo, 1'550.000 votos.

Esto quiere decir que nuestro proyecto ha crecido, se ha fortalecido y se ha diversificado y que el pueblo quiere que sigamos profundizando el cambio que ya se inició en 2022, no solamente con nuestra representación, sino con la representación también de los pueblos indígenas en el Gobierno y en el Congreso.

Hoy contamos con un respaldo nacional cada vez más amplio, trabajadores y trabajadoras, pueblos indígenas, campesinado, juventudes, mujeres, sectores empresariales comprometidos con el desarrollo productivo, intelectuales, artistas y movimientos sociales reclaman que continuemos en la dirección del Estado colombiano.

Pero también es innegable el **creciente reconocimiento internacional** a nuestra campaña presidencial y al proyecto político que representamos. Colombia ha recuperado su voz en el mundo. Hoy somos vistos como un país que busca soluciones, no confrontaciones; cooperación, no subordinación; diálogo, no imposición.

El Pacto Histórico no es un proyecto personal ni coyuntural. Es un proyecto histórico construido desde abajo con el pueblo y para el pueblo. Por eso el Gobierno y el presidente Petro despiertan apoyo, simpatía, esperanza en la gente, en los territorios, en cada rincón del país.

Sabemos que el cambio atemoriza a quienes se beneficiaron durante tantas décadas de la corrupción, la desigualdad y la violencia, pero también sabemos que la mayoría social que respalda este proceso es hoy más consciente, más organizada y más decidida. La gente ha visto que el cambio, no era una promesa electoral, era el camino correcto y yo estoy listo junto a todas y todos ustedes a que el cambio continúe y se profundice en los próximos años.

¿De qué cambios estamos hablando? ¿De qué hechos y resultados concretos? ¿De qué grandes logros hablo en este discurso?

Uno muy reciente, un logro histórico y profundamente humano: el aumento del salario mínimo en un 23% que hoy podemos llamar con justicia salario vital.

Durante décadas nos han dijeron que mejorar los ingresos de quienes trabajan era imposible, que eso condenaría al país al colapso económico y de manera irresponsable echaría al traste nuestra economía. Lo que en realidad defendían no era la estabilidad económica, sino la precariedad para las mayorías y la gran vida para unos pocos.

Hoy, gracias a esta decisión valiente, millones de familias en Colombia comenzarán a salir de la angustia cotidiana. Pueden cubrir mejor sus necesidades básicas, pueden pensar en educación, en salud, en alimentación digna. Este aumento no fue un capricho ideológico o populista, fue un acto de justicia social largamente postergado y por eso debemos defenderlo ante el intento de echarlo hacia atrás. Nos movilizaremos si quieren quitarle a la gente sus derechos.

Un segundo logro: hoy podemos decirlo y demostrarlo, las cifras están ahí a la mano: la economía colombiana está creciendo en un 3,6%, la inflación se ha reducido en 5,3%, un índice no visto desde hace tiempo y la tasa de desempleo disminuyó 8,2%, una de las más bajas en la historia reciente del país.

Esto sencillamente demuestra que cuando se fortalece el ingreso de la gente se fortalece el mercado interno, la producción y el país entero. Demuestra que la justicia social no es enemiga del crecimiento económico. Demuestra que es cierto que, por el bien de Colombia, primero los pobres, primero los derechos de la gente.

Y un tercer logro para no abundar en muchos otros, que es sencillamente también histórico, la verdadera reforma agraria que está en curso. Por primera vez, de una manera tan eficaz, se están entregando más de 700.000 hectáreas de tierra al campesinado y a las poblaciones rurales. No con violencia, no con despojo, no con sangre, sino con legalidad y paz.

Estamos ante la primera reforma agraria en el país pacífica. Una reforma que prepara para que produzcamos y sembremos en la esperanza de convertirnos en una gran potencia agroalimentaria. Una reforma que reconoce a las poblaciones rurales como sujetos de derecho y como pilar de soberanía alimentaria de la nación.

Esos tres logros, -salario vital, economía fortalecida con justicia social y reforma agraria sin violencia- no son hechos aislados, son la prueba de que sí era posible gobernar de otra manera, de que el Estado puede ponerse del lado de las mayorías, de que el cambio no es una utopía, sino una decisión política.

Por eso hoy decimos con orgullo, pero sin arrogancia: este gobierno ha comenzado a cumplir. Este gobierno ha comenzado a transformar. Este gobierno ha demostrado que Colombia puede ser más justa sin dejar de ser más fuerte y creciente en materia económica.

Para continuar este proceso, en mi gobierno prestaré especial atención a la transformación social y económica de los territorios. Daré seguimiento a los pactos regionales y, en particular al lugar central en mi programa de gobierno de la Revolución Agraria.

La verdadera transformación del territorio se hace con condiciones materiales de dignidad y voy a mencionar tres que son indispensables:

- 1. Cada territorio y municipio del país requiere tener agua potable,** apta para el consumo humano para todos los municipios, porque el agua es un derecho fundamental y la base de la vida.
Hoy debemos decir con tristeza que 80% de los municipios del país no cuentan con agua potable. Esto es un crimen, realmente, en un país que tiene tanta riqueza hídrica como Colombia y vamos a acabar con eso. Haremos todos los esfuerzos para avanzar en que haya agua potable para todas y todos.
- 2. Energía eléctrica para todos los municipios del país,** priorizando fuentes de energía alternativa y limpia, que lleven desarrollo sin destruir el territorio y que permitan cerrar brechas históricas. Hoy el 45% de los municipios del país tienen severos problemas de suministro de energía eléctrica.
- 3. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que los municipios del país y los territorios tengan vías terciarias, vías fluviales, vías aéreas para el transporte y la comunicación,** de tal manera que la producción agropecuaria, que si cumplimos con estas tres condiciones, se va a seguir incrementando, pueda llegar rápidamente a los mercados urbanos y a los mercados de otros municipios y los campesinos, los pueblos ancestrales, las comunidades afrodescendientes puedan tener el mejor bienestar y satisfacer sus necesidades básicas. A eso le llamamos, compañeras y compañeros, la revolución de los territorios.



Además, para que haya agua, haya la posibilidad de energía eléctrica, haya transporte, necesitamos que haya paz en nuestros territorios. Llamamos a los grupos armados a respetar a la población civil, al liderazgo social y a que rápidamente entren en el diálogo y renuncien a la violencia y al sometimiento de las poblaciones en cada uno de los territorios del país.

IVÁN
Cepeda
Presidente



FORTALECER
**LA TRANSFORMACIÓN
SOCIAL DE LA SOCIEDAD
COLOMBIANA**

Ipiales, Nariño

Queridas compañeras, queridos compañeros,

Saludo a Ipiales, tierra donde el pueblo indígena, los movimientos sociales y la ciudadanía ha dado luchas con fortaleza, tenacidad y también sabiendo dialogar con los poderosos sin perder nunca su dignidad.

Es un pueblo valiente, el que vive y lucha en Ipiales.

Como lo hice cuando anuncié mi aspiración presidencial, he decidido volver al sur para comenzar esta segunda etapa de nuestra gran marcha, por segunda vez, para convertirnos en gobierno y entonces el 7 de agosto de este año entrar por la puerta del Palacio de Nariño a darle un abrazo a nuestro compañero presidente Gustavo Petro.

Esta marcha que estamos recorriendo juntos, con nuestras candidatas y candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Representantes nos debe llevar a triunfar. Haremos lo necesario para hacer realidad el segundo gobierno de las transformaciones sociales e históricas de carácter progresista en Colombia.

Así será, compañeras y compañeros, porque en estos tres años y medio hemos logrado que en Colombia se comience a producir una gran transformación y cambios. Una revolución de las conciencias, una recuperación de la esperanza, una Revolución Ética.

El pueblo colombiano ha adquirido la certeza de que tiene derechos, que es posible ejercerlos, que el Estado debe garantizarlos y, si eso no ocurre o si se pisotea la dignidad de nuestro pueblo, la gente debe salir a las calles, a las carreteras y movilizarse para exigir los derechos.

El pueblo hoy tiene conciencia de sus derechos y eso no tiene marcha atrás. ¡El futuro de Colombia le pertenece al pueblo y el pueblo ya decidió cambiar!

Y por eso este año elegiremos el segundo gobierno que seguirá profundizando la transformación social de carácter progresista.

Este camino de justicia social, de construcción de mayor democracia y paz verdadera no ha sido fácil y ustedes lo saben.

En estos años el único discurso que hemos conocido de la extrema derecha como oposición y de su jefe, Álvaro Uribe Vélez, ha sido el ataque permanente y sistemático al cambio social y el ataque personal contra nuestro presidente Gustavo Petro Urrego.

No se trata, en este caso, en el caso del señor Uribe, de un debate de ideas ni de una confrontación programática honesta, como la que sí hacemos nosotros. Se trata de una estrategia de odio, desinformación y miedo dirigida a deslegitimar un proyecto democrático que en 2022 el pueblo eligió en las urnas.

El ataque del uribismo contra el presidente Petro ha consistido en una agresión permanente cada vez más peligrosa. Hay que decirlo. Ha ido desde las campañas sucias, difundidas por medios de comunicación afines, pasando por las bodegas digitales dedicadas a la difamación, hasta llegar hoy a un hecho de extrema gravedad: la promoción abierta de la intervención del gobierno de los Estados Unidos para evitar también nuestro triunfo electoral en las elecciones de primera vuelta, pero no lo van a lograr, debemos decirlo claramente.

El uribismo no ha podido aceptar que Colombia cambió, que el pueblo decidió dejar atrás un modelo de exclusión, corrupción, violencia y privilegios para unos pocos. Por eso atacan al presidente Petro y al Pacto Histórico.

Por eso tratan de evitar por todos los medios que yo sea elegido en primera vuelta presidencial. Saben bien que somos la ruptura con ese pasado que ellos defienden y por eso quieren acabar con nuestro proyecto social. Pero los vamos a derrotar en democracia, en las urnas, de manera pacífica, con argumentos, programas y logros sociales.

Uribe ataca las reformas sociales porque esas reformas tocan intereses que, durante décadas, incluso siglos, han sido el beneficio de algunos pocos. Prefiere el trabajo precario, las pensiones indignas y los salarios miserables. Ataca la reforma laboral porque establece y devuelve a la clase trabajadora sus derechos y dignifica el empleo. Ataca la reforma pensional porque busca garantizar una vejez con dignidad para millones de colombianos y colombianas que hoy están condenados a la miseria. Ataca el aumento del salario mínimo porque cree que para producir riqueza se requiere que haya pobreza y salarios indignos.

Durante décadas, el uribismo ha intentado convencernos de que el problema central de Colombia es solo la inseguridad, ocultando deliberadamente las causas de la violencia: la desigualdad, la exclusión social, la pobreza, la falta de oportunidades para las mayorías de este país.

Su receta la conocemos hasta la saciedad y está ya condenada al fracaso: más miedo, más militarización y menos Estado social. Un discurso como este pregona además el modelo neoliberal de austeridad. Una austeridad que siempre ha sido para los pobres, mientras garantiza el enriquecimiento de sus socios políticos, de las élites económicas y de quienes han capturado el Estado con mafia y corrupción en su propio beneficio.

El modelo que recorta derechos, privatiza lo público y sacrifica el bienestar de las mayorías en nombre de un supuesto orden que solo protege privilegios. Pero como lo dije, esa historia y ese modelo ha fracasado.

Ha fracasado porque el país cambió, porque millones de colombianos y colombianas entendieron que la seguridad sin justicia social es una mentira. Hoy ante ese fracaso, el uribismo intenta disfrazarse.

Se presenta ahora como el defensor de lo social, como protector de los campesinos, de las mujeres, de los jóvenes, de los trabajadores y de los pobres, pero Colombia ya los conoce. Conoce a Álvaro Uribe bastante bien y a su gente. Conoce su historia, sus gobiernos, sus violaciones de derechos humanos y sus resultados.

El país sabe que uno de los mayores daños que le causaron a Colombia fue hacer más pobres a los pobres y más ricos a los ricos, mediante políticas y leyes neoliberales que concentraron la riqueza, debilitaron el trabajo digno, precarizaron el campo y abandonaron a millones de personas a la exclusión.

No pueden, Uribe y su séquito, borrar con discursos populistas su pasado. No pueden fingir ahora una sensibilidad social que negaron durante décadas. No pueden hablar de los campesinos quienes promovieron el despojo de las tierras.

No pueden hablar de derechos de los trabajadores quienes precarizaron el empleo y persiguieron a los sindicatos. No pueden hablar ahora de buscar el bienestar de la juventud cuando, como todos sabemos, miles de jóvenes fueron desaparecidos y asesinados en los falsos positivos.

No pueden hablar de pobreza quienes gobernaron para profundizarla. Que no les sigan mintiendo y disfrazándose ante el pueblo colombiano.

Por eso decimos, Uribe y su extrema derecha no podrán detener el cambio social. El cambio social llegó para quedarse.

Como lo dije ayer en Sibundoy, donde tuve la oportunidad de ser recibido por los pueblos indígenas, los éxitos sociales de nuestro Gobierno se plasman en resultados concretos y en transformaciones reales que ya están cambiando la vida de millones de personas y hogares colombianos.

Un logro histórico, profundamente humano, el aumento del salario mínimo en un 23 %, que hoy podemos llamar con justicia salario vital.

Durante décadas intentaron convencernos que era imposible, que mejorar los ingresos de los trabajadores y de las trabajadoras podía condenar al país a una bancarrota y un colapso económico.

Lo que en realidad estaban defendiendo eran sus privilegios porque lo que ha demostrado este Gobierno es que cuando mejora la calidad de vida del pueblo, mejora y se fortalece la economía.

Otro logro, bajo nuestro Gobierno, compañeras y compañeros: más de 2'800.000 personas han salido de la pobreza monetaria y 420.000 de la pobreza extrema. La desigualdad también se redujo de manera histórica. Son logros, no son palabras ni promesas.

En salud que tanto dicen y critican la política en materia de salud. Se desplegaron 10.000 equipos básicos de atención que hoy llegan a 7.5 millones de hogares y se fortaleció la infraestructura hospitalaria con más de 1.300 proyectos.

Pero eso, claro que no es suficiente. Requerimos una reforma a la salud que deje de convertir la atención médica de las personas en un negocio como la convirtió Álvaro Uribe Vélez con la Ley 100.

Se duplicó el subsidio de adultos mayores beneficiando a más de un millón de personas a través del programa Colombia Mayor.

Este Gobierno ha tenido además una conquista histórica que no nos cansaremos de repetir: está repartiendo 700.000 hectáreas de tierra, que han

llegado a 270.000 de ellas ya entregadas a familias campesinas. Se han formalizado 1'800.000 hectáreas, superando en 75% al gobierno anterior.

Se crearon 17 zonas de reserva campesina y reconocieron los primeros territorios campesinos agroalimentarios. El campesinado en este Gobierno es por primera vez sujeto de derechos constitucionalmente reconocidos.

Todo esto acompañado de muchos otros logros que son la prueba que sí era posible gobernar garantizando derechos sociales y haciendo crecer la economía; que la verdadera prosperidad parte de acabar con la pobreza, la desigualdad social y la exclusión.

Y nosotros, compañeras y compañeros, el Pacto Histórico y yo en particular como candidato del Pacto Histórico, me comprometo a seguir este camino, defenderlo y profundizarlo.

En mi Gobierno el lugar central de la política pública lo ocupará la lucha contra la pobreza y la desigualdad social.

Voy a profundizar las siguientes políticas para mencionar solamente algunas de ellas:

La reforma agraria vamos a transformarla en Revolución Agraria para desarrollar la economía campesina e incluir, entre otros elementos, la compra por parte del Estado de producción agropecuaria a precios justos a la población rural, para destinar esos alimentos a la lucha contra el hambre en Colombia.

Vamos a avanzar decididamente en la transformación de los territorios a través de tres programas estratégicos para los municipios del país:

1. Vamos a buscar al máximo, compañeras y compañeros, dotar de agua potable, apta para el consumo humano a todos los municipios del país.
2. Vamos a buscar resolver los problemas en materia de consumo y acceso a la energía eléctrica, priorizando fuentes de energía alternativa y limpia. No es posible que el 80% de los municipios rurales del país no tengan agua potable. No es posible que 45% de los municipios del país sigan teniendo problema de energía eléctrica.
3. Vamos a avanzar al máximo en construir vías terciarias, vías fluviales, vías aéreas para conectar a los municipios rurales con todo el país y todas las ciudades, para que campesinos y población rural puedan transportar su producción a los mercados en condiciones dignas y justas.

4. Vamos a trabajar por lo que hemos llamado, como lo han hecho ejemplarmente ya en México el movimiento progresista, la Austeridad Republicana, que consiste en reducir drásticamente los privilegios de la alta burocracia. Vamos a rebajar salarios a altos funcionarios del Estado, comenzando por mi propio salario, será el primero de los decretos. Acabaremos los privilegios y con la práctica corrupta de convertir al Estado en una nómina para recompensar favores políticos. Y cada peso que hoy se gasta en privilegios debe pasar y deberá pasar a lo que realmente merece ser el presupuesto de la nación que es: la salud, la educación, el campo, las juventudes, las mujeres que sostienen a este país.
5. Vamos a fortalecer la economía popular y vamos a modificar el marco normativo de la contratación del Estado, de modo que las comunidades y sus organizaciones en el campo y en la ciudad no sean simples espectadoras y observadoras del espectáculo de cómo los particulares se quedan de manera corrupta con los dineros de la nación. Vamos a convertir a las comunidades y sus organizaciones en sujetos de contratación pública para que puedan liderar y ejecutar con transparencia obras que demandan y necesitan los territorios del país.

El fortalecimiento de la economía campesina, la transformación económica y social de los territorios, la austeridad real consagrada a lo social son las verdaderas condiciones para que en Colombia avancemos a la paz. Para que sustituyamos las economías ilícitas del narcotráfico y la minería ilegal del oro y nos convirtamos en una potencia competitiva globalmente en el campo agroalimentario.

¡Seremos potencia mundial de la vida como estamos buscando serlo!

IVÁN
Cepeda
Presidente



HACIA NUEVOS LOGROS
**EN EL RECONOCIMIENTO DE
LOS PUEBLOS INDÍGENAS**

Guachuca, Nariño

Queridas compañeras, queridos compañeros,

Agradezco esta invitación para hablar desde Guachucal, en el sur de Nariño, un territorio de resistencia y luchas históricas.

Como lo he dicho en esta visita a varios lugares de Putumayo y Nariño, he vuelto al sur del país para que junto con los pueblos indígenas, los movimientos sociales, el gran Pacto Histórico, y todas y todos los ciudadanos, las personas del pueblo nariñense y putumayense.

Agradezco a los pueblos indígenas, Pastos y Quillacingas, no solo por su invitación que valoro mucho, sino además porque durante siglos han defendido su territorio ancestral frente al despojo, la exclusión y el olvido del Estado. Sus luchas no son del pasado, son del presente y sobre todo del futuro de nuestro país, son patrimonio de Colombia.

La defensa del territorio ha sido una lucha valiente y constante. Aquí se ha defendido la vida, la memoria ancestral, la cultura, el agua, la unidad como pueblos. En esa lucha han caído importantes liderazgos sociales de los pueblos indígenas a quienes rindo un gran homenaje desde esta tribuna.

En esa lucha han sido protagonistas las mujeres indígenas, guardianas de la memoria y de la palabra, de la organización comunitaria y de la continuidad de los pueblos.

Hoy aquí, como en muchas partes de Colombia, las comunidades enfrentan desafíos profundos: crisis ambiental, amenaza de los páramos, de las fuentes de agua, de los sistemas productivos tradicionales, el modelo neoliberal que quiere destruir la producción agropecuaria, que quiere acabar con la producción de leche y de papa en este municipio tan importante y estratégico del país; que quiere acabar con la naturaleza.

Nosotros, seguidores y militantes, integrantes y dirigentes de las fuerzas progresistas no permitiremos que se mancille, se acabe y se destruya la economía campesina e indígena en este territorio.

Las comunidades indígenas han exigido con toda razón la recuperación de las tierras históricas usurpadas, el cumplimiento de los títulos que datan de la Colonia, el cumplimiento de compromisos que el Estado ha postergado. Por eso desde nuestro Gobierno se han desarrollado políticas en defensa de los pueblos indígenas y por eso decimos que no es posible la justicia social, no es posible una Colombia próspera, si no se respetan los derechos y el derecho de los pueblos indígenas.

Es indignante que en Colombia hoy estemos ante el progresivo exterminio y desaparición de cerca de 40 pueblos indígenas. Eso no es otra cosa que un crimen contra la humanidad, un etnocidio.

Y debo decir que en lo que de mí depende, como nuevo presidente de la República, haré mi mayor y máximo esfuerzo por detener el etnocidio contra los pueblos indígenas en nuestro territorio. Pueden contar con eso.

Los Pastos y Quillacingas han planteado una demanda central legítima: el reconocimiento pleno de sus derechos, el reconocimiento de su autonomía, el reconocimiento de su poder político en los territorios.

No se trata de un regalo, no se trata de una concesión, son derechos. Se trata de avanzar hacia una relación justa, hacia una relación democrática entre el Gobierno, el Estado y los pueblos indígenas para que puedan tener una vida digna, feliz y con bienestar.

Con nuestro Gobierno y con el presidente Petro ha llegado la hora de poner en el centro de la vida del país a las comunidades territoriales y rurales. De construir desde abajo, de invertir en lo que realmente importa. De redistribuir el poder y el bienestar y de garantizar en Colombia un país para todos los pueblos, todas las comunidades, todas las etnias, toda la gente y no simplemente para una minoría de personas que se enriquecen ilimitadamente.

¡Mi Gobierno será con el pueblo y para el pueblo!

El Gobierno actual del presidente Petro ha comenzado a cumplir la deuda histórica con los territorios y los pueblos indígenas. La historia de exclusión y etnocidio ha empezado a cambiar. Recordemos cinco de los grandes logros de nuestro Gobierno para proteger a los pueblos indígenas.

Primero, se ha impulsado la mayor política de creación, ampliación y constitución de resguardos indígenas en la historia reciente de este país. Todavía

insuficiente, pero debemos seguir avanzando en ella y debemos cumplir con los resguardos que están en este territorio en particular, por supuesto.

En segundo lugar, compañeras y compañeros, el Gobierno del Cambio ha avanzado como nunca antes en la restitución histórica de tierras a los pueblos étnicos. Más de 270.000 hectáreas han sido restituidas a las comunidades indígenas víctimas del despojo y del desplazamiento forzado.

Sé que hay todavía pendientes, en este territorio 60 predios que deben ser entregados a los pueblos indígenas y me comprometo a hacer realidad esa entrega apenas asuma el Gobierno en el próximo mes de agosto.

En tercer lugar, por primera vez en la historia republicana, el Estado colombiano ha reconocido plenamente a los pueblos indígenas como autoridades ambientales en sus propios territorios.

Con el Decreto 1275 de 2024, el presidente Gustavo Petro les otorgó las mismas funciones que tienen hoy las Corporaciones Autónomas Regionales. Este no es un gesto simbólico, es el reconocimiento de que quienes han cuidado verdaderamente la naturaleza durante siglos, es decir, los pueblos indígenas, son la primera autoridad ambiental real en Colombia.

En cuarto lugar, este Gobierno ha dado pasos decisivos para hacer realidad la Constitución que prometió, pero nunca llegó a cumplir, el funcionamiento efectivo de los territorios indígenas y el propio gobierno de los pueblos. A través de la expedición de 8 decretos se ha reconocido de manera concreta la autonomía política y administrativa de las autoridades indígenas, especialmente en la Amazonía, pero así tiene que ser en todo el territorio nacional.

Y, por último, quinto, el Gobierno del Cambio ha reconocido y fortalecido los sistemas propios de salud de los pueblos indígenas. Con la firma del decreto que ha creado el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural-SISPI, se convierte en derecho fundamental la atención médica en salud con los propios procedimientos y las tradiciones de la medicina indígena.

Es cierto, todavía son decretos, todavía son leyes, ahora viene el trabajo que haremos ustedes y nosotros, y yo como presidente para cumplir lo que dicen estas leyes y normas al pie de la letra.

Como futuro presidente de Colombia, también me comprometo con ustedes a avanzar profundamente en el reconocimiento de los pueblos indígenas.

Esto implica su participación efectiva en instancias de alto nivel de decisión del Estado, el desarrollo normativo real de las entidades territoriales indígenas, la operatividad plena de la autoridad ambiental indígena y el fortalecimiento de los sistemas propios, como lo decía, en salud, pero también en educación, porque no solamente tenemos el SISPI, sino también el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP).

Por lo tanto, compañeras y compañeros, la autonomía no es posible sin el territorio en Colombia. Por eso es urgente garantizar seguridad jurídica mediante procesos de saneamiento, ampliación y ordenamiento territorial. El territorio no puede seguir siendo un escenario de disputa desigual entre los grupos armados, las mafias, las redes narcotraficantes que golpean a los pueblos y a las comunidades.

Para eso está el Estado y llamo desde esta tribuna a los grupos armados a respetar a la población civil, a los pueblos indígenas y a las lideresas y líderes sociales. De eso se encargará también nuestro segundo Gobierno progresista.

Necesitamos incentivos reales no solamente en materia de autoridad indígena, sino de economía indígena. Es necesario impulsar los proyectos productivos estratégicos, mantener en esta región la productividad lechera, la posibilidad de que el Tratado de Libre Comercio que se ha firmado con Estados Unidos no destruya la producción de leche en este territorio.

Desde aquí lo decimos, como lo dije hace unos días en Sibundoy, Colombia se respeta, Colombia es una tierra soberana, los territorios como este son territorios soberanos, independientes. No somos colonia, no somos protectorado de ningún otro país y aquí quien manda son nuestras propias autoridades. ¡Que se sepa esto claramente en el Gobierno de Estados Unidos!

Por todo esto, compañeras y compañeros, un segundo Gobierno de carácter progresista no puede ser simplemente un Gobierno de continuidad administrativa, debe ser una profundización del cambio, debe asumir con valentía la transformación estructural del territorio, reconociendo a los pueblos indígenas, no solamente como beneficiarios, sino como sujetos políticos del cambio.

Compañeras y compañeros, no se trata, como lo quisieron decir en la época en que estaba en auge el modelo neoliberal, de tolerar a los pueblos indígenas. No se trata de tolerar al pueblo. Se trata de que el pueblo es el protagonista. Se trata de que quienes somos elegidos para los cargos públicos somos

servidores y servidoras del pueblo. Eso nunca lo debemos olvidar. Y yo soy un servidor de ustedes.

Como dicen los pueblos, aquí hay que mandar obedeciendo. Y por eso gobernaré con todas y todos ustedes, con los movimientos, con las organizaciones, con las autoridades tradicionales para que hagamos un Gobierno, como lo dije, con y para el pueblo.

IVÁN
Cepeda
Presidente



COMPROMISO CON
**LAS COMUNIDADES
Y LA DEFENSA DEL TERRITORIO**

Cumbal, Nariño

Me siento orgulloso, contento, de estar aquí con ustedes querido pueblo indígena, Pastos y Quillacingas, comunidades también campesinas, ciudadanos y ciudadanas, pobladores del gran Cumbal

He preparado unas cuantas notas escritas para que ustedes puedan ver cuál es el propósito de lo que voy a hacer en los próximos meses y años, cuando entre por la puerta principal el 7 de agosto de este año al Palacio de Nariño y reciba del presidente Gustavo Petro el mandato del pueblo colombiano para un segundo gobierno de las transformaciones históricas y sociales que debemos hacer en Colombia.

Conozco la importancia de este territorio, sus luchas históricas, lo que ha significado que, desde la Constitución del 91, siete alcaldías indígenas hasta la actualidad hayan sido elegidas, lo que quiere decir que en este territorio son los pueblos indígenas quienes gobiernan y eso hay que respetarlo sin lugar a duda.

Sé que este pueblo ha luchado por la paz, que en el resguardo de Mayasquer se encuentran 119 indígenas firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, para ellos y ellas va mi saludo especial, que continúen construyendo la paz porque eso es lo que necesita Colombia.

Mi llamado a los grupos armados a que respeten a la población civil, a los pueblos indígenas y a los líderes y lideresas sociales. Eso lo haremos respetar bajo mi gobierno, como también ha buscado hacerlo el presidente Petro.

Conozco además de las luchas de este territorio, sus problemas. Sé que estamos aquí ante una lucha histórica que ha librado la población indígena por la tierra, por ampliar y por hacer que se respeten sus resguardos, porque haya un respeto a su autoridad y para que se cree la entidad territorial indígena, que es una necesidad y que es un derecho totalmente legítimo de los pueblos indígenas por su autonomía y por su poder político en los territorios de Colombia.

Para mí, como candidato, por supuesto, es un orgullo que los pueblos indígenas decidan darme su apoyo. Es uno de los apoyos más importantes y valiosos de mi candidatura, porque los pueblos indígenas representan el saber, la sabiduría, las raíces históricas más profundas de nuestra nacionalidad

colombiana. Pero también, debo decirlo, mi mayor preocupación porque como lo ha reconocido la Corte Constitucional colombiana, cerca de 40 pueblos indígenas están en este momento en grave peligro de extinción. Eso no es otra cosa que un crimen.

Es un crimen contra la humanidad que desaparezca tan solo uno de esos 40 pueblos. Eso que se está perpetrando en Colombia es un etnocidio y quiero decirlo aquí de manera muy clara: una de las prioridades de mi gobierno va a ser detener ese proceso de extinción, exterminio y desaparición de los pueblos indígenas.

Cada uno de esos pueblos es nuestra memoria, es nuestra riqueza mayor, nuestra mayor diversidad como nación. Así que debemos preservar las culturas, los pueblos, las tradiciones, la memoria, las luchas históricas de los pueblos indígenas como un aspecto fundamental de nuestra riqueza como nacionalidad y como cultura.

El presidente Gustavo Petro y el Gobierno del cambio ha hecho aportes fundamentales para la protección de los pueblos indígenas. Yo aquí quiero simplemente mencionar cinco de esos grandes logros que han hecho posible que el gobierno avance en el reconocimiento de los derechos y de los pueblos indígenas mismos.

1. Nuestro Gobierno ha impulsado la mayor política de creación, ampliación y conformación de resguardos indígenas en la historia reciente del país. Somos el Gobierno que más ha promovido los resguardos indígenas en Colombia.
2. El Gobierno del cambio ha avanzado como nunca antes en nuestra historia en materia de reforma agraria, en entregar y restituir tierras a los pueblos indígenas. Más de 270.000 hectáreas han sido restituidas a los pueblos indígenas víctimas del despojo violento y del desplazamiento forzado durante décadas en nuestro país. Nuestro Gobierno ha protegido a los indígenas y también les ha entregado tierras y les va a entregar muchas más en lo que viene en el segundo gobierno progresista.
3. Por primera vez en la historia republicana, es decir toda la historia de nuestra nación, el Estado colombiano ha reconocido a los pueblos indígenas como autoridades ambientales en sus propios territorios. El decreto 1275 que expidió el presidente en el año 2024 eleva a los pueblos indígenas a autoridad ambiental al nivel de las corporaciones autónomas regionales. Y eso no es ningún regalo, ninguna concesión, es el reconocimiento de que los guardianes de la naturaleza en Colombia, del agua, de la selva, de

la biodiversidad han sido ante todo los pueblos ancestrales y originarios. Ustedes, pueblos indígenas, son la mayor autoridad ambiental en nuestro país.

4. Este gobierno ha dado pasos decisivos para hacer realidad lo que dice la Constitución de 1991, que todavía está pendiente, el funcionamiento efectivo de los territorios indígenas y el gobierno propio. Aquí en Cumbal necesitamos que eso se haga realidad también.
5. Nuestro gobierno ha reconocido y fortalecido los sistemas propios de salud de los pueblos indígenas, creando el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural llamado por su sigla SISPI.

Esos cinco, pero podría mencionar muchos más logros, ha hecho el Gobierno del cambio y ha reconocido en eso los derechos de los pueblos indígenas. Por eso es por lo que nosotros admiramos, queremos lo que ha hecho este Gobierno y al presidente Gustavo Petro que ha sido su líder natural en este proceso.

Pero ahora, compañeras y compañeros, tenemos decretos, tenemos leyes, tenemos normas. ¿Qué necesitamos? Convertirlas en realidad. No basta expedir los decretos. Necesitamos que se convierta en realidad todo el proceso.

Por ejemplo, de la jurisdicción indígena, necesitamos que no solamente el Gobierno haya expedido unas normas, necesitamos que los pueblos indígenas vivan en su realidad cotidiana los logros que hemos ido cosechando en este primer Gobierno.

Y para eso, compañeras y compañeros, estamos aquí, porque yo seré el encargado como presidente de la República, junto nuestros compañeros y compañeras congresistas, de cumplir lo que hemos sembrado y lo que hemos cultivado en este primer Gobierno.

Para eso estamos, para servir al pueblo y para cumplir con las normas que hemos creado reconociendo los derechos de la población indígena. Cuenten con mi compromiso para ello.

Sé de los problemas que tiene el Gran Cumbal

Sé que, por los tratados de libre comercio, como en tantas partes del país, y concretamente por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, es posible que entre a operar la importación indiscriminada de productos lácteos y

específicamente de leche en polvo, que puede arruinar la producción lechera en este territorio.

A Estados Unidos le decimos, y a su Gobierno: tenemos una relación, por supuesto, de cooperación y respetuosa, pero somos una nación soberana. Somos pueblos soberanos. Este es nuestro territorio. No es el territorio del gobierno estadounidense. Y por eso queremos que se respete a los productores de este territorio.

Necesitamos encontrar solución pronta para que la leche que se hace en este territorio pueda ser procesada aquí mismo y para que no se vaya a desperdiciar ni un solo litro, puesto que en Colombia todavía tenemos un gran problema y es que no ha desaparecido el hambre, no ha desaparecido la falta de alimentos, no hay soberanía alimentaria en muchos territorios del país.

Así que la leche que se produce aquí podría alimentar a muchos hogares en Colombia y es necesario que estudiemos, que el Gobierno y el Estado compre a los productores a precios justos lo que están produciendo aquí en este territorio, para entregarlo a otras las familias en otros territorios, a otras comunidades que padecen el hambre en este momento en el país.

Así que cuenten con mi compromiso para buscar la protección de la soberanía productiva y alimentaria en este territorio del Gran Cumbal.

Agradezco al gobernador y a las autoridades que me han entregado oficialmente en el documento que acabo de recibir otras necesidades que tiene la comunidad y que tiene la población en este territorio. Lo estudiaré seriamente. Haré compromisos con ustedes para poder lograr una calidad de vida mejor.

Y, por último, les hago el siguiente llamado que es una invitación: el problema no es entre pueblos indígenas, el problema no es entre indígenas y campesinos o entre campesinos y comunidades afrodescendientes. No es entre el Pacto Histórico y otras organizaciones progresistas. Nuestro problema es con nuestros adversarios políticos, con la extrema derecha que dirige en Colombia el señor Álvaro Uribe Vélez.

Así que no nos equivoquemos, no nos equivoquemos de quiénes son nuestros adversarios y cuidemos, como si fuera el tesoro máspreciado que tenemos, nuestra unidad como movimiento social, popular, étnico que debe seguir avanzando en las transformaciones del país. La unidad, ante todo, compañeras y compañeros.

En estos tres años y medio hemos avanzado enormemente en el país. Luego del estallido social, ustedes se acuerdan, cuando después de la pandemia uno de los gobiernos uribistas decidió en medio de la peor situación, en situación de pobreza, de hambre para muchas personas en el país, ponerles impuestos a los alimentos de primera necesidad.

Eso hizo que la gente saliera, como no lo había hecho en otras épocas, a la movilización popular. Y desde ese momento, el pueblo colombiano lo ha entendido, ha crecido en materia de conciencia política, sabe que es el Estado quien debe garantizar los derechos.

Sabe que todos los colombianos y colombianas tenemos los mismos derechos y por lo tanto que hay que garantizarlos. Y si se violan, tenemos que movilizarnos. a la calle, a las carreteras para garantizar que esos derechos se hagan efectivos.

Y, por lo tanto, compañeras y compañeros, los cambios que hemos venido logrando en estos años, debemos hacer no solamente que se mantengan, sino profundizarlos. Y para eso estoy aquí para garantizar que seré el presidente y el jefe de Estado del segundo gobierno de carácter progresista y de transformación social en Colombia.

IVÁN
Cepeda
Presidente



CAPITAL DE LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Bogotá, Cundinamarca

Queridas compañeras y queridos compañeros,

Me siento a gusto de volver a estas calles y plazas que recorrí una y otra vez cuando en mi condición de estudiante, en uno de los colegios de este sector, al terminar las clases salíamos con mis compañeras y compañeros a trabajar con la gente en los barrios populares, a hacer labor política o a protestar en la movilización por cada una de las tantas injusticias y necesidades que tenía y tiene la población de esta gran ciudadela de nuestra capital.

Kennedy fue para mí la escuela de mi primera formación política. De mi sensibilidad hacia los sectores populares, las comunidades y sus padecimientos, las luchas cotidianas por la dignidad. Por eso siempre recuerdo con alegría, y diría con nostalgia, esas primeras luchas que marcaron definitivamente mi existencia y sensibilidad políticas.

En estas calles aprendí el significado real de la palabra solidaridad, del coraje para asumir posiciones de confrontación al poder autoritario, del compromiso con el pueblo, de la generosidad y la grandeza que requieren la búsqueda del cambio real de nuestra sociedad.

Este fue el territorio en el que vinimos a vivir con mi familia, luego de que mis padres vivieran en el barrio Policarpa Salavarrieta, junto a los campesinos venidos del desplazamiento por la violencia de los años 60.

Este fue el territorio, también, donde en una de las grandes avenidas en la mañana del 9 de agosto de 1994 un grupo mixto de militares y paramilitares asesinaron a mi padre, el senador de la República Manuel Cepeda Vargas, como parte del genocidio contra la Unión Patriótica. Un crimen contra la humanidad que marcó la vida política de este país y convirtió la defensa de derechos humanos, la búsqueda de la verdad y la justicia en irrenunciables de mi vida política.

Así que tengo una deuda con Ciudad Kennedy, con su gente, con sus barrios populares, con sus organizaciones y comunidades, que no olvidaré cuando el próximo 7 de agosto asuma el cargo de presidente.

No olvidaré estos barrios, su historia y sus luchas. No olvidaré a las madres cabeza de hogar que salían temprano a trabajar por su familia, por sus hijos. No olvidaré a los jóvenes que conocí y que tuvieron que sacrificar muchos de ellos su vida por no tener futuro. No olvidaré a la gente a la que nos debemos, en primer lugar, al pueblo colombiano, y al pueblo de ciudad Kennedy de Bogotá.

En el programa del segundo gobierno progresista, les garantizo que estarán los sueños, las aspiraciones, los proyectos y las ideas de la gente de estos barrios, y de tantos barrios periféricos o de ciudadelas olvidadas que hay en esta gran ciudad. Por ella es que nosotros trabajamos y luchamos.

Como parte de mi formación política, considero que la historia de nuestras luchas personales y sociales son la fuente de nuestro crecimiento como seres humanos. Debemos cultivar esa memoria de las luchas sociales como acto de resistencia política y, sobre todo, como referentes para el cambio de conciencia que requiere la transformación social. La revolución de las conciencias es la revolución social, compañeras y compañeros.

Las luchas populares en Kennedy han sido parte de la gran movilización social que ha acontecido en nuestra ciudad capital. Bogotá ha sido, a lo largo del tiempo, el corazón de las grandes movilizaciones populares, que han marcado el rumbo del país y de su cambio histórico.

En sus calles se ha escrito una y otra vez la historia de la dignidad y la resistencia de nuestro pueblo. Aquí estalló la indignación popular el 9 de abril de 1948, cuando ocurrió el asesinato del gran líder del pueblo colombiano Jorge Eliecer Gaitán, cuando se intentó destruir la esperanza de las mayorías, pero que terminó siendo el comienzo de una conciencia popular que cambió para siempre la vida política del país.

Y se levantaron las y los estudiantes, los días 8 y 9 de junio de 1954, enfrentando la represión y poniendo sus vidas y su sangre para defender la democracia y la libertad.

Aquí, en estas calles, el 14 de septiembre de 1977 el pueblo lo protagonizó el gran Paro Cívico Nacional, una rebelión social contra la exclusión y la injusticia en la que yo mismo participé, y tuve protagonismo como líder estudiantil, junto a miles de trabajadores, trabajadoras y habitantes de los barrios populares.

Aquí, durante décadas, se hicieron las movilizaciones por la paz, por la defensa de la vida y la salida política del conflicto armado. Y aquí, en el 2021, la ciudad volvió a hablar con la fuerza de la historia. Las calles se llenaron de jóvenes, de mujeres, de trabajadores de comunidades populares que dijeron, “basta.”

El llamado estallido social, no fue un accidente, fue la expresión acumulada de la desigualdad y la falta de futuro para millones de colombianas y colombianos. Fue la expresión política organizada de las juventudes de los barrios populares que ocuparon el espacio público para reclamar futuro, dignidad y reconocimiento.

No fue vandalismo ni caos, como ahora nos quieren convencer, el de los muchachos y muchachas de la primera línea, fue una interpelación política organizada, profunda, a un modelo que les niega oportunidades, derechos y horizonte de vida a millones de jóvenes en la periferia de los centros urbanos.

Esta ciudad ha sabido ir forjando el poder constituyente, contra la resignación a la violación de derechos humanos, la acción contra la pobreza y la desigualdad social, la defensa de los procesos de paz. Y precisamente por ser territorio urbano de grandes movilizaciones sociales, Bogotá se ha ido convirtiendo también en el escenario de lo que llamo la Revolución Ética, del cambio de conciencia que se ha ido produciendo en todo el país.

Con Bogotá sin hambre en 2004, la ciudad empezó a demostrar que gobernar con justicia social no es una utopía. Y con Bogotá Humana, que encabezó como alcalde nuestro presidente Gustavo Petro -que no pudieron destituir a la fuerza con el acompañamiento popular- se produjo un punto de quiebre histórico.

Se probó que era posible gobernar poniendo la vida en el centro, que por el bien de todas y todos primero los pobres, que es necesario ampliar permanentemente los derechos fortaleciendo lo público, que se puede hacer crecer la ciudad sin destruir la naturaleza y que precisamente es necesario preservar nuestra riqueza natural para garantizar la vida sana de los seres humanos.

En fin, que la transformación social puede ser para la prosperidad de todas y todos, lo que aún no entienden en la extrema derecha de este país.

Esa experiencia progresista en el gobierno de la ciudad, junto con otras administraciones con la misma orientación en otras ciudades de Colombia, dejó

aprendizajes, capacidades y una transformación política que no puede borrarse y que hoy debemos seguir desarrollando como la experiencia y el poder social que nos ha convertido en Gobierno nacional.

Esa experiencia y riqueza de la construcción del poder popular es la base social y cultural de nuestro segundo gobierno progresista.

En síntesis, el camino que hemos recorrido en estas décadas no ha sido ni corto ni fácil. Ha sido el camino de un pueblo que pasó de la movilización y la resistencia popular al gobierno de la ciudad capital y de allí al Gobierno nacional.

Ese tránsito no fue casual, fue el resultado de décadas de lucha social, de organización popular y de construcción paciente y colectiva desde los barrios, las localidades y los territorios. Y con la siempre.

Fue con la acumulación de esas luchas sociales, de haber formado mujeres y hombres como líderes comunitarios, con la experiencia concreta de transformar la vida en los barrios populares, que logramos construir gobiernos locales progresistas y programas sociales que pusieron por primera vez en el centro a la gente, a las mayorías excluidas.

Por lo tanto, nuestro camino no es el de haber importado ningún modelo extranjero de ninguna parte. Lo nuestro ha sido el ejercicio auténtico y soberano, al lado de las luchas populares y la historia del pueblo colombiano. Y fue precisamente desde esa experiencia de gobierno local que aprendimos a gobernar el país, a gobernar con responsabilidad, con sensibilidad social y para todas y todos. Por eso, la historia de la lucha social en Bogotá no es un capítulo marginal. Está en el corazón mismo de lo que ha sido el Gobierno del cambio en Colombia. Bogotá ha sido laboratorio, escuela y motor de las transformaciones que hoy vive el país.

Aquí se ensayaron políticas que demostraron que otra forma de gobernar sí es posible. Y precisa precisamente por estas razones, Bogotá seguirá estando en el centro de la política nacional y en el centro de nuestro programa del segundo gobierno del cambio.

Bogotá no es solo la capital administrativa del país, es un referente político, social y ético de la transformación. Basta analizar simplemente las políticas centrales de la Bogotá Humana y compararlas con las políticas del Gobierno

del Pacto Histórico para comprender que existe una línea de continuidad y coherencia política entre una y otra. No improvisamos, profundizamos un proyecto histórico de justicia social, democracia y dignidad.

Así como hizo la alcaldía de Gustavo Petro en la ciudad, el Gobierno del cambio ha demostrado con hechos y resultados concretos que gobernar para a las mayorías, no solo es posible, sino absolutamente necesario.

Ambos gobiernos, desde la alcaldía y el poder ejecutivo, han trabajado para reducir la pobreza y la desigualdad, para elevar los ingresos de los hogares que hoy tienen un salario vital y no simplemente un salario mínimo, para ampliar el acceso a la educación, a la vivienda digna, al agua, a los derechos fundamentales que durante décadas fueron mezquinamente negados.

Ese es nuestro legado, esa es nuestra tradición, esa es nuestra experiencia y esa es la base sólida, sobre la cual vamos a seguir avanzando con el pueblo para profundizar el cambio y hacer de Colombia un país más justo, democrático y verdaderamente incluyente.

Lo he dicho con claridad y quiero reiterarlo en esta plaza: mi gobierno será el gobierno de defensa firme de las transformaciones sociales ya emprendidas. Pero será también el gobierno de su consolidación y ampliación. No venimos a administrar lo existente, venimos a profundizar las reformas y acelerar las transformaciones sociales que el país clama con urgencia.

El nuestro será un gobierno que impulse tres grandes revoluciones para hacer irreversible el cambio social, la Revolución Ética, para contrarrestar y liquidar la corrupción, la impunidad y el uso privado del Estado y los recursos públicos; la Revolución Social y Económica para garantizar justicia social, redistribución de la riqueza y prosperidad para todos; y la Revolución Política y Democrática para ampliar definitivamente la participación ciudadana y devolverle al pueblo el poder constituyente.

Durante décadas, el distrito capital ha sido organizado bajo un modelo urbano que privilegia la especulación inmobiliaria, la rentabilidad privada y la captura de la renta pública y las zonas urbanas para intereses privados. Ese modelo ha producido segregación social, pobreza y expulsado a la periferia a quien sostienen la ciudad con su trabajo cotidiano.

Frente a esa realidad, en las próximas semanas como Pacto Histórico presentaremos propuestas programáticas para que Bogotá continúe avanzando en su transformación y su consolidación como una ciudad justa.

Vamos a presentar como Pacto Histórico, junto a nuestras candidatas y candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado, el proyecto de un gran pacto por Bogotá para cambiar definitivamente el rumbo de la exclusión, construir una ciudad que ponga la vida en el centro de la planificación urbana y de la construcción del territorio.

Un pacto que parta de una convicción profunda: la ciudad no es una mercancía ni un bien privado, es un espacio vital y democrático que nos pertenece a todas y todos los ciudadanos.

El desarrollo de la ciudad no se restringe a garantizar servicios públicos individuales, significa democratizar la planificación urbana, reconocer la autogestión barrial, la auditoría de los recursos públicos, fortalecer lo comunitario y garantizar que la ciudad se piense y construya para quienes la habitan y la cuidan todos los días. Significa reconocer y garantizar los derechos fundamentales de la gente, el derecho a la movilidad, el derecho al hábitat y a la vivienda, el derecho a la soberanía alimentaria y a la alimentación, los derechos a la educación, al trabajo y a la salud.

Como parte de los programas de nuestro gobierno, me comprometo con la ciudadanía bogotana a impulsar, en diálogo con las autoridades distritales y con los movimientos sociales, un programa que continúe el camino de hacer de esta gran ciudad la Bogotá Humana que soñamos, donde la dignidad, la igualdad y la vida esté en el centro de todas las decisiones políticas.

IVÁN
Cepeda
Presidente



ENCUENTRO
**CON LOS PUEBLOS WIWA
Y KANKUAMO**

San Juan del Cesar, La Guajira

Queridas compañeras y queridos compañeros:

A lugar a los pueblos, pueblo Kankuamo, el pueblo Wiwa, el pueblo Yupa, a todos los pueblos de la Sierra y a todos los pueblos indígenas del país, a sus autoridades tanto políticas como espirituales, a cada una de sus personas, familias, comunidades, mujeres, niños y también a los hombres:

Quiero decirles que estoy muy agradecido porque en la mañana de hoy las autoridades espirituales han hecho una labor para protegerme, que yo valoro mucho y en la cual creo profundamente, porque necesitamos protección, unidad, frente a lo que viene porque hay fuerzas que quieren acabar con la vida.

Yo no soy amigo de usar armas. Me gusta más la palabra, me gusta más la fuerza de la unidad de la gente, pero tenemos que proteger la vida hoy. Así que admiro profundamente lo que ustedes han hecho.

Yo conocía al pueblo Kankuamo hace muchos años y trabajamos de la mano con muchos de sus dirigentes jóvenes. En ese momento protestamos por el genocidio, la palabra es exacta, que se estaba perpetrando y se sigue perpetrando contra los pueblos indígenas en este caso de la Sierra. Así que cuentan conmigo para esto y para lo que viene.

Yo no hablo en nombre del presidente Petro. Somos dos personas y personalidades diferentes. Somos una sola fuerza, pero cada uno tiene su voz y tiene su estilo. Pero estoy seguro de que si el presidente hubiera sabido que yo venía, me hubiera pedido que lo saludara en nombre de él y decirles que él está con ustedes.

Puede ser que todavía no haya llegado a todos los territorios, pero este Gobierno ha defendido a los pueblos, ha hecho una labor y un esfuerzo por protegerlos, por darles cada vez más participación en la vida política y por darles reconocimiento a sus eh tradiciones, su sabiduría, su cultura, su poder.

Somos conscientes de la sabiduría de los pueblos indígenas. Yo me siento honrado estar aquí hoy acogido por ustedes. Para mí es más importante, probablemente, que cualquier otro evento político estar con los pueblos. Ese es mi mandato esencial, es a lo que me debo y aquí es donde me siento de la mejor forma acogido.

Necesitamos hoy trabajar por la unidad. La unidad de los pueblos indígenas.

La unidad entre nosotros, las culturas otras que hacen parte de nuestra nacionalidad y la cultura de los pueblos indígenas. La unidad entre nosotros y la naturaleza.

Los hermanos menores hemos perdido la capacidad de escuchar a la naturaleza. Nos hemos vuelto un poco sordos, hemos perdido la capacidad de entender la importancia que tiene ese nexo fundamental con el universo, con la madre naturaleza y por eso es por lo que hemos perdido mucho en esa cultura que ha ido surgiendo, que le llamamos neoliberalismo.

Neoliberalismo quiere decir que todo se vuelve una mercancía, que todo se puede comprar, todo se puede vender, que la naturaleza es una mercancía, que los seres humanos son mercancía.

Cuando las cosas se vuelven mercancía, cuando los seres vivos se vuelven mercancía, viene la muerte, viene poco a poco un proceso de extinción de la vida, como lo hemos visto, porque esa esa idea lleva a que es inagotable el recurso, el agua es inagotable, podemos derrocharla, mañana la volveremos botellas y la venderemos y seguirá brotando. No, el agua es finita. La naturaleza es finita.

Entonces, nosotros tenemos que aprender de ustedes la sabiduría de entender de nuevo, de volver a escuchar, de volver a entender nuestro origen, que es el origen de la casa común, como se ha dicho, de la madre naturaleza, de la armonía entre todas y todos nosotros.

Con ella y en general con lo que queremos para el mundo, para nuestra cultura como seres humanos. Y eso es lo que yo voy a hacer en mi gobierno: voy a intentar con todas mis fuerzas, pero sobre todo con una fuerza fundamental, esa fuerza va a ser escucharlos y hacerlos participe a ustedes.



Esa es la fuerza nuestra, nuestra unidad con el pueblo, nuestro servicio al pueblo, nuestra consagración a lo que necesitan los pueblos.

Allí es donde vamos a tener la fuerza, no en las armas, no en el dinero, no en la politiquería, no en el odio, no en el miedo, vamos a tener la fuerza en nuestra solidaridad y nuestra unidad.

Ese es mi compromiso, eso es lo que voy a hacer. Por supuesto que recibo estos documentos como mandatos y haremos todo lo necesario juntos. Ustedes son gobierno en estos territorios. Nosotros vamos a hacer gobierno en el Estado colombiano. Entonces tenemos que unir las fuerzas para lograr el propósito.

IVÁN
Cepeda
Presidente



LA REBELIÓN
**CIUDADANA CONTRA LA GRAN
CORRUPCIÓN**

Valledupar, Cesar

Queridas compañeras y queridos compañeros:

Siempre es motivo de profunda emoción regresar a esta tierra. Valledupar y el Cesar no son solo un territorio del Caribe colombiano: son una geografía marcada por las luchas sociales, por el dolor y también por la esperanza de sus pueblos y comunidades.

Ayer, apenas llegando, participé en una ceremonia de protección espiritual junto a las autoridades ancestrales de los pueblos Kankuamo y Wiwa. Escuché sus palabras sabias y serenas sobre la urgencia de proteger la Madre Tierra, de la cual no somos dueños sino parte.

Recordamos juntos las luchas libradas para detener a los responsables del genocidio que ha pretendido arrebatarles su hogar sagrado, la Sierra Nevada de Santa Marta. Defender la vida de los pueblos indígenas ha sido, y sigue siendo, una defensa de la vida de toda la nación.

Pero este no ha sido el único crimen cometido en esta región.

Ayer también tuve la oportunidad de saludar a mi colega en el Senado y querida amiga, **Imelda Daza**, una de las muy pocas sobrevivientes en este departamento del genocidio contra la Unión Patriótica. Su sola presencia, su exilio de años, es un testimonio vivo de la barbarie que se quiso imponer y de la resistencia que no pudieron extinguir.

Imelda me recordaba que buena parte de esta ciudad ha sido construida por luchadores y luchadoras sociales. Hoy, más de **30.000 habitantes** de Valledupar viven bajo la amenaza del desalojo por ocupar supuestos terrenos ajenos.

Son, en su mayoría, víctimas del desplazamiento forzado, expulsadas por la violencia de los Santanderes y de distintos rincones del Caribe. Es una injusticia histórica que no podemos seguir tolerando ni normalizando, y para la cual reclamamos solución efectiva para los desplazados de la violencia.

Aquí, en este departamento, el paramilitarismo intentó arrasar con todo tejido social. Buscó destruir las organizaciones populares, y durante más de dos décadas capturó y cooptó la **Universidad Popular del Cesar**. Por eso esta

universidad, sus docentes, trabajadores y estudiantes han sido reconocidos como víctimas de crímenes de lesa humanidad, aunque aún esperan una reparación real y efectiva. Debemos hacer efectiva la reparación de todas las víctimas de la violencia en Colombia.

Como ha ocurrido en muchas regiones del país, las comunidades ancestrales, los sectores populares urbanos y rurales, sus movimientos sociales han padecido la violencia económica y la persecución política, se busca imponerle a toda costa el modelo neoliberal. Pero aquí, como en tantos otros lugares, no lograron quebrar la voluntad colectiva.

Porque este territorio también es ejemplo de resistencia, de organización y de lucha por el cambio social. **Así lo demuestran los avances del Pacto Histórico, el respaldo popular al Gobierno del cambio y la creciente favorabilidad del presidente Gustavo Petro.**

Desde el inicio de mi campaña electoral he sido claro: uno de los ejes centrales de mi propuesta, y de lo que deberá ser la profundización del programa del segundo gobierno progresista, es enfrentar de manera decidida, sólida y estructural **la corrupción que carcome al Estado colombiano** y socava la confianza de la ciudadanía en la democracia.

No se trata de un asunto accesorio. Hablo de un entramado profundamente arraigado, donde **se articulan la codicia de los políticos, la gran corrupción y la resistencia mezquina a las reformas sociales.**

Ese es el nudo que debemos desatar para avanzar en la transformación de la sociedad colombiana: derrotar la gran corrupción y lo haremos juntos.

Quiero decirlo con la experiencia y la autoridad moral que me da el haberme enfrentado a través del control político a las mafias y a la corrupción: **hoy, el Congreso de la República -quizás como ninguna otra institución en el país- encarna, para vergüenza de la nación y del Estado de derecho, lo peor de esa fórmula perversa que empobrece a millones mientras enriquece a un puñado de políticos y sus intermediarios del poder.**

Lo afirmo después de quince años de control político en el mismo recinto parlamentario contra estos vicios. A lo largo del tiempo, el Congreso colombiano se ha ido convirtiendo en escenario de prácticas que deshonran la función



pública: corrupción sistemática, extorsión legislativa, prevaricato, enriquecimiento ilícito, conflictos de interés y la penetración de redes mafiosas y criminales que capturan decisiones normativas fundamentales del Estado.

Año tras año vemos el mismo espectáculo, los que ayer eran congresistas que pronunciaban discursos altisonantes sobre moral pública y buenas costumbres políticas, terminan compareciendo ante la justicia, **desenmascarados como jefes de estructuras criminales.**

Esa contradicción no es una excepción, es un síntoma de un sistema profundamente enfermo.

Y quizá lo más grave de todo esto es que cuando se señala esa responsabilidad, cuando se nombra a los responsables y se cuestionan esos poderes -como lo hemos hecho junto al presidente Gustavo Petro cuando fue congresista- la respuesta no es la rendición de cuentas, sino la persecución política y judicial contra quien se atreve a denunciar.

Nuestra lucha es contra un régimen de corrupción que se resiste a morir porque sabe que de su caída depende el nacimiento de una democracia real, en la que el **Congreso sea por fin la casa del pueblo y no una guarida de intereses criminales.**

El neoliberalismo convirtió la política en un lucrativo negocio, que comienza por los grandes salarios de los funcionarios de alto gobierno y del Estado, continúa con el despilfarro y la opulencia en el gasto público, y concluye con operaciones de saqueo multimillonario al Estado, su contratación y los recursos públicos.

El Congreso se ha convertido en un fortín de esa concepción

Las y los congresistas, mientras protestan airadamente por la reducción de sus ingresos, no tienen ningún escrúpulo en condenar con furia el aumento del salario mínimo para los trabajadores y trabajadoras, hoy convertido, gracias a nuestro gobierno, en un salario vital con un incremento del 23%.

La austeridad siempre ha sido para el pueblo, nunca para ellos.

Son quienes hace apenas unos meses intentaron hundir la reforma laboral, y que hoy buscan acabar con la reforma pensional. Es el caso, por ejemplo, de sectores liderados por el uribismo y por figuras como la senadora Paloma Valencia, una de las candidaturas presidenciales de Álvaro Uribe Vélez.

Cuando se trata de garantizar derechos, dicen que no hay recursos; cuando se trata de recortar privilegios, gritan persecución.

Son los mismos congresistas que se declaran impedidos cuando se debaten leyes sobre tierras baldías, porque esas tierras, que pertenecen a la Nación, han terminado en sus manos.

Ellas y ellos se oponen a la jurisdicción agraria y a profundizar la reforma rural integral y convertirla en una revolución agraria.

Son los mismos que desprecian las reformas sociales, que atacan los diálogos de paz y que hacen todo lo posible para bloquear la acción de la justicia. Como ocurrió en su momento con uno de esos senadores, que hoy vuelve a aspirar al poder: Álvaro Uribe Vélez.

A estos sectores les resulta natural que el pueblo se apriete el cinturón, que las mayorías vivan entre la pobreza y la vulnerabilidad, mientras una élite política sigue acumulando privilegios, salarios exorbitantes e impunidad.

Llegó el momento de sacarlos y sacarlas del Congreso. Ni un voto más para la corrupción.

Durante mi campaña electoral he definido los principios éticos que rigen mi ejercicio político.

La Honestidad como práctica social, como ejemplo y necesidad indispensable para la superación de la corrupción.

La Verdad, como guía para la preservación y la honra de nuestra memoria como pueblo. Nuestro lema central de campaña lo expresa: somos el Poder de la Verdad.

La Austeridad Republicana, que significa que ante las crisis quienes deben apretarse el cinturón son los gobiernos, no el pueblo.

Desde esos principios, en octubre del año pasado propuse en Cali, avanzar en la construcción de un **Sistema Nacional Contra la Corrupción** con elementos de prevención, investigación y juzgamiento, un fondo de reparación de las víctimas de la corrupción; presencia efectiva en los territorios y, lo más importante: **la rebelión ciudadana contra la gran corrupción**.

¿Qué significa hoy que en Colombia el pueblo se rebele contra la gran corrupción?

Una rebelión ciudadana contra la gran corrupción no es un estallido de rabia ni un acto de venganza. Es una rebelión pacífica, pero firme. Democrática, porque educa a ser **insumiso frente a la injusticia**.

Debemos atacar la mentalidad propia del régimen de saqueo que se ha consolidado en la sociedad colombiana. La gran corrupción no es solo el robo de recursos públicos. Es la normalización del abuso. Es el cinismo convertido en sistema. Es la idea, repetida hasta el cansancio, de que nada puede cambiar y de que la política es, por naturaleza, sucia e inmoral.

- **La rebelión ciudadana contra la gran corrupción es una cuestión de cultura. En las escuelas, colegios y universidades, desde temprano se debe formar a la niñez y la juventud para desarrollar el pensamiento crítico contra la corrupción.**

Una rebelión ciudadana nace cuando la gente comprende que la corrupción es un problema social que debe ser erradicado con la acción política colectiva.

Y para ello **es necesario educar a las nuevas generaciones, a la juventud en primer lugar, en la diferencia entre la política como servicio al pueblo o la política como negocio para el lucro personal.**

La rebelión ciudadana contra la gran corrupción empieza cuando entendemos que ese régimen de rapacidad para robar los recursos de los impuestos y de la ciudadanía es el peor efecto que trajo el neoliberalismo, al privatizar lo público, **convertir en mercancía la función pública y, en general, en convertir la política en negocio y tráfico de intereses.**

La rebelión ciudadana no empieza en las calles, empieza en la conciencia. Empieza cuando la sociedad **deja de admirar al corrupto “exitoso” y “triunfador”,** y comienza a señalarlo como lo que es, un traidor al interés colectivo.

- **La rebelión ciudadana contra la gran corrupción implica no reelegir a los corruptos y ejercer el voto de conciencia en las elecciones.**

Rebelarse contra la gran corrupción es decir basta a la impunidad de los poderosos. Es negarles el derecho a seguir gobernando sin rendir cuentas. Es disputar el sentido mismo del poder: ¿el poder para enriquecerse o el poder para servir?

Se trata de que cada persona cuando vote se informe de los antecedentes penales, disciplinarios, financieros de las candidatas y los candidatos.

- **La rebelión ciudadana contra la gran corrupción consiste en la movilización concreta de la sociedad y sus organizaciones** mediante la generalización de herramientas de control social de la corrupción como: las auditorías ciudadanas, el ejercicio de la vigilancia a los escrutinios y resultados electorales, las veedurías ciudadanas y sus redes, el control social a los procesos de contratación pública, un sistema integral y efectivo de protección de los líderes sociales y las organizaciones comunitarias que luchan contra la corrupción, un ecosistema de comunicaciones que privilegia los medios alternativos.

Estas formas de vigilancia ciudadana se deben ejercer, especialmente en campos como la **inversión de las regalías, construcción de la infraestructura vial, gestión de los recursos de la salud, compras militares**, etc.

- **Una rebelión ciudadana es la recuperación de la política como herramienta de transformación, no como negocio.** Es el momento en que el pueblo entiende que votar no basta, que la democracia no se reduce a elegir gobernantes, sino a vigilarlos, exigirles y, si traicionan, retirarlos del poder.

La historia demuestra que los regímenes corruptos caen cuando la ciudadanía despierta, se organiza y decide no obedecer más a la injusticia.

Esta es la rebelión que necesitamos hoy en Colombia; la rebelión de la dignidad contra el saqueo, la rebelión de la ética contra el cinismo, la encabezaremos en el segundo gobierno progresista.



DEFENDAMOS
**NUESTROS DERECHOS
POLÍTICOS**

Cúcuta, Norte de Santander

Queridas compañeras y queridos compañeros:

En las últimas décadas, como parte de mi trabajo junto a las víctimas del conflicto armado, y en mis recorridos por los territorios, caminando al lado del movimiento campesino, siempre he regresado al Catatumbo y a Norte de Santander con una certeza profunda. **Aquí, incluso en medio de la guerra y del abandono, el pueblo nunca renunció a la vida ni a la esperanza.**

Siempre recuerdo con admiración que, en esta región del país, **el movimiento social floreció en medio de la violencia** como una respuesta colectiva y consciente para defender la vida, la tierra y el territorio; como una decisión ética y política de construir paz cuando la guerra parecía imponerse como destino.

Eso ha sido posible gracias a la valentía serena del movimiento campesino e indígena; de las comunidades afrodescendientes, a la fuerza incansable de las mujeres lideresas sociales; a la actuación firme del movimiento sindical, a la energía transformadora de la juventud; y a la perseverancia de las organizaciones de víctimas, que han enfrentado los crímenes más atroces y la impunidad con **el poder de la verdad**.

Estos ejemplos de **fortaleza humana**, de generosidad y de entrega a la vida popular que nacen en Norte de Santander son parte esencial de nuestras luchas colectivas como nación, son escuela ética y política de la cual debemos aprender.

Por eso, mi primer mensaje hoy aquí es expresar gratitud y reconocimiento al gran movimiento social y al pueblo de esta región que ha puesto tanto sacrificio, y que nos ha enseñado a resistir y a luchar de manera perseverante, incluso en las peores condiciones.

El mejor homenaje que podemos rendir a esa historia legendaria es continuar el camino del cambio social, que emprendimos en 2022 con el Pacto Histórico y el presidente Gustavo Petro.

Se trata de reelegir el programa de las transformaciones sociales, de la equidad, la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

Algunas empresas de la comunicación y candidatos políticos han querido presentar esta elección como el enfrentamiento de **dos extremos ideológicos**: el que representa Álvaro Uribe Vélez, y el que encarna nuestro proyecto progresista.

Es una caricatura de la realidad política. **El verdadero enfrentamiento es entre dos posiciones claramente diferentes. Una neoliberal y profundamente autoritaria y depredadora, la del uribismo. Y otra, la del cambio social, la de la defensa de la vida, de la participación y la movilización política del pueblo.**

Entre 2002 y 2010, el uribismo empobreció al pueblo colombiano, sembró el país de ‘falsos positivos’, parapolítica, despojo de tierras, destrucción de derechos sociales, violencia y odio. Entre 2018 y 2022, no solo intentó destruir el Acuerdo de Paz, sino que acentuó la pobreza en la postpandemia, y terminó provocando el “estallido social”.

Durante años, Álvaro Uribe Vélez y la extrema derecha han construido su poder autoritario **apelando al miedo y al odio**. Y, en esta campaña, quieren hacer de su odio al cambio social un instrumento electoral, y del miedo a la inseguridad una forma de gobernar conciencias.

Pero Colombia ya no es la misma. El país cambió, la gente ha comenzado a entender que **los derechos no se mendigan, se exigen y se ejercen**. Que para acabar con la violencia se debe atacar la desigualdad social, y transformar económicamente los territorios.

Esta elección no la va a ganar el que más despierte rencores. La ganaremos las fuerzas progresistas, nosotras y nosotros, porque la gente sabe que el Gobierno ayudó a mejorar su vida de manera real.

Y lo más importante, **reconociendo la dignidad del pueblo**, no con subsidios caritativos, no con limosnas que se entregan con arrogancia, no con tamal y lechona el día de las elecciones.

Los programas y reformas sociales del gobierno del Pacto Histórico y del presidente Petro, reconocen derechos que ha ganado la gente con su vida esforzada de trabajo.

Reconoce a las **madres comunitarias** que generosamente han cuidado a los niños ajenos, a los **vendedores informales** que generan también crecimiento

económico, a los **jóvenes de las barriadas** que merecen un futuro, a las y los **campesinos** que producen los alimentos, a los **soldados y patrulleros** del Ejército y de la Policía que son quienes llevan a cabo las más duras tareas en el terreno, la sabiduría de nuestros **pueblos indígenas** y de nuestras **comunidades afro**, la riqueza que producen **los trabajadores y las trabajadoras**.

Este gobierno convirtió el salario mínimo en **salario vital** con un aumento sostenido que este año es del 23%; este gobierno le redujo, por fin, el salario a los congresistas; este gobierno ha sacado de la pobreza a más de dos millones de personas, ha entregado cientos de miles de hectáreas a los campesinos, ha creado un sistema pensional que incluye a las personas mayores más pobres.

En Norte de Santander, junto con las comunidades y sus organizaciones, el gobierno creó el programa de transformación territorial más ambicioso que haya tenido el Catatumbo: el Pacto Catatumbo. Un pacto que contempla obras e inversiones capaces de transformar profundamente el espacio vital de las poblaciones, en beneficio directo de las comunidades y como base material para la construcción de una paz duradera.

Este gobierno **ha reactivado y fortalecido el comercio con Venezuela en la frontera**, logrando que el intercambio entre ambos países y entre nuestros pueblos vuelva a florecer, generando oportunidades, empleo y desarrollo para la región.

De igual manera, ha impulsado la **Universidad del Catatumbo**, porque las poblaciones rurales también tienen derecho a una educación superior pública, de alta calidad y excelencia, al desarrollo del conocimiento, de la ciencia y de la innovación, como herramientas fundamentales para transformar nuestros territorios y convertir a **Colombia en una potencia mundial de la vida**.

He venido hoy aquí a comprometerme con ustedes: cumpliré, **como jefe de Estado, cada una de las obras y proyectos del Pacto Catatumbo**. Y cuando sea elegido mandatario de la nación, presidiré personalmente una de las sesiones estratégicas del comité directivo de este pacto, para supervisar de manera personal, directa y rigurosa su cumplimiento.

Nuestro presidente, Gustavo Petro, ha sido valiente, coherente y firme en la defensa del pueblo, aún al costo de los ataques más sucios y peligrosos.

Desde hace décadas, yo también hago parte de esta transformación política y social, y hoy ante la ciudadanía y los movimientos sociales de Norte de Santander, vengo a comprometerme.

Seré digno sucesor del cambio social, de la mejoría en la vida de los colombianos, en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, en el combate sin cuartel contra los corruptos, en el impulso de la revolución ética y agraria, en la continuidad de la búsqueda de la paz, y la reparación plena de las víctimas.

A los pequeños, medianos y grandes empresarios, los invito a que construyamos juntos la prosperidad de Colombia. **Si derrotamos la pobreza y la desigualdad ganaremos todos. Por el bien de Colombia, primero los pobres.**

IVÁN
Cepeda
Presidente



VAMOS A GANAR
EN DEMOCRACIA

Neiva, Huila

Queridas compañeras y queridos compañeros:

Me complace venir a esta tierra tan diversa en zonas de vida y ecosistemas, así como con un movimiento social y político tan diverso y poderoso que ha librado luchas por el cambio social, la defensa ambiental, por la reforma agraria, por la paz y la democracia.

Aquí se ha sabido defender nuestra soberanía territorial ante la voracidad de las compañías multinacionales, se ha sabido proteger nuestra riqueza natural, y el derecho a la tierra para garantizar la soberanía alimentaria de la población.

Un ejemplo de esas luchas ha sido la movilización frente a los peores efectos del proyecto hidroeléctrico del Quimbo que ha dejado un gran número de familias damnificadas por las inundaciones, pérdida de tierras, daños socioambientales, deforestación, afectación de la economía de campesinos y pescadores.

Y, además, como si todo esto fuera poco, ha dejado altas tarifas del servicio eléctrico. Huila es hoy uno de los dos departamentos con la electricidad y las tarifas eléctricas más caras en todo el país.

Francamente no hay derecho. Por eso, esta injusticia ha sido enfrentada con décadas de férrea resistencia popular, que hoy en el Gobierno del Cambio, comienza a tener frutos en la reparación de las víctimas del Quimbo con la entrega de 3.000 hectáreas de tierra a las familias damnificadas por esta megaobra.

Por eso, mi primer mensaje hoy aquí es expresar gratitud y reconocimiento al gran movimiento social y al pueblo huilense por su larga tradición de luchas políticas por la transformación del país.

No soy amigo de las promesas y las palabras retóricas. Vengo a comprometerme con la gente del Huila a avanzar en la entrega de tierras, a **construir un pacto social y político para transformar el territorio, al regreso del tren y el transporte ferroviario al Huila, a buscar la paz y un nuevo modelo minero energético soberano y autónomo.**

Ayer lo dije en Cúcuta, algunas empresas de la comunicación, candidatos y candidatas, opinadores y analistas han venido insistiendo en que aquí estamos en la polarización de **dos extremos ideológicos**: el que representa Álvaro Uribe Vélez, y el que encarnaríamos nosotros.

Esa, como tantas otras, es una mentira descarada. **El verdadero enfrentamiento es entre dos posiciones abiertamente opuestas.**

La del uribismo que es una posición de concentrar con violencia riqueza y tierra, empobrecer al pueblo, proteger las mafias parapolíticas, destruir los derechos sociales, acabar con la naturaleza, entregar el país a quienes puedan garantizar impunidad frente a crímenes de lesa humanidad cometidos.

Y la posición nuestra, la del presidente Petro y la del Pacto Histórico, que es la posición del cambio social, la defensa de la vida, la proteger la naturaleza, la vida, de entregar la riqueza al pueblo colombiano y redistribuir entre quienes menos tienen.

Álvaro Uribe Vélez y sus candidatas y candidatos quieren eliminar los derechos que hemos reconquistado: el salario vital, la reforma pensional y laboral, la entrega de 700.000 hectáreas de tierra.

Quieren que volvamos al pasado, en el que la única solución a todos los problemas era el autoritarismo y la violencia.

Pero Colombia y el mundo ya no son los mismos

El país cambió, la gente ha comenzado a entender que **los derechos nos pertenecen, que no se mendigan a políticos corruptos, que se exigen y se ejercen.**

Que para acabar con la violencia se debe atacar la desigualdad social, y transformar económicamente los territorios rurales y urbanos.

Con frecuencia, mis adversarios me atacan por aparecer en fotografías con dirigentes de organizaciones guerrilleras durante diálogos de paz. Lo digo sin ambigüedades y sin arrepentimiento: **no me avergüenzo de ninguno de los esfuerzos que he realizado durante más de dos décadas en mesas de diálogo para buscar el fin del conflicto armado colombiano**; para mitigar el sufrimiento de la población civil mediante salidas humanitarias; para abrir caminos de verdad, justicia y reparación a las víctimas.

Uribe y la extrema derecha colombiana han buscado **criminalizar la paz**, instalar la idea de que participar en procesos de paz es un delito. Pero debemos recordarlo con fuerza: la paz no solo es un derecho del pueblo colombiano, es un deber de obligatorio cumplimiento, tal como lo consagra nuestra Constitución.

Por eso lo digo con toda responsabilidad: en mi gobierno, como jefe de Estado, buscaré la paz por la vía del diálogo, y daré cumplimiento integral al Acuerdo Final de Paz de 2016.

Pero también lo digo con honestidad y realismo: no serán diálogos eternos ni retóricos. Serán diálogos que produzcan resultados reales, verificables y concretos.

A las organizaciones armadas les digo con firmeza, el diálogo es para terminar la guerra, no para prolongarla ni para fortalecerse económica o militarmente. A una voluntad de paz no se le puede responder con violencia contra la población civil, contra las comunidades, contra el liderazgo social. No hay justificación para matar lideresas y líderes sociales. En mi gobierno esa será la línea roja no más líderes ni lideresas sociales asesinados por grupos armados, haremos hasta lo imposible para acabar con eso.

Como no han podido derrotar por las vías democráticas a nuestro gobierno ni al presidente Gustavo Petro -a quien, como lo confirman una y otra vez las encuestas, respalda una parte significativa del país, especialmente quienes han padecido la pobreza, la exclusión y la discriminación-, ahora intentan derrotarlo por fuera y sin la democracia.

Al no poder vencerlo en democracia, buscan hacerlo con presiones externas, apelando incluso a la injerencia política y militar del gobierno de los Estados Unidos en Colombia.

Sabemos que han ido a suplicar al secretario de Estado, Marco Rubio, que se judicialice al presidente, que se rompa la legalidad internacional y que se intervenga de manera directa en nuestro país. Suplican porque han renunciado a la dignidad nacional.

Suplica Uribe porque actúa como apátrida. Suplica porque necesita que otros le cuiden su propia impunidad que aquí ya no pueden sostener.

Esa misma actitud explica por qué hoy son capaces de justificar y defender los peores crímenes que se cometen en el mundo. Niegan lo evidente: que en Gaza se ha perpetrado un genocidio contra el pueblo palestino, que ha cobrado la vida de 71.000 personas, entre ellas 20.000 niñas y niños.

No es casual, entonces, que miren con simpatía la violencia cotidiana contra migrantes y ciudadanos en las calles de los Estados Unidos. Celebran que se asesine a plena luz del día a quien se atreve a socorrer a un migrante. Ese es el mundo que admiran. Ese es el espejo en el que se miran.

Y lo más grave: sueñan con importar esos métodos a Colombia, o peor aún, con reeditar prácticas que ya conocimos y que marcaron nuestra historia con sangre y vergüenza, como los llamados “falsos positivos”, una maquinaria de muerte que dejó miles de jóvenes enterrados y además estigmatizados como terroristas.

Frente a ellos, nuestra respuesta no puede ser el odio ni la violencia, sino más democracia, más dignidad y más defensa de la vida. Colombia no se arrodilla ante poderes extranjeros ni traiciona a su pueblo. Colombia avanza cuando defiende la paz, la soberanía y los derechos humanos, aquí y en cualquier lugar del mundo.

Ese es el camino que desde el Pacto Histórico hemos elegido. Y ese camino no lo detiene el miedo, ni la mentira, ni la traición. Defenderemos a nuestro presidente Gustavo Petro. Somos un pueblo digno y soberano.



IVÁN
Cepeda
Presidente

SOMOS CONSTRUCTORES DE PAZ
Y DEMOCRACIA, LUCHADORES
PARA LA SUPERACIÓN DE LA
POBREZA Y LA DESIGUALDAD

Ibagué, Tolima

Queridas compañeras y queridos compañeros:

Me alegra volver al Tolima, escenario de acontecimientos que han determinado el curso histórico de nuestra. Vengo a saludar a su gente, a sus movimientos sociales y organizaciones populares.

Aquí en este departamento han tenido lugar hechos políticos que buscaban acabar con la esperanza en el cambio social del país.

Hace medio siglo, aquí se firmó el Pacto de Chicoral; un acuerdo de contrarreforma agraria que sellaba la alianza entre los grandes terratenientes, los dos partidos tradicionales, el Liberal y el Conservador, y sectores empresariales con el gobierno de Misael Pastrana Borrero -un personaje nefasto, que entre los males que le hizo al país, fue dejarnos a su hijo, Andrés Pastrana-.

Fue un pacto que logró neutralizar, por décadas, la reforma agraria, y blindar la extensa e improductiva propiedad latifundista.

Pero aquí también se ha sabido defender el medio ambiente, la tierra, el agua, la soberanía de los territorios y la producción agroalimentaria.

Las consultas populares en defensa del territorio, como la histórica de Cajamarca frente a Anglo Gold Ashanti, demostraron la fuerza que tiene el pueblo organizado y movilizado.

En 2016, gracias a las comunidades, a los comités ambientales de Ibagué, Cajamarca, y muchos municipios del Tolima se conquistó **la primera consulta popular de iniciativa ciudadana en la historia de Colombia**.

La victoria del campesinado, de la juventud y de la población contra la gran multinacional minera, no fue solo contra un proyecto extractivista. Fue una victoria que demostró que **el agua vale más que el oro**.

Esa lucha es parte del corazón de nuestro programa ambiental, el cual con los insumos de las organizaciones y de nuestras candidatas y candidatos a la Cámara de Representantes por este departamento presentaré mañana.

Ese y muchos otros ejemplos de los procesos de resistencia popular en esta región, nos llenan de sentimientos de gratitud, admiración y reconocimiento al gran movimiento social y al pueblo tolimense, al movimiento ambientalista de Caldas que también está presente en esta plaza.

Como lo he venido diciendo, el mejor homenaje que podemos rendir a esa historia ejemplar es continuar el camino del cambio social, que emprendimos en 2022 con el Pacto Histórico.

En los próximos años, debemos avanzar en la consolidación irreversible de esta transformación que ahora tendrá la forma de tres revoluciones: la Revolución Ética, contra toda forma de corrupción e inhumanidad; la Revolución económica y social, para eliminar la pobreza y la desigualdad; la Revolución política y democrática, para garantizar el poder constituyente del pueblo colombiano.

No soy hombre de palabras vacías y promesas demagógicas. Vengo a comprometerme con la gente del Tolima a seguir desarrollando la reforma agraria, que ahora será la Revolución Agraria; en crear **un modelo minero energético que respete la vida de las comunidades y la naturaleza**; en ampliar el acceso al agua potable y la creación de vías terciarias para todos los municipios de este departamento y hacerlo posible en todo el país.

Como en todo el país, también aquí en el Tolima se vivió el **genocidio contra la Unión Patriótica**, la represión del Estado contra las organizaciones sociales, el desplazamiento forzado y las doctrinas de seguridad estatal que incorporaban la criminalidad política, así como la acción cruenta del paramilitarismo y otros grupos armados.

Sobre todo en el sur del Tolima, en la zona rural, muchas comunidades campesinas han tenido que afrontar la violencia política y el despojo de tierras.

Y en las zonas urbanas, aquí en Ibagué se padecieron atentados, bombas contra los dirigentes, alcaldes y funcionarios, como forma del exterminio político.

Ahora, como no pudieron derrotar por las vías democráticas a nuestro gobierno ni a nuestro presidente Gustavo Petro -a quien, como lo confirman una y otra vez las encuestas, respalda una parte significativa del país, especialmente

quienes han padecido la pobreza y la desigualdad social-, ahora intentan derrotarnos con métodos sucios.

A él buscan judicializarlo, incluso en Estados Unidos, a mí buscan impedirme que participe en la consulta del próximo 8 de marzo.

Pero, a nosotros no nos va a atemorizar o amedrentar el juego sucio de Álvaro Uribe Vélez y su entorno político.

Somos curtidos luchadoras y luchadores sociales. No es la primera vez que los enfrentamos, los hemos derrotado por las vías democráticas, en los tribunales y en las urnas.

Y volveremos a hacerlo, así utilicen todos los métodos tramposos que ya les conocemos.

Durante décadas se nos ha intentado encasillar con adjetivos infames: “terroristas”, “subversivos”, “extremistas”. A todo aquel que protesta o disiente, Uribe lo acusa de ser guerrillero.

Nos han querido deshumanizar para silenciar nuestras ideas y justificar la persecución.

Pero eso es falso. Profundamente falso.

Si algo han sido los movimientos de izquierda en Colombia, los movimientos sociales y populares, los pueblos y comunidades ancestrales, el campesinado, las mujeres y los jóvenes que se han movilizado, ha sido constructores auténticos de paz y de democracia.

Hemos sido luchadores incansables contra la pobreza y la desigualdad, defensores de la vida, de la dignidad y de la justicia social, aun en medio de la estigmatización, la violencia y el miedo.

Aunque Uribe Vélez, la extrema derecha y su entramado mediático insistan en presentarnos como fuerzas hostiles a la democracia, la historia habla con hechos, no con mentiras.

Nuestra participación ha sido decisiva en los momentos más luminosos del país: en la conquista de la Constitución de 1991; en la defensa irrestricta de los derechos humanos; en la oposición al autoritarismo, al estado de sitio permanente y a la negación de las libertades; en la protección de las culturas originarias; en la defensa de la naturaleza, del agua y de los territorios; en la apuesta por el diálogo, la negociación y la firma e implementación de los acuerdos de paz; y en los avances, largamente postergados que ahora por fin se empiezan materializar de la reforma agraria.

En pocas palabras, hemos sido los defensores más coherentes y los verdaderos arquitectos, los artesanos pacientes, de lo mejor que se ha construido en Colombia.

Y hoy, por primera vez en nuestra historia republicana, nos hemos constituido en un gobierno que ha comenzado de manera real e innegable el camino de las reformas estructurales de la sociedad. Un gobierno que quiere la gente del pueblo, porque en medio de dificultades enormes ha comenzado a ser que el salario vital, ha aplicado por primera vez el principio progresivo de los impuestos, los programas sociales que no son miserables dádivas sino derechos, la economía que respondan al principio: “por el bien de todos, primero los pobres”.

Esa es la verdadera razón de la persecución, del genocidio político que se desató contra nosotros y de los intentos actuales por frustrar la continuidad de un proyecto democrático y transformador.

No nos atacan por lo que dicen que somos, sino por los cambios que hemos logrado y vamos a lograr.

Hay algo que ya no pueden detener: la fuerza acumulada del pueblo colombiano a lo largo de décadas de luchas democráticas y sociales. Esa fuerza es imparable.

Seguiremos avanzando. Seguiremos profundizando los cambios. Seguiremos transformando la sociedad con la convicción de que la paz, la justicia social y la democracia no son concesiones, sino derechos conquistados y defendidos por el pueblo.

IVÁN
Cepeda
Presidente



SOMOS LA FUERZA
**DE LA VIDA Y DE LA
NATURALEZA**

Armenia, Quindío

Queridas compañeras y queridos compañeros:

Me resulta grato venir a esta ciudad con la que me unen lazos familiares entrañables. Aquí, en abril de 1930, nació mi padre, Manuel Cepeda Vargas, senador de la República asesinado como parte del genocidio contra la Unión Patriótica en Bogotá en 1994.

Mucho de su rebeldía y de su espíritu de resistencia debió heredar mi padre de esta tierra y su gente.

El pueblo quindiano se ha destacado por sus luchas políticas y sociales. Ha defendido férreamente sus derechos como lo muestra, por ejemplo, la defensa de la educación pública que han hecho el magisterio y el estudiantado, con grandes movilizaciones que han permitido mejorar las condiciones laborales, así como fortalecer la Universidad Pública en el departamento y en el país.

Aquí el movimiento social y ambiental ha protegido los ecosistemas, montañas de la cordillera central, los ríos, amenazados por la gran minería, y los intentos de imponer la economía del monocultivo.

En honor a esa historia de luchas, y a los desafíos que hoy tenemos ante nosotros, vengo a comprometerme con ustedes en que al ser elegido Presidente de la República, trabajaré con mi equipo de gobierno intensamente para que el Quindío sea una pujante y próspera zona agroambiental, para el turismo sostenible, comunitario y regenerativo; para hacer respetar las consultas populares contra la minería y para liberar a esta ciudad y al departamento de las mafias y las redes criminales de la corrupción.

A pesar de que la extrema derecha empeña en negarlo, ocultarlo o minimizarlo, el cambio climático y sus efectos han puesto en grave peligro la supervivencia de la vida en nuestro planeta. Para nosotros, desde la izquierda, los movimientos sociales, desde el Pacto Histórico en cambio representamos un programa desde el comienzo del primer gobierno progresista en 2022 centrado en la más radical defensa de la vida y de la casa común, como la llamó el papa Francisco que recordamos con tanto afecto.

Es un compromiso con el futuro de la Humanidad, es nuestra responsabilidad histórica con las próximas generaciones porque Colombia tiene la fortuna de ser una de las naciones de riqueza y biodiversidad más importantes del planeta.

Tenemos la suerte, la fortuna de una combinación privilegiada de geografía, clima, y ubicación estratégica.

Colombia es el único país de Suramérica con **costas tanto en el Caribe como en el Pacífico**, tenemos la cordillera de **los Andes que se divide en tres ramas** que atraviesan de sur a norte el país; **pisos térmicos** que van desde nieves perpetuas hasta selvas tropicales, bosques andinos y valles interandinos; somos una **nación de agua** con grandes ríos, humedales, ciénagas, lagunas, manglares y glaciares; tenemos **grandes ecosistemas diversos que convergen** y generan mayor diversidad, sistemas como la Amazonía, el Chocó bio-geográfico, la Orinoquía, el Caribe seco; tenemos **más de 50% de los páramos de todo el planeta** y extensas selvas húmedas tropicales; somos uno de los países con **mayor número de aves, plantas, anfibios, reptiles y mariposas**.

Por eso Colombia es un territorio de valor estratégico para la humanidad y para la vida en el planeta, necesitamos garantizar la preservación del equilibrio ecológico, y en consecuencia su gobierno y su pueblo **deben ser guardianes y protectores de la vida en el mundo**.

Durante décadas, en nuestro país sectores poderosos especialmente bajo los gobiernos de la extrema derecha uribista, aliados con redes mafiosas y criminales, o grupos armados ilegales, han puesto en práctica el **principio neoliberal de que el mercado está por encima de la vida**.

Para eso, se han ejecutado todos los métodos de voraz e intensa depredación: se explota el oro sacrificando el agua; se extrae el petróleo fracturando el suelo y el subsuelo; se saca el carbón devastando la capa vegetal; se practica la ganadería extensiva deforestando; se hace la minería transnacional desplazando comunidades enteras.

Es un modelo que concibe los ríos como mercancía, las montañas como yacimientos, los bosques como barreras a derribar, las plantas y las especies animales como mercancías, material de experimento o colección.

Pero este modelo no solo devastó ecosistemas: también desató violencia.

Porque cuando las comunidades se levantaron para defender el agua, la tierra y la vida; cuando los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y ambientalistas dijeron “no” al despojo, la respuesta de sectores de ultraderecha que han gobernado el país siempre han sido las masacres, la persecución y asesinato de ambientalistas, lideresas y líderes sociales.

El futuro de Colombia no está en seguir profundizando un **modelo que nos deja ríos muertos y comunidades desplazadas**. Está en reconocer que la naturaleza no es una despensa inagotable, un centro comercial abierto a nuestro consumo ilimitado, sino la base misma de la vida; que cuidarla no es un obstáculo al desarrollo, sino la condición de nuestra existencia como sociedad y como especie biológica.

El Pacto Histórico, nuestro gobierno, nuestro programa, han sabido valorar y asumir esa responsabilidad global. Desde que asumió su mandato, nuestro presidente Gustavo Petro se ha convertido en un líder internacional de la protección de la naturaleza; ha proclamado que somos un gobierno para la defensa de la vida, y que Colombia trabaja para ser una potencia mundial de la vida.

La cuestión de defender la vida y la naturaleza es un tema que nos diferencia claramente de la extrema derecha y su jefe Álvaro Uribe Vélez. Él y sus candidatas y candidatos quieren que sigamos depredando la riqueza natural sin límites, con egoísmo y sin escrúpulos.

Quieren el fracking, no aceptan la transición energética y ecológica como una necesidad inaplazable, invitan a las compañías multinacionales a seguir explotando nuestros recursos sin control y con licencias ambientales exprés, votaron contra el Acuerdo de Escazú, consideran a las comunidades y a las consultas previas como un formalismo a eliminar; creen que los indígenas, campesinos y afros son un estorbo para el desarrollo; quieren seguir la explotación minera en los páramos y ven a los defensores ambientalistas como parte del enemigo interno.

Nuestra visión, por el contrario, surge de luchas sociales, de comunidades organizadas, de movimientos ambientales, campesinos, indígenas, afrodescendientes, jóvenes, mujeres que han protegido históricamente los territorios.

Queremos una verdadera transición ecológica con justicia social.

Queremos una **economía responsable, sostenible y que se enfoque en la vida**. La economía productiva, regeneradora, la bioeconomía, no solo es posible sino que es la forma de garantizar la riqueza de nuestra nación.

Queremos que **el agua sea un derecho, no una mercancía**, y ordenar el territorio rural y urbano en armonía con el respeto de la riqueza hídrica.

Queremos que se respete a las comunidades, sus liderazgos, sus organizaciones, y que haya **justicia ambiental**, y sanción para quienes asesinen los líderes ambientales, lideresas sociales y que persigan a las comunidades en los territorios destruyan la naturaleza.

Queremos que la Revolución Agraria fomente sistemas agroecológicos que protejan la biodiversidad, fortalezcan la economía campesina aseguren la soberanía alimentaria, impulsen la biodiversidad y conecte el conocimiento científico con los saberes tradicionales campesinos y de pueblos ancestrales.

A los empresarios y a los gremios económicos les decimos, que con el respeto de la naturaleza ganaremos todos, que vamos a construir si hay voluntad para ellos una nación rica y próspera la riqueza y prospera manteniendo nuestra biodiversidad natural.

Eso es lo que queremos, radicalizar la defensa en todas partes de la vida, de la naturaleza y de los bienes de la humanidad en Colombia. Somos un movimiento por la vida, por la vida digna para nuestra nación y para la Humanidad.

Como lo he dicho: soy un hijo de nuestro gran pueblo que hoy tiene la responsabilidad de construir con todas y todos ustedes, la segunda etapa de la transformación de nuestra sociedad.

Lo haré al servicio de nuestro pueblo. Mandaré obedeciendo, como nos han enseñado nuestros pueblos ancestrales, los mismos que han sabido proteger a la Madre Naturaleza.

IVÁN
Cepeda
Presidente



LAS TRAMPAS
**DE LA EXTREMA DERECHA
NO NOS DETENDRÁN**

Zipaquirá, Cundinamarca

Queridas compañeras y queridos compañeros:

Saludo a Zipaquirá y a su pueblo, cuya historia ha sido de gestas por libertad y justicia social, desde los tiempos de la Independencia hasta nuestros días. Sus movimientos sociales han contribuido a forjar la vida comunitaria en la acción del campesinado por la reforma agraria, y de las asociaciones ciudadanas para lograr la vivienda digna, con servicios públicos y derechos colectivos.

Cómo no recordar hoy aquí, que nuestro actual presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, comenzó en esta ciudad su vida política, y que sus primeras luchas sociales las dio junto a las comunidades más necesitadas de esta zona.

Cómo no recordar que él contribuyó a fundar el histórico barrio Bolívar 83, referente de la lucha por la vivienda y el acceso a los servicios públicos.

Cómo no recordar que esos primeros pasos marcaron su vida, lo convirtieron luego en un joven concejal, lo llevaron a ingresar al M-19, y más tarde lo conducirían a la paz, a la acción política democrática en el Congreso de la República, en la Alcaldía de Bogotá, y luego en la Jefatura del Estado.

El recorrido del presidente Petro muestra el camino que hemos trasegado muchos de los dirigentes e integrantes del Pacto Histórico: de los barrios populares, de las luchas comunitarias, a los cargos públicos locales y luego al Gobierno.

Pero lo nuestro, cabe decirlo, no es un camino de ascenso para olvidar al pueblo y encerrarnos de manera confortable y egoísta en altas dignidades y puestos. Nosotras y nosotros, por muy encumbrados que sean los cargos, siempre regresamos a nuestro origen. Siempre debemos regresar y estar con el pueblo.

Nos hemos formado en las luchas sociales, venimos de barrios, veredas y resguardos al Gobierno, y cuando estamos en esos lugares del poder institucional nunca debemos olvidar de dónde venimos, para regresar siempre allí donde está la gente con la que hemos luchado y compartido solidaridad,



dificultades y también grandes triunfos. Somos y no debemos al pueblo colombiano.

Somos una fuerza política del pueblo y para el pueblo. Somos un gobierno de multitudes, y la mía es una campaña de multitudes del pueblo organizado y movilizado.

Como lo he dicho en mi recorrido por el país, esa es la verdadera razón de nuestra fuerza que se hace visible y se hace sentir cada vez más. Nuestra unidad e identidad con la gente del común es la razón por la cual el Pacto Histórico es hoy la principal, la más influyente y multitudinaria fuerza política en Colombia.

Y esa es la razón también por la cual la extrema derecha y su jefe, Álvaro Uribe Vélez, experimentan resentimiento, impotencia y desespero, ante la caducidad de su discurso y de sus métodos tramposos.

La extrema derecha en el mundo está en el lado oscuro de la historia, del lado de los factores y fuerzas que empujan a la Humanidad a la catástrofe.

La extrema derecha con su ***negacionismo de la crisis climática*** ha llevado al mundo a un momento en el que se hace cada vez más urgente la transición ecológica ante el modelo de la energía fósil y el calentamiento global con sus ***irreversibles consecuencias, para la vida y para la humanidad.***

La ***extrema derecha es la principal responsable*** del clima de zozobra ante ***la posibilidad de una tercera guerra mundial, esta vez nuclear***, que devastaría nuestro planeta y podría extinguir la vida.

Es ***la extrema derecha israelí, representada por Netanyahu***, la responsable del genocidio en Gaza contra el pueblo palestino.

Es ***la extrema derecha argentina, representada por Milei*** la que adelanta la masacre laboral y social de su pueblo, la que ha dado una vuelta atrás a la historia para retornar a la violación de derechos humanos que caracterizó los años de la dictadura de ese país.

Es *la extrema derecha representada por Bukele en El Salvador*, la que ha convertido ese país en una inmensa cárcel, con el costo de la violación generalizada de los derechos humanos.

Es *la extrema derecha representada por Donald Trump en Estados Unidos*, la que invade países y bombardea civiles en el mar caribe colombiano y venezolano, la que amenaza con la anexión de Groenlandia, la que amenaza a México, Cuba y Colombia, la que destruye sistemáticamente el derecho internacional, la que conduce a la guerra, la que ejecuta migrantes inermes en las calles de ciudades estadounidenses.

En Colombia conocemos y hemos padecido en lo corrido de este siglo las funestas consecuencias que ha producido en nuestro país el régimen autoritario de Álvaro Uribe y su entorno político de extrema derecha que imperó entre 2002 y 2010 y su nefasto retorno en el periodo entre 2018 y 2022.

Sumieron al país en una crisis de derechos humanos, que incluyó la práctica de crímenes masivos y sistemáticos como el desplazamiento forzado, las desapariciones, los asesinatos políticos, los mal llamados “falsos positivos” que fueron crímenes de Estado contra miles de jóvenes.

Uribe causó un grave daño a la democracia y al Estado de derecho, empoderando, desde su primer gobierno, a sus socios parapolíticos, muchos de los cuales eran, además, fichas del narcotráfico.

Y cuando los jueces, opositores, periodistas, y organizaciones de derechos humanos reaccionamos en defensa de la democracia, nos persiguió, sometió al espionaje del DAS, y en muchos casos al exilio.

Debemos recordarlo, la extrema derecha colombiana y su máximo dirigente han criminalizado la paz: se opusieron ferozmente a los procesos de diálogo y lo siguen haciendo, intentaron bloquear las conversaciones de La Habana, y luego de firmado el acuerdo, quisieron infructuosamente destruirlo. Por todos los medios, han buscado perpetuar el conflicto armado, la guerra, el miedo, la zozobra, el odio en la sociedad colombiana.

Uribe y la extrema derecha colombiana promovieron la austeridad neoliberal, que significa apretar el cinturón a la inversión social, reduciéndola a mezzanines subsidios usados para estimular clientelas políticas y corrupción.

Promovieron la destrucción de los derechos sociales de la población, la privatización de lo público, la conversión de la atención de la salud en negocio, la precarización intensiva de los derechos laborales y pensionales, la criminalización de la protesta social.

Y, como lo dije ayer en Armenia, promovieron la destrucción ambiental y de nuestra biodiversidad, auspiciando el fracking, entregando licencias a las compañías multinacionales para seguir explotando nuestros recursos sin control, haciendo minería en los páramos, acabando con las fuentes de agua, buscando acabar con las consultas previas, declarando a los indígenas, campesinos, afros y a los defensores ambientalistas como enemigos internos.

Pero ese es el pasado y, lo decimos con claridad, no regresaremos allá nunca más. Porque el pueblo colombiano ya despertó y no volverá a creer en ese proyecto autoritario, corrupto, rapaz, y violento, así intente ahora disfrazarse de social, protector de la democracia y el bienestar de los colombianos.

Y sus candidatas intente disfrazarse de comunidades indígenas cuando en el pasado los menospreciaron y discriminaron.

A Uribe le decimos que no siga intentando engañar al país y que más bien responda sin más dilaciones por la responsabilidad de sus actuaciones ante los jueces de la república.

Me entristece que algunos sectores de manera conveniente se sigan plegando a ese discurso y a sus métodos antidemocráticos. Como lo he afirmado, no estamos en un enfrentamiento de “extremos” políticos, de polarización enardecida, que requiera la cabeza fría de los moderados y las moderadas.

Estamos ante debates esenciales entre dos posiciones claramente establecidas y definidas. Cuando la Humanidad y la Vida en el planeta está gravemente amenazada, cuando en nuestro país se juega la posibilidad de profundizar la democracia, alcanzar la paz y la equidad social, no es el momento de eufemismos, poses de neutralidad y moderaciones postizas.

Como decía el pastor y humanista, Martin Luther King: “Lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de la gente buena”.

Hoy retorna con virulencia las amenazas a la democracia por parte de la extrema derecha colombiana, aunque producto de su debilitamiento, su cobardía política y el creciente rechazo de la sociedad colombiana.

En 1970, bajo el Frente Nacional, se practicó un fraude que alteró el resultado de una elección presidencial. Durante décadas se impidió la alternancia en el poder con el genocidio, la persecución política y la aniquilación de miles de dirigentes políticos, entre quienes estuvo mi padre, el senador Manuel Cepeda Vargas.

Hoy, gracias a la lucha de nuestro pueblo, esos métodos golpistas no pueden ser practicados, y por eso ahora se recurre a métodos más blandos con apariencia de legalidad y de respeto institucional. La negación de nuestros derechos ahora se practica con hipocresía.

Ante la fuerza de nuestro gobierno, un gobierno de multitudes, respaldado por amplios sectores de la sociedad que se han movilizado, una y otra vez, durante estos años en defensa de la agenda de reformas e iniciativas del gobierno.

Ante el respaldo a nuestra candidatura, evidenciado en las grandes manifestaciones a todo lo largo y ancho del país en nuestra campaña presidencial.

Ante la fuerza de nuestro proyecto político, que ocupa el primer lugar en las preferencias ciudadanas en todas las encuestas.

La respuesta cobarde de parte de la extrema derecha es bloquear la inscripción de nuestra precandidatura y nuestra participación en la consulta del Frente por la Vida.

La extrema derecha quiere impedir nuestro triunfo en las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, busca impedir nuestro triunfo en la consulta del Frente por la Vida, busca impedir nuestro triunfo en las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Pero le tenemos malas noticias a la extrema derecha y a Uribe Vélez: contamos con el respaldo del pueblo colombiano y vamos a ganar.

Durante toda mi vida, como ha ocurrido con millones de compatriotas, he visto al Estado fallar cuando debía protegerlo, he padecido el uso del poder para acabar con mis derechos y con los derechos de la gente, por eso estamos



aquí, para reconstruir la confianza, garantizar la justicia, la libertad, la verdad y gobernar con dignidad. Mi deber, el deber de nuestras candidatas y candidatos al Senado de la República y a la Cámara, es que no vuelva a ocurrir ni a pasarle a nadie que el Estado pistee sus derechos. Con esa convicción y con el respaldo del pueblo seré el próximo presidente de la República.

IVÁN
Cepeda
Presidente



NO PODRÁN DETENER
LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Bogotá, Cundinamarca

Queridas compañeras y queridos compañeros:

Hoy hemos decidido volver a encontrarnos en la plaza pública y en las calles. Nos convoca el respaldo decidido a nuestro compañero presidente Gustavo Petro Urrego, quien hoy, contra todos los vaticinios que se hacían, ha sostenido una trascendental reunión con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

Nos convoca también expresar con absoluta claridad la posición que tenemos frente a los intentos por bloquear nuestra candidatura presidencial de cara a la consulta del 8 de marzo y nuestras listas a la Cámara de Representantes en 15 departamentos del país, así como frente a las despiadadas maquinaciones destinadas a frustrar la política social del Gobierno del Cambio.

Digámoslo sin ambigüedades: lo que está en juego es si la extrema derecha y sus aliados lograrán detener y revertir el proceso de transformación social que ha emprendido nuestro gobierno, o si vamos a continuar avanzando por este camino y profundizándolo hasta hacerlo irreversible.

Lo que está en juego es el derecho del pueblo colombiano a decidir su futuro, es la continuidad de una política social que ha permitido, por primera vez, que el salario de las trabajadoras y los trabajadores avance hacia lo que debe ser: un salario vital, digno, suficiente para vivir y no solo para sobrevivir.

Tenemos la convicción de que Colombia ha cambiado. Y ese cambio no es un decreto ni una consigna: es una convicción profunda que ha nacido en el pueblo colombiano. Hoy tenemos un pueblo que se reconoce como sujeto político, un pueblo organizado y movilizado que ya no acepta la violación de sus derechos en silencio. Un pueblo que, cuando se le niega la justicia o se le arrebatada lo conquistado, sale a la calle y lo reclama pacíficamente y lo obtiene.

El estallido social, las muchachas y los muchachos de la primera línea, marcaron un antes y un después en la historia de nuestro país. Pasaron los tiempos en que se atropellaban los derechos de la gente y no pasaba nada en Colombia.

Que se sepa: frente a cada intento de frenar el cambio social, la respuesta es y será una movilización organizada, pacífica, pero firme, consciente y decidida del pueblo colombiano. Reclamaremos hasta obtener lo que la gente necesita.

Es en la movilización donde se expresa el poder constituyente que se va abriendo paso. Es desde las calles, desde las plazas, desde los barrios, los territorios, los municipios y las regiones, que defendemos lo conquistado y empujamos lo que falta por conquistar aún.

Así ha sido toda nuestra vida política, así es hoy nuestra campaña electoral: acompañados por multitudes, en encuentros populares, de presencia viva en las calles del país.

No hacemos política de élites, no hacemos política con una danza de miles de millones de pesos, no hacemos pactos truculentos con las maquinarias politiqueras, no hacemos de la política un triste espectáculo para disfrazarnos de pueblo.

Nuestra campaña se nutre de la esperanza y de la fuerza colectiva. De la austeridad republicana, de la honestidad y del compromiso ineludible con el pueblo y sus expresiones organizadas.

Hoy esa movilización es más necesaria que nunca. Porque todos los días vemos nuevas formas de oponerse al cambio democrático que impulsa este gobierno. Atacan al presidente Petro dentro y fuera del país. Intentan cerrar el camino de una candidatura legítima mediante maniobras formales y obstáculos artificiales. Pero se equivocan si creen que podrán frenar la voluntad popular.

Esta reunión pública que llevamos hoy a cabo es una afirmación ante el país de nuestra capacidad de resistencia y de decisión de salir adelante en los escenarios que se nos planteen, por más difíciles y adversos que sean.

En concreto, como lo hemos venido advirtiendo y denunciando se están desarrollando acciones planificadas en, al menos dos orientaciones claras para destruir nuestro proceso político, al Pacto Histórico y al Gobierno.

Por una parte, se adelanta una campaña política, jurídica y mediática, que tiene múltiples objetivos que van desde generar un ambiente de difamar y deshonrar a nuestros principales dirigentes y al propio presidente Petro, hasta el escenario de generar un ambiente propicio para desatar acciones violentas que incluyen la intervención militar extranjera en el país.

Por otra parte, se realizan acciones políticas, jurídicas y mediáticas permanentes para impedir que se consoliden las medidas económicas que ha tomado el gobierno para llevar a cabo los cambios y reformas que pueden acabar con la pobreza, la desigualdad, y hacer de Colombia una sociedad equitativa y próspera.

Nuestro gobierno ha enfrentado con valentía, pacífica pero enérgicamente, con carácter y entereza, las pretensiones de aniquilamiento moral y político, intentados contra el presidente de la República, el compañero Gustavo Petro, por parte de **algunos sectores** de las élites, del empresariado, de la clase política, de los medios de comunicación y de la extrema derecha colombiana.

Nuestra respuesta ha sido y será contundente, ante todo tipo de agresiones: la Unidad con el Pueblo, la movilización social y política de nuestro pueblo, esa es la fuente de nuestra fuerza, con nuestro pueblo haremos respetar la soberanía y la dignidad y el proceso de cambio.

Señor presidente, compañero Gustavo Petro, aquí esta su pueblo, respaldándolo con decisión, con la esperanza que ha despertado su liderazgo, con la confianza depositada en la entereza y carácter de su compromiso con nuestro país.

Señor presidente, compañero Gustavo Petro, aquí esta su proyecto, el Pacto Histórico, con su dirigencia política y social, con las candidatas y candidatos a la Presidencia y al Congreso, con militantes, activistas, simpatizantes, diciendo “Presidente, cuente siempre con nosotras y nosotros”.

Venimos a asumir la defensa plena de nuestros derechos, ante la infame pretensión de querer anular nuestra participación política y electoral.

La persecución a la que hemos sido sometidos en el plano político electoral se resume en cinco hechos:

1. Desde el inicio, se ha intentado impedir el surgimiento del Pacto Histórico como formación política, mediante una secuencia de actos orientados a vulnerar las garantías constitucionales que amparan a nuestra nueva fuerza.
2. Se buscó evitar, por todos los medios, la realización de la consulta del 26 de octubre de 2025, tanto para la elección de nuestra candidatura presidencial como para la conformación de las listas al Senado de la República y a la Cámara de Representantes. Solo gracias a una medida provisional adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá fue posible llevar a cabo dichas consultas, garantizando de manera temporal el ejercicio de derechos fundamentales a la participación política.
Además, el 26 de octubre de 2025, 4.000 puestos rurales de votación fueron trasladados, impidiendo a millones de personas el ejercicio de su derecho a participar en la consulta.
3. Desconociendo abiertamente el carácter partidista y vinculante de la consulta del 26 de octubre de 2025, ahora se quiere revocar mi inscripción a la consulta del 8 de marzo de este año.
4. Adicionalmente, se pretende anular las listas a la Cámara de Representantes en 15 departamentos del país, aumentando el daño a los derechos de millones de personas.
5. El conjunto de estos hechos configura también una grave violación de los derechos políticos de los más de 2'700.000 personas que votaron en nuestra consulta el 26 de octubre de 2025.

Lo que está ocurriendo constituye una operación antidemocrática, sin precedentes, en la historia reciente del país. Se trata de una violación grave, masiva y sistemática del derecho de una fuerza política y que la priva de participar en condiciones de igualdad en el proceso electoral.

En consecuencia, lo digo con total firmeza y determinación: si se me impide participar en la consulta del 8 de marzo, anuncio desde ya que el Pacto se retira de la consulta y yo me inscribiré para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este año, y buscaremos con nuestros asesores jurídicos los escenarios y procedimientos para subsanar la impugnación de nuestras listas a la Cámara de Representantes en varios departamentos.

El Pacto Histórico hará lo necesario para que su acción organizada, la movilización política de sus millones de seguidoras y seguidores, permitan la elección de una poderosa bancada en el Senado y la Cámara de Representantes, y mi elección en primera vuelta como sucesor de Gustavo Petro en la Presidencia de la República.

No podrán detener la transformación social.

Hoy estamos en la movilización para asumir la defensa de la política social de nuestro gobierno, evidenciada en la Reforma Laboral, en la adopción del Salario mínimo vital como motor del desarrollo social y económico y ruta para detener la feroz maquinaria de reproducción de la desigualdad y la pobreza en que convirtieron la política económica en Colombia.

La diferencia entre nuestra política social y la que llamaban política social los gobiernos neoliberales es de fondo. Es la diferencia entre la limosna y el ingreso digno, entre la beneficencia y el reconocimiento de derechos, entre el cambio de la vida de la gente y el sometimiento a un régimen de clientelas, entre la dignidad y la postración de los colombianos.

Como se ha demostrado en nuestro gobierno, aumentar el salario mínimo hasta alcanzar un salario vital es una cuestión de dignidad y justicia social, **un elemento indispensable para materializar el Estado Social de Derecho**, pero además es un asunto de crecimiento económico y prosperidad de la Nación.

Décadas de neoliberalismo, autoritarismo y guerra nos convirtieron en el tercer país más desigual en el planeta. Pero ya con nuestra política se está demostrando que, con el aumento salarial, contrario a lo que nos dice la doctrina neoliberal todos los días, hace la sociedad, una sociedad más próspera y equitativa en la que ganamos todos y todas, mediante el aumento de la capacidad adquisitiva del pueblo trabajador y la disminución de la pobreza.

No nos cansamos de repetir la lección que nos han dejado gobiernos progresistas latinoamericanos, como el de México: “Por el bien de todos, primero los pobres”. Por el bien de Colombia, primero los pobres.

Eso es tan cierto que hoy podemos demostrar, con cifras en la mano, que uno de los beneficiarios de estas medidas de aumento del salario es el propio mundo empresarial, la Superintendencia de Sociedades confirmó que las mil empresas más grandes del país reportaron en 2024, ganancias por \$90 billones de pesos. ¿Dónde está el destrozo de la economía que vaticinaban iba a ocurrir con Gustavo Petro y el Pacto Histórico? ¡Mentiras!

Colombia se posicionó como la sexta mejor economía entre los 37 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, destacando por su sólido desempeño macroeconómico.

Esas cifras, contrario a lo que dicen los economistas neoliberales, muestran que nuestra política social conduce al crecimiento y a un modelo de desarrollo que empieza a dejar de depender exclusivamente de la extracción petrolera, de los capitales golondrina, de la economía subterránea del narcotráfico, y que se apoya cada vez más en el consumo de los hogares colombianos.

Hoy estamos aquí para decirle al pueblo trabajador que no desfalleceremos en la defensa no solo del salario vital sino de todo nuestro programa social. Estoy aquí para reafirmar que trabajaré arduamente junto a mi equipo de gobierno, a las organizaciones sociales y todas y todos ustedes para ampliar el camino de la protección de los derechos, del tránsito hacia un modelo que elimine la pobreza y la desigualdad.



IVÁN
Cepeda
Presidente

JUNTO AL PUEBLO,
**EN LA RESISTENCIA Y EN
LA ESPERANZA**

Barranquilla, Atlántico

Queridas compañeras y queridos compañeros:

Me honra tomar la palabra en Barranquilla, una ciudad donde los movimientos sociales han escrito, con sacrificio y dignidad, algunas de las páginas más luminosas de la historia de Colombia.

Barranquilla es tierra de luchas. Aquí, hace más de un siglo, comenzaron a organizarse los trabajadores del ferrocarril, los braceros del río Magdalena, los obreros de Puerto Colombia. Aquí nació, desde temprano, una conciencia de justicia y equidad social.

Esta ciudad ha sido la gran puerta de entrada de ideas libertarias y emancipadoras. Por Barranquilla circularon pensamientos progresistas, liberales y de izquierda que nos han permitido enriquecer nuestra visión sobre la realidad y sobre el país.

Aquí se levantó la Universidad del Atlántico como un bastión democrático, y aquí se aprendió que defender la educación pública, lo que implica enfrentar sin miedo a las mafias politiqueras y clientelistas que pretenden convertir el derecho a la educación en un botín y en un negocio.

Por todo ello, este es un lugar muy apropiado para detenernos hoy a reflexionar sobre la aberrante decisión que tomó ayer el Consejo Nacional Electoral: impedir mi participación en la consulta del próximo 8 de marzo y tratar de bloquear la posibilidad de que el Pacto Histórico presente listas a la Cámara de Representantes en quince departamentos del país.

Es el lugar adecuado para preguntarnos qué está en juego en esta elección, porque no es la primera vez que en Colombia se intenta frenar, aniquilar, o silenciar a una fuerza política que es una posibilidad real del cambio social.

Nuestra historia es dolorosamente clara: cada vez que el pueblo ha levantado una esperanza auténtica de cambio, los poderes de siempre han respondido con la violencia, con el fraude, con la mentira, con el asesinato o con reglas y procedimientos a los que se pretende dar legalidad, pero en realidad son maniobras retorcidas.

Así se explica por qué las transformaciones en Colombia han sido tan difíciles, tan costosas, tan dolorosas. Lo que ocurrió por ejemplo en diciembre de 1928, cuando el naciente movimiento sindical aquí en la costa Caribe comenzaba a lograr la resistencia contra la compañía estadounidense United Fruit Company, y cuando fueron masacrados los trabajadores de esa compañía en el episodio que conocemos como la Masacre de las Bananeras.

Por eso,

cuando campesinos e indígenas defendieron la propiedad colectiva de la tierra, los resguardos y las cooperativas agrícolas, se desató la violencia para imponer el latifundio.

cuando Jorge Eliécer Gaitán se alzó como la voz del pueblo y la esperanza de una Colombia distinta, fue asesinado, el 9 de abril de 1948.

se instauraron la criminalidad de Estado, la tortura, la desaparición forzada, el exilio político, y la criminalidad estatal contra los opositores.

se crearon aparatos militares e instituciones de inteligencia para evitar que los líderes sociales y las comunidades se opusieran al despojo de tierras y a la estrategia de control territorial de los grandes latifundistas, también en la costa Caribe, por supuesto.

fueron asesinados estudiantes universitarios.

fueron reprimidos y estigmatizados los jóvenes de las barriadas populares que se levantaron en el Paro Cívico de 1977 y en el Estallido Social de 2021.

ocurrió el genocidio contra la Unión Patriótica.

Y a propósito de este genocidio, hoy en esta plaza, quiero rendir un homenaje sentido a una de sus víctimas: a mi amigo, al gran dirigente estudiantil de la Universidad del Atlántico, al abogado íntegro y militante ejemplar de la Unión Patriótica, José Antequera Antequera. Como él, tantos hijos e hijas de esta tierra entregaron su vida para que Colombia pudiera soñar con justicia.

Pero nada de eso ha impedido que seamos una fuerza y aquí estamos, a pesar de todo. Porque la historia también enseña algo fundamental: que ningún poder es eterno que atemorice hasta no poder lograr la resistencia y los cambios, que el pueblo colombiano ha sido superior a la represión estatal y que hoy tiene gobierno que ha hecho posible los cambios sociales.

En mi caso personal, a lo largo de toda la vida política he enfrentado la persecución en sus más diversas y dolorosas formas. He conocido el exilio, no una, sino varias veces. He tenido que abandonar mi país y vivir años lejos de él para preservar mi vida y la de mi familia.

Durante muchos años, nuestro hogar fue allanado repetidamente por organismos de seguridad del Estado. Mi madre y mi padre fueron capturados en múltiples ocasiones; yo mismo fui detenido por el solo hecho de ejercer la actividad política.

Durante toda mi vida pública he sido objeto de amenazas constantes, seguimientos permanentes en mi lugar de trabajo y de vivienda. He sufrido campañas sistemáticas de estigmatización, difamación, espionaje e interceptación ilegal de mis comunicaciones.

Como se sabe, mi padre fue asesinado por integrantes del Ejército y estructuras paramilitares debido a su compromiso político como senador y dirigente de la Unión Patriótica. Mi primo, Francisco Javier, fue ejecutado en un “falso positivo”, perpetrado por la Policía. Mi tía, Stella, hermana de mi padre y dirigente de la UP en Cauca y Nariño, fue víctima de un atentado con explosivos contra su residencia. En mi contra se han frustrado varios intentos de asesinato.

Durante los últimos catorce años he sido víctima de un entramado criminal de falsos testigos y fraude procesal, promovido desde el poder por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Nada de eso ha podido silenciarme, nada de eso ha hecho que defeccione de la lucha social y popular, nada de eso va a hacer desistir de ser el presidente de la República en estas elecciones.



Así que la decisión de ayer del Consejo Nacional Electoral no es más que un hecho en una larga cadena de persecución criminal, en contra mía y en contra del Pacto Histórico.

Como muchos hombres y mujeres de nuestro movimiento político, como tantos dirigentes sociales y populares de este país, he sobrevivido al genocidio, a la estigmatización y a la persecución implacable.

Y aquí sigo de pie, listo para triunfar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 31 de mayo.

El Consejo Nacional Electoral es una institución descompuesta y parcializada, cuyas decisiones deberían avergonzarnos, y avergonzar a cualquier sociedad que se precie de democrática. Sin duda, un bien que se le debe hacer al país es eliminar ese organismo corrupto y peligroso para los derechos políticos.

Me comprometo con ustedes a que en mi condición de jefe de Estado haré lo que corresponda para eliminar esa nefasta institución y para adelantar una verdadera reforma política que ponga fin, de una vez por todas, al fraude, a la compra y al robo de votos, así como a los escrutinios amañados.

Esa será una prioridad limpiar la política de esa clase de mañas y trampas electorales y también con ella de la clase corrupta, clientelar y politiquera.

Compañeras y compañeros:

El Pacto Histórico no es una aventura electoral.

No somos un fenómeno pasajero y personalista, un suceso coyuntural; no somos un trampolín para oportunistas y advenedizos; **ni somos** una marca de moda propia de la política del espectáculo.

El Pacto Histórico es la condensación de un largo y denso camino que ha recorrido nuestro pueblo, sembrado con luchas, actos de entrega y enormes sacrificios.

El Pacto Histórico es parte esencial de la historia viva del movimiento social, de los movimientos políticos y los partidos de las izquierdas, de los demócratas y los liberales progresistas, que han entregado sus vidas y sus luchas a forjar el camino del cambio.

El Pacto Histórico no se entrega, ni se vende ni se arrodilla. Es la dignidad de nuestro pueblo.

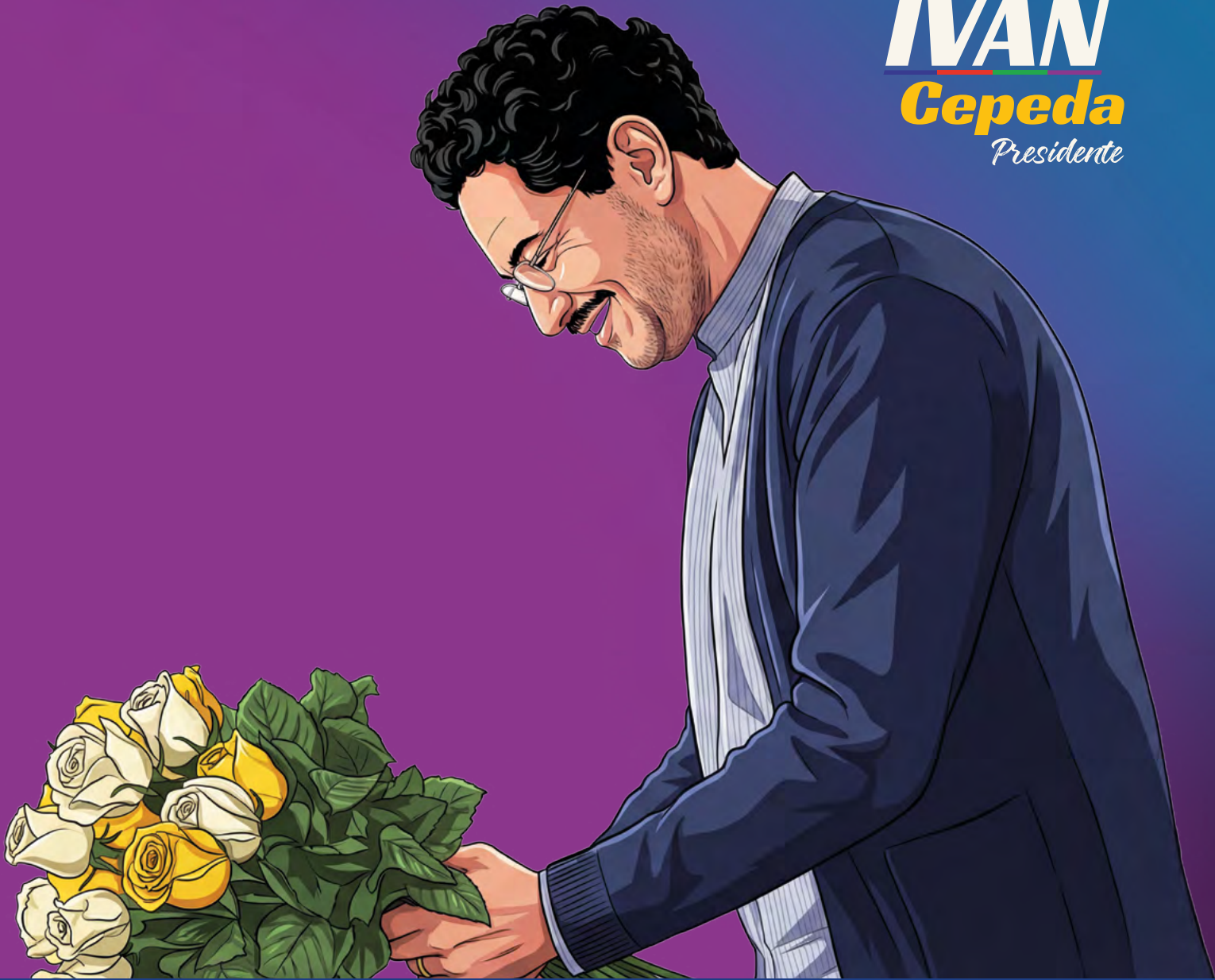
He sido elegido candidato único del Pacto Histórico y, para ello, recibí el mandato de más de 2'700.000 compatriotas quienes votaron en la consulta partidista del 26 de octubre de 2025.

Les hago un llamado a que no permitamos que nada ni nadie divida al Pacto Histórico, a consolidar nuestro proyecto político, a asumir con entusiasmo esta etapa de la campaña electoral.

A neutralizar toda expresión de oportunismo político y de aprovechamiento personal y egoísta de los golpes que intenta propinarnos la extrema derecha.

Les hago una invitación a defender nuestro proyecto con la movilización serena y firme de toda nuestra fuerza que hoy es la más poderosa e influyente en Colombia.

IVÁN
Cepeda
Presidente



VAMOS A GANAR,
**PERO PRESERVANDO
LOS PRINCIPIOS**

Santa Marta, Magdalena

Queridas compañeras y queridos compañeros:

Saludos a Santa Marta, y al departamento del Magdalena, zonas del país en las que el pueblo organizado y movilizado ha sabido enfrentar históricamente la injusticia social, trabajar por la democracia y derrotar, una y otra vez, a las casas tradicionales y mafiosas.

Aquí las fuerzas progresistas han sabido unificarse y buscar el camino para lograr la victoria en el pasado, y hoy también deben hacerlo, como debemos hacerlo en todo el país para ganar las elecciones, como estoy seguro lo lograremos este año al elegir una poderosa bancada en el congreso de la República, e igualmente derrotando a nuestros adversarios en primera vuelta, de tal forma que yo sea elegido presidente de la República, el próximo 31 de mayo.

Como ustedes saben, en las últimas horas y días se ha venido consumando un intento por bloquear y debilitar la participación del Pacto Histórico en el actual proceso electoral.

La extrema derecha y su jefe Álvaro Uribe Vélez, han hecho hasta lo imposible para evitar que el Pacto Histórico surja, avance y se consolide.

Se ha buscado impedir que nos constituyamos en fuerza política, se ha intentado evitar que hiciéramos la consulta del 26 de octubre de 2025, se trasladaron 4.000 puestos para privar del voto en la consulta a muchos de nuestros electores de las poblaciones rurales, ahora se revocó mi participación en la consulta del próximo 8 de marzo, así como se quiere anular las listas para la Cámara de Representantes en 15 departamentos.

Y como si todo eso fuera poco, se volvió diseñó un plan para que nuestro presidente Gustavo Petro fuera atacado desde Estados Unidos.

Pero debemos decirlo: nada de eso ha detenido al Pacto Histórico, a sus integrantes, dirigentes, candidatas y candidatos. Nos hemos configurado en la fuerza política más poderosa e influyente en el país.

No sólo no han podido evitar que hiciéramos la consulta el 26 de octubre de 2025, sino que además logramos llevar a las urnas a cerca de 3 millones de

personas, en un éxito contundente, y en una elección que no tiene precedentes en la historia del país, al elegirme como candidato presidencial y al elegir de manera paritaria, las mujeres y los hombres que nos representarán en el congreso de la República.

En todas las encuestas practicadas hasta hoy figuro como el candidato que tiene la mayor intención de voto en primera y segunda vueltas, el Pacto aparece como el partido político con el que se identifican más colombianos, y el presidente Gustavo Petro con una imagen favorable por el encima del 40%.

Han fracasado, sus trampas y jugadas sucias no han podido frustrar nuestro camino ascendente. Para mayor tristeza de los adversarios, en una gestión que sin lugar a duda es un acierto diplomático, el presidente Petro acaba de culminar una exitosa visita a Washington y lograr una interlocución respetuosa con el gobierno de Estados Unidos y su presidente Donald Trump.

Ahora necesitamos ratificar nuestra condición de primera fuerza política del país: cerrar nuestras filas y proteger la unidad del Pacto Histórico, cortar el paso a cualquier tentación oportunista, y ratificar en las urnas esa condición eligiendo el 8 de marzo la más numerosa bancada en Cámara y Senado, y el 31 de mayo eligiéndome presidente de la República en primera vuelta.

Compañeras y compañeros: vamos a hacer lo necesario para ganar.

Como lo he dicho, el Consejo Nacional Electoral es una institución parcializada, cuyas decisiones deberían avergonzarnos como país y avergonzar a cualquier sociedad que se reclame democrática.

Es la constatación de que un organismo llamado a garantizar el libre ejercicio de los derechos políticos ha terminado por ponerlos en riesgo y amenazar la libertad de la política.

Por eso lo afirmo con convicción: un bien que debemos hacerle a Colombia es suprimir ese aparato corrupto y peligroso, y reemplazarlo por una institucionalidad verdaderamente democrática, transparente y confiable. Así lo haré impulsando una verdadera reforma del sistema político.

Pero no nos engañemos. El Consejo Nacional Electoral no es una anomalía aislada. Es apenas una de las tantas expresiones de la degradación y la

descomposición de la política tradicional en Colombia. Es la política de los clanes mafiosos que han gobernado durante décadas extensas regiones del país; de las casas nepotistas, con patriarcas y matriarcas que convirtieron departamentos y municipios en feudos privados; de una cultura del poder heredado y no del poder legítimo.

Es también la política de quienes llegan al Congreso torciendo la voluntad popular y, cuando son llevados ante la justicia, reparten sus curules entre esposas, hijos y hermanos, como si el Estado fuera una herencia familiar. Es la política del oportunismo sin principios, de quienes están siempre listos a negociar sus almas con el diablo o a ser los intermediarios del diablo para negociar almas; de los politiqueros que sólo saben servir a los poderosos de turno, nacionales o extranjeros. Es la política de la traición cotidiana al pueblo, del robo, de la violencia, de la impunidad. Es la corrupción elevada a sistema.

Esa forma de hacer política es una de las mayores desgracias que padece Colombia. Y quiero que lo sepan con certeza: en mi gobierno quienes hagan la política de esa forma serán combatidos sin miramientos y tratados como lo que son: criminales.

En esta campaña en la que voy recorriendo todo el país he tenido la oportunidad de dialogar con muchas y muchos jóvenes. Siempre los invito a participar en política, porque participar en los asuntos colectivos es una dimensión esencial de la vida humana, una vía para servir a los demás y para construir país.

La política, cuando es auténtica, tiene la capacidad de enfrentar los grandes problemas de la humanidad. Encierra siempre la esperanza de encontrar caminos comunes, de actuar de manera cooperativa, de poner en juego nuestras capacidades, nuestros recursos y nuestros talentos al servicio del bien común.

Por eso es fundamental que los jóvenes se acerquen temprano a la política, que aprendan a ejercerla con coherencia y que la valoren como una dimensión central de su proyecto de vida.

Pero también debo decirlo con honestidad: cuando hablo con ellos, escucho un profundo escepticismo. Me preguntan: ¿cómo participar, si lo que vemos

todos los días es que la política es corrupción, abuso de poder, fraude, mentira y saqueo?

Y tienen razón. Ese escepticismo no nace del desinterés, sino de la experiencia. En la era del neoliberalismo, la política fue degradada hasta convertirse en negocio, en tráfico de influencias, en mercado de favores, en instrumento de enriquecimiento personal y de dominación social.

Esa es la mala política: la política mafiosa, oportunista, del espectáculo; la política que dejó de ser herramienta de emancipación y se convirtió en una amenaza para la sociedad. En Colombia la conocemos bien y la seguimos padeciendo.

Frente a esa degradación, necesitamos recuperar el sentido más noble de la política. Y aquí quiero recordar las palabras del papa Francisco en la encíclica *Fratelli Tutti*, cuando invita a quienes ejercen la política a mirarse con honestidad y hacerse preguntas esenciales:

¿Cuánto amor puse en mi trabajo? ¿En qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué huella dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos reales construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Qué provoqué en el lugar que se me confió?

Esas preguntas no son retóricas, son un programa ético. Y es desde ahí, desde esa política del servicio, de la dignidad y del amor por el pueblo, que vamos a transformar a Colombia.

He venido afirmando, y hoy lo reitero aquí en Santa Marta con profunda convicción, que Colombia necesita una Revolución Ética. Una revolución que no se proclama con discursos vacíos, sino que se encarna en la manera misma de hacer política. En eso coincido plenamente con Camilo Romero: ha llegado el tiempo de más coherencia y menos codicia. O mejor, para decirlo de manera radical y honesta: la política debe ser coherencia; la política no debe seguir siendo codicia.

Nuestro país reclama nuevos liderazgos, liderazgos inspirados en el auténtico servicio al pueblo. Liderazgos que beban de la memoria viva de quienes, a lo largo de nuestra historia, eligieron siempre el camino más difícil, el del sacrificio, el del compromiso silencioso, el de la responsabilidad moral.

Mujeres y hombres que renunciaron a la estridencia del espectáculo, que no buscaron la fama ni la pasarela mediática, y que asumieron las tareas más duras en los momentos más azarosos de la nación.

Ellas y ellos optaron por el bien colectivo, no por el interés estrecho e individual. Muchas de las mejores figuras de nuestro país entregaron su vida en ese empeño.

Otras trabajaron incansablemente en el anonimato, caminaron junto a las comunidades en los territorios, vivieron como vive el pueblo y lucharon con el pueblo. Ese es el sentido profundo de la política sana, de la buena política, la que hoy debemos recuperar, defender y promover.

Es desde ese espíritu, el de una política anticorrupción, el de una política del servicio, que debemos formar a nuestra juventud. Y, al mismo tiempo, debemos dejarnos formar por la juventud, por su energía transformadora, por su capacidad de cuestionar las viejas prácticas anacrónicas y decrepitas que tanto daño le han hecho a Colombia.

Aspiramos a una política sin machismo, sin afán de lucro, sin clasismo, sin racismo. A una política que dignifique, que incluya, que libere. Ese es hoy el compromiso del Pacto Histórico. Y esa será la política que primará bajo mi gobierno, cuando ustedes me elijan como sucesor de nuestro gran presidente, Gustavo Petro, para seguir construyendo, junto al pueblo, una Colombia justa, democrática y ética, una Colombia potencia mundial de la vida.

IVÁN
Cepeda
Presidente



NUESTRA CONSULTA ES LA VOTACIÓN
**POR EL PACTO AL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA**

Mompox, Bolívar

Queridas compañeras y queridos compañeros:

Saludo a Mompox y a su gente. Venir aquí es llegar a uno de los lugares donde nació la libertad de Colombia. Este es el territorio, donde se proclamó, por primera vez, nuestra independencia de España.

Aquí, a orillas del gran río Magdalena, **se tejieron las rutas de la historia, del comercio, y de la cultura del país.** Este río representa una parte esencial de nuestra historia, ha sido la vía fluvial de encuentros, y luchas que han dado forma a la nación.

Mompox es orgullo de nuestra nación: es patrimonio de la humanidad, y también es patrimonio de la memoria y la dignidad de nuestro pueblo.

Es un territorio que ha resistido el abandono y la desigualdad. Un territorio que ha defendido la tierra, el agua, la cultura y la economía popular.

Un territorio donde la gente ha luchado por servicios públicos dignos, por el derecho a la vida en medio de las inundaciones, por la preservación de sus ecosistemas y por la defensa de su patrimonio cultural.

Precisamente, por esa historia y ese legado debemos seguir luchando contra la pobreza y la desigualdad en Mompox, especialmente en las zonas rurales de la depresión momposina.

Debemos cerrar la brecha entre el enorme valor patrimonial de la cultura y el territorio y las condiciones de vida de su gente.

Este año vamos a ganar las elecciones, compañeras y compañeros, y eso nos permitirá con nuestro segundo gobierno, **seguir desarrollando los cambios sociales.**

Así como lo digo, el cambio político, social y económico, que hemos comenzado con nuestro primer gobierno progresista va a continuar y **a ser cada vez más fuerte y profundo** con nuestro segundo gobierno.

Hemos trabajado para que el Estado llegue y actúe en los territorios que históricamente fueron no solo marginados sino saqueados.

Y en eso, como en los demás aspectos del proceso de transformación social que hemos llevado a cabo en los últimos años, **ha sido decisivo nuestro presidente y compañero Gustavo Petro Urrego.**

La historia recordará al presidente Petro como el dirigente político y jefe de Estado que, contra viento y marea, **se atrevió a iniciar el camino de la verdadera transformación social en Colombia.**

No ha sido un camino fácil. Ha estado marcado por la presión constante, por campañas sistemáticas de difamación, por ataques mediáticos y **por intentos reiterados de deslegitimar un proyecto que no nació para servir a los privilegios de siempre**, sino para dignificar la vida del pueblo colombiano.

Pero ninguna de esas presiones podrá borrar lo esencial.

El papel histórico que tiene el presidente nadie lo va a poder borrar. Gustavo Petro ya está inscrito en la historia de nuestro país como un pionero de la transformación social, como el presidente que se atrevió a **desafiar un régimen bicentenario y a poner en el centro del debate del país la justicia social para el pueblo colombiano.**

Al venir a este encuentro con la población momposina, vengo a comprometerme con el objetivo de que sigamos fortaleciendo el cambio social.

Aquí en Mompox, esa segunda etapa del cambio deberá sentirse con claridad.

Eso significa convertir a esta región en una **potencia agrícola y pesquera.**

Significa **recuperar de manera efectiva los playones comunales de la región que han sido ocupados indebidamente por grandes acaparadores.**

Significa poner en marcha la adecuación de, al menos, **20 mil hectáreas para la producción agrícola**, ir retomando y actualizando **los proyectos de manejo hidráulico que durante décadas quedaron abandonados.** Con control de inundaciones, mantenimiento de canales y recuperación de cuerpos de agua.

Significa recuperar el brazo de Mompox y los ecosistemas de ciénagas, caños y humedales que han sido cerrados o drenados.

Significa la defensa del agua que es la defensa de la vida y del sustento de miles de familias.

Significa avanzar, con el apoyo del Estado, en la **solución definitiva a los problemas de acueducto y alcantarillado de Mompox** y sus municipios vecinos.

Significa convertir este en un **territorio priorizado para la transición energética** con su enorme **potencial solar**, para que esta región pueda contar con **proyectos de energía limpia** que reduzcan tarifas y garanticen **acceso digno a la electricidad**.

Significa avanzar en la **construcción del tramo oriental del anillo vial de la subregión momposina** para mejorar la conectividad con los municipios del sur del Magdalena.

En fin, significa hacer realidad **el multicampus universitario en Mompox** para que las y los jóvenes tenga **acceso a educación superior de calidad, a la ciencia y a la tecnología, como todos los jóvenes en el país**.

La juventud momposina merece oportunidad real de estudio, de investigación científica y tecnológica a nivel superior como toda la juventud colombiana.

Con la defensa y la promoción del derecho al agua, con protección de las necesidades de la población rural, con la revolución agraria, con acceso a energías limpias, con vías para la movilidad de la población y de la economía, con educación universal y de calidad para toda la juventud, **Mompox que ya es un patrimonio de la Humanidad, será además territorio fundamental para que Colombia, como lo ha planteado el Pacto Histórico, sea una potencia mundial de la Vida.**

Compañeras y compañeros:

La extrema derecha y su jefe, Álvaro Uribe Vélez, tienen verdadero pánico de que el Pacto Histórico siga creciendo, movilizándose en todas las ciudades y municipios, consolidándose como la principal fuerza en todo el país.

No es simplemente temor o miedo, tienen verdadero pánico porque ya se ve venir nuestra victoria.

Ese pánico electoral y político los ha llevado a ejecutar todo tipo de maniobras sucias y antidemocráticas:

Buscaron a toda costa impedir que nos conformáramos en movimiento político. Pero, no lo lograron. Hoy somos la fuerza política más poderosa e influyente en el país.

Buscaron, con su Consejo Electoral de bolsillo, impedir la consulta del 26 de octubre de 2025. No pudieron. Con cerca de tres millones de votos, fuimos elegidos yo como candidato único del Pacto Histórico a la Presidencia, y las candidatas y candidatos al Senado y Cámara de Representantes.

Ahora revocaron mi inscripción a la consulta del 8 de marzo, y pretenden anular varias listas a la Cámara de Representantes en diversos departamentos del país. Pero eso tampoco les va a funcionar. Vamos a ganar.

Además, como si todo esto fuera poco, han intentado desacreditar con calumnias, mentiras diarias, e insultos al presidente Petro, debilitar el gobierno, cerrar el paso a las reformas sociales. Pero tampoco nada de eso les ha salido bien. En todas las encuestas practicadas hasta hoy el presidente Gustavo Petro aparece con una imagen favorable por encima del 40%.

La realidad es que la gente del común quiere y respalda al Presidente, al gobierno, a los cambios sociales que se han logrado, y que está dispuesta a defenderlos con la movilización y el voto si la extrema derecha quiere venir a quitarles el salario vital, la reforma agraria, la reforma laboral o la reforma pensional.

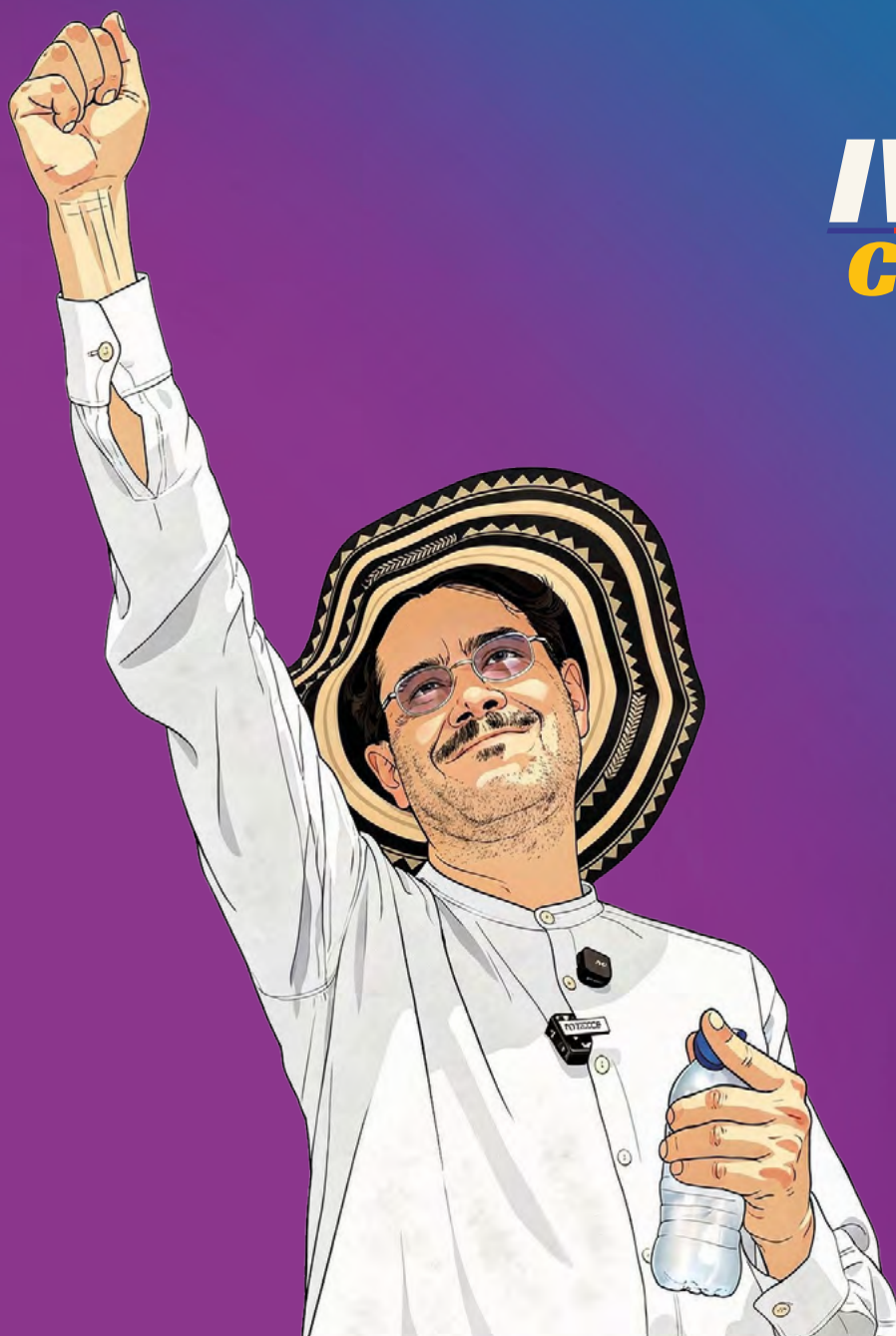
Lo único que han logrado las sucias maniobras de la extrema derecha y de su jefe Álvaro Uribe Vélez es demostrar que ellos hacen parte del pasado, de la mala política, de la política corrupta que está mandada a recoger en Colombia.

Lo único que demuestra el pánico político de la extrema derecha y de su anacrónico jefe, Álvaro Uribe Vélez, es que ellos representan la postración moral de la política y la democracia en Colombia.

Amigas y amigos:

Esto tiene que cambiar y está cambiando, los invito a la fuerte alianza entre el Pacto Histórico con el pueblo, juntos, respaldados por una poderosa rebelión ciudadana a la que invitamos a la Revolución Ética lograremos transformar nuestro país y lograr que los cambios que hemos ido construyendo se conviertan en irreversibles, para que Colombia viva como un país justo que tenga equidad social y verdadera democracia.

IVÁN
Cepeda
Presidente



EL 8 DE MARZO

**VAMOS A ELEGIR LA MÁS
PODEROSA BANCADA
PARLAMENTARIA**

Cartagena de Indias, Bolívar

Queridas compañeras y queridos compañeros:

Me alegra estar hoy en Cartagena; ciudad de luchas heroicas. El pueblo cartagenero es un pueblo que se ha forjado en la más estoica resistencia.

Desde la fortaleza de los pueblos indígenas frente a la conquista, pasando por la rebeldía de los africanos esclavizados que levantaron palenques de libertad, hasta la gesta del 11 de noviembre de 1811, cuando Cartagena se atrevió a proclamar su independencia antes que muchos, enfrentando el hambre, el asedio y la muerte.

La Heroica resistió al imperio con coraje colectivo, pagando un precio muy alto por su amor a la libertad. Esa misma valentía ha reaparecido, una y otra vez, en las luchas populares por la dignidad, la justicia social y la vida.

Lo que hemos aprendido de la lucha del pueblo cartagenero es que un pueblo resistente, es heroico porque nunca se rinde.

Las luchas del pueblo cartagenero de hoy son herederas directas de su historia. La misma rebeldía que enfrentó la conquista, la esclavitud y el dominio colonial vive ahora en la defensa del trabajo digno, del territorio, de la vida y de los derechos sociales.

Cambian los tiempos y los desafíos, pero permanece intacto el espíritu de lucha de un pueblo que, ayer como hoy, se niega a renunciar a su dignidad y a su libertad.

Por eso aquí se respalda y se quiere al Pacto Histórico, al presidente Gustavo Petro, al Gobierno del Cambio, y hoy veo en esta plaza que también se quiere y se respalda a mí y a mi candidatura. Gracias Cartagena.

Hoy quiero ante ustedes explicar por qué se debe votar por nuestras listas a Senado y Cámara, pero antes recordar brevemente lo que ha sido nuestro trabajo parlamentario en las últimas dos décadas.

Las y los congresistas de la izquierda y de las fuerzas progresistas y liberales, hemos contribuido a través del control político y de la aprobación de leyes de reforma a los cambios democráticos en el país.

Quiero recordar que cuando se guardaba silencio cómplice en el propio Congreso y en la sociedad colombiana, el joven representante a la Cámara. Gustavo Petro alzó su voz, en forma valiente, para desenmascarar a los dirigentes de la parapolítica, quienes ostentaban curules en el Congreso. Allá estaban sentados y de allá fueron a La Picota.

Era la época de la alfombra roja para darle la bienvenida a los jefes paramilitares, cuando extasiados los escuchaban en el Salón Elíptico.

Era la época en que el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, exaltaba sin pudor a los miembros de su bancada en el Congreso para que “antes de ir a la cárcel” votaran las leyes de su gobierno. ¡Háganme el favor el cinismo!

La bancada de Uribe en el Congreso era un verdadero concierto para delinquir, y su propósito era entregarle el Estado de derecho a las mafias proclives al paramilitarismo y al narcotráfico

El actual presidente de la República, Gustavo Petro, con valentía desenmascaró la parapolítica y señaló el camino de la resistencia democrática contra las mafias.

Cuando yo llegué al Congreso, en 2010, seguí ese camino trasado por él, e hice dos debates al propio Uribe Vélez, quien en 2014 se convirtió en senador de la República. Ese fue el camino que condujo a su posterior judicialización y condena en primera instancia por soborno a falsos testigos y fraude procesal.

Así que congresistas de las bancadas de izquierda y del progresismo hemos hecho decenas de debates sobre la corrupción, las injusticias sociales y los cambios que debían producirse en el país. Y poco a poco durante décadas hemos ido abriendo el camino para la conciencia y la acción política del pueblo colombiano hacia la victoria que cosechamos en 2022.

Como oposición política, durante años, le mostramos al país desde el Congreso el estado general de la injusticia y de la gran corrupción imperante en el régimen colombiano.

Y ahora que hemos pasado a ser de bancada de oposición a bancada de gobierno, legislamos, contando siempre con la voz, los proyectos y las propuestas del movimiento social.

Ahí están los resultados de nuestra acción política como fuerzas democráticas y progresistas en el Congreso. Gracias a esa labor en estos años hemos conseguido algunas transformaciones reales, menciono solo cinco:

1. Millones de adultos mayores que nunca habían recibido una pensión hoy reciben cerca de 240.000 pesos mensuales gracias a la reforma pensional.
2. La reforma laboral y la política de salario vital han devuelto recargos nocturnos y dominicales que ya se sienten en el bolsillo de las familias trabajadoras.
3. Cerca de un millón de jóvenes estudian hoy gratuitamente en universidades públicas gracias a la ampliación de la gratuidad en la educación superior, una lucha histórica del movimiento estudiantil y social.
4. Se recuperó la mesada 14 para sectores como docentes y miembros de la Fuerza Pública.
5. El campesinado fue reconocido como sujeto de especial protección constitucional y avanza la jurisdicción agraria.

Nada de esto habría sido posible sin nuestra bancada actual en el Congreso dispuesta a debatir, a confrontar, a dialogar y a transformar.

Pero también es cierto que una parte del actual Congreso de la República, aquella que representa los intereses privados más mezquinos, ha sido uno de los mayores obstáculos para desarrollar el cambio social.

Requerimos mayorías parlamentarias del Pacto Histórico en las dos cámaras para acelerar la aprobación de las normas de las transformaciones sociales pendientes.

Queremos legislar para completar las reformas sociales que están previstas en nuestro programa, y además para profundizar las que ya hemos venido realizando.

Se trata ahora de reformar el sistema de salud, de profundizar la reforma agraria y convertirla en Revolución Agraria, de establecer instrumentos eficaces para la lucha contra la gran corrupción, de alcanzar la transformación y el

desarrollo de los territorios, ahondar la reforma educativa, crear la reforma política, entre otros temas.

En este sentido, pediré a nuestra bancada que tramite con mensaje de urgencia la Ley de Austeridad Republicana, orientada a luchar contra la gran corrupción, eliminar privilegios y lujos en el alto gobierno, redirigir los inmensos recursos que se roban hacia el bienestar social, y recuperar la esencia del servicio público: humildad, entrega y compromiso con el pueblo. Nada de lujos y vagabundería en el Congreso.

Por otra parte, realizando un proceso de amplio diálogo nacional, adoptaremos el Plan Nacional de Desarrollo cuyo eje será la eliminación de la pobreza y la superación de la desigualdad, y haremos posible que sigan adelante las transformaciones bajo el concepto de revoluciones sociales para que se conviertan en irreversibles.

Tenemos cómo lograrlo, pues hemos presentado a la ciudadanía listas para Senado y Cámara fuertes, diversas y democráticamente electas.

Nuestras listas tienen a figuras políticas, mujeres y hombres, confiables, éticas, íntegras y con amplia trayectoria de defensa de los sectores populares.

Nuestras listas representan los movimientos sociales, campesinos, indígenas, afros, mujeres, jóvenes, víctimas, LGBTQ+, ambientalistas, sindicalistas.

Nuestras listas tienen paridad de género. Somos la única fuerza política que lleva una mujer, Carolina Corcho, como cabeza de lista al Senado.

Nuestras listas han sido elegidas mediante consulta interna ciudadana, no designadas por cúpulas, en un ejercicio democrático sin precedentes.

Son las listas que representan al pueblo colombiano, son las listas de la principal fuerza política del país, que se llama Pacto Histórico, y debemos votar masivamente por ellas.

Compañeras y compañeros:

Sabemos que la ciudadanía está más que cansada, está harta, de los abusos y los privilegios de la clase política, y tiene razón. Basta ya de un Congreso de espaldas al país.

No se votarán las leyes a espaldas de la nación y a favor de sórdidos intereses. Eso se acabó. **Aquí no venimos a obedecer a deshonestos jefes políticos, venimos a obedecer al pueblo.**

En buena hora el Gobierno del Cambio ha realizado el aumento salarial más significativo para los trabajadores y las trabajadoras, ha decretado el salario vital, y al mismo tiempo ha dispuesto la rebaja sustancial del salario de los congresistas.

Así tiene que comenzar a ser la cosa: el que debe apretarse el cinturón es el gobierno, no el pueblo colombiano.

Ahora necesitamos que desaparezcan definitivamente todo tipo de sobornos, “cupos indicativos” y bonificaciones para los congresistas, poner fin al filibusterismo parlamentario y dejar de llamarles “honorables” a quienes son, simplemente, servidores del pueblo.

Las leyes en Colombia no pueden seguir siendo negociadas a cambio de ministerios o puestos en ministerios, embajadas, o institutos descentralizados. El Poder Legislativo no puede seguir siendo un mercado persa, y para eso debemos elegir una poderosa bancada que nos permita impulsar una verdadera Revolución Ética en Colombia, que acompañe la rebelión ciudadana contra la gran corrupción y la postración moral de la que rescataremos a Colombia a partir del triunfo de nuestro segundo gobierno de la gran transformación social del país.

IVÁN
Cepeda
Presidente



PRIMER ENCUENTRO
**CON LA POBLACIÓN
AFRODESCENDIENTE**

Cartagena de Indias, Bolívar

Queridos compañeros y queridas compañeras, agradezco enormemente este gesto de fraternidad y cariño que siento de la población de Pasacaballos en este momento.

Quiero muy puntualmente darles unos cuantos mensajes esenciales: este es mi primer encuentro con la población afrodescendiente. Aquí, inicio mi recorrido por el país para hablar con el pueblo afrodescendiente.

Iré, entre otros lugares, a Quibdó, un sitio del país que tiene dos grandes ríos y su población no tiene agua potable. Iré a Buenaventura, una población que tiene un tremendo puerto, pero donde la gente no tiene servicios básicos. Iré a Tumaco, una zona del país especialmente rica que está sometida por las mafias y la criminalidad y el conflicto.

La pregunta, ¿por qué en estos lugares de inmensa riqueza la población afrodescendiente soporta la pobreza, la exclusión, la segregación, la discriminación? La respuesta es solamente una: en Colombia seguimos padeciendo un racismo abierto, soterrado, que tenemos que acabar.

Y quiero en esto citar a una gran lideresa afro, Angela Davis, que dijo: no basta con rechazar y no ser racista, hay que ser antirracista.

El racismo hace parte de toda la postración moral que vive nuestro país. En mi gobierno vamos a hacer todo lo necesario para acabar con esa forma de segregación que no podemos seguir tolerando y admitiendo en la sociedad colombiana.

Pero eso no son buenas intenciones, no son palabras, no son simplemente buenos deseos. Tenemos que dotar de agua potable a todos los municipios del país y aquellos especialmente donde vive la población afrodescendiente, que está rodeada de agua, a veces inundada por el agua como en el Canal del Dique y no tiene agua potable. Eso no podemos seguirlo admitiendo.

Tenemos que avanzar hacia la revolución agraria. No basta con dar tierras, ojalá sean productivas, ojalá podamos garantizar vías terciarias para que los campesinos, los indígenas y las comunidades afro tengan una economía poderosa que convierta sus territorios en potencias agrícolas y agropecuarias.



Necesitamos vivienda, educación, salud. Necesitamos que la población afrodescendiente tenga derecho a ejercer las formas de gobierno y de gobernanza política que son propias de su cultura y sus comunidades.

Así que, compañeras y compañeros, la fuerza de la memoria, de la cultura, de lo que nos enseñó el gran Benkos Biohó a no soportar la esclavitud, está con nosotros.

Avanzaremos hacia un segundo gobierno de las grandes transformaciones sociales, que sea un gobierno de verdaderos cambios y uno de ellos que sea el fin del racismo maldito en Colombia para que todos vivamos como hermanos y hermanas.

IVÁN
Cepeda
Presidente



LA REVOLUCIÓN
URBANA ES PARA LA VIDA

Bogotá, Cundinamarca

Queridas compañeras y queridos compañeros:

Desde la localidad de Sub, Engativá, representativa de la ciudad forjada a partir del esfuerzo cotidiano de las comunidades, dirijo estas palabras a quienes habitan el territorio urbano.

Muchas personas provenientes de territorios por obra del desplazamiento forzado, porque han tenido que huir de la violencia, tanto económica como armada, y que han construido en esta ciudad poco a poco una alternativa de vida. Una de las peores consecuencias de la violencia, que se ha desatado durante tantas décadas en Colombia, es que el mundo rural y el mundo urbano aparecen como dos realidades que no tienen relación y son totalmente distintas, pero no es así.

El mundo urbano está conformado por el mundo rural. Somos parte y somos hijos del campesinado, de los pueblos indígenas y de los pueblos afrodescendientes. No se nos puede olvidar.

No somos parte de una aristocracia blanca y no mestiza. Somos un pueblo que ha sido forjado desde los territorios y los territorios urbanos son también herederos de los territorios rurales.

Así que parte de la revolución que tenemos que hacer en Colombia es volver a entender que el mundo rural y urbano son territorios y realidades únicas.

Que estamos hermanados con la naturaleza, que debemos lo que somos como ciudad, también al mundo rural y a los esfuerzos que han hecho millones de desplazados y desplazadas en Colombia, que son víctimas de la violencia, pero también constructoras de la realidad del mundo urbano.

Así que nuestra Revolución Urbana es también una revolución agraria y es parte de un proyecto que hemos dicho es un proyecto de defensa de la vida, de defensa de los territorios, de defensa de las culturas milenarias que hay en Colombia.

Así lo venimos haciendo desde la época en que en esta ciudad comenzamos este camino de transformar pasión, cuando nuestro compañero presidente

Gustavo Petro fue alcalde de esta ciudad y creó un proyecto llamado la Bogotá Humana.

Un proyecto que nos demostró que es posible gobernar poniendo en el centro a la vida, que es posible que gobernemos con la idea de que para el bien de todos primero los pobres, de que es posible transformar la realidad citadina sin acabar con la con la naturaleza y precisamente respetando y forjando un espacio con la naturaleza.

Así lo creemos. Así lo seguiremos haciendo. Así lo hemos hecho en el primer gobierno progresista que, como ustedes saben, ha tenido unido como divisa, transformar a Colombia en una potencia mundial de la vida, en una potencia continental agroalimentaria.

Y por eso, en nuestro segundo gobierno continuaremos el camino de convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida y Bogotá la capital de esa potencia dedicada a la defensa a la vida.

Como lo ha dicho claramente el pacto que acabo de suscribir: necesitamos ciudades y ciudadanías abiertas a recuperar sus raíces y su relación con las poblaciones rurales, con la mal llamada periferia, con las mal llamadas minorías étnicas, que son nuestra riqueza cultural y nuestras raíces profundas.

Necesitamos ciudades y ciudadanías democráticas dedicadas a la vida, a la equidad y a construir un país justo y verdaderamente humano.

Necesitamos ciudades que estén a escalas como son las necesidades de la gente. No solamente hechas con cemento y hormigón, sino fundamentalmente con la gente, con las comunidades, con la solidaridad, con el trabajo colectivo, con la humanidad de cada uno y de cada uno de ustedes y de nosotros.

Por lo tanto, en nuestro segundo gobierno respaldaré plenamente y me comprometo a liderar las medidas que hemos escuchado en la tarde de hoy. Y las recuerdo rápidamente:

1. **Ciudades con agua potable**, con acceso a agua potable, con saneamiento básico, no más ciudad en las cuales hay agua potable para una mínima parte de la población. En Colombia hoy tenemos 80% de los municipios sin agua potable.

Un país en el cual el agua inunda todos los años, como lo está haciendo en Córdoba, extensiones de tierra en las cuales hay miles, millones de personas que no tienen agua potable. Esa realidad no puede seguir existiendo.

2. **Reduciremos en las ciudades las emisiones de gas efecto invernadero.** Esa es una tarea urgente, necesaria, imperativa para reducir y mitigar el daño que le estamos haciendo a la naturaleza.
3. **Eliminación del vertimiento o de vertimientos no tratados** mediante la conexión de sistemas de alcantarillado y la construcción de plantas de tratamiento de agua residual.
4. **Fortalecimiento de programas de basura cero y circulación de residuos** orientados a consolidar cadenas de aprovechamiento, con protagonismo de los recicladores y las recicladoras comunitarios, y eliminar progresivamente los rellenos sanitarios mediante tecnologías que hoy ya son realidad en muchas partes del mundo.
5. **Consolidar las economías populares y comunitarias** mediante el apoyo a la asociatividad cooperativa barrial y comunitaria.
6. **Impulsar toda forma que dignifique el trabajo**, la formalización laboral, la economía social y la economía solidaria.
7. **Fortalecer la educación pública de calidad en todos sus niveles**, impulsar multicampus universitarios en los lugares de la ciudad que no tienen acceso a la educación superior.
8. **Desarrollar de manera integral y comunitaria la salud** como derecho de todas y todos de manera positiva, domiciliaria, la salud mental, la salud emocional y la atención en salud en todas sus formas.
9. **Desarrollar de manera clara el hábitat para la paz y para la seguridad humana.** Eso lo logramos, compañeras y compañeros, no solamente con la fuerza y con la presencia de la Policía y de la de las autoridades, sino también eliminando las causas de la desigualdad y de la pobreza en primer lugar.
10. **Mejorar el hábitat** con la posibilidad de reutilizar edificaciones que ya han sido puestas en uso y después desechadas, revitalizar centros urbanos, financiar viviendas nueva, no segregada, digna para poblaciones y especialmente aquí me refiero a la juventud, por ejemplo, a la juventud trabajadora.
11. **Impulsar la autoconstrucción de vivienda** como política de Estado con participación comunitaria y acompañamiento público.
12. **Hacer una eficaz prevención del riesgo** frente a desastres naturales, lo que evidentemente ha faltado hasta ahora, y en la en el cual hemos tenido fallas en este gobierno protuberantes.

13. **Transformar la movilidad urbana, regional y nacional**, creando sistemas limpios, intermodales. Utilizar y revivir el ferrocarril y las líneas férreas, buscar el transporte fluvial, crear caminos los comunitarios.
14. **Impulsar la gobernanza urbana, participativa y democrática** con todos los sectores, con una muy clara participación decisoria de las mujeres, de todas las comunidades, de todas las poblaciones, de todos los estratos sociales, que deben ser eliminados poco a poco.
15. **Luchar contra la gran corrupción y hacer política de austeridad republicana** para que los altos funcionarios, no solo del Gobierno Nacional, sino de las autoridades locales, para que se aprieten el cinturón para destinar recursos al bien, a los servicios y al bienestar ciudadano.



IVÁN
Cepeda
Presidente

LA REVOLUCIÓN ÉTICA ES ANTIRRACISTA

Quibdó, Chocó

Queridas compañeras y queridos compañeros,

Con emoción saludo al pueblo chocoano. He venido aquí a expresarles mi admiración y mi reconocimiento por su resistencia. Aquí es la tierra de Barule quien fundó el Palenque de Tadó, una de las primeras insurrecciones del pacífico, un legado que hoy recogen los estudiantes, las juventudes, las mujeres, las hijas y los hijos de este hermoso departamento.

Chocó no es una carga para el Estado como suelen decirlo la extrema derecha y sus dirigentes. Chocó le ha aportado riqueza, desarrollo, conocimiento a Colombia por su cultura, su gente y su talento. ¡Qué viva el pueblo chocoano!

Vine aquí a escuchar las voces, los testimonios de lucha, la memoria del pueblo afrodescendiente, que constituyen fuerza vital de una historia que aún no se registra bien en los libros de educación de nuestros planteles en la universidad y los colegios de secundaria.

Hoy inicio con esta reunión un recorrido por poblaciones de la costa Pacífica colombiana, y una búsqueda de encuentros con las poblaciones afrodescendientes, para incorporar sus sentimientos, sus propuestas, su visión a nuestro futuro programa de segundo gobierno progresista que elegiremos este año.

Este recorrido que estoy comenzando a hacer debe comenzar afirmando una verdad que incomoda a sectores del régimen colombiano, una verdad y una contradicción que hacen parte de la realidad de los territorios del país y que no debemos seguir ignorando.

Quibdó está rodeada de dos maravillosos ríos, el río San Juan y el río Atrato, y sin embargo su gente no tiene agua potable. Buenaventura posee uno de los principales puertos del país, pero sus barrios siguen sin servicios básicos. Tumaco, territorio pesquero y agrícola, inmensamente rico, se ha convertido en territorio de guerra. La Boquilla, en Cartagena, tierra de mar, de playas, pescadores, rodeada de lujo, despilfarro y de turismo, las comunidades afrodescendientes sobreviven entre la segregación urbana, la discriminación y el despojo silencioso de su tierra como ocurre en Pasacaballos.

En estas ciudades habita gran parte de la población afrodescendiente de nuestro país, no estamos hablando de minorías, como las élites del país suelen llamarlas, estamos hablando de pueblos enteros, de comunidades históricas, una parte fundamental de nuestra historia, de nuestro presente y nuestro futuro como nación colombiana.

No es casual que estos territorios concentren pobreza, abandono del Estado y violencia, esa realidad tiene nombre y hay que decirlo clara y fuertemente: eso se llama racismo estructural, que no podemos seguir tolerando en Colombia.

Frente a esta realidad, así como lo afirma la filósofa y activista Angela Davis, no basta con decir que no somos racistas, hoy debemos ser antirracistas.

La postración moral que vive Colombia tiene componentes claramente identificados, el desprecio de los pobres o clasismo, el machismo y el patriarcado que desprecia a las mujeres, el desprecio por la vida y también el racismo. Esas lacras, esa postración moral es la que yo digo debemos erradicar con una Revolución Ética.

A lo largo de su historia la sociedad colombiana ha sido una sociedad estratificada, en la que se le han aplicado por parte de sectores de élite, formas veladas o abiertas de segregacionismo racial a una parte muy importante de la población, que no solamente han significado exclusión de la población afrodescendiente, sino que además la han discriminado, perseguido y explotado. Eso tiene que acabarse definitivamente en Colombia.

Lo que llamo Revolución Ética es también una rebelión de los ciudadanos de carácter antirracista. La Revolución Ética que debemos llevar a cabo en Colombia es antirracista.

El antirracismo es un proyecto de país, no basta con decir como lo dice la Constitución colombiana, que somos una nación pluriétnica y multicultural, eso está bien, pero es claramente insuficiente.

Es imperativo un compromiso de transformación estructural y territorial orientado a la reparación histórica y a la emancipación definitiva del pueblo afrodescendiente en Colombia.

La rebelión antirracista no es simplemente accesoria en la política social, debe ser una cuestión de justicia y de justicia social permanente, esencial, pues si resolvemos los problemas de la ciudadanía afrodescendiente contribuiremos significativamente a resolver los problemas del país, porque ustedes, los pueblos afrodescendientes son parte de la gran nación colombiana y durante siglos han sostenido la pirámide social.

Esta es una propuesta que surge de los barrios, de los territorios, desde las veredas, desde los márgenes, desde la memoria viva de los pueblos afrodescendientes, de sus lideresas, líderes que nos han dejado los legados de lucha y resistencia por la libertad y la independencia de Colombia.

Recordemos a algunos y algunas de ellos: cómo no mencionar al general Padilla fundador de la fuerza naval, a Juan José Rondón, a Benkos Biohó, a Juan José Nieto, a Manuel y Delia Zapata Oliveilla, a otras tantas figuras que nos han marcado el camino del devenir y el recorrer para alcanzar nuestra verdadera emancipación como nación.

Sin ellos, sin ellas, sin ustedes este país no es lo que debe ser, una gran nación. Por eso la cultura del pueblo afrodescendiente es vital para lo que hemos llamado como gobierno Colombia potencia mundial de la vida.

No nos llamemos a engaños, la igualdad ha sido una palabra vacía, nunca realidad en nuestro país, no todos hemos recibido el mismo trato ante la ley, no todos hemos gozado de los mismos derechos en igualdad de condiciones.

Por ello la rebelión antirracista, como parte de la Revolución Ética, propone acciones concretas que desafíen y superen las formas convencionales propias de lo que ha sido el modelo neoliberal: no bastan los subsidios, no bastan pequeñas cuotas que no resuelven de manera estructural la desigualdad de nuestra sociedad.

He dicho que en mi gobierno, que será el segundo gobierno de carácter progresista y de transformación social, mandaré obedeciendo y escucharé dialogando a las comunidades y a los pueblos afrodescendientes.

Ante ustedes me comprometo a incorporar en nuestro programa sus propuestas para la transformación de los territorios, con presencia de población afrodescendiente, en busca de redistribuir la riqueza, los recursos y el poder

político, como ejes centrales para superar la desigualdad social, económica y racial en nuestro país.

Les pido que construyamos juntos un plan de emergencia y de reparación histórica que se centre en garantizar de manera universal el acceso al agua potable, que tenga la posibilidad de buscar vivienda digna y construir vivienda digna, salud, acceso a la educación de manera permanente en todos sus niveles, fortalecer la universidad para la población afrodescendiente, y entregar posibilidades para un desarrollo territorial de la economía popular que se practica en estos territorios.

Como dijo Malcolm X, “no es posible paz sin justicia ni libertad”.

Asumo el llamado urgente del pueblo afrodescendiente a luchar codo a codo para que, como en el proceso de independencia salvemos juntos y juntas, a nuestra nación.

Les invito a que mejoremos el marco jurídico de la Ley 70 de 1993 para impulsar el acceso universal a la tierra productiva de las familias afrodescendiente en Colombia.

Es ahora, no después ni mañana que debemos fomentar la agroindustria para enfrentar el déficit de más del 90% de la población afrodescendiente que no vive en los territorios de titulación colectiva, sino en las grandes ciudades y que no cuenta siquiera con un metro de tierra para cultivar el pan o construir sus hogares.

Es urgente garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria en estos territorios, apoyar emprendimientos y economías de las mujeres, de los jóvenes, para superar las tasas alarmantes de desempleo e informalidad en las culturas y comunidades afrodescendientes.

En el Pacífico colombiano, que tiene inmenso mar y poderosos y torrentosos ríos, debe haber una de las regiones más ricas y prósperas para la pesca y la ampliación de puertos populares y comunitarios.

En nuestro gobierno haremos los mejores esfuerzos para fortalecer la creación y la difusión de la cultura de los pueblos afrodescendientes, su música, su arte, su visión del mundo, su espiritualidad. También para desarrollar las vías, las carreteras, los puntos de desarrollo del transporte fluvial por todo este territorio.

Trabajaré sin cansancio para que todos los municipios del país que hoy carecen de agua potable lo tengan, porque la mayor parte de territorios sin agua corresponde en buena parte a los sitios donde habitan poblaciones afrodescendientes. Agua potable y saneamiento básico para todas las poblaciones.

Igualmente, para las víctimas de la violencia, las familias y comunidades que han sido blanco de la arremetida paramilitar y de los grupos armados, trabajaré intensamente para que haya verdad, justicia y reparación colectiva y en eso hay una inmensa deuda histórica porque el pueblo afrodescendiente ha sido víctima de toda clase prácticas de violencia, incluyendo el genocidio.

Los recursos del departamento del Chocó, incluidos el oro y otros minerales, deben ser utilizados para mejorar las condiciones de vida y, en consecuencia, para construir paz y desarrollo, no simplemente enriquecimiento de grupos mafiosos y grupos armados con la minería del oro. Y la minería del oro no puede significar acabar con el agua.

Haremos todo lo necesario para fortalecer la Universidad Tecnológica del Chocó y para que la universidad tenga excelencia, cobertura y los mejores estándares científicos de investigación y desarrollo tecnológico.

Por supuesto, esta propuesta es tanto para los pueblos afrodescendientes, como para los pueblos indígenas y las poblaciones campesinas de estos territorios.

No me gusta hacer promesas vanas, no soy un hombre que le gusta tentar a la gente para que vote y luego olvidarme del pueblo, soy un servidor del pueblo colombiano.

IVÁN
Cepeda
Presidente



MEDELLÍN Y ANTIOQUIA
NO REGRESARÁN AL PASADO

Medellín, Antioquia

Queridas compañeras y queridos compañeros:

Saludo, al gran pueblo antioqueño, a sus movimientos sociales, a las organizaciones de madres de víctimas que son ejemplo en Colombia y en América Latina de resistencia, coraje para decir y luchar por la verdad, a su juventud y a su ciudadanía en general.

A lo largo de la historia de nuestra nación, Antioquia y su gente se han caracterizado por tener una fuerte identidad regional, por valorar el esfuerzo, el trabajo, el empeño, por la iniciativa y el empuje empresarial, por la densidad del tejido social, la unidad familiar, por compartir arraigadas creencias religiosas.

En todo tiempo, Antioquia y su pueblo han hecho grandes aportes al desarrollo económico, cultural y social del país. Ese espíritu pujante, esa consideración de la laboriosidad como virtud humana, convirtió a este departamento en un referente de desarrollo empresarial e industrial.

Pero desde la década de 1980, la vida cotidiana y social de Medellín, Antioquia y su gente cambiaron. Comenzaron los tiempos de la persecución, del sufrimiento y de la incertidumbre.

Antes de ser asesinado, el defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, afirmó que ***el meridiano de la violencia pasaba por Antioquia***. Como todo lo que decía y hacía este gran defensor de derechos humanos, su frase no era una metáfora exagerada, por el contrario, fue una denuncia precisa.

En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía, y del terrorismo de Estado.

Surgió una alianza perversa entre sectores económicos, políticos y armados que utilizaron la represión, el miedo y el exterminio para proteger sus intereses y acumular riqueza a costa de la vida de poblaciones en territorios rurales y urbanos del departamento.

Y en el centro de esa macabra realidad que emergió estaba Álvaro Uribe Vélez, su familia y su círculo social, estrechamente ligados al narcotráfico, al naciente paramilitarismo y a los sectores terratenientes. Hay que decirlo con

claridad: Un político ambicioso, sin escrúpulos, obsesivo y autoritario, quien rápidamente escaló en cargos públicos y que se granjeó la lealtad y la complicidad del mundo y del inframundo.

Uribe lideró una mutación en las estructuras de poder, y de la sociedad. Un cambio regresivo, violento y que profundizó la desigualdad social en todo el departamento y luego en el país.

No fue solamente que hizo curso el enriquecimiento repentino y delictivo. Alrededor de esa prosperidad, sin principios morales, alcanzó su esplendor el lavado de dineros del sistema financiero, la legalización de capitales en la compra y el despojo de tierras del campesinado, la construcción de megaobras para construir el destino nefasto de muchas comunidades que lo perdieron todo en las riberas de ríos y en la historia que ya conocemos de Hidroituango.

La violencia sustituyó la convivencia y la deliberación democrática, los negocios sin escrúpulo, legales e ilegales, debilitaron gravemente la economía del trabajo honesto, la del esfuerzo y la paciencia.

Pero la violencia no logró destruir la fuerza del pueblo antioqueño, por el contrario, obligó a las comunidades y a la sociedad antioqueña a fortalecer sus formas de organización, resistencia y democracia.

A esa dictadura de la codicia se plegaron muchos sectores que posaban de ser honorables en la sociedad antioqueña, pero también a esa nueva industria del enriquecimiento criminal, se opusieron mujeres y hombres, de buena conciencia: defensoras y defensores de derechos humanos como Héctor Abad, como Jesús María Valle, como tantos otros que aquí quisiera recordar nombre por nombre; se opusieron académicos que sacrificaron su vida, estudiantes, periodistas, investigadores judiciales y jueces, que no vacilaron en sacrificar su vida o en afrontar la persecución de las peores formas, para resistir el imperio del mal.

Y sobre todo se opusieron las víctimas, las madres de los muchachos desaparecidos y asesinados.

Hay una realidad que la extrema derecha y su jefe, Álvaro Uribe Vélez, se obstinan en negar. No quieren verla, no quieren comprenderla, no se resignan a aceptarla: Medellín y Antioquia cambiaron.

Aquí se ha ido abriéndose el camino de la democracia. Aquí ha ido germinando la equidad social. Aquí la verdad ha comenzado a derrumbar los muros de la impunidad. Aquí la memoria se ha convertido en fuerza viva que nutre las luchas sociales.

Nuestro pueblo ya no es espectador: es protagonista. Se ha apropiado de la movilización como herramienta legítima para exigir sus derechos. Ha comprendido que, sin participación vinculante, y no meramente consultiva, no pueden adoptarse las grandes decisiones en la sociedad.

Ha descubierto su poder constituyente. Sabe que las reformas sociales no son una quimera, que pueden hacerse realidad y transformar la vida cotidiana de la gente. Y sabe también -y esto es tal vez lo más importante- que, si vienen a arrebatarse las reformas y los cambios, nos paramos en la raya y no lo permitimos. Ha descubierto que ya no se podrá impedir el cambio.

De nuestro gran maestro Carlos Gaviria Díaz, a quien hoy recordamos con gratitud y afecto, aprendimos una lección indeleble: cuando un pueblo se reconoce en su dignidad y se empodera en ella, nada ni nadie puede detenerlo.

Eso es lo que ha ocurrido, para fortuna y felicidad de todas y todos nosotros, en Medellín y en Antioquia. Nuestro pueblo ha reconocido su propia dignidad. Y ese despertar no tiene marcha atrás, señores y señoras de la extrema derecha.

No volveremos atrás.

No volveremos al silencio cómplice frente a las desapariciones forzadas ni a la impunidad de los crímenes contra miles de jóvenes inermes asesinados y presentados como enemigos para encubrir la barbarie. No volveremos a ese tiempo nefasto, porque las madres de esos jóvenes nos enseñaron el poder invencible de la verdad. Nos enseñaron a mirar la realidad desde los ojos de las víctimas y a escuchar con el corazón abierto. Nos recordaron, como lo decía el papa Francisco, que solo al reconocer el abismo del mal podemos elegir la paz sin temor a que nos llamen ingenuos.

No volveremos al tiempo en que trabajar por la paz, también por la paz urbana, era señalado como delito. No volveremos al dogma de que la seguridad debe construirse sobre la violación masiva de los derechos humanos.



No aceptaremos nunca más que el desarrollo de los territorios se funde en la guerra, en la muerte, en el arrasamiento de comunidades, en la condena de la juventud de nuestros barrios populares y veredas al conflicto armado. No volveremos a entregarle nuestra juventud a la guerra.

No volveremos al pasado en que la pobreza y la desigualdad eran presentadas como condiciones ineludibles del progreso. No volveremos a la idea de que la confianza inversionista se construye despreciando a los pobres. Hoy sabemos que una nación próspera se edifica acabando con la pobreza, ampliando derechos, construyendo infraestructura con las comunidades y no contra ellas, escuchando a quienes han sido guardianes del agua, de los ríos, de las montañas y de la vida.

Y para que no se diga que somos enemigos y enemigas de los empresarios, los invito a ellas y a ellos a un diálogo franco y constructivo –a todos los empresarios, grandes, medianos y pequeños– para hacer que la prosperidad en Antioquia y en el país sea de todos y para todos.

Y no volveremos al pasado de la política mafiosa, de la política corrupta y oportunista, de la política convertida en espectáculo vacío. No aceptaremos que la política sea una amenaza para la sociedad. La política debe, y lo ha comenzado a ser, herramienta de emancipación, instrumento al servicio del pueblo, no contra el pueblo.

Medellín y Antioquia han cambiado. Y cuando un pueblo cambia en conciencia y dignidad, no hay poder que lo obligue a retroceder.

Por eso lo decimos alto y claro desde esta plaza: al pasado uribista, al pasado de postración y abyección moral, no vamos a regresar.

No volveremos atrás.

Compañeras y compañeros:

En uno de los momentos más difíciles de la violencia en Medellín, hace 43 años, el 27 de octubre 1983, el Comité Permanente de Derechos Humanos, liderado por Héctor Abad Gómez, junto con diversas organizaciones, promovieron la Marcha por la Vida en Antioquia, que culminó en una gran manifestación en

este emblemático parque de la ciudad. En esa ocasión las y los manifestantes exigieron respeto por la vida, la paz y el retorno de los desaparecidos.

Hoy en esta misma plaza, en este mismo parque, nos reunimos con alegría, con convicción y esperanza. Con la constatación del cambio que se está produciendo en la sociedad colombiana.

El cambio cultural, ético, social y político que ha comenzado a producirse y que ha liderado nuestro gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro Urrego, tiene en Medellín y en Antioquia, las fuerzas sociales necesarias para seguir avanzando y profundizando la transformación social.

Nuestro movimiento y liderazgo son reales. Somos *un proyecto político que, navegando en contra de una densa carrera de obstáculos, ha demostrado, sigue y seguirá demostrando su capacidad de movilización popular, social, comunitaria y política.*

Toda nuestra vida personal y política ha estado consagrada al pueblo y sus luchas. Somos parte del pueblo colombiano.

IVÁN
Cepeda
Presidente



SOLIDARIDAD Y APOYO
A LAS POBLACIONES
DAMNIFICADAS Y EN DEFENSA
DEL SALARIO VITAL

Apartadó, Antioquia

Queridas compañeras y queridos compañeros:

Antes de abordar cualquier otro tema, considero imprescindible, expresar mi más profunda solidaridad con el pueblo del Urabá antioqueño que ha visto sus hogares, cultivos y medios de vida afectados por las inundaciones.

Se trata de una emergencia invernal en 8 departamentos del país, que afecta a sus poblaciones y, en particular, a decenas de miles de trabajadores del campo, campesinos y pescadores, habitantes de la ruralidad. Al menos, cien mil hectáreas están inundadas, miles de viviendas la infraestructura social, colegios, puestos de salud, escenarios deportivos, entre muchos otros lugares.

La causa según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, es un frente frío que produjo precipitaciones nunca antes vistas en el mes de febrero de manera tan copiosa.

Es por esto que respaldamos con firmeza la decisión de nuestro compañero presidente Gustavo Petro de declarar el estado de emergencia para atender las graves consecuencias de las inundaciones.

En momentos en que la vida, la seguridad alimentaria y la estabilidad económica de comunidades enteras están en riesgo, el Gobierno y el Estado no puede darle la espalda a la gente: se requiere actuar con celeridad, con recursos extraordinarios y con coordinación institucional efectiva.

Por eso considero importante repudiar la actitud hipócrita del establecimiento colombiano que reclama y presiona del Gobierno atención a las poblaciones y, simultáneamente, le niega al Gobierno la posibilidad de tener instrumentos para la emergencia económica y social. Eso se llama, compañeras y compañeros, hipocresía de la más pura de la clase política colombiana.

Mientras la gente está en medio de la inundación los políticos y los politiqueros, hacen cálculos y jugadas para afectar todavía más a la gente. Eso es inconcebible y yo los llamo a que tomen nota en el momento de estar ante las urnas para que esa gente no vuelva al Congreso, si son congresistas, o a cualquier cargo público en el futuro, hay que castigarlos con el favor de la ciudadanía o mejor con su antipatía.

En segundo lugar, como si fuera poco que al Gobierno le niegan la posibilidad de atender con recursos suficientes la grave crisis climática que se ha presentado en el país, hoy el Consejo de Estado en una de las decisiones más injustas y arbitrarias que se tenga historia en este país, ha suspendido el aumento salarial que permite que lo que antes se llamaba salario mínimo hoy haya pasado a ser salario vital, con un aumento del 23%.

Quiero decir, frente a esa medida arbitraria, que no solamente la rechazamos con toda firmeza por su arbitrariedad, sino que además haremos todo lo necesario mediante la movilización decidida en las calles, plazas de este país, para evitar que los derechos de las trabajadoras y los trabajadores sean de nuevo pisoteados.

La suspensión del salario vital lo único que demuestra es la resistencia de ciertos sectores que viven de las condiciones de desigualdad social en nuestro país. Parece que se niegan a que los pobres, a que la gente que vive en las condiciones más difíciles en nuestra sociedad tenga derechos.

Pero lo que les digo es que se equivocan gravemente.

Ayer lo afirmé en una multitudinaria, gigantesca movilización en el Parque Berrío en Medellín, en lo que antes, antes, era la casa de la extrema derecha uribista, allí dije con toda claridad que antes, en un pasado, a la gente se le negaban y se le violaban los derechos y en Colombia prácticamente no pasaba nada, pero hoy las cosas han cambiado, hoy salieron los muchachos de primera línea en el estallido social a las calles, salió la gente, luchó por sus derechos y ha aprendido y ha sido consciente de que nunca más se volverá a presentar el pisoteo de los cambios sociales impunemente y lo vamos a reclamar con toda claridad.

El pueblo ya no es espectador, es protagonista y por eso, con la movilización como herramienta legítima para exigir derechos, vamos a ir a la movilización a la calle para reclamar que el salario vital se mantenga y para que se convierta realmente en una costumbre en Colombia que el salario de los sectores populares se reajusta como debe ser cada año y que no es objeto de una negociación cada vez más mezquina.

Porque se ha demostrado: el aumento del salario o de lo que se llamaba el salario mínimo, contrario a lo que decían los economistas que iba a destruir la economía del país, ha sido un importante factor de estímulo del crecimiento económico en estos años. Así que acabamos ya con esa mentira tan

largamente sostenida. Si los trabajadores y las trabajadoras de este país tienen un mayor salario, mayor activación económica, mayor prosperidad para todas y todos y no solamente para una pequeña élite.

Todos esos logros, el salario vital, la reforma pensional, la reforma laboral, este nuevo salario, hay que decirlo con toda claridad, se debe a nuestro Gobierno del cambio social y a nuestro presidente Gustavo Petro Urrego.

Compañeras y compañeros:

Vengo a Apartadó, esta zona del Urabá que, durante cinco décadas, por lo menos, nunca se resignó al miedo, sino que convirtió la organización social, en particular la organización sindical, en una fuerza transformadora.

Durante más de medio siglo, el movimiento sindical bananero al que le rendimos homenaje hoy, ha conquistado salarios y condiciones laborales dignas como en ninguna otra región del país.

Esa conquista ha sido fruto de la consciencia, la organización, la huelga, la negociación colectiva. Nuestro homenaje hoy a los dirigentes e integrantes de las organizaciones sindicales que han sabido en este territorio pelear por sus derechos.

Debemos recordar que esa movilización valiente se intentó ahogarla mediante la sangre y el fuego. Fueron muchos los líderes sindicales, las personas pertenecientes a organizaciones sindicales aquí en Urabá que pagaron un alto precio, que pagaron con su vida la defensa de los derechos laborales. Fue lo que se llamó en su tiempo la “guerra sucia” desatada contra quienes defendían derechos sociales básicos.

Por eso hoy el movimiento sindical no solamente merece un homenaje retórico, sino que se haga efectiva la reparación colectiva a todas y cada una de las familias víctimas de esta violencia y a eso me comprometo con ustedes en esta tarde, en mi gobierno trabajaremos por la verdad, la justicia y la reparación de los trabajadores y trabajadoras.

De igual forma, quiero destacar aquí la resistencia pacífica, valiente durante años de la comunidad de paz de San José de Apartadó, que pagó también con un alto precio el haber resistido mediante la desobediencia civil a la violencia

en el territorio, y que afortunadamente ha sido reconocida con una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual haremos realidad también bajo nuestro gobierno.

En Urabá no solo se ha dado la lucha sindical y la resistencia de los pueblos para evitar la violencia, sino que también ha habido una larga lucha del campesinado y de los trabajadores del campo por la tierra y por la reforma agraria.

Aquí se han ido ganando la restitución de tierras, aquí se ha ido ganando el devolver la tierra despojada y como lo he dicho, en el segundo gobierno progresista pasaremos de la reforma agraria a la Revolución Agraria, que significa que la economía campesina será el motor de lo que nuestro primer gobierno ha llamado una potencia mundial de la vida, es decir una potencia agroalimentaria, no solamente en nuestro continente, sino de cara al mundo.

¡Vamos a trabajar intensamente para que la economía campesina pueda tener un crecimiento cada vez mayor y mejor!

Asimismo, quiero destacar las luchas más recientes **frente a los megaproyectos portuarios**. Los consejos comunitarios, las organizaciones de trabajadores y los habitantes de Urabá no se oponen al desarrollo, pero exigen que el desarrollo no arrase con la vida, con el agua ni con la naturaleza.

Ayer lo dije en Medellín: tenemos toda la disposición de dialogar con el empresariado, pero siempre y cuando ese diálogo sea para beneficiar la prosperidad y en beneficio de todas y todos. No tenemos por qué seguir en Colombia pensando que el enriquecimiento es para un pequeño grupo. Toda nuestra sociedad, Colombia que es tan rica en recursos puede ser próspera y cada quien puede tener posibilidades para tener la mayor pujanza en su economía familiar y comunitaria.

Nuestras comunidades exigen que el progreso no se construya sobre el silencio de las comunidades. Reclaman ser escuchadas en la construcción de proyectos estratégicos para la región y para el país. Porque, como lo he dicho, el verdadero desarrollo se hace con la gente y no contra la gente.

Todas estas luchas, las luchas de los trabajadores y trabajadoras, las luchas campesinas, de los pueblos étnicos, de los defensores y defensoras ambientales, confluyen en una gran causa común la gran transformación social de nuestro país.

Nuestro gobierno, con su programa, con sus políticas y medidas como el salario vital, que repito no dejaremos que no la arrebaten a la gente, ha contribuido a mejorar la calidad de vida, el bienestar de la población y eliminar la pobreza y disminuir la desigualdad social en estos años.

IVÁN
Cepeda
Presidente



LA SEGURIDAD HUMANA
**COMO COMPONENTE
ESENCIAL DE NUESTRO
PROGRAMA**

Puerto Asís, Putumayo

Queridas compañeras y queridos compañeros:

En primer lugar, quiero reconocer, con profundo respeto, la dignidad y la resistencia histórica de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y las organizaciones sociales del departamento del Putumayo.

Durante décadas han sido estigmatizadas, perseguidas y olvidadas por el Estado, pese a que su clamor no ha sido otro que el de vivir con justicia, con oportunidades y con presencia institucional real.

Aquí las familias campesinas no sembraron coca por vocación, sino por abandono; lo hicieron en medio de la falta de vías, de créditos, de asistencia técnica y de mercados justos para sus productos.

Y, aun así, cuando el país les propuso acuerdos de sustitución voluntaria, **respondieron con esperanza**, demostrando que su compromiso siempre ha estado del lado de la paz y de la legalidad, siempre que no sean promesas vanas, como la reconstrucción de Mocoa, una **historia de incumplimiento y corrupción**.

Debemos acabar esa corrupción que a todos nos arruina y hace daño al país. Lo que las comunidades piden es proyectos productivos reales, infraestructura, educación, salud y apoyo técnico que les permita transitar hacia economías lícitas sin condenar a sus familias al hambre.

En eso consiste crear condiciones reales para el desarrollo. En eso consiste crear condiciones para la seguridad de los territorios.

Precisamente, vengo aquí hoy a hablarles de la seguridad, de la protección de las comunidades y de la vida, que lo digo claramente, para mí, para el Pacto Histórico y para el gobierno del cambio, **es un asunto esencial**.

Vengo a presentarles ideas básicas de nuestra política de seguridad, la Seguridad Humana.

Hoy he dirigido una carta a todos los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía en la que les anuncio que, bajo mi gobierno que elegiremos el próximo 31 de mayo cuando triunfe en primera vuelta, no modificaré las medidas en materia salarial, prestacional o pensional que ha tomado el actual gobierno que preside nuestro compañero Gustavo Petro Urrego, para mejorar la calidad de vida de soldados y policías.

Nuestro gobierno se ha preocupado por los derechos sociales de los miembros de las Fuerzas Militares y policiales, como del resto de la población. Así lo demuestra la adopción del salario vital que ahora le quieren quitar a la gente; algo que no vamos a permitir.

Contra los juicios que preveían que este gobierno iba acabar con las Fuerzas Militares, el resultado es una notoria mejoría de la calidad de vida de sus integrantes, en particular, de su base.

Se dignificó la vida de los militares y policías, especialmente de los soldados e infantes de marina regulares y patrulleros de policías quienes pasaron de ganar una bonificación de 300 mil pesos, a reconocerles un salario mínimo (1.750.000).

Padecemos una crisis de seguridad en regiones como Catatumbo, Cauca, Sur de Bolívar, entre otras. No padecemos esa crisis de ahora: es una crisis estructural y que hunde sus raíces en el prolongado conflicto que ha atravesado nuestro país.

La violencia sido prolongada, ha durado décadas, y es estructural, concierne a problemas de carácter político, social y económico, arraigados en la historia y en el sistema.

Se trata de tres largos ciclos de violencia que abarcan más de siete décadas, y que han sido parcialmente contrarrestados por procesos de paz que siguen construyéndose hoy.

Por lo tanto, esta crisis no se resuelve en un año ni en cuatro. No surgió con este gobierno ni, mucho menos, como lo afirman desde la extrema derecha, con la actual política de paz.

La complejidad de esta situación consiste en que entrelaza múltiples violencias: violencias políticas y simbólicas, físicas y armadas, también económicas.

Pero, más allá de esa diversidad, la inseguridad se consolida en contextos de crisis social, marginalidad, exclusión, pobreza, pobreza extrema, **por eso nuestra política de seguridad, que se denomina Política de Seguridad Humana ha tenido y seguirá teniendo como principio la base de que la seguridad es posible si contrarrestamos y superamos las causas sociales de la violencia.**

La política de Seguridad Humana tiene como uno de sus ejes esenciales la política social: previene, actúa contra, y contrarresta la pobreza y la desigualdad social que empujan a la violencia.

También es necesario decir que la Seguridad Humana requiere de la participación social y ciudadana. **No se impone contra el pueblo; se construye con el pueblo.**

La Seguridad Humana no concibe la relación entre la Fuerza Pública y la sociedad como la política represora y militar de un aparato que controla el orden público y subordina o utiliza a las organizaciones de la sociedad. **Propicia el diálogo permanente entre la Fuerza Pública y los movimientos sociales y comunitarios.**

La demostración más clara de la importancia que confiero a la política de seguridad bajo mi gobierno es que **en mi condición de presidente de la República y jefe de Estado, atenderé a diario esta política, sus problemas y resultados.**

Evaluaré de manera permanente los avances en cada departamento, ciudad, municipio y caso específico. Y asimismo, comunicaré constantemente los resultados y el estado de esta política al país y al pueblo colombiano.

La extrema derecha ha pretendido imponer la idea que solamente la “mano dura” puede garantizar seguridad. Pero, la historia de nuestro país muestra la falsedad de ese mito. Las hijas y los hijos de la guerra, **las víctimas que se cuentan por millones**, tanto por la acción de grupos armados ilegales como por hechos cometidos por el propio Estado, son la muestra fehaciente de que **esa mano dura que se impuso en los gobiernos anteriores no ha dejado más que una estela de mayor violencia, de destrucción en los territorios y de mayor inseguridad.**

Como lo dije, nuestra propuesta tiene un centro simple. Para proteger la vida y garantizar la seguridad en el campo y la ciudad, **se requiere atender las causas sociales de la violencia y, en particular, eliminar la pobreza y superar la desigualdad.**

Proteger la vida significa que la seguridad no es solo Fuerza Pública; es trabajo digno, ingresos justos, educación, vivienda, salud, agua potable, justicia, derechos y presencia integral del Estado.

La política de seguridad debe distinguir el mundo rural del mundo urbano, la naturaleza, características y dinámicas de la violencia son diferenciadas y deben tener tratamientos acordes a sus características.

Compañeras y compañeros, he aquí **seis grandes acciones de la fase de la política de Seguridad Humana, que en nuestro segundo gobierno progresista debemos implementar:**

Acción 1. La política de Seguridad Humana estará articulada a la transformación y desarrollo territorial con enfoque social

Como expresión concreta del principio de que la política de seguridad es social y participativa, deberá no solo incorporarse, sino además ser un componente central de los pactos regionales ya existentes (Cauca, Nariño, Chocó, Catatumbo) y de los que proyectemos en nuestro gobierno.

Esto con el fin de garantizar la concepción de que la transformación territorial, la eliminación de la pobreza y la superación de la desigualdad en los territorios es parte de la seguridad territorial, y que la participación comunitaria en las definiciones estratégicas de la seguridad local es indispensable.

Acción 2. Protección de territorios, comunidades y liderazgos

Proteger la vida no es solo proteger personas, también es **proteger los territorios donde la vida ocurre.** Por eso, fortaleceremos los **sistemas de alerta temprana, el monitoreo participativo y las respuestas integradas** frente a amenazas, para que la prevención llegue antes que los hechos ocurran.

Con la mayor fuerza posible impulsaremos la **implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016**, descentralizando el **Sistema Integral para el Ejercicio de la Política** para proteger a líderes sociales, firmantes de paz y oposición política; además, la **Comisión Nacional de Garantías de Seguridad** se trasladará a

los territorios para que el Estado en su conjunto actúe donde se necesita, con decisiones verificables y resultados.

Reorientaremos las capacidades de la Fuerza Pública para proteger los territorios. Para ello, fortaleceremos el cuerpo de infantería de marina para que nuestros ríos dejen de ser carreteras del crimen, y reorientaremos las capacidades de inteligencia para anticipar los actos violentos contra las comunidades y también contra el territorio.

Por eso, tendremos una **Inteligencia Ambiental** que detecte en tiempo real deforestación, minería ilegal y contaminación hídrica, protegiendo el agua y la selva con la misma prioridad con la que protegemos la soberanía.

Finalmente, propiciaremos un **diálogo permanente entre la Fuerza Pública y los movimientos sociales y comunitarios**, incluyendo su participación en los **consejos de seguridad locales**, porque la seguridad no se impone contra el pueblo: se construye con el pueblo.

Se requiere que en los territorios **el Estado llegue para quedarse**. No llegue un día y se vaya al siguiente. No llegue solo con armas. Debe llegar con servicios, derechos, equidad y prosperidad para las comunidades.

Acción 3. Vamos a proteger la vida desde el origen: estrategia integral contra el homicidio

Vamos a enfrentar el homicidio como lo que es hoy: un fenómeno donde el sicariato se volvió industria y el reclutamiento su combustible. Por eso actuaremos desde la **prevención**, porque cuando un joven empuña un arma la sociedad ya llegó tarde: unificaremos y fortaleceremos la gerencia de **Jóvenes en Paz** y el **Servicio Social para la Paz** para cortar el reclutamiento con presupuesto, intervención y evaluación.

En **Quibdó**, con 1.857 beneficiarios, el homicidio se redujo **-25,9%**; y en **San Andrés de Tumaco**, con 1.127 jóvenes vinculados, bajó **-34%**. Vamos a cerrar esa puerta con dos llaves: **educación y empleo**, y daremos **tratamiento tributario preferencial** a las empresas que contraten jóvenes certificados: dar empleo a un joven es una política de seguridad.

Acción 4. Contra la extorsión y el secuestro, protección a los comerciantes y pequeños empresarios

La cuarta acción parte de una nueva realidad. La extorsión mutó y afecta no solo a quienes poseen grandes capitales, sino también en forma amplia a los pequeños comerciantes, a los dueños de tiendas, e incluso a los vendedores informales.

Hoy es un delito digital, facilitado por celulares en cárceles y por el anonimato de la banca virtual, y su incremento del **30 %** exige una respuesta distinta, debemos diseñar respuestas **tecnológicas, rápidas y efectivas para la protección de los comerciantes y pequeños propietarios.**

Acción 5. Golpear el bolsillo del narcotráfico

La quinta acción es seguir ahondando el cambio de enfoque en un problema que resulta estructural a la violencia de nuestro país, y es la lucha contra el narcotráfico. **No perseguiremos al eslabón débil;** protección e integración a circuitos económicos sostenibles del campesinado que se ha visto forzado a sembrar hoja de coca y persecución a los grandes capos del narcotráfico en cooperación con otros países.

Fortaleceremos los controles de puertos y aeropuertos, enfocados a en lavado de activos y mercancía de alto valor, mediante la erradicación de las mafias que desvían los fines del control aduanero y reforzaremos el **control de insumos** con trazabilidad estricta de combustibles y precursores.

Además, volveremos a promover ante el Congreso de la República la **legalización regulada del cannabis industrial de la hoja de coca, transfiriendo el control del mercado de las mafias al Estado.** Transformaremos la hoja de coca en oportunidad industrial (abonos, alimentos, farmacéutica) y el Estado garantizará la compra para usos lícitos mientras se consolida la sustitución.

Acción 6. Más bienestar y dignidad para integrantes de la Fuerza Pública

Como lo hemos demostrado en este gobierno, la Fuerza Pública no se fortalece con discursos de reconocimiento retórico. Se fortalece con **bienestar, democratización de ascensos, salud mental y formación.** La dignidad de un uniformado también es seguridad. Un uniformado con bienestar tiene más

estabilidad, más humanidad y más compromiso con la misión de proteger a la ciudadanía.

Por eso impulsaremos una **nivelación salarial progresiva** para retener talento; un sistema de **salud integral** con monitoreo permanente de salud mental y prevención del suicidio; una **Nueva Ley para Veteranos** que amplíe participación y oportunidades de empleo en el retorno a la vida civil.

Por tanto, la Seguridad Humana es para proteger la vida, en fuerte articulación con la política social de eliminación de la pobreza y eliminación de la desigualdad, desarrollo social de los territorios, cortar el reclutamiento, para bloquear la extorsión, para dismantelar estructuras, para asfixiar finanzas criminales, para dignificar la Fuerza Pública, y para que la inteligencia cuide la vida con controles civiles y sin abusos.

Y cierro con un compromiso en el espíritu de lo que llamo Revolución Ética. La **política de Seguridad Humana no se hace contra el pueblo, se hace con el pueblo y para el pueblo.**

IVÁN
Cepeda
Presidente



EL PROTAGONISMO
**DE LAS MUJERES EN LAS TRES
REVOLUCIONES**

Bogotá, Cundinamarca

Queridas compañeras,

Este no es un acto protocolario o de cálculo electoral como suelen hacerlo candidatas y candidatos del espectáculo y de la extrema derecha, que se han convertido ahora en postizos defensores y defensoras de derechos humanos de última hora, para simpatizar con sectores que históricamente han discriminado, menospreciado, e incluso considerado inferiores y enemigos desde su visión clasista, machista y racista.

Mi experiencia personal y política siempre ha demostrado que el diálogo con las mujeres, cuando se escucha atentamente lo que piensan, siempre se aprende, siempre se logra entender mejor nuestros problemas sociales y su solución.

En un acto que tuvimos en Pasto con las mujeres nariñenses ya hice el siguiente planteamiento que quiero repetir aquí, por ser portadoras de la vida, en el ser de las mujeres está inscrita una forma de actuar que encarna la preocupación por los demás seres humanos, una predisposición natural a la generosidad, al cuidado hacia ellos y ellas, a la sensibilidad hacia lo humano. La mujer en su ser lleva implícita la predisposición para defender la vida, la humanidad y la justicia.

Desde esa predisposición las mujeres se han enfrentado a uno de los más poderosos sistemas de dominación. Han tenido que confrontar el patriarcado en los ámbitos privados y públicos, para lograr el reconocimiento, los derechos sociales con perspectiva de género, el derecho al voto, la participación política, la igualdad formal ante la ley y el establecimiento de los derechos sexuales y reproductivos para tan solo mencionar algunas de sus luchas históricas.

El patriarcado es esencialmente un sistema de dominación totalitario y violento, uno de los más antiguos de la historia de la humanidad, uno de los más oprobiosos, uno de los que los peores males y desgracias ha traído para todas las sociedades del mundo.

El patriarcado representa un sistema de injusticia de género, en el que más de la mitad de la especie humana ha estado sometida, subordinada, tenida por subalterna, discriminada, violentada, ultrajada por un sistema que pretende anular su ser y su dignidad y en cambio garantiza y alimenta privilegios masculinos milenarios.

El patriarcado ha sido funcional a los peores modelos económicos que reproducen las desigualdades y está en la base de las grandes amenazas de la vida en el planeta hoy.

Por eso compañeras debemos erradicar el patriarcado de la vida de nuestra nación y del planeta.

El patriarcado ha sido un componente histórico y actual del régimen colombiano, en nuestra sociedad sigue siendo tolerado, consentido y en algunos ámbitos e incluso bien visto y estimulado. Es casi que un hábito que para ser aceptado en ciertos círculos masculinos se tenga que denigrar de las mujeres y mientras más se hace mejor y mayor jerarquía se tiene. Todo eso debemos erradicarlo de nuestra cultura para siempre.

Por eso la resistencia de las mujeres a ese sistema tiene un carácter revolucionario, implica la transformación de las relaciones culturales, económicas, sociales y políticas, que en forma inexorable llevan a la emancipación de toda la sociedad, la emancipación de las mujeres es la emancipación también de los hombres.

Por eso el machismo predominante ve la transformación de identidades y roles de género y la autonomía femenina como una amenaza inadmisible para los valores tradicionales y para el orden social establecido.

Los dirigentes patriarcales del establecimiento y de la extrema derecha y que para no llamarnos a engaños también tenemos en la izquierda, sienten amenazada su hegemonía, experimentan miedo y odio, porque de lo que se trata es de cambiar las estructuras de poder tradicionales que tanto han defendido, en la que han basado su dominación y sus privilegios.

Por lo tanto, en un segundo gobierno progresista la lucha contra el patriarcado, contra el sistema patriarcal y contra quienes lo representan es una prioridad esencial.

Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones y propuestas generales y básicas para avanzar en nuestro programa de erradicación del patriarcado en la sociedad colombiana, ampliar el ejercicio de derechos de la mujer y de su participación democrática.

Esta agenda es necesaria para enfrentar los ataques velados o explícitos de la extrema derecha, y también para avanzar en la comprensión y apropiación desde la izquierda, desde el progresismo, desde el Pacto Histórico, con relación a la lucha de las mujeres contra el patriarcado.

En las actuales circunstancias es necesario desarrollar política y acciones concretas que materialicen los derechos adquiridos ya por las mujeres, confronten de manera efectiva la desinformación y los discursos de odio contra estos derechos y los amplíen en el campo ético, social y político.

En este sentido, considero que las tres revoluciones que he propuesto como actualización y desarrollo de nuestro programa de gobierno vigente tienen buena parte de su inspiración en las revoluciones pacíficas que han liderado históricamente las mujeres a través de la desobediencia civil, la movilización social, la acción colectiva organizada, la labor de cuidado de las mujeres y sus organizaciones, los procesos de resistencia y la transformación cultural.

1. La revolución ética para eliminar la violencia simbólica, física y política contra las mujeres

Como lo dije cuando presenté la propuesta de revolución ética, una sociedad violenta no solo destruye cuerpos, también destruye los vínculos, el pensamiento ético y la solidaridad entre los seres humanos. Esto ha sucedido con la violencia contra las mujeres, que es una de las expresiones más aberrantes de nuestra vida social.

No puedo arrogarme el conocimiento a fondo de esa abominable realidad, pero desde mi experiencia en el trabajo por décadas con las víctimas he vislumbrado las profundidades del sufrimiento que proviene de las violaciones y discriminaciones que implican ser mujer en una sociedad patriarcal. Ser mujer patriarcal, ser mujer rural, ser mujer cabeza de hogar, ser mujer desempleada o empleada con menos salario y más obligaciones laborales, ser dirigente política excluida de las decisiones estratégicas, ser mujer víctima de acoso sexual o de violación sexual.

Desde el menosprecio y desconocimiento de la dignidad, pasando por la violencia sexual, por la anulación de los derechos sociales y llegando hasta el feminicidio contra las mujeres en Colombia se practican todas las formas de violencia masiva y sistemática, selectiva o indiscriminada. Desde las violaciones comunes hasta los crímenes contra la humanidad y el feminicidio. Esa violencia patriarcal de sistema debemos perseguirla, castigarla, hasta abolirla en nuestra sociedad definitivamente.

Aunque existen avances legislativos o de justicia frente al feminicidio, las cifras siguen siendo sinceramente aterradoras. La violencia intrafamiliar contra las mujeres ha crecido de forma alarmante, en 2025 se reportaron más de 41.000 casos, es decir que cada día 114 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar en nuestro país. En el mismo año, cerca de 17.000 mujeres, 16944 reportaron ser víctimas de violencia sexual, es decir 47 mujeres cada día y 621 mujeres al año víctimas de feminicidio.

Esas son cifras que hablan por ellas solas y que llevan a que una prioridad de mi gobierno sea la lucha decidida y frontal contra toda forma de violencia contra las mujeres. A esas cifras se suman las dificultades de acceso a la justicia, la revictimización institucional y la limitada presencia estatal en zonas rurales afectan especialmente a mujeres en condiciones de vulnerabilidad, como indígenas, afrodescendientes y campesinas.

La implementación efectiva de leyes para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres requiere de adecuaciones institucionales, asignación de presupuesto y el apoyo a las organizaciones y los movimientos de víctimas y de mujeres contra la violencia.

2. La Revolución Económica y Social para la equidad de género

La desigualdad económica es un obstáculo estructural para los derechos de las mujeres, las mujeres presentan mayores tasas de desempleo, 9% con relación a 5% de los hombres, la informalidad laboral, la desigualdad salarial, las condiciones diferenciadas del ejercicio del trabajo tanto en lo urbano como en lo rural requieren la atención prioritaria del gobierno.

Las mujeres siguen asumiendo la sobrecarga del trabajo del cuidado no remunerado en cada uno de los ámbitos sociales o familiares. La distribución desigual de recursos y tiempo limita la autonomía económica, la libertad de las mujeres, su participación en la vida social.

Además, como hemos visto en este gobierno, sectores políticos y económicos contrarios al cambio social exigen que los ajustes fiscales, ante el déficit que tenemos de las finanzas públicas, promueva reducir de manera severa los dineros públicos para la equidad de género, profundizando la feminización de la pobreza.

Propongo que nuestro gobierno en su segundo tiempo haga todo lo contrario, debemos avanzar en la redistribución estructural de la riqueza, acompañada de reformas sociales que muestren una verdadera progresividad en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales para las mujeres.

Un ejemplo de estas reformas es el incremento del salario vital y la Revolución Agraria, los cuales deben tener perspectiva de género en todas las expresiones del trabajo del Estado y del Gobierno.

En mi gobierno nos concentraremos con ustedes en las propuestas y rutas para fortalecer un gran Sistema Nacional del Cuidado, garantizar la inclusión de las mujeres en las políticas y programas laborales de vivienda, educación y salud tanto en las ciudades como en la zona rural.

Para desarrollar la Revolución Agraria es necesario que el liderazgo de las mujeres campesinas, de comunidades y pueblos étnicos en las zonas rurales, y la protección de la vida de las lideresas sociales sea prioritaria también para el Gobierno.

3. La Revolución Política y Democrática para avanzar en los derechos de la mujer.

Para que la defensa y garantía de los derechos de las mujeres sea una causa común en nuestra sociedad, se debe transformar la subvaloración social e institucional de las mujeres y sus roles en la sociedad.

Esto implica promover una transformación cultural, como lo he expresado, que debe tocar las estructuras, cuestionar las costumbres y renovar las mentalidades machistas en Colombia.

Hay un relato que ha impulsado hoy la extrema derecha, en el que se pretende culpabilizar a las mujeres y sus derechos por la crisis del neoliberalismo.

Desde el liderazgo político de la extrema derecha se escuchan discursos en los que se culpa a las decisiones de las mujeres sobre la maternidad de la

baja tasa de natalidad y, de esta forma, se les acusa de afectar el desarrollo económico.

También se culpa a las mujeres por la supuesta pérdida de valores tradicionales que ha transformado las estructuras familiares y motivado la irrupción de nuevas identidades sexuales y de género que exigen reconocimientos y derechos. Se sigue culpando a las mujeres de provocar la violencia de la que ellas son víctimas.

Se les culpa de la pérdida de privilegios masculinos y de clase para que esa motivación busque deslegitimar el feminismo, minimizar la violencia contra las mujeres y promover estereotipos tradicionales que limitan la acción liberadora de sus movimientos.

Estas narrativas machistas se difunden y amplifican a través de redes sociales, con información falsa. Se utiliza el mundo digital para generar nuevas violencias contra las mujeres que afectan principalmente a mujeres jóvenes, periodistas y figuras públicas.

Para contrarrestar la desinformación y los discursos de odio es necesario ampliar sustancialmente la participación decisoria de las mujeres como parte del poder constituyente, mantener la movilización social femenina y garantizar la participación de las mujeres y sus organizaciones en todas las instancias en las que se delibere y tome decisiones sobre el futuro de la Nación.

Por último, debemos seguir trabajando para atender los impactos prolongados del conflicto armado y la persistencia de economías ilegales en algunas regiones porque afectan de forma diferenciada a las mujeres. Si bien el Acuerdo de Paz incorporó un enfoque de género innovador, su implementación ha enfrentado múltiples obstáculos. Las lideresas sociales y defensoras de derechos humanos continúan siendo víctimas de amenazas y violencia, esto restringe su participación en la construcción de la paz.

Mi compromiso con la paz y con los derechos de las víctimas implica mi compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz en el que las mujeres y sus organizaciones tienen un papel protagónico.

Compañeras y compañeros:

Debemos desterrar para siempre de nuestro ser, de nuestra mentalidad y de nuestro comportamiento -y aquí me dirijo especialmente a mis compañeros

dirigentes políticos o simples ciudadanos- toda forma de machismo y toda justificación del patriarcado. Sin eso nunca lograremos realizar una verdadera transformación política y ética y no alcanzaremos la condición de una sociedad realmente democrática y tampoco podremos ser una verdadera potencia mundial de la vida.

Cuenten conmigo. En esto no me considero un aliado, sino un integrante más del movimiento que trabaja por la mujer, su dignidad y sus derechos, solo que ahora pretendo ser parte de ese movimiento por una responsabilidad un poco más exigente, la de ser presidente de la República.

IVÁN
Cepeda
Presidente



VAMOS A ENFRENTAR
**EL SAQUEO DE LAS REGALÍAS
EN LOS TERRITORIOS**

Villavicencio, Meta

Queridas compañeras y queridos compañeros:

Saludo de nuevo al pueblo del Meta, a sus organizaciones sociales y de víctimas con las que he trabajado, hombro a hombro, por la paz, la verdad y la justicia.

Como ustedes lo saben la lucha de nuestro gobierno por los derechos sociales es cada vez más intensa. En los últimos días, han querido sectores del establecimiento y de la extrema derecha arrebatarnos el salario vital al pueblo colombiano. Hasta este gobierno del Pacto Histórico, la costumbre en Colombia había sido que la clase política y los sectores más ricos pudieran vivir en la opulencia, y al pueblo le tocaba, todos los días, apretarse el cinturón.

Así pasó, por ejemplo, bajo el gobierno de Iván Duque, cuando después de la pandemia, él y su tristemente célebre ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, decidieron ponerles impuesto a los alimentos básicos, para que las grandes corporaciones no se vieran afectadas por las pérdidas económicas que dejó el COVID.

Como ustedes recuerdan, eso provocó el “estallido social”, la protesta pacífica, pero enérgica de los sectores populares encabezados por los jóvenes de la Primera Línea y, luego, la elección del primer gobierno progresista.

Desde el “estallido social” el pueblo colombiano aprendió que sus derechos son sagrados. Que nadie puede venir a acabar con ellos, y que si intentan quitarle a la gente lo que ha conquistado en materia de justicia social, nos paramos en la raya y salimos a la calle a exigir que nos respeten. A la gente ya no la van a pisotear impunemente. Y si nos intentan quitar la reforma laboral y la reforma pensional, también nos levantaremos a exigir nuestros derechos.

Hoy vengo a hablarles del tema de la gran corrupción y de un aspecto particular en esa lucha: lo que será nuestra acción decidida como segundo gobierno progresista para evitar el robo de las regalías, los impuestos que se pagan por concepto de la explotación minera y de los hidrocarburos.

Pero, antes de entrar en ese asunto, quiero recordarles tres principios que tendrá la lucha contra la corrupción en mi gobierno:

1. **Vamos a pasar de la lucha contra la corrupción simple al enfrentamiento directo contra la gran corrupción.** Es decir, en esta fase que viene no vamos a perseguir al pequeño corrupto, vamos tras los jefes de los aparatos de la gran corrupción. No vamos tras los lugartenientes, vamos tras los capos.
2. **Vamos a pasar de la lucha genérica contra la corrupción al enfrentamiento concreto y real contra casos específicos de la gran corrupción.** Esto quiere decir, que vamos a enfrentarlos caso por caso, a perseguir a los responsables, someterlos y sancionarlos. Identificando con nombre propio casos y responsables.
3. **Vamos a pasar de la lucha burocrática contra la corrupción a la rebelión ciudadana.** Eso quiere decir que como parte de la Revolución Ética, los movimientos sociales, las comunidades y sus liderazgos tendrán un lugar protagónico en esta lucha, y también significa que los recursos que recuperemos de la corrupción serán destinados exclusivamente para el bien de las comunidades y del pueblo: para dotar de agua potable a los municipios, para construir fuentes de energía limpia, para hacer las vías terciarias, para la educación, la vivienda y la salud.

En una visita reciente a uno de los municipios que más ha recibido recursos por concepto de regalías, un dirigente sindical me dijo: “Si las regalías se hubieran invertido bien, nuestro municipio tendría calles con adoquines de oro de 18 kilates”. Me hablaba de una población que luego de supuestamente haber recibido miles de millones de pesos por explotación minera no cuenta siquiera con agua potable. Así que la pregunta es obvia, ¿a dónde van los recursos billonarios de las regalías?

Uno de los problemas decisivos para garantizar la transformación de nuestros territorios es el destino de los recursos que deben pagar las grandes empresas por la riqueza que extraen del suelo colombiano.

Las regalías no son un regalo que otorga generosamente el Estado. Son un derecho de la población. Nacen del sacrificio ambiental y social que asumen nuestras regiones productoras y del principio de que la explotación de recursos no renovables debe traducirse en bienestar, equidad y desarrollo sostenible para las comunidades.

El Sistema General de Regalías fue concebido para resarcir daños, fortalecer la autonomía territorial y garantizar inversión estratégica. Dicho sistema entre 2012 y 2023 distribuyó más de 100 billones de pesos y entre el 2025 y el 2026 tiene previsto sumar otros 30 billones de pesos más.

Digámoslo claramente y fuerte: el saqueo de las regalías es uno de los robos a gran escala más cuantiosos que se están cometiendo en el país y, por lo tanto, un gobierno progresista debe hacer frente al robo que se está haciendo de las regalías.

La Contraloría reportó que solo entre 2018 y 2021 más de 10 billones de pesos estuvieron asociados a hallazgos administrativos, fiscales o disciplinarios y por su parte el Departamento Nacional de Planeación, DNP, señaló miles de proyectos con irregularidades, obras reportadas como terminadas sin superar el 85% de avance físico, proyectos sin actas de cierre y recursos en riesgo que ascienden a cerca de 12 billones de pesos, lo cual sería un alivio fundamental al déficit fiscal que padece el país en este momento.

No estamos ante errores fortuitos. Estamos ante una estructura de captura institucional. Estamos ante la macrocorrupción de las regalías

Como se sabe, el departamento del Meta posee una enorme riqueza petrolera, y al tiempo tiene una enorme deuda social.

El Meta es hoy el corazón petrolero de Colombia. Produce cerca del 57% del petróleo nacional, alrededor de 488 mil barriles diarios y entre 2023 y 2024 recibió más de 2,5 billones de pesos por concepto de regalías.

Sin embargo, esa riqueza no se refleja en bienestar ni en justicia social en el departamento.

Puerto Gaitán es uno de los municipios del país que el año pasado, concentró el mayor número de alertas de la Contraloría en materia de proyectos.

La Contraloría advirtió que, pese a más de 23 billones invertidos en la región de los Llanos entre 2012 y 2025, el desarrollo no corresponde a la magnitud de los recursos. Además, en el diagnóstico nacional de “elefantes blancos” se identifican decenas de proyectos críticos, inacabados, dejados a la mitad en este departamento.

Uno de los casos recientes más escandalosos es el adelantado por el **ex gobernador Juan Guillermo Zuluaga del sistema de purificación de agua en Puerto Gaitán**, con posibles pérdidas superiores a 63 mil millones de pesos, donde los equipos no cumplieron su función y **los niños se quedaron esperando el agua potable para sus colegios y labores**.

Lastimosamente y debemos decirlo con claridad, debido a las redes clientelares de macro corrupción en el departamento en las que operan políticos, grupos de contratistas y funcionarios delincuentes, **el Meta se ha convertido en un gran cementerio de elefantes blancos** en el que comunidades rurales siguen sin agua potable, hospitales carecen de dotación suficiente y las vías terciarias se vuelven intransitables en temporada de lluvias. Y el eterno problema de la vía que une al Meta con Bogotá.

En mi gobierno haremos un estudio detallado de este tipo de casos y procederemos con todo el rigor para que el peso de la ley caiga sobre los responsables.

Pero el Meta no es una excepción. Es un síntoma.

Y si queremos cambiar el destino del Meta y de nuestro país, **debemos transformar estructuralmente el Sistema General de Regalías** y acabar con la macro corrupción que lo ha capturado. Sin embargo, la corrupción en las regalías no es improvisada. Opera como un aparato perfectamente aceitado.

Identificar sus mecanismos es el primer paso para dismantelar la gran corrupción que ha capturado las regalías. Este aparato a mi juicio tiene por lo menos cinco formas en las que opera:

1. Pactos electorales y captura anticipada del presupuesto

El ciclo comienza en la campaña al Congreso y a la Presidencia. Empresas privadas financian candidaturas a alcaldías y gobernaciones bajo la promesa de recibir contratos financiados con regalías.

Una vez electos, los mandatarios presentan proyectos alineados con los intereses de quienes financiaron su campaña, no necesariamente con las prioridades territoriales. Muchos proyectos ni siquiera están obligados a estar articulados con planes de desarrollo o instrumentos de planeación.

Así se instala una **deuda política** que termina en el robo o desvío de los recursos de las regalías.

2. El tradicional CVY, cobro de “peajes” en certificaciones técnicas

Todo proyecto requiere certificaciones sectoriales y del DNP. Este proceso técnico ha sido capturado en algunos casos por redes clientelares que cobran porcentajes ilegales para expedir certificados o agilizar trámites. Se ha normalizado una práctica perversa: pagar para acceder a recursos públicos.

3. Administración de recursos obedeciendo a acuerdos politiqueros y sin las comunidades

Las decisiones en los Órganos Colegiados de Administración y Decisión regionales, OCAD, y otras instancias se toman principalmente entre alcaldes, gobernadores y representantes del Gobierno Nacional.

Las comunidades no participan de manera efectiva en esas decisiones. No siempre se priorizan los proyectos mejor evaluados técnicamente, sino aquellos que responden a acuerdos políticos.

Eso debe cambiar, las comunidades deben tener asiento en las decisiones estratégicas del país.

4. Control débil e impunidad generalizada, nadie termina respondiendo por los platos rotos, la corruptela y por el robo

A pesar de hallazgos reiterados y alertas tempranas, las sanciones a altos responsables son escasas. La falta de castigo real perpetúa el ciclo de la corrupción.

Y aquí debemos hacer una reflexión profunda: el problema no es únicamente normativo. Es cultural, político y estructural. Se ha consolidado una red mafiosa que integra empresarios, políticos y funcionarios.

Por eso la respuesta no puede ser cosmética. Debe ser estructural.

Nuestro gobierno impulsará una reforma profunda al Sistema General de Regalías basada en seis transformaciones centrales.

Primera. Equipo especializado en Presidencia para hacer seguimiento, acompañamiento y recibir denuncias en tiempo real sobre recursos que se estén robando o desviando de las regalías

Crearé un equipo que bajo mi supervisión directa recibirá denuncias sobre posibles casos de corrupción en proyectos provenientes del Sistema General de Regalías y que le hará seguimiento a los proyectos más críticos a nivel nacional.

Segunda. Meritocracia y profesionalización

Todos los funcionarios que intervengan en certificaciones, evaluación y seguimiento serán seleccionados por concurso público.

Crearemos un cuerpo técnico nacional permanente de estructuración de proyectos, con despliegue regional, apoyado en la institucionalidad existente. Acabaremos el clientelismo técnico.

Tercera. Prohibición de la contratación directa con regalías

Eliminaremos la posibilidad de usar convenios interadministrativos para evadir la licitación pública. Toda obra deberá adjudicarse mediante procesos concursables, transparentes y abiertos.

Cuarta. Ventanilla única digital y trazabilidad total

Implementaremos una plataforma única con trazabilidad desde la aprobación hasta la liquidación. Interoperabilidad con el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP, sistemas presupuestales y banca pública. Divulgación obligatoria de avances físicos y financieros en tiempo real.

Quinta. Participación ciudadana vinculante

Juntas de acción comunal, pueblos étnicos y organizaciones sociales podrán presentar proyectos y tendrán representación en instancias de gobernanza.

Impulsaremos presupuestos participativos regionales vinculantes para un porcentaje de las regalías.

Sexta. Un nuevo pacto con las regiones productoras

Si recuperamos una parte de los grandes recursos que se están robando por este concepto, tengan la seguridad que habrá para las poblaciones y las comunidades inmensas posibilidades de desarrollo, de tener servicios básicos, comunicación, educación, vivienda y salud que hoy está siendo robada por unos cuantos inescrupulosos y criminales.

El Meta, Casanare, La Guajira, Cesar, Arauca y todas las regiones productoras que tienen explotación minera y petrolera merecen justicia social y transformación territorial.

No podemos seguir con los brazos cruzados mientras se pagan cuantiosos recursos por concepto de explotación minera y los niños se siguen muriendo de hambre y de sed en algunas partes del país. Esa monstruosidad no debemos permitirla.

Desde nuestro gobierno y mediante una Revolución Ética que luche contra la macro corrupción devolveremos estos recursos al pueblo:

Ni un peso más para la corrupción.

Ni una obra más convertida en elefante blanco.

Ni una comunidad más esperando agua potable mientras otros se enriquecen.

IVÁN
Cepeda
Presidente



EL PODER DE LA VERDAD
DE LAS MADRES DE SOACHA

Soacha, Cundinamarca

Queridas compañeras y queridos compañeros:

Saludo a Soacha desde esta plaza que está cargada de memoria histórica para la sociedad colombiana.

Aquí, el 18 de agosto de 1989, durante una manifestación de sus seguidores políticos, fue asesinado el destacado líder liberal y democrático, Luis Carlos Galán Sarmiento, en un acto que hacía parte de la espiral de violencia política desatada por el narcotráfico, el paramilitarismo y el terrorismo de Estado, a finales del siglo XX en nuestro país.

Aquí, años después, en este lugar emblemático, las heroicas madres de los muchachos víctimas de los mal llamados ‘falsos positivos’ se congregaron y comenzaron su larga marcha hacia la verdad y la justicia.

Las madres de Soacha, como se las ha conocido, son un símbolo de dignidad en Colombia.

Cuando comenzaron su resistencia, Álvaro Uribe Vélez había instaurado en el país un régimen de terror y mentira oficial.

En esa lúgubre etapa, se intentó que nuestra sociedad perdiera por completo cualquier sentido ético.

Se buscó que el Congreso y el Palacio de Nariño se convirtieran en la guarida del narco paramilitarismo y la parapolítica.

Se intentó que todo aquel que no compartiera las ideas del caudillo autoritario, fuera catalogado como terrorista, o aliado del terrorismo.

En ese momento oscuro de la vida del país, las madres de Soacha hicieron valer el poder de la verdad. Ellas no solo cargaron con el dolor infinito de perder a sus hijos; enfrentaron, además, la estigmatización, la persecución y la revictimización.

A Uribe no le bastó con arrebatarles la vida a sus jóvenes hijos. También intentó arrebatarles la dignidad a sus familias.



Quiso desacreditar su lucha, señalarlas como oportunistas, como manipuladas, como “políticas”. Intentó sembrar la sospecha sobre sus hijos, insinuar culpas inexistentes, justificar lo injustificable. Fue una segunda agresión: convertir a las víctimas en responsables de su propia tragedia.

Pero estas mujeres, con una valentía inmensa, no se dejaron silenciar. Alzaron su voz cuando otros querían imponer el olvido. Y al final, triunfó la verdad.

Demostraron que, bajo el régimen de Uribe, habían tenido lugar miles de crímenes de lesa humanidad contra la juventud; que los ‘falsos positivos’ eran una macabra puesta en escena para aparentar victorias de guerra. Que se asesinó a miles de jóvenes civiles indefensos y luego se les presentó como “bajas en combate”, como si la muerte pudiera maquillarse poniendo botas a los cadáveres.

Demostraron que el asesinato de sus hijos fue un crimen masivo contra los pobres. Un crimen contra los jóvenes humildes de Soacha y de tantos rincones olvidados del país. Un crimen que revela el desprecio de Uribe hacia quienes han sido históricamente marginados.

Demostraron las madres que el asesinato de sus hijos con la forma de los ‘falsos positivos’ fue un crimen de odio contra la juventud, contra el porvenir de nuestra sociedad. Demostraron que los falsos positivos fue un crimen contra la humanidad.

El poder de la verdad de las víctimas ha servido para comenzar lo que he llamado la Revolución Ética en la sociedad colombiana.

Las madres de Soacha, como las de La Comuna 13 de Medellín, de los Montes de María, de Putumayo, del Cauca nos enseñaron no solo **la fuerza de la verdad** individual de cada uno de sus hijos asesinados y desaparecidos.

El poder de la verdad que emana de las víctimas ha sido una fuerza moral capaz de estremecer la conciencia de Colombia. Su testimonio, tejido con dolor y dignidad, ha abierto los ojos de una sociedad que durante años fue empujada al silencio o a la indiferencia.

Gracias a su persistencia, hemos comenzado a romper los muros de la impunidad, a exigir responsabilidades y a **sembrar una cultura de derechos donde la vida sea sagrada y la justicia irrenunciable.**

Esa verdad no solo esclarece el pasado, ha sido fundamental para fortalecer la movilización social que se está dando hoy en nuestro país. Ha sido fundamental para fortalecer las organizaciones populares y alimentar la esperanza de una etapa histórica con una democracia más equitativa y humana.

Y por eso, estas fueron las razones que me llevaron a ser candidato presidencial cuando, a pesar de mi reticencia, no pude rechazar la petición que las madres me hicieron para asumir esta responsabilidad.

A las víctimas de este país les debo el haber postulado mi nombre como candidato presidencial, y entonces para ellas también gobernaré. Seré el presidente de todos los colombianos y colombianas, pero también seré un presidente para las víctimas de este país.

Como lo he dicho, **no hablo con demagogia, sino con propuestas concretas, transformadoras y realizables** por eso comparto con ustedes mi propuesta de **revolución ética para reparar y honrar a los millones de víctimas de nuestro país.**

1. Ampliación del concepto y la política de reparación integral

Lo que ha pasado con las víctimas en Colombia no es un hecho secundario de nuestra realidad social. No se trata de un sector o grupo humano que merezca una actitud compasiva o condescendiente por parte del Estado.

Mi gobierno trabajará por ampliar y extender el concepto de reparación integral de las víctimas.

Su realidad es uno de los problemas más graves que afronta nuestra sociedad. Se trata de una de las heridas más profundas que tiene.

Son, al menos, diez millones de personas que han sufrido de manera directa la violencia. **En Soacha más de sesenta mil personas reconocidas oficialmente. Se trata de diez millones de historias de sufrimiento, impunidad, ultraje humano.**

Es evidente que la reparación judicial, y la indemnización administrativa son insuficientes para resolver este gigantesco problema. Esas son obligaciones del Estado, y como tal vamos a cumplirlas.

Pero eso también significa los daños causados no fueron solo individuales; fueron daños profundos a comunidades enteras, a su tejido social, a su economía, a su confianza y a su futuro.

Por eso se requerimos una **política de reparación social e integral** que vaya más allá de los expedientes y los cheques: atención a la salud emocional y física de las familias; acceso real a programas sociales; garantías de educación para los hijos y los nietos de las víctimas; y, sobre todo, la participación de las víctimas en el desarrollo local, impulsando proyectos que beneficien a toda la comunidad.

2. Erradicación de toda forma de corrupción en el tratamiento de las víctimas y su reparación

La política pública de víctimas no puede ser una oficina más del Estado ni un espacio capturado por intereses clientelistas.

Impulsaremos la lucha frontal contra la macrocorrupción en todas las instituciones encargadas de la atención y reparación.

Difícilmente puede pensarse en un tipo de corrupción política y de manipulación clientelar más sórdida que aquella que se ejerce con las víctimas de crímenes contra la humanidad y genocidio.

El tráfico de influencias, favores y votos que practican los políticos tradicionales, no respeta el sufrimiento de quienes han soportado violencias y ultrajes en el conflicto armado o los territorios de la Colombia rural.

Robar los recursos públicos destinados a la reparación, convertir a las víctimas en clientela electoral a cambio de una indemnización que hace parte de programas de reparación, o instrumentar la necesidad de verdad y justicia de quienes han padecido la violencia, son acciones tan aberrantes que deberían ser tipificadas como elementos que hacen parte de la comisión de crímenes contra la humanidad, pues favorecen la impunidad de esas acciones, desvirtúan su verdad y memoria y vuelven a victimizar a quienes ya han padecido los crímenes.

Vamos a dismantelar juntos las mafias y redes que trafican con los derechos de las víctimas dentro y fuera de las entidades.

Como parte de esta política, **fortaleceremos las organizaciones, las mesas de víctimas, su incidencia territorial y nacional.** Ninguna decisión que las afecte se tomará sin ellas.

3. Tierra, territorio y justicia para quienes fueron despojados

La guerra en Colombia tuvo honda raíz en el despojo y la concentración de la tierra. La mayoría de las víctimas son campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Crearemos un **Subsistema de Protección y Garantías dentro del Sistema Nacional de Reforma Agraria** para proteger la vida y los derechos de quienes acceden a la tierra. Avanzaremos en el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y víctima del conflicto.

Aceleraremos la restitución de tierras con recursos suficientes y articulación eficaz. Garantizaremos acompañamiento jurídico permanente y proyectos productivos sostenibles que aseguren permanencia digna en el territorio.

Destinaremos los bienes del Fondo de Reparación y de la SAE realmente al servicio de las víctimas, con auditorías estrictas y **cero tolerancias a la corrupción.**

La revolución agraria no será solo redistribución: será justicia histórica.

4. La verdad y la justicia como fundamento de la paz

No habrá reconciliación sin verdad. No habrá democracia sólida sin justicia.

Fortaleceremos el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y su articulación con la política pública de víctimas.

La búsqueda de personas desaparecidas será prioridad nacional. Implementaremos con rigor la Ley de Mujeres Buscadoras. Aceleraremos la identificación y entrega digna de cuerpos. Cada familia tiene derecho a saber qué ocurrió. Cada madre tiene derecho a cerrar, si así lo desea, un duelo que el Estado no puede prolongar.

Garantizaremos coherencia entre las órdenes judiciales y la acción gubernamental. Fortaleceremos la justicia ordinaria para enfrentar la impunidad histórica. Aplicaremos un enfoque garantista que reconozca también a las víctimas de violencia policial y del estallido social.

Estableceremos una política de memoria y verdad como política de Estado. Impulsaremos el Sistema Nacional de Verdad y Memoria. La historia del conflicto, del genocidio político y de los crímenes de lesa humanidad deberá enseñarse con rigor en colegios y universidades.

El negacionismo no tendrá cabida en una democracia ética.

5. Garantías de no repetición: transformar para que no vuelva a ocurrir

Impulsaremos el desmantelamiento efectivo de organizaciones criminales y de las redes que atentan contra la paz. Adoptaremos una doctrina de seguridad humana centrada en la vida, los derechos humanos y el ambiente tal y como lo establece el acuerdo de paz firmado en el año 2016.

Fortaleceremos la protección del liderazgo social y de las comunidades. Promoveremos la responsabilidad empresarial en materia de derechos humanos. Construiremos una política pública de convivencia que combata los discursos de odio y la estigmatización.

6. Desplazamiento, retorno y exilio: soluciones duraderas

La población desplazada, dentro y fuera del país, ha vivido una de las crisis más profundas de nuestra historia. Reconoceremos el exilio y el desplazamiento transfronterizo como hecho victimizante

Por ello Implementaremos a cabalidad el CONPES de soluciones duraderas recién aprobado por el Gobierno y por nuestro compañero presidente Gustavo Petro que estipula inversiones por 10 billones de pesos en los próximos diez años para garantizar el retorno al país voluntario, seguro y digno.

Mi campaña tiene como definición esencial **el Poder de la Verdad**. Mi gobierno será coherente con esa convicción ética. Gobernaremos con las víctimas, escuchándolas, protegiéndolas, fortaleciendo su organización y garantizando sus derechos, permitiendo que sean lo que son, sujetos políticos transformadores de la historia de Colombia.

IVÁN
Cepeda
Presidente



LA REBELIÓN ANTIRRACISTA
Y EL DESARROLLO DE TUMACO

Tumaco, Nariño

Gracias por estar aquí compañeras y compañeros,

Saludo al pueblo de Tumaco, a las mujeres de las áreas palafíticas, guardianas de la vida y la marea; a los jóvenes que se niegan a que la guerra les arrebathe el futuro; a las autoridades de los consejos comunitarios que sostienen la autonomía en el territorio; a las autoridades y pueblos indígenas que con su sabiduría alumbran nuestro caminar, a las comunidades campesinas dignas y resistentes.

Hoy me dirijo con esperanza y con afecto que merece Tumaco, la Perla del Pacífico. La perla no solamente representa belleza, también dolores y heridas que debemos sanar. Tumaco no es un territorio que esté condenado a la pobreza y el atraso, es un territorio con inmensa potencia y de eso nos encargaremos en el segundo gobierno para continuar la obra del Pacto Histórico de la transformación social.

Si miramos con honestidad este territorio entendemos que Tumaco puede y debe ser el gran corazón económico y portuario del Pacífico. Aquí hay vida en cada semilla: el cacao de exportación, el coco con vocación de industria, el plátano y tantos otros productos que pueden transformarse para generar riqueza para nuestra gente y miles de empleos dignos para Tumaco y toda la región.

Hace unos días, cuando visité Quibdó, dije que es necesaria una Revolución Ética que se expresa en una rebelión antirracista, señalé que a lo largo de su historia, la sociedad colombiana ha sido una sociedad estratificada en la que se han aplicado por parte de sectores elitistas **formas veladas o abiertas de segregación racial** que no solo han excluido a la población afrodescendiente, sino que además **la han discriminado, perseguido y explotado**.

Eso es **racismo estructural**. Es la herencia de un Estado que miró al Pacífico **como frontera y no como centro**; como despensa para extraer recursos que enriquecen a unos pocos, y no como territorio de grandes oportunidades para todo el pueblo.

No puede haber **justicia social en Colombia si no hay justicia racial**.

Esa realidad no podemos seguirla tolerando. Necesitamos que nuestro país deje de darle la espalda a su propia gente. Necesitamos un país que deje de convertir sus territorios más vivos en territorios de muerte.

Tumaco no necesita lástima, necesita justicia, necesita decisión y, en especial, acción transformadora.

Cuando la Perla del Pacífico brille, como le corresponde, no solo cambiará este territorio, cambiará el rumbo entero de nuestra nación.

Debemos hablar sinceramente de los problemas de este rico territorio, donde la mayoría vive en la pobreza. **Pero, sobre todo, debemos hablar de la solución a esos problemas.**

Debemos hablar con honestidad del problema de los **cultivos de uso ilícito. En Tumaco, miles de familias campesinas y afrodescendientes no sembraron coca por vocación**, sino por ausencia de alternativas reales. Durante décadas, el Estado llegó primero con erradicación forzada y después, cuando llegaba, con promesas incumplidas.

Eso profundizó la desconfianza y dejó a la juventud atrapada entre la pobreza y la ilegalidad.

Reconocemos que se ha comenzado a dar un cambio con los acuerdos de sustitución voluntaria que han sido alcanzados en procesos de diálogo que se adelantan bajo nuestro gobierno.

Esos acuerdos representan un importante avance porque parten del diálogo y del respeto a las comunidades. Pero su éxito depende de que el Estado cumpla integralmente. **Sustituir no es arrancar una mata; es sembrar futuro, es adelantar una profunda revolución de los territorios.**

Debemos hablar del problema del agua potable y del acueducto de Tumaco.

Yo me pregunto con verdadera indignación ¿cómo es posible que una tierra, llena de ríos y con el mar en su costa, haya comunidades sin agua potable? Eso es vergonzoso.

¿Cómo es posible que en la Perla del Pacífico no se pueda abrir un grifo y obtener agua potable en muchos lugares de este territorio, y que se haya convertido en un privilegio y no en un derecho el agua potable?

El acueducto de Tumaco se ha convertido en un símbolo doloroso de lo que no puede seguir ocurriendo en el Pacífico: obras inconclusas, recursos diluidos, años de espera de familias y comunidades que siguen recogiendo agua lluvias, o pagando precios injustos por un derecho que es fundamental.

Eso no es una falla técnica aislada; es el reflejo de abandono institucional y corrupción que golpea, sobre todo, a los barrios populares y a las comunidades afrodescendientes.

El dinero destinado al agua es un dinero sagrado. No pertenece a ningún clan ni a ningún cacique; pertenece al pueblo.

Por eso asumo un **compromiso claro y verificable: terminaremos de construir y poner en pleno funcionamiento el acueducto de Tumaco**, con cronograma público, supervisión ciudadana y garantía presupuestal. El agua no será más una promesa electoral; será una realidad diaria. Este es un compromiso que, como presidente de la República, personalmente me encargaré de garantizar.

Debemos hablar de la corrupción y la corrupción en Tumaco.

Tumaco y la gran mayoría de municipios afro son azotados no solo por la penosa corrupción, sino también por los grupos armados que constriñen el progreso y entorpecen la realización de las obras, a través de “vacunas”. En mi gobierno, esto lo vamos a combatir y no lo permitiremos.

La lucha contra la gran corrupción no se limita a controlar las regalías y los impuestos a las grandes empresas que explotan la minería en nuestro territorio, la gran corrupción tenemos que enfrentarla con una rebelión de los ciudadanos, debe bajar al territorio, a cada municipio, a cada ciudad, a cada vereda de Colombia.

La corrupción tiene que ser combatida en primer lugar desde los territorios, que nos oiga la clase política tradicional que ha gobernado estos territorios. No permitiremos más corrupción, vamos a combatir para que cada peso le llegue a los ciudadanos y a la población para las obras públicas.

Debemos hablar también de la fuerza militar y de policía, la queremos al servicio de la protección de la población, levantando puentes, construyendo hospitales, escuelas, viviendas, acueductos, vías que tanto hacen falta aquí en Tumaco.

Con los soldados del pueblo, herederos de Bolívar y de Juan José Rondón, hoy dignificados por el gobierno, por un salario que hace digno el ejercicio de la milicia. Vamos a contribuir a que la fuerza pública se convierta también en una fuerza de ingeniería y construcción de las obras públicas.

Debemos hablar de la juventud de Tumaco, que hoy está atrapada en los grupos armados. Ese no es su destino. Necesitamos a los jóvenes creando, construyendo, transformando este país y este territorio, educándose, pudiéndose desarrollar libremente para ser felices y con dignidad.

La Revolución Ética que propongo es antirracista y se sostiene sobre principios:

Primero, redistribuir poder, no solo recursos. Las comunidades afrodescendientes deben participar de manera decisiva en la planificación, ejecución y control del desarrollo territorial.

Segundo, reconocer la deuda histórica con inversión prioritaria y diferenciada. El presupuesto nacional debe reflejar la reparación democrática de siglos de exclusión: agua potable, saneamiento, hospitales, universidades, infraestructura productiva.

Tercero, transformar la educación y la memoria histórica. Enseñar la verdad sobre la esclavitud, el despojo y la resistencia afrodescendiente. Reconocer que la identidad del Pacífico es columna vertebral de la nación.

Cuarto, garantizar seguridad sin estigmatización. La juventud no puede seguir siendo perfilada como sospechosa. Debe ser reconocida como sujeto de derechos, creadora de cultura, ciencia y economía.

Quinto, combatir la corrupción con enfoque territorial y racial. Cada peso robado en el Pacífico no solo es un delito, es una agresión histórica contra comunidades que han esperado generaciones por condiciones dignas.

Esos principios deben llevar a acciones concretas.

Tumaco no puede ser un puerto para controlar simplemente el tráfico de drogas. El puerto de Tumaco se proyecta hacia la **Cuenca del Pacífico y los mercados de Asia**. Nuestra región Pacífica en un referente del **comercio transoceánico y motor del desarrollo de Colombia**. Le apostaremos a la construcción de puertos comunitarios y populares.

Esos compromisos que adquiero son para la zona de Tumaco y para todo el pie de monte también. Vamos porque el Pacífico nariñense se transforme en su conjunto.

Nuestra región pacífica es un referente de comercio transoceánico, motor de desarrollo para Colombia. La promesa de que, en Nariño, la costa Pacífica, el pie de monte y Tumaco sean una zona de paz, parte de atacar las causas de la pobreza y de erradicar la corrupción. La paz se logra con desarrollo, superando el atraso. Atacaremos la causa de la violencia que es la pobreza y la desigualdad.

En este territorio necesitamos convertir en un verdadero motor de crecimiento la economía campesina, seguir avanzando en entregarle la tierra a los campesinos y a las comunidades, para hacer la reforma agraria que queremos se convierta en Revolución Agraria.

No podemos olvidar que nuestra región del Pacífico es una de las más biodiversas de nuestra geografía, tenemos la responsabilidad histórica de convertir esa riqueza natural en riqueza para los seres humanos, conocimiento e innovación que aporte a la salud planetaria.

Por eso impulsaremos la educación superior, la innovación científica y biotecnológica del Pacífico, que permita desarrollar soluciones a partir de nuestros recursos marinos y terrestres.

Por eso el pacífico tiene que ser un gran motor de riqueza pesquera, con posibilidades de turismo natural, con posibilidades de convertir al Pacífico en uno de los pilares de que Colombia sea una potencia mundial agroalimentaria, gastronómica para el mundo. La gran cocina de esta zona y de estos territorios es la que necesitamos vender internacionalmente y atraer el turismo. No la cocina del narcotráfico, la cocina de la gran gastronomía nariñense y del Pacífico. Así conseguiremos que el pacífico se convierta en lo que queremos. Parte del gran desarrollo social, cultural, económico de nuestra nación.

Espacio fronterizo económico y binacional con Ecuador.

Lo que hemos avanzado en este gobierno es fundamental, hemos comenzado la reforma agraria. Por primera vez hay una reforma pensional en el país, por primera vez se paga un salario digno, o que comienza a acercarse a un salario digno, que es el salario vital, que hemos defendido en los últimos días en la movilización social.

Tumaco merece vivir sin miedo.

Merece agua potable.

Merece industria, educación y cultura.

IVÁN
Cepeda
Presidente



MANDAR OBEDECIENDO,
ESCUCHAR DIALOGANDO

Santander de Quilichao, Cauca

Queridas compañeras y queridos compañeros:

Hoy celebramos en toda Colombia 55 años de vida y de luchas del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Medio siglo de un movimiento que no solo ha marcado la historia del Cauca, sino la historia misma de Colombia.

Celebrar su trayectoria es reconocer décadas de dignidad, de lucha organizada, de defensa del territorio, de la vida y de la autonomía.

Cincuenta y cinco años de dignidad sembrada en la tierra, de acción firme frente a gobiernos autoritarios y violentos, de resistencia creadora en medio de las tormentas de la historia.

Ustedes han forjado en estas décadas uno de los movimientos sociales más sólidos, creativos y respetados del país, referente ineludible en la lucha por la justicia social y el reconocimiento de nuestra diversidad étnica.

Entre las numerosas razones de nuestro respeto y admiración por ustedes, debo destacar que siempre, ante las más duras circunstancias, el CRIC ha optado por la resistencia no violenta. Por la palabra y el diálogo. Por la acción pacífica, pero resuelta para hacer valer los derechos y la dignidad.

La Guardia Indígena es la expresión organizada de la defensa colectiva que se hace sin el uso de la violencia.

En un país donde hemos padecido la violencia en sus formas más extremas y por periodos muy prolongados, el CRIC ha sido siempre un referente del valor y del ejemplo de la acción pacífica del pueblo organizado y movilizado.

Ustedes han defendido la Madre Tierra cuando la codicia la ha convertido en mercancía. Han sido consecuentes defensores y defensoras del territorio, del agua, y en esa defensa han logrado que la sociedad colombiana comience a entender la inmensa riqueza que entraña el hogar que debemos cuidar.

Ustedes han dado ejemplo del significado de trabajar en Minga para construir el poder colectivo, del significado de la solidaridad y de la defensa de la



comunidad cuando en la sociedad colombiana ha primado el interés individual y egoísta.

Ustedes han luchado incansablemente por construir la paz territorial, por priorizar la palabra, el diálogo, el acuerdo y la concertación, en vez de la fuerza y el odio. Y eso, a pesar de que los gobiernos tradicionales han incumplido la palabra empeñada.

Ustedes han demostrado que el pueblo debe movilizarse para hacer que se respeten sus derechos y su autonomía, y que cuando se intenta dominarlo injusta y arbitrariamente se debe apelar a la desobediencia pacífica, pero decidida.

En fin, ustedes han transformado la resistencia en poder y gobierno del pueblo, en poder transformador de la sociedad.

Por eso Colombia les agradece y les rinde homenaje hoy.

Compañeras y compañeros:

Cuando el pueblo colombiano me elija presidente de la República, como candidato único del Pacto Histórico y sucesor de nuestro digno compañero presidente Gustavo Petro Urrego, no llegaré al Palacio de Nariño a gobernar desde la distancia ni desde el aislamiento del poder. Llegaré con la convicción profunda de que el poder solo tiene sentido si nace del pueblo y vuelve al pueblo.

He dicho con claridad que mandaré obedeciendo y escucharé dialogando. No son palabras vacías. Son principios éticos y políticos. Mandar obedeciendo significa reconocer que el soberano es el pueblo. Que las decisiones estratégicas de la Nación deben estar ancladas en la voz de los movimientos sociales, de las organizaciones populares, de los sindicatos, de las juventudes, de las mujeres, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, del campesinado, de quienes han resistido en los territorios cuando el Estado estuvo ausente.

Escuchar dialogando significa establecer una relación permanente, no episódica; estructural, no decorativa; sincera, no instrumental. Mi gobierno no tendrá una relación protocolaria con los movimientos sociales.

Tendrá una relación viva, dinámica, sincera, crítica y constructiva. Habrá interlocución constante, coordinación programática y mecanismos reales de participación para que la ciudadanía organizada incida en las grandes decisiones nacionales.

Yo no vengo de los privilegios. Vengo de las luchas sociales. Vengo de los barrios populares donde se ha exigido justicia, de los espacios donde se ha defendido la vida, de los escenarios donde se ha denunciado la corrupción y la violencia.

A esas luchas me debo. Me debo al pueblo que tiene una historia de resistencia a la exclusión y a la injusticia. Y, por lo tanto, si me debo al pueblo, entonces debo ser coherente: obedecer su mandato democrático.

Un presidente que olvida de dónde viene, traiciona su palabra. Un presidente que se encierra se aleja de la verdad del país. Yo haré lo contrario: abriré las puertas del gobierno a la deliberación social; convertiré la movilización en una aliada de la transformación; asumiré la crítica como una herramienta para corregir y avanzar.

No hay transformación profunda sin pueblo organizado. No hay justicia social sin participación activa. No hay paz estable sin movimientos sociales fuertes y respetados.

Mi compromiso es gobernar con el pueblo y para el pueblo. Convertir el diálogo social en política de Estado. Y hacer de la coherencia entre palabra y acción el sello de nuestro gobierno.

Compañeras y compañeros de la Minga del Sur Occidente:

Hoy también vengo a recibir el documento que ustedes me dirigen con sus propuestas programáticas. Sé que estas propuestas son la voz de los pueblos, el mandato colectivo para defender la vida, la tierra y la dignidad en los territorios. Las recibo, no como un gesto formal, sino como un compromiso político. Y quiero decirlo con claridad: considero que todas y cada una de sus propuestas son necesarias y pertinentes para la transformación democrática de Colombia.

En el programa del Pacto Histórico hay propuestas programáticas idénticas o muy parecidas a las que ustedes plantean. Coincido en la necesidad de fortalecer la familia indígena, el liderazgo en la vida social de la mujer indígena y la labor del cuidado que sostiene la vida comunitaria.

Como ustedes lo hacen, yo también he propuesto que debemos pasar de la reforma agraria a la Revolución Agraria, y por eso creo, como ustedes, en que se requiere seguir adelantando la formalización de la tierra y la clarificación de los resguardos. También estoy de acuerdo en que debemos seguir consolidando la autonomía económica de los pueblos indígenas.

Es necesario seguir construyendo infraestructura -carreteras, vías de acceso, sistemas de riego-. Se requiere respaldar el modelo de desarrollo propio, defender la soberanía, y proteger los sistemas productivos ancestrales.

Comparto plenamente su llamado a apoyar desde el gobierno la paz territorial que no se decreta, sino que se construye en los territorios, con justicia social y con garantías reales para las comunidades, acabando con la pobreza y la desigualdad social.

Como también que debemos acabar con el exterminio sistemático de los pueblos indígenas, y trabajar por el reconocimiento integral de sus mecanismos autónomos de protección como las guardias indígenas.

Comparto también la necesidad de la seguridad jurídica, de la armonización del sistema de justicia indígena con el sistema de justicia en todo el país, y que se debe cumplir, de manera plena, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Me identifico con el cuidado de la Madre Tierra, la justicia ambiental y la preservación del agua y la biodiversidad. También con defender el derecho a la consulta previa y evitar cualquier reglamentación regresiva, defender la participación real y el consentimiento libre e informado.

Creo que debemos seguir avanzando en la gobernanza indígena, la cogobernabilidad, la implementación plena de sistemas como el SEIP, el SISPI, los sistemas propios de economía, ambiente y justicia indígena, el diálogo respetuoso y el cumplimiento efectivo de los acuerdos.

Considero que es deber del Estado garantizar los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales; garantizar el derecho a la movilización

social y popular; y respetar la libre determinación de los pueblos indígenas como fundamento de la democracia en nuestro país.

Hoy me comprometo a estudiar cada una de sus propuestas con rigor, responsabilidad y seriedad. Estudiar los avances que hemos hecho en cada uno de estos asuntos en el actual gobierno.

Continuar con lo logrado e incorporar sus propuestas a nuestro programa de segundo gobierno progresista. A convertirlas en acuerdos realistas, viables y sostenibles, contruidos conjuntamente.

No prometeré lo imposible, pero tampoco eludiré lo necesario. La viabilidad no puede ser excusa para la inacción; debe ser el camino para hacer realidad los derechos.

Mi compromiso con ustedes es establecer un diálogo permanente, franco y eficaz. Construir una agenda concertada, con metas, cronogramas y mecanismos de seguimiento.

Que la palabra empeñada sea palabra cumplida.

Hermanas y hermanos del movimiento indígena y de la Minga del suroccidente:

Este aniversario del CRIC no es solo una fecha conmemorativa; es una ocasión para reafirmar el papel esencial que ustedes han cumplido en la vida social y política de la sociedad colombiana.

Como lo dije, ustedes han demostrado que es posible defender la vida sin renunciar a la firmeza, que es posible luchar por la autonomía sin romper la unidad del país, que es posible resistir desde la no violencia.

Les digo con claridad, en el segundo gobierno progresista que presidiré, caminaremos con ustedes como hermanos, hacia una Colombia en paz, con justicia social, con respeto por la naturaleza y con pleno reconocimiento de los derechos de todos los pueblos y culturas que hacen parte de nuestra nación.

IVÁN
Cepeda
Presidente



LA REBELIÓN ANTIRRACISTA Y EL DESARROLLO DE PUERTO TEJADA

Puerto Tejada, Cauca

Queridas compañeras y queridos compañeros,

Vengo aquí a saludar y reconocer a las juventudes, las mujeres, los trabajadores, los corteros de caña, la comunidad popular y afrodescendiente.

Este es mi cuarto encuentro con las comunidades afro a lo largo del país. Estoy invitando a la población afrodescendiente a que construyamos juntos un acuerdo político y programático para el Segundo Gobierno del Cambio.

La tesis que he planteado en Pasacaballos, Quibdó y Tumaco es que en Colombia padecemos de un racismo de carácter estructural, una de cuyas más graves consecuencias es que las poblaciones que, como Puerto Tejada, tienen una población predominantemente afrodescendiente padecen de los mismos problemas.

Son municipios y ciudades de inmensa riqueza natural, pero las comunidades que habitan allí están entre las más pobres del país. Regularmente tienen inmensa riqueza hídrica (ríos, acceso al mar, constante pluviosidad), pero carecen de agua potable y acueductos, tienen grandes niveles de corrupción en la administración pública, y tasas elevadas de violencia.

A los jóvenes populares no se les ofrece futuro ni educación, solo el reclutamiento forzado, el pandillismo, la muerte y el negocio ilícito de la droga.

Esa realidad corresponde al racismo estructural. No es simple abandono del Estado, no es solo una cuestión de olvido, es una discriminación racista que ha sometido a las poblaciones afrodescendientes al atraso y la pobreza.

Ese racismo debemos erradicarlo de la vida de nuestra sociedad para siempre.

Chocó, las poblaciones afro del Caribe y el Pacífico tienen inmensas posibilidades de desarrollo agropecuario, turístico, portuario. No tenemos por qué seguir tolerando la pobreza y la falta de oportunidades.

Y para eso debemos seguir avanzando el camino que ha abierto nuestro primer gobierno del Pacto Histórico y el presidente Gustavo Petro, el camino del cambio social, el camino de poner al servicio del pueblo los recursos del

Estado, de sacar a millones de personas de la pobreza, de redistribuir la riqueza, de desarrollar los territorios para acabar con la violencia, el narcotráfico y el conflicto armado.

El camino de brindar a la juventud la posibilidad de la educación, incluida, la educación superior en zonas rurales, que hasta ahora han sido excluidas de la universidad pública, la educación que debe permitir empleos dignos, para contrarrestar el reclutamiento forzado y las redes del narcotráfico.

Durante décadas, Puerto Tejada ha sido ejemplo de una contradicción dolorosa. Es un territorio de riqueza productiva, pero también territorio de pobreza persistente.

En la década de 1930 era una población productora de cacao. Pero el monocultivo y la falta de desarrollo económico del territorio frustraron esa posibilidad de desarrollo.

Aquí vive una población mayoritariamente afrodescendiente, forjada en el trabajo duro de los corteros de caña, de las mujeres que madrugan a trabajar en Cali, de quienes resisten cada día en la economía informal. Es un pueblo digno, que ha sostenido con sus manos la riqueza en una región en la que, sin embargo, aún son negados derechos básicos.

Hoy muchos trabajadores de los ingenios azucareros son empujados a la informalidad por la automatización, como si el progreso pudiera construirse sacrificando la vida de quienes lo hicieron posible. Y resulta inaceptable que, estando rodeado por cinco ríos, Puerto Tejada no tenga garantizada el agua potable para su gente. El agua, que es vida, no puede ser privilegio.

Aquí el campesinado cultiva pequeñas hectáreas con esfuerzo y esperanza, mientras espera que la justicia social deje de ser promesa y se convierta en realidad.

Necesitamos avanzar en el cambio social: un cambio que ponga en el centro la dignidad del trabajo, el acceso al agua, la tierra y las oportunidades; un cambio que reconozca la deuda histórica con el pueblo afrodescendiente; un cambio que haga de la justicia un derecho efectivo para todas y todos.

Las inversiones sociales orientadas a educación, transición energética, fortalecimiento de la economía popular y programas de apoyo a jóvenes han **empezado a marcar un cambio de enfoque**: pasar de la militarización exclusiva a la intervención integral del Estado.

La paz en los territorios no se logra fortaleciendo únicamente la fuerza pública ni firmando una y otra vez acuerdos con los grupos armados.

La verdadera paz empieza cuando termina la pobreza y se supera la desigualdad. Es garantizar salarios dignos y asegurar que ningún niño ni niña se acueste con el estómago vacío. La paz que propongo construyamos es la que pone en el centro a las víctimas.

Lograremos la paz y el desarrollo en Puerto Tejada **cuando garanticemos lo esencial: agua potable y saneamiento básico, educación de calidad, trabajo digno y una plaza de mercado adecuada que dinamice la economía local.**

Reactivaremos los **parques agroecológicos** fomentando procesos de economía popular, comunitaria, social y solidaria. Los jóvenes, las víctimas, las mujeres y la población afro liderarán no como beneficiarios pasivos, sino como protagonistas del desarrollo.

En nuestro Segundo Gobierno del Cambio priorizaremos la infraestructura necesaria para garantizar el abastecimiento de agua potable y el saneamiento básico en la región Pacífica.

Paz, por supuesto, también significa que la gente aquí pueda dormir **sin miedo**. Sin el temor de que mañana falte un vecino, un amigo, un hijo. Nuestra niñez y nuestra juventud, más que nadie, tienen derecho a un futuro que no sea una tumba. La paz, en suma, también es una cuestión de justicia.

No debemos renunciar a la ternura ni al cuidado colectivo. Protegernos y sostenernos entre todos y todas no es solo un gesto de amor: es el acto más profundo y valiente de rebeldía.

Jóvenes de Puerto Tejada, defendamos la vida que es sagrada e irremplazable. La fuerza vital de nuestra juventud debe concentrarse en poner a



Colombia a la vanguardia de la ciencia, la tecnología y el conocimiento, no en las esquinas de los barrios perdiendo la vida propia y arrebatando la de otros.

Estoy precisamente en la tierra de Natanael Díaz, el abogado, poeta e intelectual, que, junto a Manuel y Delia Zapata Olivella, Marino y Víctor Viveros, Adolfo Mina Balanta y Helcías Martán Góngora, creó en 1943 el Club Negro de Colombia, un espacio pionero del pensamiento afrocolombiano.

Les invito a continuar con **el legado** intelectual y político sembrado por ellos. La construcción de nuestra identidad debe contar con los aportes éticos, políticos e intelectuales de la comunidad afrodescendiente.

Un legado antirracista que debe ser parte de la Revolución Ética que les propongo: un cambio de consciencia en la forma en que entendemos la paz, el desarrollo y la justicia en Colombia.

Porque no habrá verdadera democracia mientras la abundancia rodee a un pueblo que vive en la carencia.

Compañeras y compañeros:

Puerto Tejada merece vivir sin miedo.

Merece agua potable.

Merece industria, educación y cultura.

Que esta generación sea la que rompa el ciclo histórico de exclusión.



IVÁN
Cepeda
Presidente

LA REBELIÓN ANTIRRACISTA Y EL DESARROLLO DE BUENAVENTURA

Buenaventura, Valle del Cauca

Queridas compañeras y queridos compañeros:

Estoy muy emocionado de visitar la capital del Pacífico.

Buenaventura es más que el puerto, Buenaventura es su gente. En esta oportunidad quiero dirigirme, por supuesto, al pueblo bonaverense, pero también a todo el litoral Pacífico.

Aquí, en esta tierra que ha sostenido la economía nacional durante décadas, se escribió una de las páginas más poderosas de la historia reciente: **el Paro Cívico de 2017**. Esa movilización inmensa no fue solo una protesta. Fue un grito colectivo que dijo: “Sin el pueblo no hay puerto. Sin justicia no hay desarrollo”.

Porque, como está ocurriendo en toda Colombia, el pueblo se hastió de la injusticia, y ha comenzado a movilizarse por sus derechos. Y eso, compañeras y compañeros, ya no lo detiene nadie.

El Paro Cívico fue una lección de organización popular, de unidad y de conciencia social que sacudió al país entero y que tuvo líderes sociales que hoy recordamos con gratitud.

Debemos reconocer, por ejemplo, el enorme liderazgo que desarrolló **Temístocles Machado**, quien no solo lideró procesos organizativos durante el Paro Cívico, sino que dedicó su vida a defender los bienes públicos, los espacios comunitarios y la dignidad del pueblo bonaverense.

Honrar su memoria es mantener viva la lucha por la transparencia, por el derecho al territorio y por una Buenaventura justa y en paz.

Hermanas y hermanos:

Como lo he venido afirmando en mi recorrido por las poblaciones afrodescendientes de ambas costas, la Revolución Ética que debemos llevar a cabo en Colombia es también una **rebelión antirracista**.

No he venido a Buenaventura a que nos llamemos a engaños, no cuenten conmigo para eso. Yo, al igual que ustedes, estoy hastiado de **la corrupción y de la politiquería**. Es indignante tener que hablar de problemas que debieron resolverse hace por lo menos un siglo.

Como decía mi bisabuela, Josefina Peña que, a pocos kilómetros de aquí, en Guapi, vivió y echó raíces: “Sí, este soy yo, [Iván Cepeda], lo que ven es lo que hay”. He venido a hablar con la verdad, de frente. Estoy aquí, parado ante ustedes, para que me abracen y me acojan como uno más, porque el racismo voraz no puede seguir separando a la raza humana.

Esta rebelión debe confrontar inevitablemente, de manera definitiva, la **violencia racial y sistemática** que ha segregado y condenado a gran parte de la población afro a los circuitos de pobreza y miseria.

Condeno esta abominable violencia, que ha consumido la fuerza vital de nuestra juventud. **Que ha obligado a miles de madres a enlutarse para llorar a sus hijos**. Que nos ha desviado del camino y de la búsqueda de la felicidad humana. Y eso es algo que, a pesar del odio racial, el pueblo de Buenaventura se resiste a perder.

Nuestra rebelión antirracista debe necesariamente **provocar un despertar de las conciencias**, una conciencia que no está aislada de la realidad social, sino que está llamada a resolver la garantía de los derechos básicos para la vida digna del pueblo bonaverense.

Se preguntarán **por qué una rebelión antirracista**.

Como lo dije ayer en Puerto Tejada. **Los municipios y ciudades que tienen poblaciones predominantemente afrodescendientes padecen de los mismos problemas y eso no es casual**: son municipios y ciudades de inmensa riqueza natural, pero las comunidades que habitan allí están entre las más pobres del país.

Regularmente tienen inmensa riqueza hídrica (ríos, acceso al mar, constante pluviosidad), pero carecen de agua potable y acueductos, tienen grandes niveles de corrupción en la administración pública, y tasas elevadas de violencia.

En Buenaventura tenemos expresiones perversas de ese racismo estructural. Mientras los **recursos de la salud** se los roban las mafias nacionales y locales, los niños y niñas mueren en las puertas de los raquíticos hospitales de Buenaventura.

Buenaventura, uno de los lugares más biodiversos y lluviosos del mundo, sigue privada de un recurso que es vital: el **agua potable**. Con sevicia, racismo y **corrupción**, este derecho básico sigue negándosele al pueblo bonaverense.

Me rehúso a creer que el Estado colombiano no pueda garantizar los acueductos de Buenaventura y Quibdó, en donde estuve la semana pasada.

El acceso al agua se ha convertido en una cuestión de azar: el pueblo de Buenaventura tiene agua un día de por medio y el que tiene suerte la tendrá por seis horas continuas, el que no, escasamente una hora. **Esto es una infamia que no podemos seguir tolerando y viendo transcurrir como si se tratara de algo normal.** Eso se tiene que acabar.

Buenaventura tiene una tasa de desempleo que supera ampliamente el promedio nacional. No puede ser que la ciudad que mueve buena parte del comercio exterior del país tenga miles de jóvenes y trabajadores sin oportunidades laborales estables y dignas.

Buenaventura nos ha dado uno de los más destacados científicos que tenemos en el país, **Raúl Cuero**; sin embargo, **no cuenta con un centro de ciencia e innovación tecnológica** que impulse la producción de conocimiento para resolver sus propios problemas y contribuir a superar los grandes desafíos de la humanidad.

Colombia no puede seguir siendo un país sin ciencia, sin tecnología o con débil o muy débil desarrollo científico, debemos corregir esto y el Pacífico es una región que puede encabezar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en Colombia. Debemos impulsarlo.

Hoy debemos reconocer las inversiones en infraestructura, en salud, en educación y en proyectos productivos que ha hecho el Gobierno del presidente Petro en el Valle y en Buenaventura han sido importantes.

También es justo reconocer, a pesar de todos sus problemas, que los diálogos entre los grupos ‘Los Chotas’ y ‘Los Espartanos’, agenciados por el gobierno nacional, contribuyeron a una reducción significativa de los homicidios en la ciudad.

Sin embargo, la violencia y el conflicto armado siguen cobrando vidas y causando destrucción.

Llamo a los grupos ilegales a dejar las armas y a asumir juntos la tarea histórica de sacar a Buenaventura de la exclusión y del abandono a la que la han condenado la corrupción y las élites que se han enriquecido con el puerto, mientras el pueblo sigue marginado.

Denunciamos con firmeza el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes. Necesitamos educación, cultura, deporte, empleo digno y presencia integral del Estado, no solo presencia de la Fuerza Pública.

La paz territorial no se decreta desde Bogotá. Requerimos que haya una construcción en los barrios, en los consejos comunitarios, en los procesos sociales, en las iglesias, en las organizaciones de mujeres y de jóvenes. Que contribuyamos a que se haga la paz desde abajo y no desde arriba, desde el centralismo.

En suma, la rebelión antirracista, como expresión de la revolución ética que hemos planteado, nos convoca y nos impone el desafío de construir juntos **un plan que ejecutaremos en el segundo gobierno del cambio** para saldar estas deudas históricas.

Este plan se centrará en garantizar, de manera universal y prioritaria, el acceso al agua potable y al saneamiento básico, a la vivienda digna, a la salud, así como al acceso y a la permanencia en la educación básica primaria, secundaria y superior.

El verdadero antídoto contra la violencia es la justicia social en el litoral Pacífico.

Por eso propongo 14 puntos de acciones concretas para Buenaventura:

- Construcción y culminación definitiva del acueducto de Buenaventura, para garantizar a toda la población agua potable las 24 horas.

- Puertos comunitarios y recuperación integral de los ríos, como eje de desarrollo productivo y soberanía territorial.
- Fortalecimiento de vías terciarias para dinamizar las economías locales.
- Uso social de los bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales para reparar a las víctimas de la guerra contra las drogas y ofrecer segundas oportunidades a las juventudes y a las economías populares.
- Impulso decidido a la industria pesquera y pecuaria.
- Recuperación de la Universidad del Pacífico para ponerla al servicio de su misión esencial: convertirse en cuna del conocimiento para el litoral Pacífico. **Desde este territorio impulsaremos la innovación tecnológica que contribuirá a transformar a Colombia.**
- Firme compromiso de destrabar, sanear y culminar **el Coliseo Marino Klinger que será un espacio digno para el deporte y el encuentro comunitario. La Casa de la Cultura** será un corazón vivo para el arte, la memoria y la creación afrobonaverense.
- Las víctimas del conflicto armado, de la guerra contra las drogas y de la violencia urbana serán el centro de la política de paz.
- **Aún existen compromisos del Paro Cívico de 2017 que no se han cumplido plenamente.** Por eso, en un próximo gobierno progresista nos comprometemos a honrar integralmente esos acuerdos, a garantizar los recursos necesarios y a establecer mecanismos de seguimiento con participación directa de la comunidad.
- **Inversión real y estratégica** en las economías afro en el Pacífico y en todo el país. Impulso estatal a las economías populares afro en turismo, gastronomía, innovación tecnológica y servicios.
- **Industrialización del puerto, no solo como punto de paso de mercancías, sino como centro de transformación productiva.** Con el fortalecimiento de la economía popular, el apoyo a emprendimientos locales, la formación técnica y tecnológica pertinente, y **el establecimiento de relaciones estratégicas con la región Asia-Pacífico.**
- **Generación de empleos necesarios** para que la riqueza que entra y sale por este puerto se traduzca en trabajo digno para la gente.
- **Combate sin cuartel contra la gran corrupción** que, persecución a las redes clientelares, políticos corruptos, funcionarios delincuentes y organizaciones armadas, ha venido carcomiendo el puerto y saboteando sus principales apuestas de desarrollo e infraestructura. No vamos a permitir que el saqueo continúe. Recuperar Buenaventura implica limpiar las instituciones.
- **No queremos un puerto rico rodeado de un pueblo pobre. No queremos crecimiento sin redistribución. No queremos megaproyectos para desplazar a las comunidades.** Queremos un desarrollo portuario y logístico que

genere empleo digno para los bonaverenses, que fortalezca la industria local, que impulse la economía popular y que respete el medio ambiente.

Compañeras y compañeros:

Buenaventura merece la prosperidad y la riqueza para el pueblo.

Merece agua potable.

Merece industria, educación y cultura.

Que esta generación sea la que rompa el ciclo histórico de exclusión.

IVÁN
Cepeda
Presidente



CONTRA LA POLÍTICA
**DEL ODIO, DE LA MENTIRA
Y DEL ESPECTÁCULO**

Cali, Valle del Cauca

Queridas compañeras y queridos compañeros:

Me complace por tercera vez durante esta campaña electoral, visitar la bella Cali, capital de la resistencia popular. Mi saludo emocionado a la juventud caleña, siempre rebelde, a sus movimientos sociales, a sus organizaciones sindicales y barriales.

En mi primer discurso que pronuncié aquí en octubre de 2025, les hablé del significado que tendrá bajo mi gobierno la lucha contra la gran corrupción, así como el significado que tiene dentro de la Revolución Ética, lo que he llamado la rebelión ciudadana contra la gran corrupción.

Luego en noviembre de 2025, les hablé de lo que quiere decir servir al pueblo con austeridad republicana, y expliqué por qué bajo el segundo gobierno progresista aplicaremos el principio de que quien debe apretarse el cinturón es el gobierno, y no el pueblo.

En esa ocasión les dije que entre las primeras medidas que tomaré, una vez me posesione como presidente de la República, estará la rebaja sustancial del salario de los funcionarios de mi gobierno, comenzando por mi propio salario, y que procederé a acabar con el despilfarro, la ostentación y el lujo en el ejercicio del gobierno. Y que todo ahorro de los dineros públicos será de inmediato destinado al gasto social.

Es decir, he considerado que por la historia de luchas y de resistencia que se ha dado en Cali, este es el lugar apropiado para presentar mi política de Revolución Ética, rebelión ciudadana contra la gran corrupción, y austeridad republicana.

Hoy vengo de nuevo ante ustedes para fijar una posición inequívoca frente a tres expresiones que han contaminado el lenguaje y la práctica política en Colombia: la política del odio, la política de la mentira y la política del espectáculo.

En el discurso político degradado, el odio, la mentira y el espectáculo no aparecen por separado: forman una misma trama. El odio deshumaniza al adversario;

la mentira distorsiona la realidad; y el espectáculo le resta seriedad y trivializa los problemas sociales hasta convertirlos en entretenimiento pasajero, incluso en diversión superficial. Nuestra campaña no es un espectáculo, no es un carnaval, no es una feria de vanidades.

Lo que los une es el propósito de sustituir el debate de ideas por la manipulación emocional. Allí donde faltan argumentos sólidos y propuestas transformadoras, se recurre a la exageración, al rumor y a la puesta en escena permanente para captar atención y moldear percepciones.

Lo he denunciado. Esa alianza es peligrosa porque vacía la política de contenido ético y la convierte en un escenario de confrontación violenta, pero y a la vez superficial.

El odio crea enemigos imaginarios, la mentira justifica la agresión y el espectáculo distrae a la ciudadanía de las causas profundas de la desigualdad y la injusticia. Así, la discusión pública se degrada y se debilita la democracia.

Esa alianza se acentúa cada vez que una alternativa democrática comienza a abrirse paso, cuando el pueblo se moviliza y el cambio social deja de ser una consigna para convertirse en realidad.

Entonces, desde los sectores que se resisten a perder sus privilegios, se activa la descalificación, la estigmatización y el miedo.

En 1948, cuando Jorge Eliécer Gaitán llenaba plazas y encarnaba la esperanza popular, fue señalado por las élites y la prensa ultraconservadora como “anárquico, desbordado y violento”.

Décadas después, pocos días antes de su asesinato, Bernardo Jaramillo Ossa fue acusado falsamente de ser parte del “brazo político” de la guerrilla. La mentira precedió a su asesinato.

Hoy, cuando el presidente Gustavo Petro mantiene un respaldo ciudadano significativo y yo encabezo las encuestas de la contienda electoral, el jefe de la extrema derecha, Álvaro Uribe Vélez, y medios corporativos que le son afines repiten el mismo libreto.

Así ha ocurrido una y otra vez en nuestra historia. La ira convertida en discurso político; la mentira elevada a consigna; el espectáculo diseñado para distraer

y polarizar. Ese camino no solo degrada el debate público: ha servido para justificar la violencia y trivializar la calumnia.

Pero, debo reafirmar lo que he sostenido a lo largo de esta campaña electoral. Nuestra respuesta no será el odio contra el odio. Será la verdad, la serenidad y la firmeza democrática. Será la movilización consciente y pacífica de una ciudadanía que no se deja manipular por el miedo y que desde el estallido social se paró firme por sus derechos. Somos una fuerza poderosa y serena.

Porque Colombia merece una política que eleve la dignidad del debate, que confronte con argumentos y que dispute el poder sin destruir al adversario. No venimos a incendiar el país con palabras. Venimos a transformarlo con el pueblo, con justicia, con participación y con esperanza.

¿Por qué aparece y se fortalece el odio en el discurso político electoral?

El imperio del odio y del resentimiento en la política tradicional degradada y descompuesta es tóxico, porque promueve la división y el enfrentamiento, no la convivencia entre los ciudadanos, parte de las más bajas pasiones que impiden un ejercicio político realmente democrático. Impide el diálogo y la concertación.

El odio genera una espiral que con ataques cruzados termina llevando a la convicción de que destruir al oponente a cualquier costo es la única solución posible para resolver las contradicciones y diferencias. Así han matado en Colombia tantas lideresas y tantos líderes sociales, considerándolos parte de un enemigo interno, cuando todos y todas somos hijos de la misma nación, todos somos hijos de la madre Colombia.

El odio no surge de la fuerza; nace del miedo. Cuando un proyecto político se siente inseguro de sus argumentos, cuando percibe que pierde legitimidad o respaldo popular, apela a la descalificación del adversario. Es más fácil sembrar temor que construir confianza. Es más sencillo señalar un enemigo que presentar soluciones.

El odio es, en el fondo, una expresión de inseguridad propia. Quien no se siente capaz de persuadir con ideas, intenta imponerse mediante la estigmatización. Se construye entonces un relato en el que el contradictor deja de ser un

ciudadano con otra visión y se convierte en una amenaza. Y cuando el otro es presentado como amenaza, el miedo se instala en la sociedad.

Eso es lo que le está pasando hoy a la extrema derecha, a su desgastado jefe, Álvaro Uribe Vélez, a su partido el Centro Democrático a sus candidatas y candidatos.

Ya conocemos que ocurre cuando se presenta ese fenómeno. Cuando el conservatismo más retrogrado estaba en crisis, se quiere el camino de exacerbar las pasiones. Como amenazaba su líder de ese entonces, Laureano Gómez: “Hacer invivible la República”, el país terminó en una espiral de violencia.

A esos sectores y dirigentes debemos recordarles que ese miedo es terreno fértil para la violencia. Porque cuando se normaliza el lenguaje que degrada, que humilla y que acusa sin pruebas, se empieza a justificar el daño.

El Pacto Histórico está por la paz, está por la discusión y deliberación civilizada, está por la reconciliación.

Nuestra historia demuestra que la violencia política no comienza con disparos, sino con palabras cargadas de odio repetidas mil veces. Por eso es tan debemos defender un debate firme, sí, pero respetuoso; apasionado, sí, pero responsable.

La democracia no se fortalece cuando convertimos al adversario en enemigo. Se fortalece cuando reconocemos que la diferencia es legítima y que el poder debe disputarse con argumentos, no con amenazas. Superar el odio es un acto de madurez colectiva: es elegir la confianza sobre el miedo y la palabra sobre la violencia.

¿Por qué aparece y se fortalece la mentira en el discurso político electoral y en la narrativa de los grandes medios de comunicación?

Como el odio, la mentira no surge de la fortaleza, sino de la fragilidad. Cuando un proyecto carece de argumentos sólidos o teme perder el respaldo ciudadano, recurre a la distorsión de la verdad para sembrar dudas y confusión. Mentir es el intento desesperado de sostenerse no sobre ideas, sino sobre manipulaciones.

La mentira se alimenta del odio y del desespero, y los alimenta a la vez. Para que una falsedad prenda en el corazón de la sociedad, necesita convertir al adversario en amenaza, necesita estigmatizarlo, despojarlo de su humanidad y de su legitimidad.

Así se construye un enemigo al que se le atribuyen culpas imaginarias. Y cuando esa estigmatización se repite, cuando la calumnia se normaliza, el paso hacia la violencia se acorta peligrosamente. Porque la violencia casi siempre es precedida por una narrativa que justifica el daño.

Todos los días asistimos a nuevas campañas de desinformación, falsificación y calumnia que promueve la extrema derecha en sus medios de comunicación y portales de las redes sociales.

A diario, se distorsiona e irrespeta gravemente la personalidad de nuestro compañero presidente Gustavo Petro, se engaña con descaro sobre los logros sociales del gobierno, se me calumnia por mi labor favor de la paz y la justicia.

No más mentiras, calumnias ni rumores. Debate franco y con ideas.

Debemos defender la verdad como acto de responsabilidad democrática. Significa negarnos a construir poder sobre la difamación y negarnos a convertir la diferencia política en motivo de agresión.

Finalmente, ¿por qué la política termina convertida en espectáculo y los problemas sociales y la violencia se banalizan en el debate público?

Porque el odio, la mentira y la violencia necesitan disfraz. La puesta en escena sirve para encubrir lo que no se quiere discutir con seriedad. Bajo las luces, los gritos y las polémicas vacías, se oculta la falta de propuestas y se diluye la responsabilidad frente a los dramas reales de la sociedad.

Nuestra denuncia de la “política espectáculo” no es un asunto menor. Es una alerta profunda sobre el deterioro estructural de la democracia. Cuando la política se vuelve actuación, los liderazgos se banalizan, la deliberación se empobrece y crece la desconfianza ciudadana en las instituciones.

Lo auténtico es desplazado por lo artificial; la imagen suplanta a las ideas; el gesto reemplaza al pensamiento. Así se presenta un mundo ficticio como si fuera real y se normaliza el ocultamiento sistemático de la verdad.

En esa lógica frívola, lo verdaderamente importante -la pobreza, la corrupción, la violencia, la injusticia- aparece como un tema más del espectáculo, despojado de su seriedad y de su gravedad.

Se desvalorizan principios y se eleva la superficialidad a categoría de acción política. Se perturba la capacidad de discernimiento de la ciudadanía, expuesta a campañas masivas de manipulación que explican el contrasentido doloroso de sectores que terminan votando por sus verdugos y opresores.

El punto culminante de esta degradación, impulsada por poderosas maquinarias mediáticas, es convertir los asuntos esenciales de la vida social en mercancía ligera, sin espacio para la crítica ni la reflexión.

De allí surge la industrialización del miedo, del odio y de la mentira, cuyo resultado es el cinismo político: ese cóctel que ha asumido la extrema derecha colombiana y en la cual es maestro su jefe Álvaro Uribe Vélez.

No sorprende entonces ver campañas convertidas en costosas comparsas, en carnavales en que se invierten miles de millones de pesos, en competencias por el agravio más vulgar y estridente, o la pose más artificiosa.

No sorprende ver candidatas y candidatos con afiches y megáfonos lanzando mensajes rabiosos, ofreciendo viviendas y empleos de manera demagógica, verlos disfrazados de pueblo o de animales, listos a defender el salario vital que la víspera atacaban con fiereza. Todo con tal de aumentar votos, puntos en encuestas y apariciones en noticieros televisivos.

Pero detrás de esa bulla aparecen con nitidez sus verdaderos propósitos: frenar las reformas sociales, promover más guerra y más armas, perseguir a la juventud, depredar la naturaleza, proteger el despojo de tierras y erosionar la democracia hasta abrir paso a un régimen autoritario.

Frente a ese escenario, nuestra tarea es devolverle a la política su dignidad, su profundidad y su compromiso con la verdad y la justicia social. Podemos hacer la política con alegría sin convertirnos en parte de la industria de la frivolidad.

Compañeras y compañeros:

Precisamente, porque soy consciente de esta descomposición de la política, mi campaña ha sido totalmente contraria a ese tipo de prácticas y discursos.

En vez de promover el odio y la violencia simbólica he promovido el respeto, la serenidad y la valoración de nuestros oponentes.

En vez de promover la mentira contra mis adversarios he pregonado el poder emancipador de la verdad que busca erradicar las falsedades que han alimentado la impunidad, la corrupción, el deterioro democrático e impiden la paz y la equidad social.

En vez de la política convertida en feria de vanidades y espectáculo superficial, hemos hecho la política con austeridad, sobriedad, modestia, elaboración programática, cero demagogia y, sobre todo, respeto por el pueblo colombiano.

Para mí la Revolución Ética implica recuperar el sentido del lenguaje, la dignidad del ejercicio político, la verdad, la responsabilidad y el respeto en el centro de la vida pública.

Queremos que las relaciones políticas y con los medios de comunicación estén marcadas por el respeto mutuo; buscamos que las trampas y las campañas sucias salgan del menú de opciones de esas relaciones.

Nos proponemos recuperar la confianza y la credibilidad ciudadana en las instituciones políticas.

IVÁN
Cepeda
Presidente



VAMOS A TRIUNFAR

Bogotá, Cundinamarca

Queridas compañeras y compañeros

Llegamos a esta histórica plaza, escenario de las grandes luchas sociales de nuestro pueblo, después de un camino largo e intenso de pedagogía y debate democrático.

Hoy cerramos la fase de actos públicos en nuestra campaña al Senado y a la Cámara de Representantes, con gratitud por el multitudinario respaldo que hemos recibido del pueblo colombiano en todo el país, en cada plaza, en cada calle, en cada vereda, en cada municipio, en cada rincón de Colombia.

Hemos recorrido el país paso a paso, llenado 40 plazas de ciudades y municipios de 23 departamentos hasta ahora, con actos masivos como el que estamos viendo aquí esta noche.

He pronunciado 70 discursos escritos detallada y cuidadosamente en los que he expuesto a las colombianas y colombianos nuestro programa y nuestras propuestas para resolver los principales programas de nuestro país. Sin show, sin la política espectáculo, sin maquinarias, sin dinero, con la gente.

Hemos constatado que el país ha cambiado en estos años de nuestro primer gobierno progresista. El pueblo colombiano ha logrado un nuevo nivel de conciencia política y hoy está dispuesto a no permitir que le arrebaten sus derechos. Que, si lo intentan, como lo hicieron en las semanas anteriores con el salario vital, la gente se va a movilizar y a impedir que le quiten lo conquistado, y que eso ya nadie lo detiene.

¡Nadie podrá venirle a quitarle ya al pueblo los derechos conquistados!

Lo que sentimos en las plazas, en las calles y en los caminos, es una buena energía. La certeza de Colombia desea continuar el rumbo progresista que hoy representa nuestro querido compañero presidente Gustavo Petro Urrego, a quien el pueblo admira, respeta y quiere en cada territorio como también lo demuestran las encuestas de opinión.

Somos la principal fuerza política del país, no solo por el poder que acumulamos, sino por la esperanza que convocamos.

Como lo hemos dicho a lo largo de esta campaña, nuestra fuerza se soporta no en multimillonarios recursos financieros, ni en maquinarias clientelares, tampoco en la política convertida en espectáculo que trivializa los dolores del pueblo.

Nuestra fuerza nace de una relación orgánica, entrañable con cada uno de los pueblos afrodescendientes, indígenas, campesinos, con las mujeres, con los jóvenes, con las barriadas populares, con la ciudadanía en general.

Es el pueblo quien ha organizado los comités de nuestra campaña, quien ha tocado las puertas, quien ha defendido las ideas en las plazas, quien está en los barrios haciendo la campaña. Esta campaña brota de abajo, desde la conciencia ciudadana que ha decidido movilizarse para cambiar la historia.

Es la energía colectiva que no solo se expresa en movilización sino en ideas programáticas:

La primera se llama la Revolución Ética que le proponemos a la sociedad colombiana. La Revolución Ética es nuestro enfoque principal, es el fundamento de nuestra visión y configura el conjunto de criterios guía para nuestra definición de acción política y social.

En qué consiste. Lo primero y lo decimos sin ninguna ambigüedad, es que nuestro gobierno es, ha sido y será con el pueblo y para el pueblo. No llegamos al poder para satisfacer ambiciones individuales y personales, con intereses egoístas, sino para honrar el mandato que recibimos de millones de personas.

Debemos servir al pueblo y servir significa compartir su vida cotidiana, acompañar sus luchas para resolver sus problemas, sentir sus angustias en medio de circunstancias difíciles.

Gobernar exige regresar siempre al pueblo, salir del confort del Palacio y de las oficinas y caminar junto al pueblo, en los territorios, en los barrios, con la gente, con las luchas, con la vida cotidiana.

Segunda idea programática. Vamos a combatir juntos con la ciudadanía, y sin cuartel, la gran corrupción que hay en este país. Principio esencial de la Revolución Ética: en mi gobierno no vamos a dar respiro, no vamos a dar tregua a quienes ejercen la gran corrupción y le roban al pueblo colombiano recursos para la salud, la educación, la paz, las víctimas.

Voy a exigir total pulcritud y transparencia. Ninguna justificación será aceptada para desviarse del cumplimiento estricto de la ley y de las convicciones éticas que defendemos.

Y para prevenir cualquier desvío por el camino torcido de la corrupción, vamos a practicar la austeridad republicana, lo cual significa que la primera medida de gobierno que firmaré aquí en esta plaza cuando sea elegido presidente será rebajar mi salario y el de todos los funcionarios del alto gobierno.

No se puede exigir sacrificios a la nación mientras se preservan privilegios en la cúpula del poder. No se puede pedir al pueblo que se apriete el cinturón cuando el gobierno no lo está haciendo. Quien debe apretarse el cinturón es el gobierno, no el pueblo.

Tercero la centralidad de nuestra política social. El mayor problema que tiene Colombia en materia social es la pobreza y la desigualdad, no puede haber verdadera prosperidad y desarrollo de Colombia, mientras millones de personas carezcan de lo esencial, muchas veces no tengan un plato de comida y mientras entre los que más tienen y los que no tienen nada es enorme y sigue creciendo.

La verdadera prosperidad, la paz en los territorios, la conseguiremos eliminando la pobreza y la desigualdad. Por eso nuestro segundo gobierno va a tener como principal eje, principal preocupación, derrotar, extirpar y erradicar, definitivamente la pobreza en las zonas rurales y urbanas.

Cuarta idea programática. Vamos a acabar con el patriarcado y la discriminación contra las mujeres.

Somos una sociedad marcada históricamente por el patriarcado. El patriarcado es esencialmente un sistema de dominación totalitario y violento que alimenta privilegios masculinos milenarios que hace que las mujeres estén sometidas, subordinadas, discriminadas, violentadas y por eso en nuestro segundo gobierno la lucha contra el patriarcado será implacable y radical.

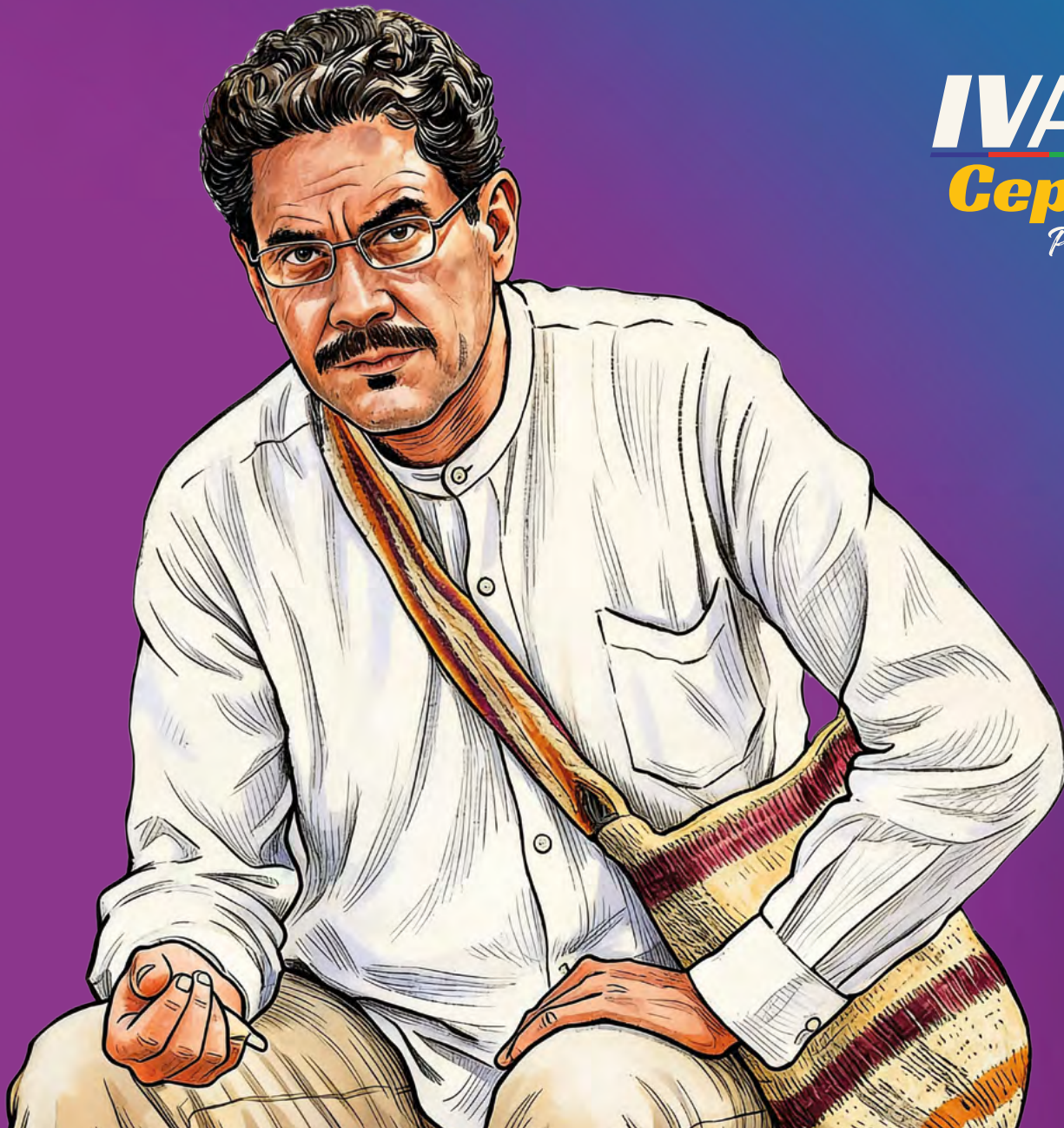
Desarrollaremos programas para eliminar la violencia de género, la desigualdad económica de las mujeres, fortalecer su participación política, el sistema



nacional del cuidado, promover sus derechos mediante todo tipo de ayudas programas iniciativas y mecanismos, programas de vivienda, educación, salud, acceso a la tierra y también a todos los niveles decisorios del Estado.

Por último, ante ustedes quiero ratificar *El Pacto por Bogotá*.

Es una iniciativa que se constituye en nuestra iniciativa programática frente a esta ciudad y que busca consolidar economías populares y el empleo, fomentar educación pública y universitaria, fomentar educación pública y universitaria, desarrollar atención en salud, lograr programas de vivienda digna, movilidad urbana, circulación de residuos y basura cero en la ciudad de Bogotá. Así que ahí está nuestro compromiso con esta gran ciudad y también por supuesto velar por el derecho de la naturaleza y de los animales.



IVÁN
Cepeda
Presidente

POR EL DESARROLLO TERRITORIAL
**SOSTENIBLE DE LA PUERTA
DE LA AMAZONÍA**

Florencia, Caquetá

Queridas compañeras y queridos compañeros:

Vengo a este territorio con aprecio por su historia y por la dignidad de su gente. Caquetá no es solo una región estratégica de Colombia, es el resultado del esfuerzo, de generaciones de campesinas y campesinos que abrieron trocha, construyeron comunidad y defendieron la vida en medio de la adversidad y, a veces, de la violencia.

¡Que viva el pueblo del Caquetá!

Aquí no se ha heredado nada ni ha sido fácil. Cada carretera, cada escuela, cada puesto de salud, cada camino ha sido fruto de la organización, la lucha social y la resistencia. Por eso quiero exaltar el papel fundamental que han desempeñado las organizaciones campesinas, las juntas de acción comunal, las organizaciones de mujeres rurales, el movimiento social de la construcción de la vida colectiva y de la historia reciente en este departamento.

Llegamos aquí luego de recorrer con una gran campaña electoral todo el país. Hemos llenado 40 plazas de las principales ciudades y municipios de Colombia, con decenas de miles de personas. He pronunciado 70 discursos, que están debidamente escritos y que son nuestro programa renovado como Pacto Histórico para inaugurar el segundo gobierno, que vamos a construir a partir de nuestro triunfo electoral.

Vengo aquí luego de recibir numerosas muestras de afecto, cariño, respaldo de muchas gentes de todo el país, que muestran que el pueblo colombiano se identifica con lo que hemos logrado construir en el gobierno del Pacto Histórico, bajo la conducción de nuestro compañero presidente Gustavo Petro Urrego.

El pueblo colombiano, en un alto índice, cree firmemente en lo que ha logrado este gobierno construir en materia de cambio social, reformas y transformaciones sociales. Hay que defenderlas, hay que continuarlas y hay que convertirlas en irreversibles en nuestro segundo gobierno progresista.

A qué me refiero con esas conquistas. Voy a mencionar algunas que atañen al departamento de Caquetá.

Aquí la reforma agraria ha logrado comprar y entregarle al campesinado 10.000 hectáreas de tierra y formalizar 187.000 en materia de resguardos, ampliando zonas de reserva campesina y propiedades colectivas del campesinado. Es el primer gobierno en Colombia que ha emprendido un camino real de reforma agraria para transformar la realidad rural del país.

Este gobierno ha aumentado, a pesar de muchas dificultades, a pesar de una gran oposición, el salario mínimo hasta convertirlo en salario vital, lo cual beneficia a miles de hogares en Colombia de trabajadoras y trabajadores.

Ha hecho una inversión superior a 100 mil de millones de pesos para fortalecer el hospital María Inmaculada de Florencia, lo que significa un paso importante para mejorar la atención en salud. Eso no es todo, pero necesitamos avanzar hacia una verdadera reforma de salud que le entregue a toda la gente la posibilidad de la atención médica, de los medicamentos, de los tratamientos curativos, pero también de la prevención.

A pesar de que hemos tenido avances, hay que decirlo, sigue habiendo pobreza en Colombia y en el Caquetá. El 30% de los municipios de este departamento todavía no tienen acceso al agua potable, lo cual es inadmisible en un departamento con semejante riqueza hídrica.

Hay un estado crítico de las vías terciarias y se siguen produciendo hechos de corrupción, en los que aparecen involucrados carteles y redes de politiqueros con funcionarios públicos, que se siguen robando los dineros del Estado para beneficio propio.

Necesitamos emprender el segundo gobierno progresista para continuar y acentuar nuestra obra de gobierno. En eso el Caquetá es una región estratégica, no solo para Colombia, sino para el mundo, es la puerta de acceso a la Amazonia, que es ni más ni menos un santuario ecológico de biodiversidad y de agua de todo el planeta.

Por lo tanto, vengo a comprometerme aquí con ustedes a que, en mi gobierno, el segundo gobierno progresista, seguiremos haciendo esfuerzos para

transformar el territorio, transformar a Caquetá en un departamento pujante con oportunidades, con justicia social, sin pobreza y sin desigualdad social, en el cual la tierra esté al acceso de los campesinos.

Frenar la deforestación, avanzar en materia de garantizar agua potable y sistemas de alcantarillado, no solamente para las zonas urbanas sino para todas las zonas rurales. Recuperar y construir nuevas vías terciarias, dotar de energía eléctrica cada rincón del departamento, produciendo soluciones sostenibles como paneles solares que sean compatibles con el respeto de la naturaleza.

Avanzar en la lucha contra la corrupción. En mi gobierno la lucha contra la corrupción será implacable y no va a ser desde Bogotá solamente. Vamos a conformar un Sistema Nacional contra la Gran Corrupción y vamos a ir departamento por departamento examinando cómo se está robando los dineros públicos.

Así que les digo de una vez a quienes aquí en el Caquetá se están robando los dineros de la gente, que se preparen, porque seremos implacables. No permitiremos que se roben los dineros de la gente, los dineros que son para la educación, para la salud, para las vías terciarias, para dotar de agua, para entregarle al campesinado créditos para que pueda salir adelante la gente más pobre de nuestra sociedad no se lo van a seguir robando los políticos. Daremos una lucha sin cuartel. Me refiero a los dineros públicos, pero también a las regalías que obtienen los departamentos por concepto de la explotación minera y petrolera.

Vamos a cuidar los recursos de la gente para poner esos recursos al servicio del desarrollo y del bienestar del pueblo colombiano, al servicio de la educación, necesitamos fortalecer la Universidad de la Amazonía para que haya ciencia, tecnología, para que los jóvenes no sigan siendo reclutados por los grupos armados, y puedan convertirse en científicos y científicas que ayuden al desarrollo social, cultural, económico de esta región tan importante y estratégica para el país.

Seguiremos desarrollando la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Y me dirijo aquí a los firmantes de paz: vamos a garantizar su reincorporación digna, como también para las víctimas del conflicto armado la reparación integral que se merecen por haber sufrido los daños y el sufrimiento del conflicto armado.

Vamos a proteger al liderazgo social y comunitario. No más lideresas y líderes sociales amenazados o asesinados y aquí me dirijo a los grupos armados, dejen sus armas, vengan a la sociedad colombiana a construir juntos la paz y la reconciliación que merece Caquetá y Colombia.

Compañeras y compañeros,

En estos años hemos mostrado que sí se puede cambiar a Colombia, que no hay ninguna razón para que la gente no reciba más salarios y para que, aumentando el salario, crezca la economía, ese es un bien no para los trabajadores y trabajadoras simplemente, sino para el desarrollo económico de la nación.

A los empresarios les decimos que la prosperidad, que las oportunidades, no son solamente para un pequeño grupo de colombianos. Todos podemos ser prósperos en Colombia, todos podemos estar viviendo en una misma patria que tenga las oportunidades y las puertas abiertas para el desarrollo social y económico de territorios como el Caquetá.

IVÁN
Cepeda
Presidente



REVOLUCIÓN
ÉTICA Y ESPIRITUALIDAD

Bogotá, Cundinamarca

Queridas compañeras y queridos compañeros:

Agradezco esta invitación a las autoridades religiosas y creyentes de todas las iglesias y espiritualidades que hoy se congregan en este encuentro.

Quiero comenzar reconociendo el destacado papel que han desempeñado las iglesias y las comunidades de fe en la lucha por la paz en Colombia, por la defensa de la vida, la dignidad humana, y la democracia.

En los momentos más oscuros de nuestra historia reciente, cuando la violencia se ha presentado en forma extrema y cruel, muchas comunidades religiosas se han mantenido firmes en la defensa de la vida, en el acompañamiento en terreno a las víctimas, en la protección a personas perseguidas y en la búsqueda de caminos de reconciliación. No pocas religiosas y religiosos han ofrendado su vida en el desempeño de esas labores.

Lo hicieron, además, desarrollando una tradición de resistencia no violenta basada en la palabra, en el diálogo, en la organización comunitaria y en la convicción profunda de que el amor y la justicia son más fuertes que el miedo y la fuerza armada.

En Colombia avanzamos hacia la diversidad religiosa.

Es cierto, el país es de predominante **tradición cristiana católica**, pero en las últimas décadas han **ampliado su presencia e influencia iglesias cristianas de tradición protestante, evangélicas y pentecostales** por medio de la educación, proyectos sociales e incluso participación política.

El proceso constituyente y la promulgación de la Constitución política de 1991 que reconoció por primera vez que somos una nación multiétnica y pluricultural, también nos abrió al universo de la libertad de cultos y creó las condiciones para que empezaran a emerger de manera pública cada vez con mayor fuerza los **pueblos indígenas y afrodescendientes con sus propias tradiciones y espiritualidades**.



Así que asistimos a un **escenario cada vez más plural en el mundo religioso** y, lo que es tal vez más significativo, a un diálogo ecuménico cada vez más frecuente, intenso y fructífero.

Es más, a un diálogo cada vez más democrático e incluyente entre el mundo de los creyentes y los no creyentes lo que tiene un valor indudable para construir la convivencia en paz de una comunidad, una nación y, en últimas, de la humanidad misma.

En el recorrido que he estado haciendo por el país, he insistido en que Colombia necesita con urgencia una Revolución Ética.

Esto debido a la profunda postración moral causada por décadas de violencia, del desprecio sistemático hacia quienes viven en la pobreza, de la corrupción, del patriarcado, del racismo, y de la depredación de la naturaleza.

Una revolución pacífica, pero radical, que no se limite a denunciar estas formas de deshumanización, sino que transforme de raíz nuestra conciencia individual y colectiva.

Una revolución que nos lleve hacia una nueva cultura política y social, profundamente sensible ante la vida, el sufrimiento y la dignidad de los demás.

De esa postración moral hace parte, sin duda, una severa crisis espiritual de nuestra sociedad.

Creyentes o no creyentes, todos los seres humanos necesitamos una dimensión espiritual que consiste en reconocer que hay una verdad o un conjunto de verdades que nos trasciende en nuestra vida, y que entra en un dominio que es para todas y todos nosotros a veces enigmático, que merece un profundo respeto y, sobre todo, una profunda apertura de conocimiento y humildad.

La búsqueda de ese sentido y de esa trascendencia da sentido a nuestra vida como seres humanos. Cuando una sociedad se encierra en el nihilismo y en la lógica del consumo que reduce la vida al tener y no al ser, comienza su postración moral.

La crisis ética que vivimos es también una crisis espiritual, es el cierre de toda posibilidad de pensamiento trascendente, de toda pregunta por el propósito y la dignidad.

Por eso la Revolución Ética que proponemos no es un simple ajuste de normas, sino un llamado a mirar más allá del inmediatismo, del individualismo y del egoísmo; a reconocernos parte de un mundo común y de un horizonte que supera nuestro propio interés. Solo así podremos reconstruir el sentido de comunidad y devolverle profundidad humana a nuestra vida colectiva.

No podemos seguir en la espiral de la mentalidad **que justifica la desigualdad, el sufrimiento humano y la destrucción de la naturaleza.**

Es decir, no podemos continuar en la inconsciencia neoliberal que es la base de la degradación moral de nuestra sociedad y del planeta que, como ustedes saben, hoy está en crisis y en peligro profundo.

Por eso considero que la espiritualidad religiosa, o mejor que las espiritualidades religiosas, están llamadas a ser parte de la Revolución Ética.

En nuestro tiempo crece la necesidad de que las espiritualidades y las visiones religiosas sean respetadas, valoradas y consideradas como parte de la vida, la historia y la cultura de nuestra nación y del mundo.

Su papel es esencial para lograr el respeto de los derechos humanos, la reconciliación en una sociedad atravesada por los odios, la convivencia en paz, el desarrollo de la solidaridad humana, el fin de las violencias y las guerras.

Las religiones no deben ser instrumentalizadas para fomentar guerras, odio y exclusión de los seres humanos.

Las religiones no deben ser instrumentalizadas para fomentar guerras, odios ni exclusiones de los seres humanos y mucho menos para justificar la depredación de la naturaleza.

En Colombia, la **Constitución del 1991 en su Artículo 19**, garantiza la libertad de cultos, estableciendo que toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla de manera individual o colectiva.

Además, todas las confesiones religiosas e iglesias son consideradas igualmente libres ante la ley, sin que exista una religión oficial del Estado.

Este reconocimiento constitucional ha permitido el desarrollo de leyes y convenios para que las iglesias, confesiones religiosas y espiritualidades **desarrollen su identidad de manera libre y contribuyan al bienestar educativo y social en muchas comunidades** para que acompañen la resistencia que hace nuestro pueblo en condiciones difíciles, en distintas circunstancias, ahora e históricamente.

De acuerdo con esto es necesario seguir creando condiciones favorables para que las iglesias y comunidades de fe continúen aportando con su labor educativa y de inclusión social para convertir a Colombia en un país en paz, reconciliado y democrático, no solamente desde el punto de vista político y social, sino también espiritual.

Compañeras y compañeros:

Vengo a comprometerme con ustedes en que, como futuro jefe de Estado, garantizaré y promoveré la libertad de cultos y creencias en la sociedad colombiana.

Lo haré no solo como un acto formal de cumplimiento de mis deberes constitucionales. Lo haré porque tengo la firme convicción sobre el papel esencial que las espiritualidades deben cumplir en la Revolución Ética y lo que he llamado el Gran Diálogo Nacional.

Colombia necesita reconciliarse. Sueño con un país donde el otro sea visto como un don y una responsabilidad. Donde proteger el tejido social, incluidas las familias, sea prioridad. Donde niños, niñas, mujeres, personas mayores, comunidades territoriales y líderes sociales vivan sin miedo. Donde la vida humana no sea negociable.

La política pública de libertad religiosa y de cultos debe ser un instrumento democrático para garantizar derechos y promover el diálogo social, no una plataforma electoral ni un espacio para repartir favores.

Invito a las iglesias, a las comunidades de fe, a las espiritualidades diversas y a todas las personas creyentes a caminar juntas y juntos por este camino de reconciliación, diálogo nacional y Revolución Ética.

Decía el reverendo Martin Luther King Jr. que el amor es el instrumento más potente en la búsqueda de la paz y la seguridad. Ese amor se expresa en obras: en la atención a víctimas, en la educación, en la acción humanitaria, en el acompañamiento espiritual, en la defensa del liderazgo social.

Las iglesias y comunidades de fe tienen la experiencia, el conocimiento, pero, sobre todo, la humanidad necesarias para contribuir sustancialmente a ese objetivo nacional de nuestra patria.

IVÁN
Cepeda
Presidente



POR LOS ANIMALES
Y POR LA JUSTICIA AMBIENTAL

Bogotá, Cundinamarca

Queridas compañeras y queridos compañeros:

Saludo a las organizaciones por los derechos de los animales que con su perseverante labor han venido logrando el despertar de la conciencia de nuestra sociedad sobre el valor de la vida de los animales, que ha denunciado la visión utilitaria de ellos y ha permitido entender, cada vez mejor, el lugar que deben ocupar en un mundo sensible a nuestra realidad ecosistémica.

Gracias a esa labor han comenzado a transformarse las leyes y se ha puesto a los animales como parte del centro de la discusión de la sociedad colombiana en torno a lo que yo he llamado una Revolución Ética, un cambio de consciencia fundamental en nuestra sociedad sobre la vida, sobre los demás, sobre la necesidad de proteger el planeta.

Hemos afirmado que el Pacto Histórico es una fuerza política y un proyecto para la vida. Estamos para proteger el planeta, su riqueza natural, su biodiversidad y todas las especies que pueblan este mundo.

A lo largo de la historia, pero con especial capacidad devastadora bajo el neoliberalismo, el ser humano ha destruido su propia especie, ha desatado un proceso de autodestrucción genocida de pueblos enteros.

Pero, además, ha venido destruyendo la Casa Común con la explotación implacable, el progresivo agotamiento de los recursos indispensables para el sostenimiento de la vida en el planeta, y el exterminio de las especies animales.

Así como el ser humano ha provocado el genocidio en la historia, también ha provocado un ecocidio. Ha cazado y pescado en masa animales en desarrollo de su empresa colonizadora y explotadora de la naturaleza hasta agotar especies enteras.

Ha concebido a los animales como materias primas, mercancías, o bienes de consumo.

Ha domesticado para cumplir labores exigentes a especies animales. Las ha instrumentado para su diversión, lujo o simple comodidad.

Esa destrucción de especies incluye a los microorganismos que son indispensables para el equilibrio de los ecosistemas.

Conforme ha evolucionado la ciencia y la tecnología, la intervención humana en los ecosistemas es cada vez más omnipresente y deja efectos más dañinos e irreversibles.

Como lo advierte el Papa Francisco en su famosa Encíclica **Laudatio sí**: “Mirando el mundo advertimos que este nivel de intervención humana, frecuentemente al servicio de las finanzas y del consumismo, hace que la tierra en que vivimos en realidad se vuelva menos rica y bella, cada vez más limitada y gris, mientras al mismo tiempo el desarrollo de la tecnología y de las ofertas de consumo sigue avanzando sin límite”.

En Colombia, uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, las investigaciones científicas han establecido que, en los últimos 20 años, 760 especies animales se encuentran en peligro en el país, según el listado oficial actualizado de especies silvestres amenazadas.

Entre ellas se encuentran especies emblemáticas de los ecosistemas colombianos como el Jaguar, el Oso de anteojos, el Tití cabeciblanco, la Tortuga carey y la Rana dorada.

Este riesgo se explica por presiones ambientales que se han intensificado en las últimas décadas: la deforestación acelerada; la expansión de la frontera agrícola y ganadera, que fragmenta ecosistemas; la minería legal e ilegal, que contamina ríos; y el tráfico ilegal de fauna silvestre, que captura miles de animales cada año para el comercio clandestino.

Hace cuatro años, esa historia empezó a cambiar; con la llegada del primer gobierno progresista en nuestro país, la prioridad ha sido el cuidado de la vida en todas sus expresiones.

Nuestro gobierno progresista le ha dado una prioridad al cuidado de la vida en todas sus expresiones, se puso en el centro del debate público la preocupación por un tema que no podía seguir siendo soslayado como lo hizo la extrema derecha por décadas, el problema del cambio climático, de sus efectos y sus consecuencias que son irreversibles también para Colombia: la destrucción de la Amazonia, la desecación de los ríos, lo que está ocurriendo

con los subsuelos, lo que está ocurriendo con la biodiversidad no solamente animal sino forestal del país.

Lideramos profundos debates que van desde el inicio de una transición energética, hasta la prohibición de espectáculos humanos basados en la tortura y el sufrimiento de animales no humanos. Luego de décadas de lucha del movimiento organizado, logramos salir de la vergonzosa lista de los únicos ocho países en el mundo donde la tauromaquia se considera como un espectáculo público que enriquece y divierte a la ciudadanía.

Pero, además, gracias a esa iniciativa que es de autoría del Pacto Histórico, hoy podemos decir que Colombia es un país libre de espectáculos crueles con animales, porque en la Sentencia de Constitucionalidad, se incluyó la prohibición también de las corralejas, el coleo y las peleas de gallos.

Logramos uno de los años más altos en reducción de la deforestación, ratificamos el Acuerdo de Escazú, sacamos adelante la Ley de humedales también de autoría de nuestro proyecto político, una deuda histórica para la protección de cerca del 30% de nuestro territorio nacional, reconocimos a los animales como sujetos de atención en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a través de nuestra ley de Rescate Animal, pasamos del 2% al 15% en la participación de energías limpias en la matriz de generación eléctrica. Pero nos falta mucho por hacer.

Queremos ahora consolidar un PACTO POR LA VIDA, que deje de lado la codicia, que desplace la creencia que ha puesto al desarrollo como un modelo que puede arrasar y acaparar todos elementos vivos de la naturaleza a su antojo.

Este Pacto debe incluir por lo menos algunas de las siguientes premisas:

- La profundización de la transición energética: acelerar la incorporación de energías renovables no convencionales y dinamizar las economías verdes. Cumplir y superar el compromiso de reducir en 51% las emisiones de gases efecto invernadero al 2030.
- El control y disminución de la ganadería extensiva y su sustitución por modelos sostenibles como la ganadería silvopastoril.
- La prohibición del fracking y la exploración y explotación en yacimientos no convencionales; prácticas que arrasan con el agua, que fracturan el suelo y el subsuelo, que son poco rentables y que envenenan nuestros territorios.
- La prohibición del glifosato para la aspersión sobre cultivos de uso ilícito.
- El fortalecimiento a la protección de líderes y lideresas ambientales

- La generación de comunidades energéticas en barrios populares y zonas rurales
- El impulso a un plan nacional de restauración ecológica y el establecimiento de la recuperación de hectáreas degradadas, en coherencia con los compromisos internacionales.
- La expedición del Código Minero
- El diseño y puesta en marcha de un programa nacional de reconversión laboral para los sectores taurinos, galleros, corralejeros y de las mangas de coleo.
- El fortalecimiento y puesta en marcha de la Política Pública por los derechos de los animales y la reorganización y funcionamiento efectivo del Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal.
- El diseño y puesta en marcha de un programa nacional integral de sustitución de vehículos de tracción animal.
- El reconocimiento constitucional de los animales como sujetos de derechos.
- La educación climática y ética interespecie obligatoria en todos los niveles.
- La creación del observatorio de bienestar y protección animal. La creación del viceministerio de los derechos de los animales.

Compañeras y compañeros:

Este acto tiene para mí un significado particularmente sensible. Como muchas y muchos de ustedes comparto mi vida con animales en mi hogar. Tres perritas Chau Chau me acompañan desde hace 15 años. Han compartido cada momento de mi vida. Y han sido compañeras leales, especialmente en los más difíciles.

El primer gobierno progresista en la historia de Colombia, liderado por nuestro compañero presidente Gustavo Petro Urrego, inició un proceso de transformación hacia una sociedad que reconoce que no hay justicia social sin justicia ambiental, ni paz humana sin paz con las demás especies.

Como futuro jefe de Estado, me comprometo con ustedes a no solo continuar esa acertada orientación, sino además a consolidarla como parte de nuestro propósito de hacer de nuestro país una potencia mundial de la vida.

IVÁN
Cepeda
Presidente



POR LA PROSPERIDAD
DE LA TIERRA DEL VIENTO

Riohacha, La Guajira

Queridas compañeras y queridos compañeros,

En este acto, el número 74 que realizamos en todo el país en esta campaña, quiero comenzar saludando fervientemente las luchas sociales y políticas del pueblo de La Guajira.

En primer lugar, por supuesto desde las rancherías, la resistencia del heroico pueblo wayuu, defendiendo su territorio, su cultura y su derecho a la vida.

También saludo las comunidades afrodescendientes, al campesinado del sur que se esfuerza por sacar adelante sus cosechas, a la juventud que quiere estudiar, trabajar y no dejar el territorio. A las mujeres guajiras quienes día a día cuidan hogares y comunidades.

Aquí el pueblo no se ha resignado a los problemas. Quiero destacar a quienes han defendido el río Bruno, han enfrentado el modelo extractivista, han denunciado el desvío de los cauces y el agotamiento del agua.

Aquí también los trabajadores de Sintrcarbón, el sindicato del complejo minero de la empresa Cerrejón, que han luchado durante años por sus derechos sindicales y laborales, que solamente hasta este Gobierno, que preside nuestro compañero y presidente Gustavo Petro.

Aquí se realizó el paro cívico en 2016 contra las redes de corrupción que han saqueado las regalías contra el abandono del Estado. Todas esas luchas, que a veces aparecen libradas en condiciones tan difíciles que pareciera que no tienen resultados en un primer momento, están fructificando. Hoy el pueblo colombiano ha aprendido a movilizarse, a defender sus conquistas y a impedir que le quiten lo que ha ganado en la lucha social.

La Guajira no ha sido territorio pobre, ha sido un territorio que han empobrecido históricamente los políticos y las decisiones políticas y por eso gracias a las luchas que han hecho indígenas, sindicalistas, organizaciones sociales, hoy el país reconoce que La Guajira no puede seguir siendo tratada como tierra del olvido.

Durante estas últimas décadas, en mi condición de defensor de los derechos humanos y también de congresista, primero en la Cámara y luego en el Senado, he acompañado muchas de esas luchas, he admirado la resistencia de los pueblos de La Guajira.

Ahora en mi condición de futuro segundo presidente de la República de carácter progresista, como sucesor de nuestro compañero Gustavo Petro, vengo aquí a comprometerme con ustedes.

Vengo a comprometerme con ustedes en que juntos vamos a construir un futuro mejor para La Guajira, no les quepa duda de eso.

La Guajira es la tierra del viento, también del mar y del sol, pero durante años comunidades enteras han tenido que depender de jagueyes o carrotanques para acceder al agua y todavía hay comunidades en este territorio que no tienen luz en sus viviendas.

Esta tierra dotada de inmensa potencialidad, de desarrollo, ha padecido la maldición del saqueo, de la corrupción, del robo de las regalías, promovido por los clanes políticos que vamos a derrotar.

A pesar de recibir cuantiosas regalías, en esta última etapa desde el 2012 se han entregado 6 billones de pesos a La Guajira, ¿dónde están esos billones de pesos? ¿Cuántas obras se han entregado, cuántas carreteras, cuántos acueductos? o ¿se los han robado?

Esta tierra dotada de inmensa potencialidad de desarrollo merece un futuro próspero, radiante. Pero antes de reconocer lo que ha hecho este Gobierno para eso, lo primero que debo hacer estando aquí -y en esto debo ser categórico- no puedo dejar de reconocer que la corrupción estructural, que carcome buena parte de las instituciones, bajo nuestro Gobierno tuvo el mal de que se para impedir que llegara el agua a muchas comunidades.

El señor Olmedo López y una camarilla que está siendo investigada y juzgada en buena hora es el responsable de esos hechos y aquí vengo a reconocerlo ante ustedes y decirles que nunca más corrupción en La Guajira.

Nos duele y avergüenza que, en nuestro propio gobierno, como lo ha dicho el presidente Petro, hayan ocurrido hechos como los que involucraron al señor Olmedo López y algunos otros funcionarios.

Ellos se robaron el bien máspreciado para las comunidades en este territorio, el agua potable, quien toca los recursos de los más vulnerables, quien le arrebató el agua a la sed de las comunidades de La Guajira y en primer lugar a sus niños y niñas, no tiene otro nombre que criminal y ojalá lo juzguen y sobre él caiga todo el peso de la ley.

Por eso que se oiga muy claro aquí. Mi compromiso con el pueblo de La Guajira comienza por decirles que como el segundo presidente de nuestra historia republicana haré todo lo necesario para acabar con los “olmedos”.

Lo he anunciado con toda la claridad: bajo nuestro segundo gobierno habrá un combate a fondo, radical contra la gran corrupción que permite que los políticos, los clanes mafiosos se queden con los recursos que son del pueblo.

Por eso les hago una invitación a una rebelión ciudadana contra la gran corrupción, que no se hará desde las oficinas de Bogotá, sino que la haremos aquí en el territorio.

Vamos a enfrentarnos a quienes saquean las regalías, vamos a derrotar a quienes se roban los recursos, a quienes viven de los dineros que son para la educación, la salud y el agua potable. Vamos a enfrentarnos a la gran corrupción y la vamos a derrotar, eso es lo que va a ocurrir en nuestro segundo gobierno.

Hay que decirlo, nuestro gobierno ha avanzado en las reformas sociales. Es el primero que ha entregado tanta tierra a los campesinos y a las poblaciones rurales.

Acá en La Guajira, más de 7.000 hectáreas han sido entregadas y más de 17.000 han sido tituladas, para que la gente pueda recuperar las tierras que le fueron despojadas.

Aquí nuestro Gobierno invirtió efectivamente 2 billones de pesos para crear la primera facultad pública de Medicina en la Universidad de La Guajira en Uribia.

Aquí en La Guajira estamos invirtiendo para dotar el sistema hospitalario con los recursos, con los aparatos de examen, de radiografía, de tratamiento médico, para garantizar que las comunidades tengan acceso a la salud en buenas instalaciones médicas.

Entonces lo que ahora corresponde es mantener el curso de los cambios que estamos haciendo. Les propongo 10 acciones para el próximo Gobierno que vamos a elegir:

1. **Mediante un plan integral vamos a articular diversas soluciones al problema del agua potable:** acueductos comunitarios, molinos, jagueyes, plantas desalinizadoras, garantizar que en La Guajira no quede una sola comunidad que no tenga pleno acceso al agua potable. Es una meta necesaria e imperativa.
2. **Mejorar y expandir las vías terciarias** para conectar todos los rincones del departamento y poder hacer que circulen los productos agrícolas y agropecuarios a los mercados.
3. **Convertir a La Guajira en el epicentro no solamente de la costa Caribe,** sino del país, de la energía eólica y solar. Aquí existen condiciones para ello.
4. **Impulsar comunidades energéticas** que permitan que en las zonas rurales y en las zonas periféricas urbanas pueda haber acceso a la energía eléctrica.
5. **Fortalecer el acceso a la educación básica media y a la educación superior** para que la juventud de La Guajira pueda participar con el conocimiento y la ciencia en la transformación del territorio para el bien de todo el pueblo guajiro. Vamos a fortalecer la universidad del pueblo Wayuu para que los jóvenes de los pueblos indígenas puedan educarse en su sistema de conocimiento y de visión del mundo.
6. **Vamos a garantizar el fortalecimiento y la reforma del sistema de salud** e implementar el sistema indígena de salud propio e intercultural.
7. **Vamos a hacer que la reconversión de las energías tradicionales a las energías limpias** no signifique desempleo para los trabajadores que hoy están en la explotación de la minería.
8. **Vamos a cuidar las regalías,** esos dineros no son de los políticos, no son de los funcionarios, son los dineros del pueblo y son para el pueblo. Vamos a cuidar cada peso de las regalías.
9. **Vamos a avanzar en la lucha a muerte y la vamos a ganar contra la gran corrupción.** Que se tengan los corruptos de La Guajira porque vamos por ellos.

IVÁN

Cepeda

Presidente

EL CAMBIO CONTINÚA...

